

00465

4
25



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA LUCHA
POR LA DEMOCRACIA
Nicaragua, El Salvador, Guatemala 1992-1994

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

MAESTRIA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

P R E S E N T A :

ALI ERNESTO TINOCO FONSECA

MEXICO, D.F. 1996

TESIS CON
FOLIA DE ORIGEN

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A G R A D E C I M I E N T O

Al Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A todos los colaboradores y colaboradoras del CELA, administrativos y académicos, que me apoyaron durante mis estudios de maestría en ese Centro.

A mis profesores, Dra. Gloria Abella, Don Sergio Bagú, Dr. Miguel Concha, Dr. Ruy Mauro Marini, Dr. Lucio Oliver, Dr. Eduardo Ruiz, Dra. Raquel Sosa, Dr. Jorge Turner y Dr. Carlos Vilas.

A mi director de tesis e interlocutor durante la elaboración de este trabajo, el Dr. Eduardo Ruiz.

INDICE

INDICE

PRIMERA PARTE

CAPITULO I	INTRODUCCION	1
	1. Generalidades: Antecedentes, justificación e importancia.	
	2. Objetivos generales y particulares.	
	3. Hipótesis y Variables.	
	4. Categorías y conceptos.	
CAPITULO II	ESTRUCTURA SOCIODEMOGRAFICA	16
	1. Tasas vitales	
	2. Migraciones externas e internas.	
	3. Familia. Grupos étnicos, religiosos y lingüísticos.	

SEGUNDA PARTE

CAPITULO III	SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL	35
	1. Políticas económicas, privatización y dependencia.	
	2. Impacto social de las políticas económicas.	
	3. Repercusiones de la guerra.	
CAPITULO IV	EL ESTADO TRANSNACIONAL	72
	1. Presiones, interferencias e influencias del Estado Transnacional.	

TERCERA PARTE

CAPITULO V	EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SUS REACCIONES ...	95
	1. Configuración de las principales organizaciones patronales y sindicales.	
	2. Acciones del movimiento social por demandas económicas y políticas.	
CAPITULO VI	POLITICA GENERAL	126
	1. Configuración de los principales partidos políticos.	
	2. Panorama político y parlamentario.	

CUARTA PARTE

CAPITULO VII	CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS	195
ANEXOS		
BIBLIOGRAFIA		

PRIMERA PARTE

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Introducción

1. Generalidades

Antecedentes y justificación

Desde la conformación del Estado Nacional en diferentes regiones del planeta, la democracia se ha utilizado para la aplicación de diversas políticas económicas y sociales y por el control del poder. Analistas del tema coinciden en señalar que en la lucha por el control del poder, tanto movimientos políticos del conservadurismo como del liberalismo utilizaron la democracia como pilar para sustentar sus posiciones.

Con la aplicación de la democracia limitada, recogida del pensamiento aristotélico ("anarquía y despotismo") y el surgimiento de las primeras Constituciones en América basadas en este pensamiento y en el de Rousseau ("el contrato social"), se han venido estructurando dos corrientes: la primera intenta sostener el *statu quo* oligárquico, en tanto la segunda se propone cambiar las condiciones del mercado feudal para ingresar al "libre juego" de estas fuerzas.

La América anglosajona tuvo diferencias profundas frente a la América latina, en cuanto a las formas de implantación de los cimientos de la democracia. Entre otros autores, el sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva afirma que con la llegada de los ingleses a América del Norte hubo una **colonización** en la cual los actores sociales fueron, entre otros, los **pioneers**, personas de un respetable nivel cultural que fue aprovechado para el desarrollo económico de la región.

La **conquista** de América latina, con todo lo que ello implica, llevó a la implantación de regímenes políticos de carácter oligárquico y a la conformación de una clase en el poder (integrada en sus inicios por una especie de lumpens --españoles y criollos) que crearon, aun después de la conformación de los Estados Nacionales, las bases de una economía dependiente de las metrópolis, tras haber entrado en un proceso de desacumulación originaria de capital (saqueo y explotación incalculable de recursos humanos, forestales y mineros).

Partiendo de lo anterior, Latinoamérica prehispánica se desarrolló económica, política y socialmente en dos grandes bloques: el primero comprendía los centros de poder de la Corona española integrados por los virreinos de Nueva España (la zona de México), Nueva Granada (Colombia y Venezuela), Virreinato del Perú (Perú y Bolivia) y el Virreinato del Río de la Plata, además del control portugués, que incluía toda la zona del actual Brasil.

El segundo grupo estaba conformado en su mayoría por capitánías que controlaban las provincias; aquí fue más marcada su dependencia, fundamentalmente política, en tanto los españoles no repararon demasiado en la integración económica.

En la segunda mitad del siglo XIX, la progresiva declinación de las potencias española, portuguesa y más tarde inglesa,

repercutió en el desarrollo de una América latina que sufría ya las transformaciones derivadas de la apertura de sus mercados con la naciente potencia de Estados Unidos.

Para entonces, la mayor parte de los países del área se habían independizado de las potencias europeas y contaban con Constituciones políticas elaboradas a imagen y semejanza de las de Francia y Estados Unidos. En ellas se establecieron los conceptos básicos de la democracia (libertad, igualdad y justicia), que comenzaron a aplicarse de manera formal y superficial en algunos países y más profundamente en otros.

El ascenso del capitalismo monopolista en la segunda década del presente siglo tuvo en Latinoamérica una serie de efectos, a partir de la progresiva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de estas naciones. A la par de la expansión del mercado, en el primer cuarto de este siglo Estados Unidos aceleró su proceso hegemónico en la región, incrementado con su salida casi intacta de la Primera Guerra Mundial y su consecuente fortalecimiento como potencia.

Comenzando por la llamada doctrina Monroe ("América para los americanos"), pasando por las conocidas políticas del "Big stick" (garrote) y "New deal", Estados Unidos ha sometido a los países de América latina al punto de sumirlos en un progresivo subdesarrollo.

La democracia que tanto dice defender el Estado del Norte es para los países latinoamericanos una democracia formal, basada y sustentada en mecanismos tradicionales que progresivamente acaban con la razón de ser de los Estados Nacionales.

La soberanía como concepto básico de los Estados Nacionales, ha venido restringiéndose a un ritmo cada vez más acelerado debido a intervencionismos de carácter económico y militar, expresados inicialmente en el envío de tropas de la marinería a países relativamente distantes y en los que Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban "en peligro". Posteriormente y ya en las últimas décadas, se ha hecho sentir la presencia y consolidación de una suerte de **Estado Transnacional**, a partir del cual la soberanía de estas naciones ha quedado progresivamente supeditada a las presiones de tipo económico impuestas por los organismos transnacionales.

A la restricción de la soberanía se ha sumado la disminución de los espacios democráticos en cada país. En este sentido, las naciones en las que con mayor claridad se observa este fenómeno son aquellas cuyas economías dependen más del capital internacional y presentan mayor atraso histórico. Así, los llamados países del Sur cuentan con movimientos sociales que libran luchas encarnizadas por conquistar mayores espacios democráticos.

Los movimientos sociales en América Latina y en especial en Centroamérica, se han visto afectados por los cambios que a nivel mundial se produjeron a partir de los años 80. Los países de la región no fueron ajenos a factores exógenos relevantes, como la caída del sistema comunista mundial, que provocó en las filas de la izquierda latinoamericana desestímulo, desorganización, dispersión y falta de iniciativas y proyectos concretos ajustados a la nueva realidad.

Paralelamente la ofensiva neoliberal desatada a partir de 1980 en el continente, en materia económica, política y social, se agudizó en el caso de la región centroamericana durante la presente década, logrando revertir importantes logros obtenidos por el movimiento social y llevando a las fuerzas populares al inmovilismo o, en el mejor de los casos, a posiciones simplemente defensivas.

Mas los cambios en la correlación de fuerzas a nivel mundial no sólo tuvieron impactos negativos. Algunos estudiosos coinciden en observar que el argumento básico y favorito que "justificaba" una intervención de las diversas administraciones estadounidenses se ha desmoronado, en tanto el conflicto regional centroamericano ya no puede seguirse ubicando en el contexto de un enfrentamiento Este-Oeste y, menos aún, atribuirse la lucha por la democracia en la región al estereotipo del surgimiento de "ideologías exóticas".

En este contexto, la investigación aborda como punto central la experiencia adquirida durante la última década por los movimientos populares de Guatemala, El Salvador y Nicaragua que, tras largos años de resistencia militar activa en sus respectivos países, cuentan con un alto grado de representatividad y beligerancia en las negociaciones políticas con sus gobiernos.

Este fenómeno, que perdura hasta hoy, permite a estos movimientos sociales mantener significativos espacios de gestión política en la sociedad (tras largas décadas de regímenes de corte oligárquico-militaristas), lo cual constituye uno de los objetivos de esta investigación.

Importancia del estudio

La investigación que nos hemos propuesto constituye un estudio de carácter subregional que cruzará de forma general a los países centroamericanos, enfatizando en aquéllos donde se perciben con mayor claridad los elementos de la lucha de clases a partir de la lucha por la democracia, como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. También abordará aspectos relativos a las formas de lucha que el movimiento popular podría desarrollar en busca de un modelo democrático.

La importancia del trabajo se sustenta en la necesidad de analizar la situación por la que atraviesan hoy movimientos sociales en su lucha por alcanzar mayores espacios democráticos en los tres países señalados, sacudidos en las últimas tres décadas por profundas convulsiones sociales. Así, la década de 1980 es tomada solamente como punto de referencia para el estudio, cuya prioridad es, precisamente, profundizar en la situación de los mencionados movimientos y en su entorno político-social en la etapa comprendida entre 1992 y 1994.

Este trabajo busca además sembrar las bases para futuros estudios, por las implicaciones que de él se deriven.

La metodología utilizada a lo largo de la investigación es básicamente de carácter documental, aunque no excluye el trabajo de campo en los aspectos que así se requiere. Se apoya sobre todo en la amplia y variada información disponible en México, documentos bibliográficos e históricos y material hemerográfico

basado en un archivo de al menos ocho periódicos y revistas de México y Centroamérica, así como cables informativos de una decena de agencias noticiosas internacionales, compilados durante dos años y medio por el autor de este trabajo.

Tomando en consideración que la lucha por la democracia que libran los movimientos sociales en los países que aborda nuestra investigación, está en una fase sumamente compleja --tanto en el plano político como en el económico-social--, es nuestro objetivo dar a conocer precisamente la complejidad de esa situación y observar en ella las perspectivas del movimiento social en su lucha por mayores espacios político-económicos.

Así, una síntesis de hechos de carácter económico, político, militar y social permite tener una visión de conjunto sobre la problemática de estas naciones.

2. Objetivos general y particulares

Objetivo general

Nuestra investigación se propone demostrar que en las actuales circunstancias, las formas de lucha por la conquista de mejores condiciones de vida pasan necesariamente, en primer lugar, por la conquista de la democracia popular. Ésta será resultado, a su vez, de un período de lucha en que se ampliarán los espacios políticos de gestión y participación de los movimientos sociales.

El mantenimiento y la ampliación de estos espacios políticos, dependerá del grado de unidad y de alianzas que alcancen estos movimientos sociales en sus objetivos inmediatos y de largo plazo. Los llamados a realizar esta gran tarea son los diversos sujetos del cambio (cada vez más diversificados por los avances de las políticas económicas neoliberales), distribuidos en movimientos sociales, políticos y corporativos.

Estos movimientos, aglutinados en torno a los sectores más vinculados al trabajo, lograrán cuando menos oponer resistencia a los intentos de cooptación y represión a que se verán sometidos por las élites del poder.

Objetivos particulares

1. Dejar demostrado, a partir de la descripción objetiva de los acontecimientos en el plano económico, político y social, que la democracia trata de ser mediatizada por las élites del poder interno en directa alianza con el capital transnacional y con el apoyo de Estados Unidos.

2. De lo anterior podría advertirse la tendencia manifiesta de un reacomodo del sistema hacia "nuevas" formas de explotación y de control social. De ahí la necesidad del movimiento social de ajustar las formas de lucha a la tendencia que el modelo de explotación vaya adquiriendo.

Los fines y objetivos de esta investigación apuntan a la necesidad de plantear hipótesis que irán esclareciendo

apreciaciones con respecto al desarrollo del movimiento social, en su labor de alcanzar mayores espacios democráticos en estos tres países.

3. Hipótesis y variables

Obstáculos, vigencia e importancia de la lucha por la democracia popular que desarrollan los actuales movimientos sociales en estos países, en el marco de los Acuerdos de Paz.

VARIABLES A DESARROLLAR

a. **Obstáculos** representados en las estadísticas socio-demográficas, tales como la sensible baja en las tasas vitales de vida, la alta migración y el subdesarrollo histórico; las repercusiones de la guerra y de las actuales políticas neoliberales; la progresiva supeditación del Estado Nacional a las decisiones del Estado Transnacional.

b. La **vigencia** de la lucha por la democracia popular se sustenta en el hecho de que la encabeza el movimiento social, cuyas reacciones contra las actuales políticas económicas neoliberales tienden a un ascenso y, a la vez, a un aprovechamiento de los espacios democráticos alcanzados en el marco de una serie de acuerdos regionales de paz.

c. La **importancia** de esta lucha está expresada en la correlación de fuerzas surgida a raíz de las conversaciones de paz. Figuran por un lado los tradicionales grupos de poder oligárquico, en contradicción no antagónica con la creciente burguesía, que intentan seguir manteniendo el **status quo**; por el otro lado, la guerrilla y el movimiento social, en su afán de arrancar ciertos espacios democráticos (casos salvadoreño y guatemalteco, pues en Nicaragua la situación se plantea de forma diferente).

La demostración o no de la hipótesis será posible siempre y cuando exista una coherencia en la utilización de conceptos y categorías. En aras de una coherencia teórica, nos referiremos brevemente a los principales conceptos y categorías utilizados a lo largo del estudio.

4. Categorías y conceptos

Democracia. Este concepto ha sido históricamente muy discutido y su defensa la ejercen tanto los grandes sectores sociales marginales como los grupos de poder, lo cual conlleva a la necesidad de una aclaración y definición. La democracia tendrá aquí una connotación especial y diferenciada, que tiene que ver con el hecho de que, para describirla, se utilizarán sólo dos calificativos, aunque para ello sea necesario hacer algunas

aclaraciones que puntualizaremos más adelante. La analizaremos no sólo desde el punto de vista del Estado, sino también desde las relaciones sociales de dominación que ello implica.

La democracia es un concepto surgido hace muchos milenios que, si bien se desarrolla con más amplitud con el capitalismo, no es inherente a éste.

"Desde la antigüedad, pasando por la Edad Media hasta los albores de la modernidad, la democracia fue caracterizada como una forma de gobierno; ella se contraponía a la monarquía y a la aristocracia [...] al inicio de los nuevos tiempos pasó a ser considerada, también y quizás primordialmente como movimiento político [...]". (1)

Ese cambio de perspectiva, señala el sociólogo Fernández Santillán, se debe a que las contradicciones históricas (monarquía-república) habían pasado a un segundo plano en la etapa conocida como modernismo y, en su lugar, surgió la contradicción liberalismo-democracia.

Desde entonces, la democracia ha tenido un sinnúmero de calificativos que, en lugar de contribuir a aclarar el concepto, tienden a hacerlo más confuso, desvirtuándose también su definición etimológica. En la tarea de creación de estos calificativos han intervenido grupos históricamente dominados y grupos dominantes.

Hasta nuestros días, la democracia ha sido conocida como democracia para el pueblo (democracia popular), democracia política, democracia social, democracia tutelada, democracia limitada, democracia restringida, democracia socialista, etcétera.

De todas estas acepciones intentaremos centrarnos en dos que consideramos recogen los elementos más globales de todas: la Democracia Popular y la Democracia Tutelada. La primera, de carácter relativamente reciente, es utilizada por lo común por movimientos de liberación nacional y por amplios sectores sociales.

Así y para señalar ejemplos directamente relacionados con nuestro trabajo de investigación, podemos decir que en Nicaragua es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quien ha liderado esta lucha desde hace más de tres décadas y que llegó a la toma del poder por la vía armada en 1979. En los años que siguieron al triunfo revolucionario, los sandinistas encontraron condiciones para aplicar una Democracia Popular, aunque poco después, producto de la guerra estadounidense y de errores internos en la conducción del proceso revolucionario, sus objetivos se vieron seriamente afectados. Ya desde la presente década y tras la derrota electoral del sandinismo ante la coalición derechista UNO, la lucha por la democracia varió sustancialmente en sus formas y métodos.

En el caso de El Salvador, la lucha por la democracia en los años 60 y 70 estuvo principalmente a cargo de las organizaciones civiles que, tras la agudización del conflicto a inicios de la década siguiente, optaron por integrarse a la lucha armada.

(1) Fernández Santillán, José. "Democracia y Liberalismo".
Suplemento Política. El Nacional, México, 5/11/92.

Durante más de 12 años, la lucha por la democracia salvadoreña se libró en los frentes de guerra, dirigida por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). A comienzos de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, esta organización político-militar entró en un proceso de negociación con el gobierno y a finales de ese año se convirtió legalmente en un partido político. De aquí se desprende su actual concepción de lucha por la democracia, (bastante limitada por cierto) desde el marco de la actual Constitución de El Salvador.

En Guatemala, al igual que los casos anteriores, la lucha ha sido larga y cruenta. El peso de los esfuerzos por la conquista de la democracia ha recaído no sólo en la Unión Revolucionaria Guatemalteca (URNG), sino también en una serie de organizaciones civiles (estudiantes, mujeres, indígenas, maestros, trabajadores, religiosos) desarrolladas en los últimos 30 años. La lucha armada guatemalteca, una de las más antiguas de Latinoamérica, ha generado pérdidas en vidas humanas y bienes materiales difíciles de cuantificar. Actualmente el gobierno y la guerrilla mantienen un proceso de diálogo político dirigido a concluir el conflicto.

Así, teóricamente planteada, el eje de nuestro análisis sobre la Democracia Popular recoge elementos esenciales tales como la participación de las mayorías en las principales decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en un determinado país. En contraparte, según varios autores, la Democracia Tutelada surgió durante la Edad Moderna y reviste hasta nuestros días una importancia fundamental para los gobiernos en su intento de ejercer el poder con gobernabilidad.

La Democracia Tutelada, que recoge los elementos esenciales que se le atribuyen a la democracia limitada, es generalmente aplicada en la mayoría de los países; por su carácter y composición, algunos autores la señalan como un mero mecanismo de control ampliamente excluyente y representativo de los sectores que ejercen el poder.

En su libro Dialéctica de la democracia y el socialismo, Roger Bartra ubica la democracia (sin calificarla) como una categoría nacida mucho antes de la aparición del socialismo y el capitalismo; es a su juicio el autogobierno de todo el pueblo, con una aplicación práctica diferente en cada sistema económico-social.

En el capitalismo --indica-- la democracia se ha aplicado en diferentes grados de efectividad, pero siempre obstaculizada por la posesión de los medios de producción y su progresiva centralización por parte de pocos individuos. La autonomía relativa de la cultura de los órganos del poder asegurará la reproducción de una serie de valores democráticos que posibilitarán, en un futuro lejano, la creación de las bases de acumulación socialista que permitan la extinción del Estado y las clases sociales.

Por su parte, el brasileño Herbert de Souza, en sus "Notas sobre la cuestión actual de la democracia en Brasil", explica que en el caso de aquel país (similar al de otras naciones de la región) la "crisis" de la democracia deriva de las contradicciones básicas del capitalismo (burguesía-proletariado)

y de las resultantes de la internacionalización de los procesos productivos (oponen, no antagónicamente, los intereses de las fracciones transnacionales y nacionales de la burguesía).

De Souza comenta la existencia de dos vertientes de la democracia:

Vertiente Liberal: Formada por las contradicciones interburguesas, que en el plano político-ideológico no se opone a su naturaleza sino a su forma; contrapone a la ilegitimidad del Estado autoritario un proyecto de legitimación liberal.

Vertiente democrático-popular: Se refleja en la reanimación de movilizaciones obreras y formación de diversas organizaciones populares, así como en la politización creciente, reivindicaciones de autonomía sindical, luchas económicas y políticas. A partir del desarrollo del movimiento popular, el autor considera esta vertiente como un proyecto político viable que no llega a constituirse en la tendencia hegemónica de la oposición al régimen, sino que su base de desarrollo es la lucha de las masas asalariadas y su tarea, general y de largo plazo, llevar la lucha por la democracia hasta sus últimas consecuencias.

Movimiento Social. Esta categoría se refiere a los diversos grupos sociales, sean éstos políticos (partidos), sociales (organizaciones comunales, juveniles, femeninas, religiosas, humanitarias) o corporativos (todos los grupos sindicalizados), estructurados y organizados de acuerdo a las apreciaciones formuladas por el sociólogo costarricense Daniel Camacho en su obra Los Movimientos Populares.

Camacho sostiene que los movimientos populares se caracterizan por organizarse en torno a objetivos inmediatos. Existen así movimientos que van desde la defensa de un árbol en un determinado barrio, hasta la decisión de las etnias de Guatemala de tomar las armas en defensa de su cultura milenaria; figuran asimismo movimientos estudiantiles, cristianos o de mujeres y madres (Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina).

Según Camacho, los movimientos populares tienen su contraparte en movimientos que existen en la sociedad civil pero que no son populares sino (para llamarlos de alguna forma) **patronales**, como las cámaras de comercio, las organizaciones de terratenientes y otras asociaciones que aglutinan diversos sectores de la actividad económica.

Los movimientos populares pueden tener objetivos **específicos**, como el caso de los campesinos en su lucha por la tierra, o **generales**, como el movimiento cristiano progresista.

Otro rasgo particular es que están insertos en la sociedad civil y no en el Estado, si bien intentan su transformación parcial o total (el movimiento ecológico y el movimiento nacional en los casos de Nicaragua y El Salvador).

Los movimientos populares pueden estar a un paso de convertirse en movimientos políticos (partidos) o político-militares. En este sentido, por ejemplo, los que dieron origen al FSLN en su lucha por derrocar el régimen somocista y alcanzar el poder en 1979, logrando preservar mayores grados de autonomía y al menor influir en la toma de decisiones políticas.

Otro autor que ha abordado el tema es Francesco Alberoni, quien en Movimiento e Institución intenta construir una teoría general y sistemática de los movimientos sociales y de su posterior transformación en instituciones. En su estudio, Alberoni subdivide a los fenómenos sociales en dos grandes áreas o "componentes de lo social": el primero corresponde al Estado naciente e institucionalización, entendiéndose como la fase de lucha de los movimientos populares contra el Estado; el segundo analiza el caso en que éstos logran alcanzar el poder y cambian radicalmente su rol en la sociedad.

La Institución y los Movimientos se contraponen: la primera surge del Movimiento, que es siempre portador de proyectos y por tanto contiene potencialmente a la Institución.

El Estado naciente, que aflora en el punto máximo del desorden precisamente para construir un orden puede, a su vez, ser efímero o perpetuarse, conduciendo al totalitarismo. Según Alberoni, la Institucionalización es el destino de todo movimiento en tanto ello signifique su derrota; es la heredera del movimiento y al mismo tiempo lo traiciona.

Para el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, en tanto, las luchas democrático-populares se presentan en sus diferentes expresiones como alternativa al Estado Transnacional; la viabilidad de la lucha se fundamenta en seguir acumulando fuerzas, ampliando las alianzas con los diferentes sectores de la sociedad (no necesariamente de la misma clase social) y continuar buscando espacios, sin que ello implique poner en peligro la **autonomía** del movimiento.

Señala que es preciso una estrategia de lucha que conjugue dialécticamente la **autonomía** y la **búsqueda de la hegemonía**, y observa: En países en que existen mayores espacios democráticos, la vía será la negociación política, que nos permita la acumulación de fuerzas y, por lo tanto, mejores condiciones de negociación.

En el caso de regímenes de carácter represivo y con muy pocas espacios democráticos (que pudieran ser los casos estudiados), González Casanova plantea que la acumulación de fuerzas políticas irá aumentando a medida que se logren conquistas democráticas, sin descartar la lucha armada como un recurso válido en esta situación. (2)

Estado Transnacional y Dependencia. Para efectos de nuestro trabajo y debido a su íntima relación hemos fusionado ambas categorías.

Con relación al Estado Transnacional, González Casanova aborda la crisis de los Estados Nacionales producto del proceso de transnacionalización del Estado y la sociedad civil a partir los 80, analizando los diferentes momentos de la formación del Estado Capitalista, principalmente en América Latina, y estableciendo las diferencias de éste en los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

(2) González Casanova, Pablo, El Estado y la Política, en el libro América Latina, hoy, serie de ensayos, editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, primera edición, 1990.

El autor observa cómo el Estado Nacional ve reducida su autonomía producto del proceso de transnacionalización y sostiene que, para llevar a cabo las luchas contra la transnacionalización del Estado, deben tomarse en cuenta a los "enemigos internos, regionales y mundiales" de la burguesía. Confiere a los bloques hegemónicos en América latina el papel de sujetos sociales del cambio, en caso de que éstos lleguen a conformarse sin ser cooptados o aplastados por el sistema.

En los últimos 10 a 15 años, el Estado Nacional basado en políticas económicas keinesianas (aplicadas en menor escala en los países objetos de nuestra investigación) se ha visto sumido en una profunda crisis, por los que algunos hablan del retorno a los esquemas de liberalismo, mejor conocido como neoliberalismo.

Según González Casanova, la transnacionalización del Estado conduce en última instancia a la destrucción del Estado Nacional, mediante un proceso global de desnacionalización y privatización iniciado a partir de la vinculación de sectores de la burguesía nacional con el capital extranjero.

A mayor grado de transnacionalización, habrá más cierre de empresas del sector estatal, lo que conducirá al desempleo a una gran capa de la población. La aparición de los llamados "micro-empresarios" refleja la tendencia al desplazamiento de amplios contingentes poblacionales del sector formal al subempleo, que algunos prefieren llamar "sector informal".

En otras palabras, los únicos bastiones del sostenimiento de la lucha por mejoras económico-sociales están siendo desintegrados. Al desarticularse los sindicatos independientes y autónomos, se torna mucho más difícil la posibilidad de que éstos presenten una lucha organizada.

La conformación del bloque de poder Transnacional comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se instauró en Latinoamérica con la llamada Alianza para el Progreso, aunque su aplicación sistemática comenzó en los 80.

A juicio de Pablo González, este último bloque se encuentra actualmente en una franca crisis, debido a su desgaste durante regímenes de corte populista y socialdemócratas, a los intentos de sustituir sus bases por una sociedad informal que escapa de su control y, sobre todo, a la crisis general del capitalismo a nivel mundial y en Estados Unidos, primer bastión del Estado Transnacional. (3)

El desarrollo del Estado Transnacional ha sido también profundamente analizado por estudiosos de la llamada teoría de la dependencia, que le confieren el peso fundamental de las causas del subdesarrollo en América Latina.

En este sentido, los teóricos de la dependencia tan en boga en la década de los 60, marcaron la diferencia sustancial entre las posiciones de los estudiosos del capitalismo clásico y las de los llamados desarrollistas, encabezados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El brasileño Rui Mauro Marini, miembro destacado de esta corriente teórica, sostiene que el capitalismo como sistema está entrando en un nuevo y largo ciclo de desarrollo, con lo cual

(3) González Casanova, Pablo, ídem.

refuta la tesis sobre un supuesto fin del capitalismo o sobre una victoria final de Occidente.

Para explicar su posición, Marini aborda el último ciclo general del capitalismo (de 1967 a 1988) y lo divide en tres fases: 1967-1973; 1973-1980 y 1980-1988. La primera, el momento de la recesión económica en Estados Unidos y por lo tanto del sistema monetario internacional; la segunda fase, la de la lucha de la clase obrera en los países centrales por mantener sus conquistas, y la tercera, vinculada al desarrollo tecnológico en detrimento de los beneficios sociales, que crea las condiciones para la transformación económica mundial y el surgimiento de una Nueva División Internacional de Trabajo.

Según Marini, los países en desarrollo están entrando al nuevo ciclo mediante la formación de grandes bloques comerciales y la creación de un nuevo Orden Jurídico en los diferentes Estados, para garantizar la libre circulación de mercancías. América Latina --sostiene-- no debe tener miedo a "la reconversión económica", sino a los intereses que ésta alienta en la actualidad.

La especialización productiva, a su juicio, no sólo es necesaria para la reconversión económica sino para "racionalizar aquellos sectores productivos que son una carga para los trabajadores", y debe complementarse con "políticas públicas de financiamiento e incentivos" dirigidas al crecimiento de la infraestructura material y tecnológica, que permitan la expansión económica.

Para ello, afirma Marini, la propuesta de reforma de las funciones del Estado debe ser **revisada**. Se trata de que la simple privatización de las empresas no sea solamente "una transferencia de valor hacia el sector privado", sino que el Estado asuma el papel rector para cohibir a las transnacionales.

La recuperación económica en los países centrales es producto de profundas transformaciones en la economía nacional y del inicio de una nueva División Internacional del Trabajo. Así, y en esa dirección, el área correspondiente a **maquinaria y equipos** en países como Japón, Estados Unidos y Alemania aumentó en los periodos 1976-1980 y 1981-1988, predominando el de **bienes de alta tecnología** (muebles y equipos de computadoras, comunicaciones, etcétera.)

Por ejemplo, en Estados Unidos tres cuartas partes del total de la inversión en maquinaria y equipos fue de alta tecnología. **La reducción relativa de los precios de la fabricación de estos productos** facilitó su producción a gran escala y a bajos precios (mientras que en el Tercer Mundo subían los precios de los productos de punta).

Basado en lo anterior, se priorizó el saber sobre la producción manual, lo que conllevó una profundización de la crisis económica en los países desarrollados debido al desplazamiento de los trabajadores no calificados o medianamente calificados al sector informal y al desempleo. Esta situación se presenta más claramente aún en América Latina, donde los rezagos

de la recesión y el estancamiento en los países centrales la hizo perdurar hasta finales de los ochenta. (4)

Para Theotonio Dos Santos, por su parte, el patrón de desarrollo económico dominante en América Latina (monopólico, super-explotador y excluyente) no es compatible siquiera con la democracia burguesa. Sus regimenes impulsan políticas económicas de concentración y monopolización en base al capital multinacional.

Según este autor, existen tres condiciones para el triunfo de esa tendencia: una radicalización popular acentuada por las dificultades del modelo de acumulación; la unidad de la clase dominante (burguesía) ante el temor que le despierta el radicalismo y la movilización popular; y la disposición psicológica de la pequeña burguesía amenazada por el radicalismo popular, en contradicción con el gran capital internacional y nacional.

La capacidad de los trabajadores de empujar medidas democráticas y ampliar su espacio de acción política, pasa a generar tensiones en el movimiento democrático. Dos Santos sostiene que supone un grave error político pensar que el sector popular de la resistencia democrática debe mantenerse pasivo para no "asustar" a sus aliados burgueses.

Todo depende de la capacidad de la clase trabajadora de medir la correlación de fuerzas y escoger los momentos más adecuados para lanzar las ofensivas o replegarse políticamente, manteniendo su flexibilidad táctica y su independencia ideológica y política, dentro de la lucha inmediata por la democracia. (5)

Desde un enfoque un tanto diferente a los anteriores en la forma de observar el desarrollo del Estado Transnacional y la dependencia de los países de América Latina, el reconocido escritor estadounidense James Petras profundiza en el papel que desempeñan las organizaciones estatales y las relaciones clasistas.

Petras observa que desde la etapa post-independencia se formularon tres tipos de alianza para formar la Acumulación Capitalista: entre capital nacional y capital internacional; entre capital nacional y capital internacional, con participación de los sectores populares; y entre capital nacional y trabajadores. Cada una de estas alianzas generó una estructura del Ingreso diferente, hecho que podría graficarse en una pirámide invertida, un diamante y una pirámide, respectivamente.

Lo anterior, señala, es un ejemplo de que la lucha por la dominación está mediada por una Estructura de clases pero, al mismo tiempo, ha requerido de un intermediario para la ejecución de decisiones: El Estado.

En la Periferia, la acumulación de capital se diferencia con la del Centro en cuanto a los regimenes políticos que se requirieron para su implementación: Así, a mayor expansión y duración, son regimenes impopulares, menos nacionalistas; a menor

(4) Marini, Rui Mauro. "América Latina en la Encrucijada". Conferencia ofrecida en el CELA en 1992.

(5) Dos Santos, Theotonio. "La viabilidad del capitalismo dependiente y la democracia".

expansión y duración, son regímenes populares más nacionalista, si bien pueden existir regímenes nacionalistas pero impopulares, que pasan a ser uno de los anteriores. El primer tipo de régimen señalado, ha sido el preferido del Estado Transnacional para su Acumulación Capitalista.

En síntesis, a juicio de Petras, mientras la industria crece también aumenta la dependencia económica y tecnológica y persiste la división internacional del Trabajo. Crece el Producto Nacional Bruto (PNB) pero al mismo tiempo las desigualdades sociales; las exportaciones se expanden a un ritmo igual o inferior que la deuda de nuestros países; si bien aumenta la actividad estatal (no tanto ya desde la década de los 80), también aumenta su penetración por el capital extranjero.

En tanto los índices de productividad crecen, bajan en igual o mayor medida los precios internacionales. La producción de granos, algodón, café y productos manufacturados es mayor, lo mismo que los precios de los insumos que no producimos.

Sin embargo --concluye el autor en un derroche de optimismo-- una situación favorece a los países del Tercer Mundo y en especial a América Latina: en la medida en que aumenta el nivel de desempleo y miseria, crece también la conciencia en la población de su situación de explotado. (6)

Poder y Dominación. Si bien no están a la vista a lo largo de nuestro trabajo, estas categorías aparecen implícitas en el análisis político de los países estudiados.

Así, debe partirse de la premisa de que quien ejerce el poder ejerce el dominio; el control de una minoría se impone sobre una mayoría de la población.

Históricamente y posterior a las formas de explotación esclavistas, existían dos formas de dominación: la oligárquica y la burguesa.

Para el investigador chileno Eduardo Ruiz Contardo, la primera forma --que no requiere de relaciones de mediación para imponer su dominio-- se ejerce de manera más abierta, directa y excluyente de amplios sectores sociales. La segunda, por el contrario, necesita de espacios políticos de negociación que provocan el resurgimiento de clases políticas (partidos) que entran directamente en el proceso de negociación entre los sectores dominantes y los dominados. En la mediación de los conflictos entre empleadores y trabajadores, por ejemplo, el Estado juega un rol muy importante.

En los países objeto de nuestro estudio, es conocido el poder que ejercen las oligarquías. Similar al caso guatemalteco, el poder en El Salvador se concentra en 13 familias que controlan todos los aspectos de la vida económica, política y social de la nación.

Con el proceso de privatizaciones impulsado por los organismos multilaterales del crédito, estas oligarquías se ven más fortalecidas de lo que parece, pues la transferencia de valor hacia este sector es muchas veces desviada hacia los sectores

(6) Petras, James. Clase, Estado y Poder en el Tercer Mundo. FCE, México, segunda edición, 1986.

tradicionales oligárquicos, lo que conlleva mayores posibilidades de que los métodos y formas tradicionales de dominación se consoliden en vez de debilitarse, como sostienen algunos sociólogos de derecha.

Así, la consolidación de la llamada Democracia Tutelada al mejor estilo occidental se ve seriamente afectada.

Sin embargo, para que ésta subsista, precisa de una serie de mecanismo de cooptación y coerción que se utilizan indistintamente. A mayor inequidad en la distribución de la riqueza, mayores capas de marginados sociales, mayor resentimiento y agravio moral, todo lo cual el Estado intentará controlar mediante la coerción.

La Democracia Tutelada requiere, igualmente, de una representación de las capas del pueblo, las cuales no deberán cuestionar el orden social existente. Lo anterior constituye sólo una pobre aunque legítima participación del pueblo en la toma de importantes decisiones de gobierno. Más aún: se llega a un punto en que la Democracia Tutelada se confunde --por no decir se funde-- con los mecanismos de control oficial sobre la población, dirigidos a mantener la gobernabilidad que este tipo de democracia requiere.

La lucha por la democracia que impulsan los movimientos sociales podrá ser observada en toda su dimensión y con mayor claridad a partir de las categorías anteriormente presentadas, en tanto ofrecen una visión teórico-metodológica global de la investigación.

Las categorías juegan un papel fundamental en el desarrollo de cada uno de los temas presentados los cuales, para mayor comprensión del lector, aparecen expuestos en forma de capítulos.

CAPITULO II

ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA

CAPITULO II

Estructura sociodemográfica

La exposición somera de las actuales estructuras sociales y demográficas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, permite observar las perspectivas de desarrollo futuro de los movimientos sociales en los países de esta región.

Estos tres países presentan similares características, en cuanto a que han atravesado por largas y sangrientas guerras que han incidido notoriamente en su situación económica y social actual.

En efecto, los más de 35 años ininterrumpidos de conflicto armado en Guatemala, más los casi 20 años de guerra en El Salvador y Nicaragua, han sido factores de profundización de la miseria en la región.

No fue sino hasta la década de los 90 cuando gobiernos y oposición política encontraron marcos definidos de negociación para la paz, la justicia y la democracia, los que serán tratados a lo largo de nuestra investigación.

Las actuales estructuras sociales y demográficas en estos tres países, reflejadas en datos estadísticos, permiten contar con un elemento sustancial para comprender el desarrollo y porvenir de estas naciones: Estos datos comprenden los elementos familia, etnias, grupos lingüísticos, religión y tasas vitales, así como el tema migratorio.

Por último, se realiza una suerte de análisis comparativo entre los tres países, utilizando para ello tablas estadísticas actuales (datos de 1990 a 1993).

Para una mayor comprensión del estudio aquí presentado, definimos las estructuras socio-demográficas como todos aquellos grupos humanos interrelacionados antropológica y socialmente y que comparten sus propias necesidades, formas de actuar e interpretar su entorno natural.

En todas las estructuras sociales pueden encontrarse grupos humanos transitorios (como los nómadas aún existentes en ciertas regiones de Africa y Asia) y grupos permanentes o estacionarios, instalados en regiones de un determinado país.

En el caso de Nicaragua, El Salvador y Guatemala predominan grupos de la segunda categoría, pero son muy importantes los desplazamientos poblacionales masivos motivados por razones económicas y, en las dos últimas décadas, por la inestabilidad política y la guerra, factores que han incrementado las migraciones del campo a la ciudad y aun fuera del país, fenómeno muy común en la zona nor-atlántica de Nicaragua, en el área rural de El Salvador y en el sector norte de Guatemala.

Acerca del fenómeno migratorio "dentro de fronteras", debe señalarse que éste se ha visto acompañado de importantes desplazamientos hacia el exterior, principalmente a Estados Unidos y México.

Presentamos a continuación las características sociodemográficas fundamentales de los tres países objeto de nuestro estudio:

Nicaragua

1. Tasas Vitales

Según el censo más reciente (1992), Nicaragua cuenta con una población total de 3.752.000 habitantes y una extensión territorial de 129.494 kilómetros cuadrados (9.291 kilómetros comprenden lagos y lagunas).

La relación de las Tasas Vitales del país son las siguientes: del total de la población estimada, 1.887.000 son hombres y 1.865.000 mujeres; el promedio de vida de los primeros es de 60 años mientras que el de las mujeres es de 65. En relación al promedio de vida registrado en 1979 (53 años) y pese a los efectos de una década de guerra, la esperanza de vida subió en casi diez años durante el período señalado. (1)

La mortalidad infantil alcanzó en 1992 una tasa de 71 niños por cada 1.000 nacidos vivos, siendo las principales causas de muerte enfermedades como diarrea, malaria, sarampión, cólera y dengue. En 1989, la tasa de mortalidad era de 61 por cada 1000 nacidos. (2)

Según el organismo no gubernamental nicaragüense Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), entre 1985 y 1992 el número de hogares pobres en Managua aumentó del 43% al 49%, en Granada del 51.3% al 68.7% y en León del 56.9% al 65.8%.

La pobreza registra niveles más altos en los hogares con jefatura femenina, cuya media es de 25.5% en Centroamérica. Nicaragua mostraba ya una cifra alta en la década pasada (34.2%), y la investigación arroja un aumento del 37% en la ciudad de Managua, 34% en León y 29% en Granada.

Esta relación no significa un mayor grado equidad en los roles de género, sino que a mayor cantidad de hogares jefeados por mujeres se señala mayor pobreza debido a las desiguales condiciones en que la mujer se incorpora al mercado laboral.

Los hogares con jefatura femenina en las tres ciudades citadas, según la misma fuente, se caracterizan por una elevada dependencia económica hacia la jefa de hogar. Estos hogares reflejan (especialmente en Managua) mayores porcentajes de indigencia: 13.1% (mujeres) contra 11.9% (hombres), en Managua. Esta relación es de 18.2% contra 17.9% en León. (3)

De acuerdo al último censo de población, el 46% de los nicaragüenses son menores de 15 años, el 52% va de los 16 a los 64, y el 2% tienen más de 65 años. La tasa bruta de nacimientos

-
- (1) Anuario computarizado PC Globe 5.0, 1992. PC Globe Inc. Tempe, AZ, USA.
 - (2) Diario Barricada, Managua, 4/11/92, pp. 1 y 14.
 - (3) Barricada, 13/3/93.

es de 37 por cada 1.000 habitantes, frente a la de 45.58 registrada en el período 1975-1980.

En otro orden, las últimas estadísticas de Naciones Unidas (1993) sobre urbanización, confieren a Nicaragua un nivel del 57%, aunque otros especialistas aseguran que sobrepasa ya el 60% de la población total.

El gobierno ha expresado preocupación por el ritmo de crecimiento poblacional, que se ubica por encima de los indicadores económicos del país y de un ingreso per cápita de US\$400 anuales.

En los últimos cuatro años, la economía no creció mientras que la tasa de natalidad evolucionó a un ritmo de 3.5% anual, según fuentes oficiales. Según William Báez, ministro de Acción Social, "con los programas del ESAF (del FMI) vamos a lograr un crecimiento por encima de los niveles de población. Cuando logremos revertirlo vamos a trabajar en una situación más holgada".

Las autoridades de Nicaragua, donde la mayoría de la población es creyente, son presionadas por grupos religiosos para impedir la promoción de métodos anticonceptivos artificiales. "No hay que eliminar a los comensales del almuerzo y de la cena, sino aumentar los platos para que puedan comer", dijo el cardenal Miguel Obando, quien encabezó una marcha contra el aborto. (4)

Una posición más extremista tiene el actual ministro de Educación, Humberto Belli, un carismático miembro del movimiento Ciudad de Dios, cuya fórmula para resolver la crisis económica y el crecimiento poblacional se basa simplemente en la "abstinencia sexual". El gobierno, a su juicio, rechaza el aborto, favorece la educación religiosa y plantea "la abstinencia como el mejor método anticonceptivo para controlar la natalidad".

Para Belli, la solución a los problemas económicos del país "no se encuentra en la distribución masiva de anticonceptivos, sino en las transformaciones de valores y las normas de conducta". (5)

Salud

En el campo de la salud, Nicaragua presenta el siguiente cuadro: un hospital por cada 72.154 habitantes, una cama de hospital por cada 788 personas y un médico por cada 1.799. Existe un dentista por cada 13.545 nicaragüenses y una enfermera por cada 3.205 habitantes.

La tasa bruta de mortalidad, que en el período 1975-1980 fue de 11.61, es hoy de 7 por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil se estima en 60 por cada 1000 habitantes, mientras que en el período 1975-1980 fue de 92.96. (6)

Educación

(4) AFP/Notimex, 12/7/94.

(5) AFP, 2/5/94.

(6) PC Globe, ídem.

En cuanto a educación, el país registra un 57% de alfabetización. Lo anterior significa que el nivel de analfabetismo, reducido a menos del 12% durante la Cruzada Nacional de Alfabetización (en 1980, durante el gobierno sandinista) ha aumentado hasta alcanzar al menos un 43 por ciento.

El Producto Nacional Bruto (PNB) fue de US\$2.830 millones en 1991. El PNB para la educación superior es de 6.2%, según estadísticas de 1993. Autoridades universitarias señalan que el presupuesto para este renglón es apenas un poco mayor del 5 por ciento. La deserción escolar, estimada en un 25% por la organización magisterial opositora ANDEN, va en aumento.

Nuestros indicadores señalan que la relación de estudiantes por profesor en la escuela elemental o primaria es de 28; en la secundaria de 24 y en la universidad de 17 estudiantes por profesor. (7) En esta situación influyen los obstáculos que actualmente limitan el acceso a la escuela, principalmente en la educación superior. Sólo en esos centros, quedaron en 1992 sin cupo ni matrícula más de 10.000 estudiantes, según declaraciones del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Xabier Gorostiaga.

2. Migraciones externas e internas

En lo que a desplazamiento de grupos sociales o migraciones se refiere, Nicaragua presenta un cuadro inestable.

La guerra y el hambre fueron factores claves en el fenómeno migratorio. Con el fin formal de la guerra (1990) retornó al país una gran masa de la población (fundamentalmente campesinos e indígenas que en la década pasada se habían establecido en la frontera sur-atlántica de Honduras), calculada en unas 150.000 personas.

Sumado a ello, la crítica situación económica se agudizó cuando, a partir de entonces, más de 70.000 combatientes **contras** y militares sandinistas dejaron las armas e intentaron reincorporarse a la vida civil y productiva. Sólo entre mayo de 1990 y diciembre de 1992, el gobierno redujo el ejército de más de 90.000 hombres a poco más de 15.000.

Un bando y otro esperaron lo prometido por el gobierno, cuyo incumplimiento condujo primero a ex **contras** y luego ex **compas**, a rearmarse, con fuerzas que a mediados de 1993 totalizaron unos 1.400 hombres. (8)

Por otro lado, las migraciones del campo a la ciudad dentro de Nicaragua aumentaron considerablemente, como efecto directo de las medidas económicas de corte neoliberal impulsadas por el gobierno. Así, a diferencia de lo ocurrido durante la década pasada, las migraciones del campo a la ciudad tienen ahora un carácter fundamentalmente económico.

Elementos esenciales de este fenómeno han sido el problema de la propiedad agraria, titulación legal (las tomas de tierras son

(7) Idem.

(8) IPS, 2/8/93.

un importante factor de inestabilidad en el campo) y la falta de crédito bancario a pequeños y medianos productores.

De acuerdo a informes de la policía fronteriza costarricense, a mediados de 1993 ingresaban mensualmente a Costa Rica en forma ilegal cerca de 3.000 nicaragüenses.

El fenómeno originó fricciones entre los gobiernos de Managua y San José, después que las autoridades de Costa Rica comenzaron a deportar a los indocumentados. Según el diario costarricense La Nación, entre septiembre y diciembre de 1993 el gobierno deportó a más de 1.300 nicas, lo que causó reclamos de Nicaragua, donde 275.000 personas carecen de algún trabajo y otras 707.000 son subempleadas. (9)

La Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU), que demandó al gobierno tico cesar las deportaciones, consideró: "El problema de los indocumentados en Costa Rica es complejo, dada la situación fronteriza y problemática interna en Nicaragua. A esto se suma el hecho de que históricamente han existido formas irregulares de tránsito especialmente de nicaragüenses hacia nuestro país". (10)

La situación actual de miles de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica es de miseria, explotación y abuso. Un reportaje aparecido en La Nación refiere: "Como peones, albañiles o lava-autos ganan menos, no tienen seguro ni garantías, sobreviven hacinados y en condiciones infrahumanas, admiten las autoridades".

En la misma semana, el diario Barricada, de Managua, advertía que en Costa Rica "residen ilegalmente unos 150.000 nicaragüenses, la mayoría de ellos laborando para empresarios y contratistas ticos que los explotan con salarios muy bajos y sin garantías sociales. Estos son contratistas para la zafra, las cosechas del café, la producción bananera y la construcción, que atrapan a los nicas como mano de obra barata en trabajos de gran esfuerzo que los ticos no quieren realizar, indicó Danilo Salas, director de Migraciones Laborales del ministerio del Trabajo de Costa Rica.

"Otros nicas trabajan como lava-carros, domésticos o constructores, a fin de poder enviar dinero a sus familiares en Nicaragua, regresar a su país o, en buena parte de los casos, quedarse viviendo en C. Rica, donde el desempleo es de apenas 4,1%, frente al alarmante 71% de Nicaragua." (11)

3. Familia. Grupos étnicos, religiosos y lingüísticos

El principal grupo social en Nicaragua es la familia. La **familia nuclear** predomina en los sectores urbanos, en tanto la **familia ampliada** rige en las áreas rurales, donde sin embargo la **familia matrifocal** tiene una importante incidencia.

En la región nor-atlántica nicaragüense se observan pequeños grupos sociales organizados en una mezcla de familia y tribu; son grupos étnicos en su mayoría formados por negros, zambos y

(9) La Nación, Costa Rica, 16/1/94.

(10) Xinhua, 2/10/93.

(11) Barricada, 18/1/94.

amerindios, organizados bajo comunidades mejor conocidas como miskitos, sumos, ramas y criollos. Ellos representan casi el 17% de la población total del país.

El resto de la población, dispersa principalmente en toda la franja del pacífico, son mestizos (68%) y blancos (14%). La Constitución Política, promulgada en 1987, define a Nicaragua como "una nación multilingüe y multirracial" y asegura para todos sus habitantes "iguales derechos y deberes".

Los grupos lingüísticos se subdividen según las etnias, por lo que se aprecian tres tipos de idiomas: el español, hablado por el 95% de la población, el miskito (4%) y el inglés criollo (1%).

En cuanto a la religión, el 88% de los nicaragüenses profesan el catolicismo y un 12% pertenece a sectas evangélicas (mormones, bautistas, testigos de Jehová, iglesia de Dios, etc.). Estos datos corresponden a informes oficiales, aunque hay quienes aseguran que la población evangélica es mucho mayor, máxime si se toma en cuenta la incidencia de estas iglesias, hacia finales de la década pasada y especialmente entre sectores de escasos ingresos económicos, fomentada inicialmente por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en su guerra contra el gobierno sandinista).

El Salvador

1. Tasas Vitales

La República del El Salvador tiene una población total de 5.419.000 habitantes (1992) sobre un territorio de 21.041 kilómetros cuadrados de extensión, incluyendo superficies de lagos y lagunas.

La relación de la Tasa Vital que presenta el país es la siguiente:

Del total de población estimada, existen 2.747.000 mujeres y 2.672.000 hombres. El promedio de vida de las mujeres es de 68 años, cinco años más que la de los hombres.

La tasa bruta de nacimientos es de 33 por cada 1000; mientras que la tasa bruta de mortalidad alcanza 8 muertes por cada 1000. (12)

Salud

La tasa de mortalidad infantil registra 47 muertes por cada 1.000 niños.

En el sector salud, cada hospital atiende a 66.085 personas, mientras que cada cama de hospital está disponible para una población de 1.283 habitantes.

Hay un médico por cada 3.169 habitantes (el gobierno asegura que la relación es uno por cada 1.500), en tanto en las áreas rurales se concentra el 30% de los 1.710 médicos del país. Se reporta un dentista por cada 9.047 personas, un farmacéutico por cada 9.077 y una enfermera por cada 1.076 habitantes. (13)

EL PNB registrado en 1991 alcanzó los US\$5.313 millones. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), emitido en octubre de 1992, un 15% de la población está desnutrida, debido a que la pobreza afecta al 68% de los salvadoreños.

Educación

La educación en esta pequeña nación ha sido uno de los elementos que la caracterizan como un país subdesarrollado. Del presupuesto total de la república, el gobierno destina a esta área solamente el 2.5 por ciento.

Un informe del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas (CENITEC), refiere que en 1993 el presupuesto estatal para educación y salud "aumentó en 0.75% y 1.72% respectivamente, con relación al año anterior, cuando los montos destinados al área social representaron menos de la tercera parte de lo asignado en 1977, es decir hace 15 años". (14)

El número de escuelas de primaria, secundaria y educación superior son insuficientes, máxime si se toma en cuenta, de

(12) PC Globe, ídem.

(13) Idem.

(14) Inforpress Centroamericana, 5/11/92, p. 16.

acuerdo a datos oficiales conocidos en diciembre de 1992, que "de 3.300 escuelas existentes en 1980, un tercio dejó de funcionar durante la década anterior debido a su destrucción parcial o total o bien por no ofrecer seguridad a maestros y alumnos".

El gobierno estima en un 31% el índice de analfabetismo en toda la nación; sin embargo, estudios de la Universidad Centroamericana (UCA) sostienen que el 57% de salvadoreños son analfabetas. (15)

La proporción de estudiantes por profesor, según cifras oficiales, es de 45 estudiantes en los estudios elementales o primaria, 22 estudiantes en secundaria y 15 estudiantes en educación superior. Aparentemente no existen problemas en este sentido; sin embargo, existen serios obstáculos para el acceso a la educación intermedia y, más aún, a la superior.

2. Migraciones externas e internas

Las migraciones internas y externas en El Salvador han sido bastante frecuentes. La presencia de grandes grupos poblacionales que huyeron del conflicto bélico durante toda la década pasada, provocó un considerable aumento de las poblaciones urbanas; en tanto, las migraciones fuera de las fronteras fueron aún superiores.

La guerra provocó, durante sus 12 años de duración, un total de 500.000 desplazados internos y al menos un millón de emigrantes (que abandonaron el país por razones económicas y políticas), de los cuales la mayoría se ubicó como refugiados en el occidente de Nicaragua y en la frontera oriental honduro-salvadoreña. Otra parte de esa población emigró hacia Estados Unidos.

Con base en la firma de los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec en enero de 1991, el proceso de reducción de las fuerzas armadas (de 80.000 a 30.000 hombres) y la desmovilización de las fuerzas del Frente Farabundo Martí (FMLN), permitió el retorno de grandes contingentes poblacionales, provenientes en su mayoría de Nicaragua y Honduras.

La cifra estimada de emigrados asciende a unas 100.000 personas, a quienes se asignarían --según la letra de los Acuerdos de Paz-- entre 150.000 y 200.000 hectáreas de tierra. Actualmente, más de 250.000 familias campesinas no tienen acceso a la tierra en El Salvador.

A diferencia de Nicaragua, en el estudio de las altas tasas de migración en la sociedad salvadoreña no prevalece todavía el factor económico; el elemento político continúa hoy determinando los fenómenos migratorios.

Los refugiados salvadoreños, que en la década pasada habían encontrado en la Nicaragua sandinista un lugar seguro para vivir, comenzaron luego a ser perseguidos por el nuevo gobierno, presidido por Violeta Chamorro. A fines de 1990, la sede de las Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador (CEBES) en la periferia de Managua, fue allanada sin orden judicial por militares nicaragüenses y funcionarios salvadoreños, entre ellos

(15) El Nacional, 13/9/92.

el viceministro de Defensa Orlando Zepeda y el vicescanciller Ricardo Valdivieso, así como delegados del organismo de Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA).

Acusados de dirigir desde ese local (donde vivían también grupos religiosos) las emisoras clandestinas Venceremos y Farabundo Martí, los refugiados denunciaron el allanamiento. El FMLN, a su vez, responsabilizó a la ONU de "los futuros hechos represivos" contra los salvadoreños en Nicaragua.

También enfrentaron tropiezos 610 salvadoreños que habían vivido como refugiados en Panamá durante casi 11 años, y regresaron al país en enero de 1991. La repatriación masiva había sido obstaculizada por el presidente Alfredo Cristiani, cuya posición --similar a la del ejército-- pasaba por la vinculación directa guerrilla-refugiados, considerando a estos últimos parte esencial de la base social de apoyo rebelde. (16)

Otra repatriación importante se produjo a inicios de marzo, con el regreso de 730 salvadoreños que residían como refugiados, desde inicios de los 80, en una cooperativa en la zona occidente de Nicaragua. Después de cuatro meses de negociaciones y presiones, el gobierno de Cristiani aceptó su retorno en tres grupos, luego de un acuerdo con el gobierno de Nicaragua y ACNUR. (17)

A mediados de 1993, el gobierno estadounidense amenazó con no prorrogar el permiso temporal de trabajo a más de 250.000 salvadoreños y deportarlos de Estados Unidos. Las organizaciones hispanas en Estados Unidos iniciaron una campaña para obtener una prórroga de 18 meses del llamado "status de protección temporal para salvadoreños". (18)

Según el arzobispo Arturo Rivera y Damas, jefe de la iglesia católica salvadoreña, una deportación masiva de ilegales agravaría "dramáticamente el alto índice de desempleo que agobia a El Salvador". (19)

El drama de los refugiados-retornados salvadoreños es ya evidente. Esta gran masa humana de desplazados al extranjero e internos, enfrenta una dura lucha por sobrevivir y establecer una base económica para su desarrollo, tanto social como político.

Según Steve Cagan, de la Rutgers University, de Nueva Jersey, los desplazados y refugiados representaron más del 25% de la población de El Salvador: "De este porcentaje, quizás la mitad ya ha retornado, y en el curso de los próximos años volverá la gran mayoría, según se espera".

Señaló que la mayoría son campesinos y obreros, enfrentados hoy a una terrible realidad: "Ese campesino no volvió más como campesino, cambió de mentalidad y no quiere volver más al campo, desea volver a la capital de San Salvador". Ello origina un grave problema, pues no hay trabajo en la capital y sus alrededores donde, según las estadísticas, se concentra ya el 25% de la población, cifra inferior al 10% antes de la guerra. (20)

(16) Inforpress, 31/1/91, p. 7.

(17) Inforpress, 14/3/91, p. 6.

(18) EFE, 6/4/93.

(19) La Jornada, agencias, 3/5/93.

(20) DPA, 25/6/93.

En tanto, el gobierno salvadoreño dio inicio a una política demográfica con vistas a afectar directamente la tasa de fecundidad. "Tenemos un país en desarrollo y no puede darse el lujo de crecer a tasas de crecimiento como las que tenemos en la actualidad", expresó Ramón Alvarado, director de Población y Desarrollo del ministerio de Planificación.

La tasa de crecimiento, según el gobierno salvadoreño, es del 3% anual y la cifra global es de 2,4% tomando en cuenta el alto nivel de migración hacia el exterior.

De acuerdo a informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) más de 19.000 salvadoreños continúan residiendo en diferentes regiones de México, Belice y América Central. (21)

3. Familia. Grupos étnicos, religiosos y lingüísticos

En relación a la familia, El Salvador presenta características similares a las de la familia en Nicaragua tanto a nivel urbano como rural, con pequeñas diferencias en cuanto a que en este país la familia **matrifocal** está más extendida. Algunos expertos sostienen que en la situación incide sobremanera el hecho de que el promedio de vida del hombre es inferior en casi 10 años al de la mujer; igualmente, las migraciones por razones económicas (cultivos estacionarios) influyen en la proliferación de la **familia matrifocal**.

En El Salvador los grupos étnicos son escasos: los mestizos representan el 94% de la población total, mientras que el amerindio es del 5% y la población blanca es inferior al 1 por ciento. (22)

En cuanto a los grupos lingüísticos no existen más que los de habla española, que representa el total de la población.

La religión, de acuerdo a informaciones oficiales, no presenta mucha diversidad. Predomina la católica (93%) dato que, como en el caso de Nicaragua, resulta conservador a juicio de los especialistas, pues se cree que el porcentaje de católicos es bastante inferior.

Fuentes especializadas en el tema coinciden en que la población católica salvadoreña ha bajado a un 84% en los últimos años (23) debido a la proliferación, en las dos últimas décadas, de sectas protestantes, entre las que destacan los evangélicos; bastante identificados con las posiciones sionistas, figuran los Testigos de Jehová.

Reportes periodísticos recientes aseguran que existen ya en el país 150 iglesias que cuentan con personalidad jurídica (incluyendo la musulmana, surgida apenas en 1992). A juicio del único obispo diocesano de El Salvador, Martín Barahona, "estas sectas han sido alimentadas desde 1986 por Estados Unidos (a través de la llamada **iglesia electrónica**) y, si bien han crecido en número, no tienen una base doctrinal consolidada". (24)

(21) Excelsior, corresponsal, 2/8/93.

(22) PC Globe, ídem.

(23) Excelsior, 1/1/92.

(24) Idem.

Para el arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas, "la proliferación de las sectas es apoyada por sectores que manejan una interpretación fundamentalista de las Sagradas Escrituras". El prelado se refiere tácitamente a tres partidos que pretenden establecer el cristianismo entre sus adeptos: Democracia Cristiana, Movimiento Auténtico Cristiano y el recientemente inscrito Movimiento de Solidaridad Nacional, que intenta aglutinar en su filas a sectores evangélicos no politizados.

Al igual que en el caso de Nicaragua, el fenómeno de la expansión de las sectas en El Salvador fue alentado por el gobierno de Estados Unidos en los primeros años de la década pasada, cuando el conflicto militar comenzó a adquirir mayor intensidad.

Guatemala

1. Tasas vitales

Censos recientes (1992) confieren a Guatemala una superficie territorial de 108.890 kilómetros cuadrados en la que habita una población total de 9.266.000 personas, aunque según estimaciones actuales la población habría llegado ya a los 10.200.000 habitantes.

Las tasas vitales de Guatemala indican que 4.679.000 personas pertenecen al sexo masculino y 4.587.000 al femenino. Para el primero, las estadísticas reportan un promedio de vida de 58 años, que registra cuatro años más en el caso de la mujeres.

La tasa bruta de natalidad es de 35 por cada 1.000 habitantes; mientras que la de mortalidad es de 8 por cada 1000. (25)

El 65.2% de la población de Guatemala vive en el área rural, promedio que varía desde un 25% para la región metropolitana hasta más del 80% para la nor-occidental y la mayor parte de los departamentos del Altiplano, Alta y Baja Verapaz.

La población se distribuye en 20.017 localidades. El 95% son poblaciones de 1.000 habitantes y, dentro de éstas, unos 2 millones de personas viven en localidades de menos de 500 habitantes. El grupo materno-infantil constituye el 40% (22% mujeres en edad fértil) y 18% menores de 5 años. Un alto porcentaje poblacional es de origen indígena, conformando al menos el 37.1% de la población, con un rango de 1.5% para la región sur-oriental a 84.8% en la zona norte.

Para el año 1989, por cada 1.000 habitantes la tasa de mortalidad fue de 7.2%; la mortalidad infantil de 41.39% y la natalidad de 40.8%. La esperanza de vida es de 61.9 años, la tasa de crecimiento vegetativo es de 3.2% y la tasa global de fecundidad de 5.8%. La mortalidad es producida principalmente por causas nutricionales, infecciosas y del período perinatal, seguido por homicidios, violencia y enfermedades degenerativas. El 55% de las muertes ocurren en niños. (26)

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), del total de la población de Guatemala un 61% vive en aisladas zonas rurales. Se estima que la población indígena, cuya mayoría se dedica a la agricultura, representa entre un 43 y un 55% de los habitantes de todo el país.

Guatemala ha tenido una transición demográfica tardía en relación a la mayoría de los países de América latina. Entre 1950 y 1990, la tasa bruta de mortalidad disminuyó del 22 al 8 por 1.000, y la tasa bruta de nacimientos del 51 al 38 por 1.000. Si se continúa a este ritmo de crecimiento, se prevé que la población total se eleve a 12 millones de personas para el año 2000 y a 21,7 millones para el 2025, según un informe del FNUAP.

De 1950 a 1990, la esperanza de vida aumentó de 42 a 62 años y se espera llegue a los 67 años en el 2000.

(25) PC Globe, ídem.

(26) Informe de la Universidad de San Carlos, Guatemala, publicado en El Gallo Ilustrado, El Día, 17/1/93, p. 15.

A raíz del crecimiento demográfico, ha aumentado la densidad en las zonas rurales; hay una mayor emigración hacia la costa meridional y El Petén (en la selva tropical del norte), y signos de deterioro del medio ambiente en varias regiones del país. (27)

Salud

En cuanto a la mortalidad infantil, 58 niños guatemaltecos mueren por cada 1.000 nacidos vivos. Según estudios de Naciones Unidas y de la iglesia católica de Guatemala, el 22% de la población está desnutrida y un 83% de los guatemaltecos viven en la pobreza.

El país cuenta con 159 hospitales que cubren a una población promedio de 58.277 pacientes por hospital. Hay 678 pacientes por cada cama de hospital y un médico por cada 2.589 pacientes, de los 3.579 existentes en todo el país.

Existe una enfermera por cada 1.019 habitantes, un farmacéutico por cada 22.545 personas y un dentista por cada 11.440 pacientes. (28)

Educación

Guatemala aporta apenas el 1.8% del presupuesto general de la nación al área de la educación, lo que explica en cierta forma el estado actual de este importantísimo sector.

Informes oficiales reportan un índice de analfabetismo del 55%, aunque otras informaciones lo elevan a más del 60 por ciento. Estudios de la ONU asignan a Guatemala una tasa de analfabetismo de 46% para los pobres y de 21% para los otros sectores de la sociedad. Se estima que cerca de un 60% de los analfabetas son mujeres y, de éstas, 72% indígenas. (29)

Otros datos indican que en las escuelas elementales hay 35 estudiantes por profesor, cifra que se ubica en 15 en las escuelas secundarias y los centros de enseñanza superior.

Los datos anteriores parecen indicar la ausencia de problemas en las referidas áreas sociales. Sin embargo, y al igual que en los dos países antes analizados, el acceso a la educación es casi imposible para una gran masa de la población estudiantil, debido tanto a la falta de cupo como a lo elevado del costo de la enseñanza.

2. Migraciones externas e internas

Guatemala ha registrado en las últimas tres décadas un grave enfrentamiento entre el ejército y fuerzas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), operando en el norte y noroeste del territorio.

Esta situación ha provocado fuertes oleadas migratorias en distintos momentos históricos, caracterizadas bien por un

(27) IPS, 24/5/93.

(28) PC Globe, ídem.

(29) IPS, 24/5/93.

enfrentamiento de altas proporciones entre las facciones en pugna, bien por las políticas represivas del gobierno contra amplios sectores de la población señalados como base social de la guerrilla.

Al igual que en El Salvador y Nicaragua, el fenómeno migratorio ha tenido un doble aspecto: el primero, relacionado con el desplazamiento de grandes contingentes poblacionales ("dentro de frontera") estimados según fuentes eclesiales en un millón de personas; el segundo, vinculado a la emigración de unos 200.000 guatemaltecos, fundamentalmente hacia México y en menor cantidad a Estados Unidos.

La migración del campo a la ciudad ha provocado que en la actualidad el grado de urbanización alcance casi el 50 por ciento.

En el segundo caso, en octubre de 1992 se contabilizaron 100.000 refugiados en Belice, Costa Rica y México, país éste último que llegó a albergar a más de 46.000 guatemaltecos asentados en unos 90 campamentos creados a partir de 1980. (30)

Desde entonces hasta fines de 1994, nacieron en suelo mexicano 14.000 niños guatemaltecos, de acuerdo a las últimas estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En los primeros 10 meses de 1992 habían retornado a Guatemala 1.547 refugiados. Durante el mes de enero del presente año lo hicieron otros 2.500, en la primera de una serie de repatriaciones masivas que, según ACNUR, posibilitarán el regreso de al menos 14.000 guatemaltecos a su patria durante 1993. (31)

En las zonas rurales, donde aún persiste la acción de grupos armados que se enfrentan a las patrullas del ejército, tiene lugar una peculiar forma de organización, creada por poblaciones campesinas que durante años sirvieron de base de apoyo de la guerrilla: las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), una suerte de grupos de autodefensa que, aunque desvinculados orgánica y militarmente de fuerzas irregulares, protegen sus tierras y viviendas del accionar de las fuerzas armadas en el campo.

Fenómenos como este hacen prever que el problema central de Guatemala --en cuyo origen, la lucha por la tierra, coinciden gobierno, oposición y grupos religiosos--, persistirá durante un tiempo con riesgo incluso de agravarse tras la repatriación, debido a que el 75% de la población que regresa al país carece de tierras para trabajar.

Según el arzobispo de Ciudad Guatemala, monseñor Próspero Penados del Barrio, "el futuro de Guatemala es caótico. Existe un desequilibrio social, económico y político, debido a la pobreza extrema y la desigualdad, que generan frustración y conflictos que vuelven imposible una convivencia pacífica". (32)

A inicios de 1992, más de 43.000 refugiados establecidos en campamentos en la zona sur de México comenzaron a negociar su retorno con el gobierno de Guatemala, ante las dificultades para ser autosuficientes en suelo mexicano. Organizaciones

(30) El Nacional, 15/11/92.

(31) La Jornada, 4/1/93.

(32) El Día, 18/10/92, p. 12.

internacionales como la CEE y el ACNUR disponen de recursos para apoyar a los refugiados en México, pero la ración de alimentos que les otorgan provoca la repatriación inducida --más que voluntaria-- de los desplazados.

Hasta abril de 1994 y en los últimos nueve años, retornaron a Guatemala 12.143 refugiados, que vivían en los campamentos situados en los estados mexicanos de Chiapas (128 campamentos), Campeche (4) y Quintana Roo (4), según informes de ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Del total de retornados, 8.975 personas fueron repatriadas en grupos pequeños entre 1984 y 1992; mientras que en los primeros meses de 1993 volvieron a Guatemala 3.168 personas, de éstas 2.266 en el retorno colectivo del 20 de enero. (33)

Según organismos internacionales, el sostenimiento de los refugiados guatemaltecos en México requiere de un fondo de al menos US\$15 millones anuales. Hasta ahora ese fondo llega apenas a la mitad, con US\$7 millones que otorgará este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y US\$1 millón más de su contraparte de Guatemala.

A fines de 1992, el gobierno del presidente Jorge Serrano y las Comisiones Permanentes de Refugiados (CCPP) firmaron en Guatemala un acuerdo para regular el retorno de los refugiados en México. El convenio, suscrito ante representantes diplomáticos internacionales, regula aspectos como el acceso a la tierra, libre tránsito y asociación, servicio militar y verificación de los acuerdos de paz.

En un documento divulgado en México, ACNUR informó que en los últimos 10 años (desde 1984) habían regresado en forma voluntaria a Guatemala 8.717 refugiados, que en su mayoría se encontraban en campamentos en el estado de Chiapas. Según ACNUR, durante 1992 el flujo de refugiados guatemaltecos en México aumentó hasta alcanzar las 46.000 personas, instaladas en 90 campamentos en el sureste mexicano. (34)

Sólo para efectos de la repatriación durante 1993, ACNUR destinó US\$2.3 millones, a fin de asegurar el retorno de 14.000 refugiados guatemaltecos, según el representante regional de ese organismo, Alfredo Witschi.

Sin embargo, no todo estuvo en óptimas condiciones previo al primer retorno masivo de refugiados, ocurrido el 20 de enero de 1993. El área de asentamiento de repatriados de El Ixcán, en el selvático departamento de El Quiché, presentaba un cuadro de abandono físico y solamente había tierras disponibles para unas 250 familias.

El "Polígono 14", un sitio aislado ubicado a unos 4 Km de la frontera con México y a más de 400 de la capital de Guatemala, no contaba con protección, caminos de acceso ni los mínimos servicios de salud y agua potable cuando llegaron los inmigrantes, que debieron asumir por cuenta propia el acondicionamiento básico del lugar, situado en medio de un área de casi 100 mts. cuadrados cubiertos de espesa vegetación. (35)

(33) AFP, 17/4/93.

(34) Notimex, 17/4/93.

(35) UPI/Notimex, 19/1/93.

El primer retorno masivo y organizado posibilitó el regreso de 2.480 refugiados, que llegaron al Ixcán en una caravana de vehículos encabezada por la dirigente indígena Rigoberta Menchú. Un grupo de 21 médicos acompañó a los repatriados, que fueron recibidos en la frontera con 450 toneladas de alimentos proporcionados por ACNUR.

El territorio de El Ixcán tiene una historia especial, que explica las trágicas razones del éxodo:

A inicios de los '60 el presidente Carlos Arana Osorio aprobó el "proyecto 520" en la llamada "franja transversal del norte", una región de 414.000 hectáreas en el norte de El Quiché. Oficialmente era zona destinada a campesinos pobres, pero la idea fundamental del gobierno fue ofrecer mano de obra barata a las compañías petroleras extranjeras que exploraban la zona y para las grandes empresas agrícolas que surgieron allí. El proyecto fue apoyado por los gobiernos de Israel y Estados Unidos y su control encomendado al ejército.

En esa zona poseen fincas muy extensas los ex presidentes Arana Osorio (1970-1974) y Romeo Lucas García (1978-1982), quien inició la ola de masacres en la zona, conocida como "tierra arrasada". La violencia llegó a su clímax a partir de 1975, cuando la población organizada en cooperativas comenzó a resistir el proyecto del ejército, que inició secuestrando cooperativistas y catequistas y llegó a 1981 quemando las tierras en gran escala y masacrando a la población civil.

El genocidio dirigido a aislar a la guerrilla de las comunidades costó la vida de millares de personas y el éxodo de decenas de miles más. Según la iglesia católica de Guatemala, desaparecieron del mapa unas 440 comunidades en el Ixcán y zonas cercanas, aunque otras fuentes estiman que la cifra es aún mayor.

A raíz de la violencia oficial en Ixcán, unas 45.000 personas se refugiaron en México y otras 20.000 se quedaron en las selvas, organizando las ya citadas CPR. Se estima que un millón más huyeron a países centroamericanos o se reubicaron en zonas del interior de Guatemala. (36)

Al analizar el primer retorno masivo, Rigoberta Menchú observó que fue "bastante expuesto" y que "las cosas no ocurrieron como estaban acordadas". Dijo que el gobierno vio al grupo de repatriados "como si fueran enemigos". Pese a ello, el ministro de Economía, Gustavo Saravia, aseguró que el gobierno realizó un primer desembolso de US\$30 millones para atender a los repatriados.

Poco después, comenzarían las presiones del ejército. Su vocero, capitán Alberto Yon, dijo que el Polígono 14 estaba siendo "convertido por la guerrilla en un campo de concentración", pues para entrar a la zona debía pedirse permiso a los líderes de las CCPP. Advirtió que el gobierno no permitirá la "instauración de un estado dentro de otro legalmente constituido".

Por su parte Ricardo Curtz, miembro de las CCPP, denunció que en el Ixcán persistía "un acoso militar" contra los repatriados, cuya vida transcurre entre esfuerzos por subsistir y el temor

(36) El Nacional enviado, 21/1/93, p. 6.

permanente a la presencia castrense. "El ejército sigue creyendo que los refugiados somos guerrilleros y se resiste a reconocer nuestro derecho de libre organización y asociación", dijo Curtz, campesino de 28 años de edad.

Desde Chiapas, los refugiados guatemaltecos solicitaron a la comunidad internacional presionar al gobierno para que se reconozca el carácter civil de las CPR y respetar su vida y sus derechos.

Las CPR acusaron al ejército de minar diferentes caminos fronterizos, para impedir el retorno a Guatemala de 700 personas recientemente refugiadas en México. El ministro de Defensa, José García, desmintió la denuncia y acusó a la URNG de haber puesto minas en la zona.

En Ixcán, líderes de las CCPP denunciaban acoso militar contra los nuevos habitantes de la comunidad "Victoria 20 de enero", por parte del ejército, cuyos efectivos los llaman guerrilleros e intentan obligarlos a integrarse a las PAC, bajo su control.

De acuerdo con funcionarios de ACNUR, la repatriación de refugiados guatemaltecos no podría concluir antes de 1996, debido a que el principal obstáculo para el regreso es la falta de tierras. De hecho, el 50% de los reasentados actualmente en el Polígono 14 apenas subsisten, según informes de prensa.

En situación similar habitan cerca de 1,5 millones de indígenas que viven como desplazados internos en otras zonas de Guatemala, quienes han perdido su identidad cultural, sufren explotación y marginación, y anhelan retornar en forma colectiva a las tierras que abandonaron a raíz de la represión militar.

El 70% de los indígenas keychiés, mam y katchiqueles, en su mayoría oriundos del altiplano occidental, subsisten en crítica situación económica y social en más de 200 asentamientos marginales en la capital guatemalteca. Sólo un 50% de los hijos de los desplazados internos tiene acceso a la educación, y el resto sobrevive limpiando zapatos y vendiendo dulces.

"Salimos de las 440 aldeas que fueron arrasadas por el ejército. Somos los testigos presenciales y los supervivientes de toda la destrucción", afirma Lorenzo Pérez Mendoza, uno de los líderes del CONDEG que en 1982 perdió a los 11 miembros de su familia, "ametrallados y quemados por el ejército". (37)

El conflicto militar, la pobreza y la violencia en el campo desplazaron en la última década a 500.000 indígenas de 22 etnias hacia áreas urbanas, donde viven en extrema pobreza y sin atención del Estado, de acuerdo a entidades humanitarias, según un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que indicó que sólo en la capital y área metropolitana los indígenas conforman el 11.5% de los 2.5 millones de habitantes, integrados al trabajo informal. (38)

El presidente De León Carpio se comprometió a coordinar esfuerzos con el gobierno de México para repatriar de forma pacífica, ordenada y voluntaria a unos 41.000 refugiados asentados en el sureste mexicano. Según el gobierno, durante 1993, se realizaron 21 movimientos de repatriación con un total

(37) EFE, 27/6/93.

(38) Notimex, 16/5/94.

de 1.748 personas, de acuerdo a ACNUR. Para el próximo año, ACNUR tiene proyectado el retorno de 3.262 personas. (39)

3. Familia. Grupos étnicos, religiosos y lingüísticos

Guatemala presenta una población caracterizada por un alto grado de preservación de la cultura indígena; es el país latinoamericano con mayor densidad poblacional de indígenas. Ello hace que el cuadro familiar sea un tanto distinto al de Nicaragua y El Salvador.

El tipo de familia predominante es la nuclear en las ciudades y la ampliada en las áreas rurales. Existe un alto porcentaje de familia matrifocal, que sin embargo es relativamente bajo en relación con las familias matrifocales en El Salvador y Nicaragua.

La tribu es una forma de organización social que se presenta con mucha mayor claridad en el norte y noroeste del país, en los límites fronterizos con Belice y México.

Los grupos étnicos existentes son muy variados: desde el punto de vista de la clasificación existen amerindios (55% del total de la población), ladinos (42%) y personas de razas negra y blanca (3%). La principal organización indígena, activamente involucrada en asuntos de derechos humanos, es el Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ).

"Defendemos la construcción de una sociedad amplia, plural, pluriétnica y verdaderamente democrática", afirmó meses atrás la dirigente maya Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, al evaluar la posición de las comunidades indígenas de su país.

De la diversidad étnica nace precisamente la amplia variedad de grupos lingüísticos: los idiomas y dialectos que más se destacan son el español, oficial, hablado por el 66% de la población; el quiché (13%); el katchikel (6%); el mam y el kekchi (4%), mientras el maya y otros dialectos se estiman en un 7 por ciento. (40)

Los grupos religiosos son una importante fuerza social en Guatemala, al igual que en sus vecinos Nicaragua y El Salvador. La religión católica es la mayoritaria (75%), mientras al resto de la población se le adjudica la protestante. Debido a su participación en labores de investigación y denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, las autoridades de la iglesia católica han sido acusadas por el gobierno de colaborar con la guerrilla.

(39) El Financiero, agencias, 22/11/93, p. 58.

(40) PC Globe, ídem.

SEGUNDA PARTE

CAPITULO III

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CAPITULO III

Situación económica y social

El presente capítulo se divide en tres subcapítulos: el primero tiene que ver con las políticas económicas neoliberales (privatizaciones, dependencia, financiamiento externo); el segundo se refiere a las repercusiones económicas y fundamentalmente sociales de las mismas y el tercero presenta un resumen de las repercusiones de la guerra.

Históricamente, la región centroamericana se distinguió de la sudamericana en su forma de inserción económica.

Marcada por un tradicional abandono preindependentista, Centroamérica se integró al mercado mundial a fines del siglo pasado, en calidad de región fundamentalmente monoexportadora.

En las décadas siguientes, los países del área sufrirían los primeros embates de una economía de **enclaves** (bananero, minero) que les impidió reinvertir los recursos obtenidos de sus riquezas naturales.

El ascenso del capitalismo monopolista y el desarrollo de los primeros empréstitos leoninos en la región, fueron consolidando las bases de una férrea dependencia del exterior que no permitió, tampoco, el desarrollo de una clase política con ideas nacionalistas.

La dependencia histórico-cultural de la región provocó fragilidad en estas naciones, ante los reacomodos de la economía mundial. Por un lado, en los tiempos de "auge" del capital mundial (especialmente en Estados Unidos) las economías centroamericanas experimentaron cierta recuperación. Así, luego de las dos guerras mundiales, los países de la región tendrían mayor caudal de inversión extranjera que iba a repercutir en un mayor desarrollo económico.

Pero la fragilidad de la región no sólo se veía afectada por "auges", sino también por depresiones.

Las crisis mundiales de comienzo de siglo, la depresión de 1929 y la de comienzos de los 70, tuvieron impactos profundamente negativos en las economías centroamericanas, que no se sintieron sino varios años después, cuando incluso se había superado la situación.

Los efectos de estas crisis, que en los países centrales duraban cuando mucho de uno a tres años, permanecieron en las naciones de Centroamérica por períodos superiores a una década.

Toda esta situación se ha agravado en los últimos 10 años, por cuanto los niveles de dependencia son cada vez más fuertes. Ni siquiera el capitalismo como sistema se ha impuesto, ya que los lazos y relaciones de producción oligárquica continúan siendo hegemónicos (muchas veces con la misma anuencia del capital internacional).

A partir de lo anterior, se aborda en adelante la situación socio-económica de los países en estudio (período 1992-94),

agudizada por los diversos escenarios de guerra y sometida hoy, contrario a toda lógica esperada, a la aplicación de políticas económicas de "recorte" a los servicios básicos de la población.

Nicaragua

1. Políticas económicas, privatización y dependencia

Las políticas económicas en Nicaragua tuvieron un cambio sustancial con la llegada al poder de Violeta Barrios Vda. de Chamorro, en febrero de 1990. Si bien durante el gobierno revolucionario existían políticas de carácter capitalista, éstas se controlaron de forma tal que sus repercusiones no recayeran sobre los sectores sociales de menor ingreso. La economía mixta prometía asegurar un equilibrio entre el sector privado y el estatal, lo que aseguraba en cierta medida una redistribución más equitativa de la riqueza del país. Sin embargo, ese frágil equilibrio resultó seriamente afectado por las políticas de agresión de las últimas administraciones de Estados Unidos contra el país.

Algunos escritores han caído en el error de catalogar la economía nicaragüense de la década del sandinismo como estatista y excluyente del sector privado, obviando el hecho de este último concentró durante 10 años de revolución más del 60% de los medios y relaciones de producción en Nicaragua.

Es cierto que el Estado sandinista cometió serios errores al pretender controlar rígidamente la circulación de la producción (1984), pero ello fue posteriormente corregido. El Estado también asumió funciones que competían exclusivamente a la sociedad civil, pero ello no da crédito para catalogar de estatista a la economía nicaragüense.

En alusión a las complejas relaciones de poder que se tejen entre las diferentes instituciones del Estado, el mexicano Adolfo Sánchez Vázquez afirma: "hay un crecimiento en las funciones sociales, económicas y culturales dentro del Estado. Cada vez es mayor su autonomía respecto de la sociedad civil, tienen mayor peso las decisiones de las élites políticas y de la burocracia estatal".

En ese sentido, las relaciones de poder entre los diferentes actores políticos en Nicaragua pueden calificarse como difíciles, en base a dos aspectos fundamentales:

La precaria situación económica, producto básicamente de más de 20 años ininterrumpidos de conflicto militar, lo cual ha ocasionado un desgaste social y económico, reflejado en pérdidas que cifras conservadoras ubican en más de US\$30.000 millones. Por otro lado, la polarización política en el país --que alcanza ya las esferas del gobierno-- impide buscar soluciones efectivas.

Las instituciones del Estado, inmersas en un explosivo panorama socioeconómico, mantienen relaciones de poder que influyen sobre la sociedad en su conjunto.

Economía y "ajuste"

Desde que se inició el plan de ajuste económico (mayo 1990) se mantuvo una tasa de cambio estable, mientras que la inflación fue frenada, pero la reducción de los gastos del gobierno significó el despido de más de 20.000 trabajadores estatales solamente en la primera fase de su aplicación, lo que repercutió negativamente en la tensa situación política nacional.

A lo largo de estos años, el plan provocó el enfrentamiento de tres sectores: un movimiento sindical decidido a la privatización de empresas a su favor; antiguos propietarios -- muchos de ellos somocistas-- empeñados en recuperarlas, y otros muchos capitalistas interesados en esos bienes.

En una ocasión, al intentar minimizar los efectos del plan, el ministro de la Presidencia Antonio Lacayo declaró: "Nicaragua es un país donde suceden cosas extrañas. Se aplican medidas devaluativas de un 400% y un aumento salarial de 160%, y en las calles no vemos un supermercado asaltado ni un solo muerto ni detenidos".

Las metas macroeconómicas trazadas por el gobierno en el Plan 92 fueron:

1. Lograr un crecimiento del PIB de 5% al alcanzado en 1991, para seguir creciendo hasta lograr una recuperación del 31% acumulado en 1995.

2. Alcanzar un crecimiento en un 3% y 5% de la productividad del trabajo, en 1992 y 1993 respectivamente.

3. Lograr un crecimiento del PIB per cápita del 1,7% en 1992 y del 5,4% en 1993. La meta era lograr US\$414 en 1992 (en 1991 fue de US\$407).

4. Aumentar la participación del sector agrícola tradicional en la generación del PIB en 1992, en detrimento del sector servicios con un leve aumento del industrial.

5. Establecer una meta de inflación del 20% anual (un promedio mensual de 1.5%)

6. Limitar la expansión monetaria a la disposición de fondos prestables, eliminándose el financiamiento inflacionario del Banco Central. La política de tasas de interés será liberalizada gradualmente, hasta completarla en 1993.

7. Eliminar el déficit fiscal operativo y generar superávit.

8. Mantener un tipo de cambio real competitivo.

9. Aumentar el monto de reservas internacionales brutas equivalentes a cuatro meses de importaciones.

10. Avanzar las transformaciones estructurales, en especial:

a. continuar la privatización de empresas en sector público.

b. continuar la política de desgravación arancelaria. Se programa reducir la tasa efectiva de protección de 10.60% a fines de 1991, a 10.20% a fines de 1993. (1)

Hacia finales de ese año, el gobierno puso en vigor nuevas medidas de "ajuste" económico y anunció mayores restricciones al crédito, debido al persistente bloqueo de la ayuda de Estados Unidos. En los mismos días se anunció que los racionamientos de agua potable se agudizarían en 1993.

(1) El Día, corresponsal, 28/7/92. pp. 1 y 16.

Desde la asunción de Violeta Chamorro al gobierno, un puñado de bancos privados abrieron lujosas oficinas en Managua, ofreciendo a sus clientes nuevos niveles de servicio y seguridad para sus ahorros. Irónicamente, sin embargo, la mayor eficiencia de los bancos estatales hacía casi imposible a la población obtener préstamos.

Trabajadores de cinco empresas estatales de apoyo al agro (en vías de ser declaradas en quiebra) decidieron unirse para demandar su privatización, con un 25% de acciones a su favor.

Más de 7.000 medianas y pequeñas empresas industriales y de servicios, así como micronegocios alentados por el llamado "plan de conversión ocupacional", habían fracasado. De 10.849 talleres registrados en el Ministerio de Economía en 1989, sólo funcionaban en 1992 unos 3.000, según el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria (CONAPI), Antonio Chávez.

El ministro de Finanzas, Emilio Pereira, admitió que "ha habido cierre de empresas", pero no indicó en qué cantidad. Sin embargo, dijo que se habían formado 500 nuevas sociedades, en su mayoría de carácter comercial. En tanto, crecían las deudas bancarias y a los pequeños negocios se sumaban, como deudores, medianas y grandes empresas consideradas inexpugnables. Una parte de los 19.000 empleados públicos convertidos en dueños de "micronegocios" no tenían ya ni la mantenedora inicial.

En el sector de alimentos, vestuarios, cuero y calzado, el 50% de las pequeñas empresas se convirtieron en microempresas. Los zapateros, que en 1989 producían US\$3 millones con su trabajo, tres años después apenas llegaban a US\$1.200.000. Según una encuesta independiente, en 1991 trabajaban un promedio de cinco personas por taller, y sólo dos lo hacían en 1992, cuando el salario de los trabajadores era un 60% menor al promedio nacional.

El presidente de CONAPI señaló que la falta de apoyo oficial impedía a la pequeña industria sostenerse, y mucho menos modernizarse para enfrentar el entorno de la economía de mercado y la apertura de fronteras. Sumado a ello, un 80% de la maquinaria de la pequeña y mediana industria era ya obsoleta, y se utilizaba apenas 3.5 horas diarias. (2)

Otros informes indicaban que, pudiendo absorber más del 30% de la PEA desempleada, sólo sobrevivía a la fecha un 30% de los 10.000 talleres que se habían afiliados a la CONAPI en 1987. (3)

A juicio del economista independiente Freddy Cruz, "la caída de la producción nacional y la recesión económica impiden a los productores agropecuarios pagar a los bancos sus enormes deudas y subsanar pérdidas severas".

Sólo en el sector del café, principal rubro de exportación de Nicaragua, existen 30.000 productores "en crisis emotiva, social y financiera", según un informe de la Comisión Nacional del Café, que destaca entre sus causas "el comportamiento irregular e inestable de la política crediticia oficial durante los dos últimos años". (4)

(2) Barricada, 16/11/92, pp. 1 y 16.

(3) El Nuevo Diario, 23/11/92, p. 7.

(4) Barricada, 9/11/92, p. 11.

Una evaluación económica del año 1992, publicada en enero siguiente por el diario Barricada, atribuyó a "factores externos, como la abrupta caída de los precios de los principales productos de exportación", la imposibilidad que el incremento en la producción de algunos rubros, como el café, diera los beneficios esperados. Sin embargo, indicó el análisis, también elementos de índole interno impidieron revertir el carácter recesivo de los últimos años, tales como:

- 1) Indefinición sobre el estado de la propiedad.
- 2) Políticas oficiales que dieron prioridad al sostenimiento del equilibrio macro-económico por encima de todo otro objetivo. Aun cuando la estabilización monetaria logró sostenerse desde marzo de 1992 y la inflación fue reducida de forma drástica, no se estimuló la reactivación productiva, con el consiguiente deterioro del empleo y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
- 3) La recesión algodonera generada por la caída en el precio de la fibra, llevó a una negociación de saldos insolutos, que sumada a las anteriores, dan como resultado endeudamientos de hasta US\$1000 por manzana en la región de Occidente. El área de siembra se redujo a 3.500 manzanas, esto es el 1% de lo que fue en sus mejores tiempos, sin que se lograra articular un anunciado plan oficial de estímulo a la reconversión productiva y tecnológica de la región.
- 4) La importante ayuda externa no tuvo el efecto esperado sobre la reactivación productiva. Por el contrario, los indicadores de la economía real tuvieron en 1992 un nuevo descenso. El programa de inversión pública tuvo una importante subejecución, la balanza comercial tuvo un significativo déficit y el saldo negativo de la balanza de pagos se duplicó con respecto al año anterior, con el consecuente agravamiento en la deuda externa. (5)

Las políticas económicas del gobierno, duramente criticadas por los sindicatos y elogiadas por la empresa privada, provocaron un aumento de hasta el 40% en los precios, en mercados y tiendas. Según voceros gubernamentales, se pretendía "hacer más rentable la producción, las exportaciones y aumentar el empleo", en base a un paquete de medidas que incluía además el congelamiento de salarios y plazas en el Estado, el aumento del 20% en los combustibles, incentivos para los productores y nueva tarifa para el agua, energía y teléfonos.

Como parte de su estrategia económica, Chamorro intentaba acelerar las negociaciones, paralizadas en noviembre anterior, para la libre de un acuerdo de libre comercio bilateral con México. Durante una visita realizada a Managua por el presidente Carlos Salinas, los productores nicaragüenses pidieron reconsiderar su decisión de reducir en un 50% los aranceles a las exportaciones de Centroamérica, ante lo cual México propuso solamente estimular la ganadería regional con un crédito de US\$100 millones a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

(5) El Observador Económico, N° 12, revista de FIDEG. Barricada, 4/1/93, p. 11.

Líderes sandinistas se opondrían más tarde al proyecto de adhesión de Nicaragua al TLC norteamericano, por considerar que el tratado amenazaba con ahogar a las economías de Centroamérica.

El gobierno nicaragüense intentó también imitar el Programa Nacional de Solidaridad mexicano, mediante la creación de una entidad institucional llamada "Solidaria" o Pronisol (Programa nicaragüense de Solidaridad) sobre la cual funcionarios de Managua se adelantaron a advertir que no significaría "paternalismo ni populismo".

Según cifras oficiales, después de ocho años de crecimiento negativo, la economía creció 1% en 1992. Un informe del BID ubicó a Nicaragua como el país latinoamericano con la mayor caída de la tasa de inflación (de 1.400% en 1991 a 20% en 1992).

A inicios de 1993, al presentar un presupuesto nacional por US\$422 millones (inferior en 18.37% al de 1992), el gobierno anunció su compromiso de "privilegiar" la generación de empleo y la inversión pública en aras del crecimiento económico. Según el proyecto, los gastos sociales aumentaban en ocho puntos porcentuales, si bien la asignación no era mayor a la de años anteriores. A los sectores Salud y Educación se destinaron US\$160.7 millones (un 38.05% del presupuesto), aunque ambos rubros demandaban una partida superior a US\$100 millones cada uno. En tanto, a Defensa y Seguridad se destinaron US\$69.5 millones (16.47% del presupuesto), contra US\$74.28 millones aprobados en 1992. (6)

En marzo de 1993, ante la agudización de los problemas financieros del país, la presidenta Chamorro inició una nueva ofensiva diplomática en Washington para intentar descongelar US\$54 millones retenidos por Estados Unidos (ver capítulo IV).

Mientras, los planes de privatización continuaban. En los primeros meses de iniciado el plan de ajuste estructural, un proceso de concertación gobierno-sindicatos-empresa privada había permitido el inicio de convenios de privatización en entes estatales, donde los trabajadores obtuvieron parte de las acciones. El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) había exigido el 51% de participación obrera en la propiedad de las empresas, frente al 10% ofrecido por el gobierno. Ambas partes acordaron finalmente un 25% y en algunas empresas se aseguró indemnización a sus antiguos dueños, a excepción de los casos de confiscación a somocistas.

Pese a que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) demandaba la privatización total, el gobierno (debido a las presiones populares) excluyó del listado a las entidades estatales de servicio público. Grandes empresas agrícolas se distribuyeron entre obreros, propietarios tradicionales, ex miembros del ejército y ex **contras**.

La ley de privatización fue aprobada en 1991 en el parlamento con el respaldo de los sandinistas luego de consultas con sus bases, incluyendo empresarios pequeños y medianos, así como con sindicatos oficialistas y opositores. Se pusieron a la venta 350 empresas públicas, agrupadas en dos corporaciones, que generan el 32% del PIB.

(6) AFP, 4/1/93.

Actualmente, no existen nuevos acuerdos en torno a la privatización. El gobierno coincide con la ultraderecha en cuanto a elegir las empresas que tendrán un 25% de participación obrera, mientras el FNT reclama para sí empresas "de punta", para no correr el riesgo de ser asfixiados por los grandes empresarios.

A lo largo de 1992, a las gestiones realizadas para la venta del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) se sumaron medidas para la inversión extranjera en la Cervecería Toña (su similar de Costa Rica adquirió la tercera parte de las acciones) y una licitación, obtenida por empresarios taiwaneses, para adquirir el 84% de las acciones del Hotel Intercontinental de Managua.

Con capital estadounidense se proyectaba también la instalación de otras 10 empresas, en su mayoría textiles, en la llamada zona franca industrial de la capital, creada en la década de los 70 y reactivada en 1992 con la creación de ocho empresas maquiladoras.

Las empresas extranjeras a las que el gobierno abrió "de par en par" las fronteras nacional, se comprometieron a invertir unos US\$100 millones en Nicaragua durante 1993. Tras más de una década de guerra y destrucción del escaso tejido industrial de Nicaragua, compañías de Taiwán, Rusia, España y Estados Unidos decidieron realizar negocios en los sectores energético, turístico, de construcción y manufacturas.

A mediados de 1993, el gobierno había autorizado ya licencias y concesiones a decenas de compañías extranjeras que se dedicaron a la sobreexplotación de las reservas marinas en la Costa Atlántica, llevando a la quiebra a cientos de pescadores artesanales e industriales de la zona. Entre varias concesiones otorgadas a empresas foráneas, destacó la instalación de ocho plantas procesadoras de mariscos, que casi duplicaron el número existente en 1990. Debido a la escasa vigilancia en la región, se incrementó la extracción ilegal de productos del mar por parte de pescadores furtivos. (7)

Entre otras medidas para "reactivar" la deprimida economía, las autoridades anunciaron una reducción de impuestos y una ampliación del crédito a sectores productivos, en un paquete que comprendía además una exoneración de 15% al impuesto general de ventas de equipo y maquinaria destinados a actividades productivas y al servicio de energía usado en el riego agropecuario. Quedaron también exoneradas las verduras, hortalizas, frutas e importaciones de materias primas para las principales exportaciones del país, entre ellas café y azúcar. Por otro lado, fue ampliada la lista de bienes suntuarios que pagan tasas de importación y se gravó el consumo de cervezas, gaseosas y vodka.

Sin embargo, productos como el algodón y el café, que representaron para Nicaragua el 80% de sus ingresos por exportación, resintieron los efectos de la crisis internacional de precios, sin precedentes en los últimos 30 años. Otros importantes rubros afectados fueron banano, ajonjolí y carne.

Ante el riesgo de convertirse en un país eminentemente consumidor, Nicaragua se integró en abril al bloque Centroamérica-4 (C-4), conformado también por Guatemala, El

(7) PL, 21/6/93.

Salvador y Honduras durante una minicumbre presidencial realizada en Managua, en la cual desapareció automáticamente el llamado "Triángulo del Norte". El país abrió así sus fronteras al libre tránsito de personas y mercaderías, permitiendo la eliminación de restricciones en trámites aduaneros.

Sin embargo, el plan económico oficial parecía fracasado. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Tablada, ex ministro de Reforma Agraria, comentó que el gobierno no había logrado hasta entonces "iniciar el despegue económico esperado", mientras "amplios sectores de la sociedad" expresaban su inconformidad ante medidas que les afectaban directamente.

Los sectores más golpeados por la recesión económica, fueron el industrial (50.000 personas), el agrícola (35.000 en desempleo total) y el área estatal (más de 30.000 subempleados).

Un nuevo aumento en el precio de los combustibles, decretado a fines de agosto para aumentar la recaudación en un 60% mediante el impuesto selectivo de consumo, cayó como una bomba sobre la deprimida economía y anticipó mayores reducciones al poder adquisitivo popular.

A ello siguió, dos meses más tarde, un incremento en la tasa de mensual de devaluación del córdoba del 0,5% al 1%, para incentivar las exportaciones y reducir el consumo privado. La medida oficial pretendía alcanzar a fin de año una paridad de 6.40 córdobas por dólar, para una devaluación total del 28% en 1993.

Producto de esas disposiciones, el salario mínimo nacional (estimado en US\$85 en el campo y US\$123 en la ciudad), alcanzaba entonces sólo para comprar la mitad de la canasta básica familiar, según datos no oficiales.

El año 1994 inició con la noticia del ingreso de Nicaragua al "boom" del mercado bursátil latinoamericano, al inaugurarse la primera bolsa de valores del país, organizada por un grupo de 20 empresarios con un pírrico capital inicial de US\$157.000. Según el gobierno, la Bolsa permitirá "fomentar el ahorro, apoyar la privatización y dar liquidez a los bonos" de indemnización a los confiscados en sus propiedades, con los cuales podría adquirirse a su vez bienes estatales, mercadería en subasta y cancelar las deudas bancarias de pequeños productores.

Nicaragua continuaba sobreviviendo, sin embargo, gracias a la asistencia externa. A causa de la escasez de divisas, el gobierno tuvo que vender US\$28 millones de sus reservas de oro en 1993, cuando el déficit comercial ascendió a US\$550 millones, de acuerdo a cifras oficiales.

Si bien el gobierno había logrado bajar la inflación a un dígito, luego de alcanzar el astronómico índice de 33.000% a fines de la década anterior, y proyectaba lograr un crecimiento económico de 3 a 4% en 1994, los efectos de las medidas de ajuste continuaron golpeando a los más pobres. Funcionarios oficiales defendían la "economía social de mercado" y el "contenido social para amortiguar el costo" de los planes de ajuste.

Tras admitir que el país mostraba ya "niveles de desempleo sumamente altos", el canciller Ernesto Leal declaró: "Creemos firmemente que la empresa privada es el motor de la economía. Hemos privatizado todo que heredamos del gobierno sandinista, de

391 corporaciones hemos privatizado más de 300. Lo que tratamos de agregar son programas sociales que compensen el efecto que tiene la implementación de los planes de ajuste en las clases menos favorecidas y de menores ingresos". (8)

En ese sentido, a mediados de año fue sometido a la aprobación en el parlamento, un proyecto de ley para privatizar las comunicaciones y servicios postales, contemplado entre las condiciones impuestas al país por el FMI. Simultáneamente, se aplicó un drástico programa de racionamiento de energía eléctrica (de hasta ocho horas diarias), que afectó también el suministro de agua potable, especialmente en los barrios marginales de la capital.

Financiamiento externo

Mientras tanto, la "ayuda" externa no produjo mayor éxito. Varios países miembros del Club de París y seis organismos internacionales apoyaron a Nicaragua tras el ascenso de Chamorro al poder, en cancelación de moras y acceso a créditos, otorgados a cambio de la drástica reducción de gastos del gobierno, la suspensión de créditos a la producción, el inicio de un proceso privatizador de empresas estatales y la aplicación de severos planes de ajuste, con un alto costo social.

Sin embargo, a inicios de 1992 una comisión del Senado de Estados Unidos estudiaba una propuesta del senador Jesse Helms para congelar toda "ayuda" económica a Nicaragua, "mientras no se dieran todos los pasos de democratización necesarios", entre ellos la devolución de propiedades a "ciudadanos norteamericanos" (9), y la destitución de los principales jefes de la policía y del ejército.

El condicionamiento de préstamos por parte de Washington se mantendría aun hasta mediados de 1994.

Si bien el gobierno saldó en los últimos cuatro años gran parte de sus débitos con Venezuela, España, México y Colombia, e intenta renegociar otros US\$2.000 de la deuda externa, Chamorro ha advertido que, debido al deterioro del sector agropecuario, el país "tardará 45 años en saldarla". (10)

El primer convenio crediticio con el BM se sumó a desembolsos de Taiwán, Japón y Alemania, totalizando unos US\$420 millones, de los cuales US\$200 se destinarían al pago de la mora y el resto a la inversión nacional.

"El Banco Mundial recomienda (...) simplificar la contratación y despido de la fuerza de trabajo, contener los salarios reales y reducir la remuneración de la jornada extraordinaria. Se trata de asegurar al gran capital la máxima extracción de rendimientos en

(8) Excelsior, 19/2/94, p. 1.

(9) Se refiere a los nicaragüenses, en su mayoría ex guardias somocistas autoexiliados en Estados Unidos durante el gobierno sandinista, que adquirieron la ciudadanía estadounidense.

(10) Declaración de prensa de Violeta Chamorro, durante una visita realizada a Managua por el presidente mexicano Carlos Salinas. 12/2/93.

base a una clara sobreexplotación de la fuerza de trabajo no calificada", indicó un documento de la Asociación de Profesionales de la Economía de Nicaragua. (11)

Hacia fines de 1992, a solicitud de prórroga presentada por Managua, el FMI ofreció estudiar los requerimientos exigidos al país a fin de mantener el flujo de créditos durante 1993, así como los efectos del retraso de la asistencia de Estados Unidos. (12)

Por su parte, el Senado estadounidense aprobó US\$190 millones en asistencia "sin restricción ni condición" al gobierno nicaragüense para el año fiscal 1993. Sin embargo, quedaba pendiente el desembolso de los US\$104 millones retenidos y sujetos a condicionamientos de tipo político (ver capítulo IV).

Suecia, a su vez, anunció una ayuda de emergencia por US\$17.5 millones a Nicaragua, tras reconocer "un avance muy alentador" de la democracia en el país. Otro crédito sueco de US\$8 millones sería desembolsado en noviembre, cuando también México otorgó un préstamo de US\$15 millones, para impulsar proyectos sociales.

Para colaborar en el financiamiento de la producción agrícola nicaragüense, México y Venezuela concedieron un préstamo puente por US\$30 millones.

El gobierno intentaba, a su vez, obtener una reducción del 90% (de US\$10.000 a US\$2.000 millones) en el servicio de la deuda externa correspondiente a 1993, que el país no estaba en condiciones de pagar. Ya se había renegociado la deuda con el Club de París, en tanto Suiza borraba una deuda comercial por US\$4 millones, y Francia y Holanda anunciaban un trato económico preferencial.

El servicio de la deuda era imposible de saldar para Nicaragua, que en 1992 produjo apenas US\$200 millones y obtuvo un apoyo externo de US\$700 millones. (13)

Luego de una reunión con países donantes y representantes de la banca financiera mundial, el gobierno canadiense condonó al país US\$19,1 millones, equivalente al 80% de la deuda nicaragüense con ese país.

También los países centroamericanos ofrecieron renegociar en términos preferenciales la deuda de Nicaragua, estimada en US\$800 millones de los cuales US\$350 millones se adeudaban a Costa Rica y US\$302 a Guatemala.

A pesar de algunos créditos concedidos por el BID para financiar algunos programas sociales, era más lo que el país abonaba a su deuda externa que lo que recibía de las multinacionales financieras. Entre 1991 y 1992 Nicaragua obtuvo donaciones y préstamos externos calculados en US\$700 millones por año; sin embargo, la economía apenas creció en un 1% en 1992 y la tasa de desocupación alcanzó el 60%. (14)

Entre 1990 y 1993, Estados Unidos había entregado asistencia económica a Managua por unos US\$750 millones, de acuerdo a cifras

(11) Barricada, "La liberalización y la fuerza de trabajo", 18/8/91, p. 3.

(12) La Jornada, agencias, 2/10/92.

(13) Barricada, 1/12/92, p. 6.

(14) AFP, 7/9/93.

oficiales norteamericanas. La situación del país, no obstante, era considerada "deprimente" por los organismos internacionales. "No hay inversión, no hay crecimiento y la economía está estancada", comentó la directora de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), Janet Ballantyne.

La ayuda externa alcanzó los US\$600 millones solamente en 1993 y el país esperaba otros US\$720 millones para 1994, a fin de reforzar el sector productivo, balanza de pagos, infraestructura y gasto social. Sin embargo, la deuda externa nacional, de US\$10.800 millones según datos oficiales, continuaba siendo la mayor por habitante en el mundo.

De la firma de acuerdos con el BM y FMI dependía el financiamiento externo para un programa de inversiones públicas en los siguientes tres años, al que se destinarían US\$228,8 millones.

A mediados de 1994, el BM anunció la concesión de un préstamo de 42 millones de derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a unos US\$60 millones, correspondiente a una segunda partida de un crédito concedido en septiembre de 1991, cuando el Banco había prestado a Nicaragua US\$110 millones.

Simultáneamente, el FMI entregó otros US\$173 millones, préstamo para apoyar el programa de reforma económica. Funcionarios del Fondo dijeron que los adelantos económicos nicaragüenses en 1993 habían sido limitados y que "el desempeño fiscal fue más débil de lo esperado, hubo menos ayuda externa y la situación de las reservas internacionales se deterioró".

Por su parte, el gobierno alemán anunció la condonación del 70% de una deuda que totalizaba US\$700 millones, incluyendo un adeudo con la ex República Democrática Alemana (US\$550 millones, del cual fue condonado el 80%, para un total perdonado de US\$490 millones).

2. Impacto social de las políticas económicas

Durante la primera parte del plan de ajuste (período 1990-91), con la actividad productiva concentrada en pocas empresas, aumentaron considerablemente las importaciones de productos básicos, se redujeron los márgenes comerciales en empresas estatales y disminuyeron los precios de petróleo y transporte. Pero junto a ello resultó duramente golpeada la pequeña y mediana industria: un desproporcionado plan de importaciones las llevaría a quiebra durante 1992 y 1993.

Paralelamente, un programa de conversión ocupacional en tres etapas, logró el "retiro voluntario" de unos 30.000 empleados del sector público civil, con opciones de traslado al sector privado o a la "micro-empresa". Esta última variante, acogida por choferes, vigilantes, técnicos medios, ingenieros y diplomáticos, se tradujo en un aumento considerable del comercio informal: mini-pulperías y vendedores ambulantes en las calles.

Aunque redujo el gasto del Estado, este plan puso también en la cuerda floja a centros infantiles y asilos de ancianos, tras el recorte presupuestario en el Instituto de Seguridad Social (INSSBI), que despidió al 25% de su personal. Pese a la prioridad

que la Constitución nicaragüense otorga a la salud y educación, más de 6.000 trabajadores de ambos sectores dejaron sus puestos sólo en 1991.

El plan devaluó drásticamente el córdoba respecto del dólar y los salarios aumentaron mínimamente en un intento por mejorar las condiciones de la exportación. El precio de los alimentos básicos subió y el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo ostensiblemente.

La devaluación redujo en un 77% la cantidad real de dinero, provocando colateralmente evaporación de las cuentas corrientes de empresas particulares, reducción drástica de las demandas y caída de ventas en la industria y el comercio. El cese de la emisión inorgánica de dinero no se acompañó de créditos al sector productivo agrícola, a raíz de lo cual unas 10.000 familias campesinas quedaron al borde del desempleo.

Los precios de los productos básicos comenzaron a aumentar visiblemente y la brecha salarial creció en forma abismal: la diferencia entre el salario mínimo y máximo, que era de 30 veces durante el somocismo, subió de 10 veces en los años 80 a 81.6 veces a partir del plan de ajuste del gobierno. Los leves aumentos salariales registrados meses después, apenas permitirían al sector obrero adquirir un 35% de la canasta básica.

Según líderes obreros, el aumento a un 15% en los impuestos por agua, luz y teléfonos, decretados en octubre de 1992, redujo en un 30% el poder adquisitivo de los trabajadores. (15)

En tanto, el desempleo, que en 1991 afectaba a 400.000 nicaragüenses, a comienzos de 1993 se había duplicado (entre desempleados y subempleados) lo que significa un aumento del 46% al 60% en una Población Económicamente Activa (PEA) calculada, según los últimos registros oficiales, en 1,445.000 personas.

En 1992, según Gustavo Porras, líder de la Federación de Trabajadores de la Salud, el presupuesto estatal asignado al sector fue de apenas US\$70 millones, "frente a los US\$135 millones destinados en 1989 por los sandinistas, que invertían en salud US\$35 por habitante". (16)

El gobierno rechazó las demandas de la organización gremial para aumentar en un 50% el presupuesto de 1993, pese a que el titular de la cartera, Dr. Ernesto Salmerón, reconoce que "Nicaragua presenta un sistema hospitalario en crisis y un 40% de la población desnutrida". (17)

En cuanto de la educación, voceros del gobierno afirman que hay un 74% de alfabetización, pero dirigentes sandinistas aseguran que la cifra es ya inferior al 70%. Lo anterior significa que el nivel de analfabetismo, reducido a menos del 12% en 1980, ha aumentado dramáticamente.

El Producto Nacional Bruto (PNB) para la educación es de 6.2%, según estadísticas de 1992. Autoridades universitarias señalaron que el presupuesto para este renglón es apenas un poco mayor del cinco por ciento. La deserción escolar, estimada en un 25% por la organización magisterial opositora ANDEN, va en aumento.

(15) Excelsior, 9/11/92, p. 2.

(16) Idem.

(17) Barricada, 12/11/92, p. 3.

Líderes de ANDEN afirmaban entonces que "250.000 niños nicaragüenses no tienen acceso a la educación, en tanto el rendimiento escolar fue de apenas 30% y 50% en centros públicos y privados al finalizar 1992, debido a la falta de capacitación y al desestímulo económico entre el magisterio". Simultáneamente, el ministro de Educación Humberto Belli, reconocido miembro de grupos católicos carismáticos, atribuía el bajo rendimiento escolar a "la televisión y la desintegración familiar". (18)

Paralelo al también llamado "boom de las mantenedoras", (aumento en la demanda de neveras por parte de los cesanteados para poder subsistir) se ejecutaron estrictos planes de retiro de oficiales y soldados de las fuerzas armadas, totalizando a la fecha casi 80.000 cesanteados.

Los nuevos "micro-empresarios" (una especie de pulperos), entre los que se incluyen más de 8.000 profesionales y técnicos de ingeniería, recursos forestales, ganadería e industria, recibieron una absurda oferta del gobierno: inscribirse en "talleres de capacitación en alquiler de Nintendos y videos", así como en "instalación de bares y licorerías".

Según una encuesta publicada en el vespertino La Prensa el 5 de agosto de 1991, el subsector comercio del sector informal urbano se transformó rápidamente en "una bomba de tiempo".

Hasta 1993, ascendía a 24.000 la cifra de ex empleados públicos que fracasaron en su intento de instalar talleres y "micro-empresas". El ministro del Trabajo, Francisco Rosales, admitió que aunque se prometió crear 80.000 nuevos empleos el año pasado a partir de la inversión pública, "el cálculo del gobierno falló". (19)

Con un crecimiento poblacional estimado en un 3.4% anual, Nicaragua necesitará en la próxima década al menos 450.000 nuevos empleos, que permitan responder a un ingreso anual de casi 45.000 jóvenes al mercado de trabajo y a las demandas de una población que superará entonces los 6.000.000 de habitantes en el año 2000.

Pese a esa realidad, el gobierno proyectaba el despido, para 1993, de unos 2.500 empleados públicos, mediante un nuevo plan de "conversión ocupacional", que fue considerado "criminal" por líderes sindicales.

También se redujo en un 50% el presupuesto de Salud frente al aprobado en 1989, cuando el gobierno sandinista destinaba al sector US\$135 millones.

Esto provocó un aumento en el índice de mortalidad infantil, que en 1992 llegó a 71 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 61 por cada 1000 en 1989. Las principales causas de muerte eran diarrea, malaria, sarampión, cólera y dengue.

Según funcionarios del ministerio de Salud, unos 250 nicaragüenses, en su mayoría de indigentes, murieron por tuberculosis en 1992, cuando se detectaron 3.000 casos; la expansión de la tuberculosis es tal que la mayoría de la población ha estado en contacto con el bacilo, sin desarrollar la enfermedad. (20)

(18) El Nuevo Diario, 28/11/92, p. 4.

(19) Barricada, 9/11/92, p. 11.

(20) El Nuevo Diario, 19/11/92, p. 12.

El descenso en el nivel de vida general conllevó un incremento también en el consumo de drogas en el país. Un estudio de las organizaciones no gubernamentales "El Patriarca" y "Dos generaciones", realizado a fines de 1992, ubicó en unos 300.000 nicaragüenses la cifra de consumidores de marihuana y cocaína, 50.000 más que en 1991; los delitos por drogas, a su vez, aumentaron de 273 en 1989 a 445 en 1991. (21)

La falta de empleos empeoró la ya crítica situación social. El ministerio del Trabajo informó que sólo podría crear 30.000 nuevas plazas de trabajo directo e indirecto (frente a las 80.000 prometidas un año antes), y reconoció una tasa de desempleo global de 54%, de una población en edad laboral estimada en 1.445.000 personas.

Según el sociólogo Oscar René Vargas, sólo uno de cada siete nicaragüenses aptos para trabajar tenía empleo a fines de 1992, cuando Nicaragua retrocedió 14 peldaños en la lista de países más pobres del planeta, para ubicarse en la posición número 71, al nivel de varias naciones africanas. El estudio indicó que los 4.1 millones de nicaragüenses, más de 800.000 estaban desempleados, sobre una PEA de 675.000 personas con salarios por debajo del costo de la canasta básica.

Mientras el gobierno calculaba el déficit habitacional en 639.531 viviendas, según Vargas unas 440.000 casas eran inadecuadas (construidas con cartones y pedazos de madera), mientras más de tres millones de personas carecían de servicios básicos: 3.239.000 no tenían agua, 2.532.000 carecían de luz y 3.086.000 de letrinas (76% de la población). El 51% de la población de Managua utiliza leña para cocinar, por lo que cada año desaparecen en Nicaragua 150.000 has. de bosques. (22)

Sólo en Chinandega, en el oeste del país, el 95% de la PEA estaba desempleada y la desnutrición alcanzaba a un 70% de niños y adultos en 1992. Desde 1990, en comarcas rurales de la zona, los capataces de finqueros adinerados han cazado como a animales a aquellas personas que entran a sus tierras a robar bananos verdes, que se frien con cebollas y se le llama "peor es nada". Muchas veces el niño regresa a casa sin la fruta y con el cuerpo lacerado por latigazos de recibe de los cuidadores.

Isabel Zúñiga, habitante de Las Grietas, en la zona de Occidente, resumió su situación: "Yo sé que es hambre lo que tienen mis chavalos, pero qué voy a hacer; lo único es distraerlos diciéndoles que ya se les va a quitar. Al más pequeño le canto a ver si se duerme, pero siempre me piden comida y yo me encomiendo a Dios y nada". (23)

A inicios de 1993, un recuento basado en estadísticas del Banco Central de Nicaragua, el Instituto de Estadísticas y Censos y el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) indicaba:

* Nicaragua es una de las 80 naciones más pobres del mundo.

* Entre 1980 y 1992, la población creció en un 51.8%, mientras que en el mismo período el PIB se redujo en -16%.

(21) Barricada, 6/11/92, p. 2.

(22) Barricada, 15/11/92, pp. 1 y 14.

(23) El Nuevo Diario, 17/11/92, pp. 1 y 6.

* Con una población de 4.1 millones, 800.000 están en el desempleo. Sólo uno de cada siete aptos para trabajar tiene empleo.

* El 68,5% de la población tiene una aguda deficiencia nutricional.

* La mortalidad infantil, reducida en los 80s a 37 por 1.000, se incrementó hasta el un 70%.

* El 70% de la población más pobre del país recibe el 36.7% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico acumula el 34.7% y el 20% restante percibe el 28%.

* El poder adquisitivo de los salarios cayó, de 1980 a 1992, en más del 87%.

* Tres cuartas partes de los nicaragüenses (3.25 millones) no tienen agua potable y un 78.8% no tiene servicios sanitarios ni letrinas.

* Según el ministerio de Construcción, el déficit habitacional hasta septiembre de 1992 era de 440.000 viviendas, lo cual significa que 2.6 millones de personas no cuentan con un hogar adecuado. (24)

La guerra, la crisis económica y el recorte de programas sociales por parte del actual gobierno, elevaron drásticamente los índices de analfabetismo en 1993. Cifras oficiales lo situaban en 1.200.000 personas, (25% del total de población), agravado en las áreas rurales, lo cual significa un retroceso del progreso alcanzado con la cruzada nacional de alfabetización, emprendida por el sandinismo en 1980 y que logró reducir el analfabetismo del 59% al 12 por ciento. (25)

Según Reynaldo Alvarez, dirigente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDEN) en Managua, el hecho de que el ministerio de Educación "haya desmontado el sistema educativo que impulsó la Revolución de una manera tan acelerada y sin resistencia, se debe no sólo a la desarticulación del magisterio y su organización, sino a todo un debilitamiento de la sociedad nicaragüense".

"Y no sólo han cambiado los aspectos político-ideológicos, sino también el principio de gratuidad, pues bajo una supuesta descentralización administrativa, han instituido el cobro de aranceles, y los padres de familia, los más afectados, tampoco protestan", dijo Alvarez al señalar que al menos 3.500 docentes estaban en el desempleo. (26)

Orlando Pineda, director de la Asociación de Alfabetización Popular Carlos Fonseca, comentó: "Actualmente, no son 150.000 los niños que no van a escuela como dice el gobierno, sino que por lo menos medio millón no reciben educación, porque sus padres no pueden pagar las cuotas escolares o simplemente no tienen con qué alimentar y vestir a sus hijos". (27)

Ante los efectos de las severas medidas de ajuste, líderes del FSLN pidieron en mayo al gobierno reajustar el programa económico, a fin de estimular y expandir la actividad productiva para crear "fuentes masivas de empleo". Una petición similar

(24) Barricada Internacional, No. 357, enero 1993, p. 21.

(25) AFP, 19/4/93.

(26) Barricada Internacional, No. 373, mayo 1994, p. 19.

(27) Idem.

hicieron dirigentes sindicales durante la primera ronda del diálogo nacional (ver capítulo VI); Sandra Ramos, líder obrera, advirtió que el 46% de las mujeres nicaragüenses estaban ya en el desempleo, lo que derivaba en un aumento de la prostitución.

En efecto, la prostitución se convirtió rápidamente en una alternativa de sobrevivencia en Nicaragua, incluso para mujeres que perdieron su empleo en empresas o comercio y tuvieron que decidir, de común acuerdo con su marido, su ingreso a esa actividad. Para Graig Loftin, oficial de proyectos de la UNICEF en Nicaragua, "es explosiva la prostitución entre menores; ya hemos detectado casos de niños y niñas de hasta nueve años que se dedican a la prostitución, empujados por las difíciles condiciones económicas".

Una prostituta sólo identificada como Yamileth, que trabajó durante cuatro años como secretaria en una empresa estatal, dijo que para su esposo fue difícil "aceptar que yo tenía que prostituirme para que comiéramos. La otra alternativa era robar, pero eso no hubiera resuelto nuestros problemas, quizás se hubieran agravado". (28)

Dentro de las estadísticas de pobreza, destaca la referente a la población infantil. Un informe de UNICEF publicado por el diario La Prensa señaló que la cifra de niños en pobreza extrema superaba a mediados de 1993 los 860.000. De ese total, 500.000 vivían en circunstancias especialmente difíciles, en vista que existen 240.000 víctimas de guerra sin acceso a servicios básicos, mientras 120.000 fueron afectados por desastres naturales y carecen de vivienda digna. De la suma global de niños desprotegidos, indicó el documento, 20.000 trabajan en el sector informal. Una cifra igual sobrepasa los 10 años de edad como analfabetas. (29)

La niñez nicaragüense alcanzó así el primer lugar en mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo en América Latina y el Caribe, según un informe de UNICEF que ubicó el índice de muertes en más de 71 por cada 1.000 nacidos, con un 42% de mortalidad general en menores de cinco años. Asimismo, el 23% de los niños menores de seis años tienen algún grado de desnutrición y 860.000 menores de siete no reciben educación primaria. (30)

En cuanto a la mortalidad materna, los índices aumentaron de 108 casos en 1991 a 120 al año siguiente, y llegaron a 59 sólo en el primer semestre de 1993. La ministra de Salud, Martha Palacios, indicó que, debido a la falta de acceso de los pobres a los servicios básicos de salud, el 47% de los partos de Nicaragua se realizan en las casas, con escasos recursos sanitarios. Por la falta de recursos y medicamentos, la mortalidad materna detectó mayores índices en zonas rurales del interior del país, donde ocurre el 68% de las muertes de mujeres. (31)

La pobreza y la falta de presupuesto a nivel nacional alcanzó, por supuesto, a los centros penales, donde los internos

(28) IPS, 23/5/93.

(29) Xinhua, 1/6/93.

(30) Xinhua, 3/7/93.

(31) IPS, 25/6/93.

comenzaron a ser alimentados con carne de gato. En un reportaje, el diario Barricada señaló que los reos "venciendo el miedo, la vergüenza y el asco, pero presionados por el hambre, se comieron la carne de gato". El gobierno destina apenas un centavo de dólar por cada servicio de comida para los 3.000 presos inscritos en el sistema penitenciario nacional, severamente golpeado por la crisis económica. (32)

En otro orden, la marginación de vastas comunidades indígenas se hizo más palpable como consecuencia de los planes oficiales de ajuste económico. Miles de miembros de la etnia sumu, que tras el fin de la guerra habían retornado a sus comunidades en la zona atlántica, se enfrentaron a la pobreza y la discriminación social. "Pensamos que con doña Violeta las cosas iban a cambiar, pero no vemos ningún desarrollo", dijo Charles Morales, ex combatiente antisandinista de origen sumu.

Según un estudio independiente, de 17 comunidades sumus existentes en Nicaragua, 12 carecen de puestos de salud y escuelas. Los pobladores defecan al aire libre y consumen agua contaminada, lo cual aumenta su vulnerabilidad ante el avance del cólera. De acuerdo a cifras de la Organización Técnica Alemana (OTA), que trabaja en esas zonas, mueren entre dos y cinco de cada seis nacidos vivos, en vista de que en la región no existen médicos ni medicinas.

A fines de año, el diario estadounidense The Christian Science Monitor advirtió: En Managua "el crimen y la pobreza están en ascenso. El desempleo se ha elevado 60%. El crecimiento económico no existe. Chamorro ha estabilizado la moneda, y las tiendas, alguna vez vacías, están llenas de artículos de consumo importados. Pero sólo unos cuantos tienen dinero para comprar bienes extranjeros".

Sólo durante 1993, al menos 141 nicaragüenses murieron de cólera, que afectó a unas 3.800 personas. Desde que la enfermedad apareció en el país, en 1991, habían muerto hasta entonces 184 personas y casi 7.000 contrajeron la bacteria, presente en ríos, lagos y fuentes de agua en comunidades rurales y urbanas.

A esas alturas, el plan de ajuste era considerado un fracaso por líderes políticos del FSLN y de la UNO, que en el marco de conversaciones bilaterales (ver capítulo VI) demandaron la renuncia del gabinete económico y abogaron por un nuevo plan integral para estimular la producción e inversión, facilitar el crédito y generar empleo. Un informe conjunto emitido tras una reunión, indicó: "los recursos externos deben ser priorizados para la reactivación económica, más que para el pago del servicio de la deuda".

Sin embargo, debido a las imposiciones del FMI y el BM, el gobierno preparaba para el período 1994-96 el despido de al menos 15.000 empleados estatales, mediante un plan de "movilidad laboral".

A mediados de 1994, las estadísticas de desnutrición alcanzaron índices preocupantes. En 1991, los sectores rurales consumían diariamente entre 993 y 1.900 kilocalorías y entre 26.9 y 52.7 gramos de proteína, así como entre 142 y 283 gramos de

(32) DPA/Xinhua, 5/7/93.

carbohidratos diarios. En 1993, la ingesta calórica descendió entre 836 y 1.772 kilocalorías diarias; los productos no consumidos eran carne, lácteos y vegetales, ricos en vitamina A, hierro y yodo, esenciales para el desarrollo físico-intelectual de los menores.

Una encuesta del ministerio de Salud y la AID confirmó esa tendencia, al señalar: "Uno de cada tres niños tiene deficiencia franca de vitamina A y sufre anemia por deficiencia de hierro". (33)

Al mismo tiempo, el informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) indicó: las garantías económicas y sociales de los nicaragüenses se han deteriorado en forma "dramática" en los últimos cuatro años, producto del ajuste económico. El 70% de la población "tiene sus necesidades básicas insatisfechas", la pobreza afecta al 80% de la población y el desempleo al 60% de la PEA.

Agregó: La tasa de mortalidad infantil es de 81 niños por cada 1.000 nacidos vivos y la materna de 300 por cada 1.000 partos. Los altos niveles de pobreza "han fomentado niveles de descomposición social desconocidos en Nicaragua", con un aumento de la delincuencia del 18% entre 1992 y 1993. (34)

Un documento similar elaboró la Comisión Nacional de Protección a la Niñez, según el cual más de 600.000 niños en Nicaragua vivían ya en circunstancias especialmente difíciles debido a la crisis económica. De ellos, más de 20.000 menores trabajaban en las calles, ganando un promedio de US\$1.50 al día.

Según el reporte, el 46% de la población total de Nicaragua tiene edades de 0 a 15 años, mientras que el 50% tiene menos de 16 años; más de 100.000 niños subsisten trabajando en el sector formal e informal, o realizan actividades marginales (vendedores ambulantes, lava-carros, vende-periódicos) con jornadas de hasta 12 horas diarias.

Por su parte, el gubernamental Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), admitió en junio de 1994 que un 67% de la población vive en condiciones de extrema pobreza y 52% de éstos no tiene acceso a los servicios básicos. La población en extrema pobreza presenta trastornos por desnutrición, carece de agua potable, electricidad y telefonía, y no tiene acceso a centros asistenciales. (35)

Otros informes oficiales reportaban que también las tasas de mortalidad post-natal eran "elevadas": 159 por cada 100.000 nacidos vivos, siendo las principales causas de fallecimiento aborto, hemorragias, toxemia e infecciones.

En julio, a causa de una feroz sequía y hambruna desatada en la zona de Occidente, unos 1.500 campesinos saquearon bodegas con varias toneladas de víveres. El hambre afectó a más de 2.000 pobladores de la región, después que la falta de lluvia provocara la pérdida de unas 350 hectáreas de cultivos de granos básicos.

El saqueo a bodegas de alimentos fue "la primera manifestación del hambre encubierta que afecta a la mayoría de la población",

(33) IPS, 4/5/94.

(34) AFP, 16/5/94.

(35) DPA, 12/6/94.

pues el 80% de los nicaragüenses no consume las calorías necesarias para subsistir, dijo el sociólogo Oscar René Vargas.

En efecto, el salario promedio en Nicaragua se ubicaba entonces en 800 córdobas (US\$110), 10 dólares menos que la canasta básica de alimentos, de acuerdo a cifras del ministerio del Trabajo.

Toda esta situación llevó a un incremento de la delincuencia. De acuerdo a un estudio de la Policía Nacional nicaragüense, el índice de delitos en Nicaragua pasó de 28.000 en 1990 a 30.900 en 1991, para aumentar a 35.930 en 1992 y a 42.394 en 1993. Las bandas delictivas, de las cuales fueron desarticuladas 126 en 1990, aumentaron en los tres años siguientes a 189, 288 y 363, respectivamente.

A partir de 1990, por el debilitamiento de los controles internos, los delitos por drogas aumentaron sustancialmente en un 120%, según la Policía. En 1991 se incautaron 730 kilos de cocaína; 155 kilos en 1992, 97 kilos en 1993 y, hasta abril de 1994, 1.100 kilos.

Los asesinatos también aumentaron desde 1990, cuando fueron ultimadas 202 personas. En 1991 la cifra fue de 259, la cual se incrementó a 325 en 1992 y 331 en 1993.

Según la policía, sólo en el primer trimestre de 1994 se registraron 11.843 delitos (asaltos, asesinatos, abigeato), 2.000 más que en el mismo período de 1993. (39)

En los tres años siguientes a la asunción de Violeta Chamorro, fueron detenidos por la policía más de 5.000 menores de edad que se involucraron en robos, lesiones, violaciones y homicidios. Los casos de capturas de niños y jóvenes delincuentes aumentaron de 1.700 en 1991 a 1.950 el año siguiente. Mientras los menores van a prisión, el gobierno no ha sido hasta ahora capaz de garantizar proyectos de beneficio social, buen trato de la policía y mucho menos un trabajo de protección judicial.

Para Alejandra Schutze, socióloga de la Universidad Centroamericana (UCA), los niños en Nicaragua "antes que ser transgresores, son transgredidos por la sociedad, pues no existen programas alternativos de atención para ellos ni tampoco un sistema de justicia penal para menores de edad". (40)

3. Repercusiones de la guerra

La guerra contra Nicaragua tuvo graves efectos sociales, económicos, materiales y morales, que aún se sienten en el país. Una evaluación en base a informes oficiales, de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, permite hablar de un costo mínimo total de daños del orden de los US\$22.306.1 millones (un promedio anual de US\$2.230 millones), cifra equivalente a 83 años de exportaciones de Nicaragua, en base a las exportaciones de 1991.

De este total, US\$17.845,5 millones corresponden a los daños económicos y sociales inmediatos hasta 1986, cuando para efectos

(39) EFE, 13/5/94.

(40) DPA, 4/7/93.

de una demanda de indemnización a Estados Unidos la Corte Internacional de Justicia de La Haya realizó una estimación global de los costos de la guerra.

En cuanto a daños humanos, se estima que la guerra en Nicaragua dejó más de 10.000 civiles y ex militares lesionados, quienes reciben pensiones mensuales de apenas entre US\$30 y US\$40.

Entre otras víctimas directas del conflicto bélico, la UNICEF ubica a por lo menos 240.000 niños, afectados por la muerte de sus padres, la destrucción de su hogar y lesiones físicas a causa de enfrentamientos armados. (36)

Según un estudio del centro independiente "Dos Generaciones" realizado a fines de 1992, los discapacitados nicaragüenses viven en situación de pobreza y no tienen acceso a la salud ni a la educación. Sumado a los efectos de pasada guerra, estas personas fueron afectadas por meningitis, polio, diarrea, sarampión y por lesiones genéticas o crónicas como leucemia, asma y síndrome de Down.

Sobre un total de 397 entrevistados, el reporte reveló que las enfermedades, la falta de medicinas y la ausencia de servicios médicos son factores directos de discapacidad. Respecto a los hombres, la guerra fue causa de altísima presencia (55%), seguido por la polio (13.2%) y accidentes (10%). De los consultados, el 54.2% dijo haber recibido rehabilitación, y de ellos el 47.4% ha sido atendido por el Estado y el 8.1% por instituciones privadas. (37)

A raíz de la "crisis de los rehenes", The New York Times exhortó a la administración Clinton a tomar medidas para "sanear las grandes heridas" de Nicaragua en los últimos años. "Muchos de los problemas actuales de Nicaragua fueron causados por la política desastrosa que Reagan y Bush llevaron a cabo en América Central durante 12 años", editorializó el periódico: "Tratando las tensiones que existen en Nicaragua como un conflicto de guerra fría, y armando y entrenando a los **contras** (Reagan y Bush) infligieron a ese país sufrimientos innecesarios, arruinaron su economía y agudizaron sus divisiones". (38)

(36) AFP, 10/4/93.

(37) Barricada, 16/11/92.

(38) El Nacional, agencias, 26/8/93.

El Salvador

1. Políticas económicas, privatización y dependencia

El "Plan Económico y social y Ajuste Estructural", aplicado por el gobierno salvadoreño a partir de febrero de 1990, incluyó una mayor atención al sector privado (100% de los créditos bancarios y la promesa de agilizar la privatización de empresas estatales); reducir la dependencia externa y la inflación (al menos a 15%, para lograr un crecimiento económico del 2.5%, sin contemplar nuevos aumentos en el precio de los servicios públicos); así como reducir la deuda externa, que entonces era de US\$2.000 millones y en cuyo pago se invertía el 30% de las exportaciones.

En el aspecto social, el plan destinaba una muy reducida ayuda a la población afectada por los efectos de la guerra. Pese a la intención del programa de no afectar el costo de los servicios públicos, la inflación ya se sentía. Para esa fecha, "los bolsillos de los salvadoreños ya no daban para comprar los productos básicos" debido a la liberación del precio del combustible, que en este mes se había incrementado entre 30 y 100 por ciento. (41)

El proceso de privatización, que incluyó empresas estatales y los sectores energético y bancario, pretendía devolver al sector privado el manejo total de los recursos económicos del país. Grandes huelgas en todo el país impidieron al gobierno, temeroso de poner en manos del empresariado local, con altos aranceles, la enseñanza pública; anular la autonomía universitaria e imponer un control casi policial sobre el alumnado.

A un año un medio de la llegada al poder de ARENA y de la aplicación del llamado Plan de Desarrollo Económico Social 1989-94, como estrategia del ajuste estructural, la estrategia del gobierno daba a inicios de 1991 resultados positivos en materia de crecimiento económico (aumento de 2.8% en el PIB respecto de 1989). También fue notable la reducción de desequilibrios internos y externos, y la considerable expansión productiva, especialmente agroexportadores-- y afectaron a los sectores más desprotegidos, que cargaron con el peso del ajuste.

Sustentado en cuatro postulados básicos (propiedad privada como condición necesaria para la asignación de libre mercado, y como mecanismo idóneo para la producción; libre mercado, y competencia como garantía del funcionamiento del mercado, y Estado como ente exclusivamente normador de la actividad económica), el plan pretendía lograr la estabilización a partir de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y reordenar el aparato productivo para elevar la eficiencia. El gobierno estableció así un control presupuestario efectivo en materia fiscal, para reducir el gasto del gobierno a partir de la venta de empresas públicas; inició una reforma del sistema tributario e incrementó las tarifas de servicios (electricidad,

(41) Inforpress Centroamericana, 15/2/90, p. 11.

El Salvador

1. Políticas económicas, privatización y dependencia

El "Plan Económico y social y Ajuste Estructural", aplicado por el gobierno salvadoreño a partir de febrero de 1990, incluyó una mayor atención al sector privado (100% de los créditos bancarios y la promesa de agilizar la privatización de empresas estatales); reducir la dependencia externa y la inflación (al menos a 15%, para lograr un crecimiento económico del 2.5%, sin contemplar nuevos aumentos en el precio de los servicios públicos); así como reducir la deuda externa, que entonces era de US\$2.000 millones y en cuyo pago se invertía el 30% de las exportaciones.

En el aspecto social, el plan destinaba una muy reducida ayuda a la población afectada por los efectos de la guerra. Pese a la intención del programa de no afectar el costo de los servicios públicos, la inflación ya se sentía. Para esa fecha, "los bolsillos de los salvadoreños ya no daban para comprar los productos básicos" debido a la liberación del precio del combustible, que en este mes se había incrementado entre 30 y 100 por ciento. (41)

El proceso de privatización, que incluyó empresas estatales y los sectores energético y bancario, pretendía devolver al sector privado el manejo total de los recursos económicos del país. Grandes huelgas en todo el país impidieron al gobierno, empero, poner en manos del empresariado local, con altos aranceles, la enseñanza pública; anular la autonomía universitaria e imponer un control casi policial sobre el alumnado.

A un año un medio de la llegada al poder de ARENA y de la aplicación del llamado Plan de Desarrollo Económico Social 1989-94, como estrategia del ajuste estructural, la estrategia del gobierno daba a inicios de 1991 resultados positivos en materia de crecimiento económico (aumento de 2.8% en el PIB respecto de 1989). También fue notable la reducción de desequilibrios internos y externos, y la considerable expansión productiva, logros éstos que beneficiaron a los grandes empresarios -- especialmente agroexportadores-- y afectaron a los sectores más desprotegidos, que cargaron con el peso del ajuste.

Sustentado en cuatro postulados básicos (propiedad privada como condición necesaria de la producción; libre mercado como mecanismo idóneo para la asignación de recursos; libre competencia como garantía del funcionamiento del mercado, y Estado como ente exclusivamente normador de la actividad económica), el plan pretendía lograr la estabilización a partir de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y reordenar el aparato productivo para elevar la eficiencia.

El gobierno estableció así un control presupuestario efectivo en materia fiscal, para reducir el gasto del gobierno a partir de la venta de empresas públicas; inició una reforma del sistema tributario e incrementó las tarifas de servicios (electricidad,

(41) Inforpress Centroamericana, 15/2/90, p. 15.

transporte, agua y telecomunicaciones) para reducir el déficit operacional de los entes estatales. También se reprivatizó la banca nacional, se redujo el crédito al gobierno y se aumentaron las tasas de interés, mientras se liberó el régimen cambiario y la mayoría de las restricciones al comercio, eliminando los monopolios del café, azúcar y algodón. En cuanto a precios, se suspendió el control sobre 230 productos y se fijó un sistema de bandas de precios para los granos básicos.

Priorizando lo "macro"

Las citadas políticas de ajuste se aplicaron, sin embargo, obviando las causas estructurales de la crisis económica, en base a un enfoque errado que sirvió para justificar el desmantelamiento de la banca nacionalizada y jugar con el control de las exportaciones de café y azúcar en función de los intereses agroexportadores. Tampoco se tomó en cuenta la persistencia de la guerra ni el carácter de la economía salvadoreña, monopolística en algunos rubros y oligopólica en la mayoría, lo cual condujo a que la liberalización de precios provocara graves desequilibrios debido a la manipulación de la oferta de bienes de consumo interno y la especulación sobre el tipo de cambio.

La estrategia económica, basada en la vinculación al mercado externo, limitó también el acceso de los sectores no empresariales a las actividades no tradicionales. Ello produjo el desmantelamiento de la producción agrícola e industrial para el consumo interno; la apertura total al capital extranjero; la contracción de la producción interna y, por consiguiente, un aumento de la proletarianización y subproletarianización, al marginar a los empresarios pequeño (incapaces de competir con la inversión externa) y expulsar a un amplio contingente obrero del mercado laboral. (42)

Al iniciar 1992, los precios de diferentes productos de consumo y las tarifas de energía y transporte sufrieron un brusco aumento. Cristiani alegó que el IVA, que incrementó del 25% al 40% la tarifa del transporte y en un 30% la de la luz, era "necesario" para solventar los gastos que generaba el plan de reconstrucción nacional. (43)

Raúl García Prieto, dirigente de ARENA y presidente de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (Finata), acusó a Estados Unidos de haber "negado el apoyo económico al proceso de paz" y dado "una patada" a Centroamérica. "Washington impulsó la guerra en El Salvador y ahora no le brinda la ayuda económica que necesita el proceso de paz, después de que en la guerra invirtió millones de dólares", dijo el empresario al señalar que el gobierno salvadoreño carecía de recursos para explotar unas 20.000 hectáreas de tierra, previstas a repartir entre ex guerrilleros y soldados.

"Estados Unidos le ha dado una patada a Centroamérica. Utilizó a los **contras** en Nicaragua y ahora no quiere saber nada de ese país, ni de Honduras ni de El Salvador", afirmó García y advirtió

(42) Inforpress, 31/1/91, pp. 1, 2 y 7.

(43) Reuter, 1/9/92.

que la situación económica regional podía conducir a nuevos estallidos sociales, porque "hay miseria y mucha presión para obtener tierras para trabajar". (44)

Hacia finales del año, el gobierno ratificó al BM y al FMI su decisión de mantener el programa de ajuste. "Nada debe desviarnos del camino trazado", pues "lo avanzado en estos tres años de reforma podría perderse fácilmente", declaró en Washington la ministra de Planificación, Mierna Liébanos.

Según el Banco Central, las reservas internacionales en El Salvador habían llegado a US\$495.9 millones durante 1992, debido principalmente a la repatriación de capitales, la confianza de los inversionistas en la conducción de la economía y la estabilidad en el tipo de cambio. A febrero de 1993, la deuda externa ascendió a US\$1.811 millones gracias a la condonación de US\$464 millones por parte de Estados Unidos, cantidad que representaba el 20% de la mora total. (45)

Sumado a la falta de compra de la semilla de algodón en el mercado de Estados Unidos y a la grave crisis en la actividad cafetalera, producto de una nueva caída en el precio del grano, el déficit fiscal de El Salvador llegó a US\$1.101 millones, frente a US\$818 millones registrados en 1991. El déficit comercial sólo podía entonces ser paliado con las remesas familiares de salvadoreños residentes en el extranjero, donaciones oficiales y préstamos de organismos multilaterales.

A mitad del año, también los términos comerciales de exportación registraban un saldo desfavorable a El Salvador, pese al sensible incremento reportado después de la guerra. Las exportaciones de 1992 tuvieron un aumento de 4.4%, mientras en volúmenes llegaron a 32%. Por otro lado, las importaciones alcanzaron el 148%, cifra elevadísima comparada con las de 1989. (46)

Pese a todo, según el gobierno, el país había mostrado un crecimiento económico del 4.6% en el último año. La situación económica era sin embargo considerada por un 60% de la población como su principal problema, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA: el 30% de los encuestados dijo tener dificultades serias por el alto costo de la vida, el 15% señaló la pobreza y un porcentaje similar la falta de empleo.

Las medidas económicas del gobierno de Cristiani mantienen al país en "la zozobra de la inseguridad y en la angustia del desempleo y del alto costo de la vida" comentó el obispo auxiliar Rosa Chávez.

Presionado por varios flancos, el gobierno presentó en septiembre el presupuesto para el año fiscal 1994 con aumentos sustanciales en los rubros sociales. De un total nacional de US\$1.105 millones, se destinaron a Educación US\$162.1 millones (US\$34,5 millones más que en 1993), a Salud US\$101.8 (US\$12.5 millones más), y a Obras Públicas US\$148.1 millones (US\$36 millones más), en tanto a la Defensa se dio el mismo presupuesto

(44) Excelsior, agencias, 15/9/92, pp. 2 y 13.

(45) Notimex, 26/2/93.

(46) Excelsior, corresponsal, 30/5/93, pp. 2 y 34.

anterior, pese a la reducción del personal militar a casi a la mitad. (47)

Las políticas de ajuste y privatización continuaron a lo largo de 1994, con el empresariado privado convertido en un sector crítico y beligerante frente al gobierno. Entre otras decisiones gubernamentales, miembros de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (AMPES) cuestionaron las gestiones del gobierno para una eventual firma de un TLC con México, por considerar que ello afectaría de forma "inmediata" a la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente en el sector de calzado y vestuario, carentes de capacidad productiva y tecnológica para competir.

Sobre el proyecto de privatización de los servicios públicos, como parte de un plan oficial de reforma a la administración pública, Juan Héctor Vidal, director ejecutivo de la ANEP, declaró estar dispuesto a asumir instituciones "ineficientes", si bien "lo único que pedimos es respeto a las leyes, seguridad jurídica y acceso a recursos crediticios". (48)

Las tarifas de los servicios públicos registraron un notable aumento tras la llegada del presidente Calderón Sol al gobierno, en junio de 1994, cuando la continuación del proyecto económico neoliberal y de los planes de ajuste se plasmó también en el incremento de entre 30% y 40% de la mayoría de los productos de la canasta básica. (49)

Financiamiento externo

Pese a la reanudación de la asistencia económica de Estados Unidos a El Salvador, a inicios de 1990, el futuro de la asistencia externa no dejó de preocupar al gobierno en los dos años siguientes. También había sido reactivado el flujo de recursos procedentes del FMI (interrumpido en 1982) en apoyo al programa económico neoliberal de Cristiani: respaldo al comercio exterior, combate a la pobreza y nuevos planes tributarios y financieros del sector agrícola.

Según fuentes oficiales, el BM consideraba que el programa de ajuste estructural aplicado en El Salvador era "técnicamente sólido y serio, y entrelaza en forma consistente las políticas económicas y sociales".

El financiamiento externo se mantuvo estable en los meses siguientes, y en julio de 1992 la Unión Europea firmó con el gobierno otros acuerdos financieros, por US\$45.8 millones, como parte de un proyecto en apoyo al restablecimiento de la paz mediante el reemplazo de registros civiles destruidos durante el conflicto y para brindar ayuda a unas 6.000 familias.

La UE entregaría un año después otros US\$156.000, en carácter de donación, para fortalecer programas de apoyo a lisiados de guerra.

Al iniciar 1993, el financiamiento externo mostró un comportamiento variado. Por un lado, la reducción de la asistencia económica estadounidense significó un viraje en la

(47) EFE, 30/9/93.

(48) EFE, 9/6/94.

(49) AFP, 23/6/94.

historia reciente de la "cooperación" de Washington, el principal aliado del gobierno salvadoreño durante los 80, cuando concedió US\$5.350 millones en apoyo, de los cuales US\$1.703 millones eran ayuda militar. (50)

Sin embargo, la Casa Blanca condonó US\$464 millones, equivalentes al 75% de la deuda total salvadoreña con Estados Unidos, y decidió no cobrar los intereses de la misma sino depositarlos en el denominado "Fondo de las Américas", creado para respaldar programas de protección al medio ambiente, el desarrollo y la niñez. Dos meses después, el gobierno norteamericano condonaría otros US\$41 millones, correspondientes a intereses de la deuda pendiente con Washington (de US\$150 millones).

Por otro lado, 17 países y 11 organizaciones internacionales ofrecieron US\$800 millones para la reconstrucción de El Salvador, en base a "la necesidad de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc y de la Comisión de la Verdad". Japón también reanudó su asistencia económica, extendiendo créditos por US\$86.2 millones.

A mediados de año, el gobierno obtuvo del FMI un crédito de US\$49 millones para apoyar el programa económico de 1993, dirigido a reducir la inflación a un 12%, reforzar la balanza de pagos y mantener el crecimiento económico en un 4.5%. El préstamo se entregó, según aclaró un informe del Fondo, luego del compromiso de El Salvador de mantener las reformas estructurales, principalmente la modernización del sistema tributario, la racionalización del gasto público y la reorganización y privatización de empresas. (51)

Otro préstamo, por casi US\$126 millones, fue concedido por el BID para impulsar la expansión del sector eléctrico. En el mismo sentido, el BM aprobó un préstamo de US\$40 millones para apoyar un proyecto de reforma e inversiones en el sector agrícola.

Como parte de la llamada asistencia internacional para la reconstrucción salvadoreña, Estados Unidos entregó dos créditos, por un total de US\$59 millones, para financiar proyectos de salud, educación y autonomía municipal.

Sin embargo, la ayuda financiera otorgada por Estados Unidos a El Salvador continuó disminuyendo tras el fin de la guerra civil y los cambios políticos mundiales. Según el director de la AID, Charles Costello, la asistencia norteamericana al país inició en 1952 con US\$500.000 y llegó hasta US\$80 millones por año a partir de 1980. En 1987, alcanzó los US\$462 millones, para descender en 1993 a US\$208 millones. (52)

2. Impacto social de las políticas económicas

El ajuste económico iniciado en 1990 por Cristiani logró en pocos meses los propósitos deseados, como la disminución del índice de precios al consumidor, el aumento en el volumen de la

(50) Notimex, 22/2/93.

(51) EFE, 11/5/93.

(52) Excelsior, corresponsal, 28/12/93, pp. 2 y 9.

actividad económica, la estabilidad del tipo de cambio y el incremento de las exportaciones en los primeros meses de 1991.

En términos generales, sin embargo, el éxito de esa política económica fue relativo, por cuanto no abarcó al grueso de la población y afectó a la de menores recursos. La estabilidad no satisfizo a los sectores populares, que se mostraron sensibles al aumento del precio de la canasta básica y calificaron el plan de injusto y lesivo a sus intereses.

Esto se vio reflejado en la oposición del movimiento sindical salvadoreño al proceso de privatización de empresas públicas, así como en los actos de ocupación de tierras por parte de campesinos y en los violentos desalojos realizados por el ejército.

Pese a las protestas, los costos del ajuste continuaron sintiéndose a fines de 1992. Para el economista Alfonso Goitia, presidente de la Fundación para el Desarrollo de El Salvador (FUNDE), la "gravidad de la situación económica sigue estando presente", al no resolverse los problemas que dieron origen al conflicto armado. Para esa fecha se mantenía un alto nivel de desempleo y subempleo, mientras que la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en 26% y 40 por ciento, en relación a 1989.

Parte del conflicto social se ubicó también en el problema de las tierras, latente durante todo el siglo y no resuelto con la reforma agraria de 1980, que excluyó a más de 250.000 familias. (53)

La crisis económica derivó pronto en un aumento de la delincuencia común, que se convirtió en algo cotidiano durante 1993 y cuyos protagonistas incorporaron a su indumentaria fusiles de guerra. Según La Prensa Gráfica, los nuevos delincuentes eran identificados por la población como "bandas de ex militares y ex guerrilleros" muy bien organizados.

En lo que el diario calificó como "un fenómeno tan nocivo como la guerra misma", la creciente ola delictiva fue atribuida a la desmovilización de más de 33.000 soldados y unos 2.000 guerrilleros, quienes con la firma de la paz quedaron en el desempleo y sin posibilidades de trabajar. (54)

De hecho, a 18 meses de aplicado, el llamado Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), diseñado para mejorar las condiciones de vida en las zonas de guerra, no había prosperado. Según dirigentes del FMLN, la ayuda internacional se utilizó para reparar la gran infraestructura, sin atender la demanda en servicios como educación y salud.

En este sentido, la Asociación Nacional de Educadores (ANDES) alertó sobre el incremento de la violencia juvenil, producto de "las históricas condiciones socioeconómicas y políticas del país, agravadas por el último conflicto armado". Coincidiendo con esta posición, el ministro de Educación Carlos Rodríguez observó que el surgimiento de las "maras" (pandillas juveniles integradas por estudiantes y delincuentes comunes), representa "un problema muy complejo, estructural, que tiene mucho que ver con la guerra" concluida en 1992.

(53) El Nacional, corresponsal, 5/8/92.

(54) La Jornada, corresponsal, 16/2/93, p. 45.

Para el analista político José Rodríguez Ruiz, el fenómeno de la delincuencia, que el gobierno intentó resolver mediante operativos del ejército y la policía, "es ya un problema político, pues podría tratarse de rebrotes armados, provocados por descontento social de quienes no fueron beneficiados por los Acuerdos de paz". (55)

También aumentó en forma alarmante el narcotráfico; el expendio y consumo de drogas de la mariguana se amplió a otros estupefacientes, como cocaína y heroína. A fines del año anterior las autoridades descubrieron el cargamento de drogas más grande encontrado en El Salvador y valorado en unos US\$200 millones.

"La extrema pobreza no es una fría estadística, sino cientos de miles de rostros que nos preguntan si por fin brillará para ellos la esperanza", comentó el obispo auxiliar Rosa Chávez al acusar al gobierno de olvidar a los "más pobres de los pobres", a raíz de la muerte trágica de 22 indigentes sepultados por un alud de basura en Santa Tecla, al oeste de San Salvador.

La crisis económica alcanzó también al sistema penitenciario salvadoreño, donde las precarias condiciones de salud, alimentación y seguridad producto del escaso presupuesto estatal al sector, motivaron intentos de fuga y motines. El gobierno brinda apenas 35 centavos dólar para la alimentación diaria de cada preso, según reportes judiciales.

Como resultado del plan de ajuste económico, exitoso en cuanto a los resultados macro-económicos pero criticado por su impacto social, el desempleo sobrepasó el 40% en 1994, de acuerdo a fuentes sindicales, si bien el gobierno reconoce apenas un 10% de desocupación abierta. (56)

Informes del Centro de Estudios Económico-Sociales (Cenitec), señalan que el 90% de los gastos de salud y educación en El Salvador provinieron en 1994 del apoyo externo, mientras la pobreza alcanzó más del 50 por ciento. El déficit social, estimado en un 2.7% en relación al PIB en 1989 (cuando Cristiani asumió el poder), aumentó a 3.08% tras el fin de la guerra.

En los años 70, más de 4.5% de las riquezas generadas en el país se dirigían al campo social, pero a partir de 1982 esta cifra comenzó a disminuir, llegando en 1994 a sólo el 2.3 por ciento. (57)

El gobierno salvadoreño ha reconocido que más del 54% de la población vive en la pobreza y más del 60% es analfabeta, mientras la tasa de desempleo y subempleo alcanza el 46% y sólo el 48% de los salvadoreños tienen acceso al agua potable y un 56% a los servicios de salud.

3. Repercusiones de la guerra

La crisis económica salvadoreña era ya caótica antes de 1990, debido a la destrucción causada por los bombardeos del ejército a barrios marginales. Sin embargo, como resultado de la ofensiva

(55) Excelsior, corresponsal, 12/6/94 pp. 2 y 16.

(56) AFP, 22/4/94.

(57) Excelsior, corresponsal, 27/5/94, pp. 2 y 34.

guerrillera de noviembre de 1989, las pérdidas ascendieron a unos US\$200 millones, cifra que según analistas sólo correspondería a la primera semana de combates. La infraestructura y los servicios de electricidad y telecomunicaciones fueron los sectores más dañados junto al comercio, que reportó millonarias pérdidas. (58)

En el aspecto social, la Fundación Pro-Educación Especial recomendó la capacitación de 308 profesores, 11.000 padres de familia y 11.500 niños de diversos departamentos del país, para dar atención psicológica urgente a menores afectados por la guerra. Las secuelas del conflicto bélico en la niñez se reflejan en temor, desconfianza y **stress**. (59)

Los 12 años de guerra dejaron también unos 12.200 lisiados, entre soldados y rebeldes.

(58) Inforpress, 11/1/90, p. 11.

(59) DPA, 25/5/93.

Guatemala

1. Políticas económicas, privatización y dependencia

Una serie de desequilibrios monetarios caracterizaron la situación económica de Guatemala en los primeros dos años de esta década, cuando la flotación monetaria provocó desequilibrios inesperados, como la especulación en el mercado del dólar, el crecimiento de las importaciones y las pérdidas cambiarias de las finanzas públicas. Los efectos del encarecimiento del dólar frente al quetzal y del aumento de la demanda interna, conllevaron agudas presiones sobre los precios; escasearon los productos y servicios con precios controlados, forzando a un aumento o bien a la obtención de un subsidio.

La devaluación del quetzal tuvo un claro impacto en el incremento de la inflación mientras, sin solución a sus demandas, la población acumulaba un descontento que por el momento se expresaría en protestas aisladas (pacíficas o violentas), carentes sin embargo de la fuerza suficiente para obligar al gobierno a aplicar medidas globales a su favor.

Pese al buen funcionamiento del sector exportaciones (productos tradicionales y no tradicionales), que había logrado revertir una tendencia decreciente sostenida desde 1979, el gobierno de Vinicio Cerezo dejó al Estado en una total bancarrota, incapaz de financiar el presupuesto nacional, con una deuda externa de casi US\$2.400 millones y una mora en los pagos internacionales que provocó el cierre de las ventanillas de los principales organismos de crédito.

Las medidas económicas aplicadas entonces estuvieron permanentemente "guiadas" por el Banco Mundial, con un plan de modernización tributaria dirigido a reducir el déficit fiscal y eliminar la insolvencia financiera. Enfrentado durante todo 1992 a una ola de protestas populares ante los constantes aumentos de precios, congelamientos salariales y alzas en las tarifas de servicios públicos, el gobierno de Jorge Serrano optó por cumplir las exigencias internacionales.

Según el documento del BM "Guatemala: Memorándum económico", el mayor problema era entonces "colocar al sector público en una situación más estable mediante la corrección del déficit fiscal", ante la acumulación de la mora provocada por la imposibilidad del país de financiar, con más deuda externa, su déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos. (60)

Como parte de esos planes, continuaron en 1993 los proyectos (cancelados el año anterior), para la privatización de empresas públicas, entre ellos la compañía ferroviaria nacional.

El presidente Serrano reveló un plan arrasador para vender a corto plazo casi todo el sector eléctrico y diversas entidades estatales, incluyendo los servicios básicos. "Educación, salud y vías de comunicación serían un mejor uso del dinero", dijo el mandatario sin descartar la posibilidad de privatizar tres plantas hidroeléctricas y de negociar el 30% de las acciones del

(60) Inforpress, 14/11/91, p. 12.

Estado sobre la línea aérea Aviateca, vendida en un 70% por el gobierno anterior a la empresa salvadoreña Taca.

Privatización sin consenso

Pese a la protesta popular, las autoridades pretendían así "deshacerse" de empresas y servicios considerados no productivos, entre éstos el sistema de transporte urbano, deficiente pese a que había sido subsidiado, en los seis años anteriores, con US\$85 millones.

El proyecto privatizador fue detenido en julio con la llegada al poder del presidente Ramiro De León (ver capítulo VI). Su suspensión, aplaudida por los principales sindicatos, recibió críticas de la iniciativa privada, que la calificó de "irresponsabilidad". Según el nuevo mandatario, la privatización no sería prioridad de su gobierno, que proyectaba en cambio "romper los monopolios" en las entidades responsables de servicios esenciales.

Sin embargo, apenas tres meses después, De León anunciaría su intención de privatizar las empresas y servicios estatales que "no han demostrado eficiencia con la administración gubernamental", para atender en 1994 las "demandas más urgentes de la población". Esto requería un presupuesto de US\$3.000 millones, frente al anterior de US\$1.600 millones.

Tampoco esta promesa fue cumplida. El presupuesto para 1994, enviado al Congreso a inicios de septiembre, se fijó finalmente en US\$1.400 millones, a fin de reducir en un 50% el déficit fiscal de US\$165 millones.

Del total nacional, US\$727 millones se destinaron al funcionamiento del aparato estatal; US\$375 a la inversión y US\$290 a la deuda pública. Del monto de inversión, las mayores cuotas fueron a Finanzas (US\$135 millones); presidencia (US\$88 millones) y Comunicaciones y Obras Públicas (US\$61 millones), en evidente contraste con los pírricos US\$14 millones asignados a Educación. (61)

Al iniciar el año, el gobierno sometió a la aprobación del Congreso un nuevo paquete de reformas fiscales y monetarias dirigido a resolver la crisis financiera, estabilizar los precios, evitar la inflación y combatir la pobreza.

Si bien Guatemala había mostrado el año anterior un acelerado auge de la industria maquiladora, motivado por su expansión en países asiáticos, el incremento de la violencia en el país afectó sensiblemente al turismo, una de las principales fuentes de divisas, que registró pérdidas por US\$36 millones y el despido de 5.000 empleados del sector, donde otros 70.000 empleos quedaron "bajo riesgo".

La crisis en la industria turística se agravó en marzo de 1994, después de una "advertencia de peligro" formulada por el gobierno de Estados Unidos a sus connacionales para que se abstuvieran de viajar a Guatemala.

(61) Notimex, 4/2/94.

Financiamiento externo

El flujo de recursos externos a Guatemala estuvo limitado, en años recientes, a la situación política y en especial al tema de los derechos humanos, convertido en el "talón de Aquiles" de los últimos gobiernos.

La falta de cumplimiento en el pago de la deuda externa (que en 1990 había llevado a la suspensión de créditos del Banco Mundial, el BID y el FMI) y las cuentas pendientes con la AID, el BCIE y bancos norteamericanos, europeos y latinoamericanos, obligó al gobierno a ejecutar programas de modernización de la economía y de estabilización a corto plazo.

Luego de que se aplicara una política de ajuste económico durante 18 meses y se renegociara la deuda externa, calculada en unos US\$2.263 millones, los principales organismos internacionales del crédito reabrieron sus líneas de préstamos a Guatemala.

El BM desembolsó en diciembre un primer tramo de US\$48 millones de un préstamo de estabilización económica de US\$120 millones, a partir de lo cual, en 1993, el gobierno de De León anunció su disposición de renegociar US\$410 millones de la deuda con el Club de París, contraída en su mayor parte por instituciones del Estado.

En este sentido, el Congreso guatemalteco se opuso al pago de una deuda de más de US\$30 millones, adquirida por la empresa Celulosa de Guatemala (CELGUSA) con el Club de París a través de España. La negociación de esa cantidad, que representaba más del 70% de la deuda nacional con el organismo, fue la más conflictiva, debido a la oposición generada en el Congreso. Su presidente, José Lobo Dubón, advirtió que sería "lesivo a los intereses nacionales" aceptar una "maniobra que busca cargar al Estado y al pueblo esa amortización que no le corresponde". (62)

La deuda total con la Club (US\$84 millones) se había convertido en oficial al ser cancelada a la banca central local por las empresas no gubernamentales deudoras. Mediante el acuerdo marco firmado con el Club en marzo anterior, Guatemala renegoció su pago a partir de una minuta que contemplaba su reducción a US\$72 millones.

Ante la negativa parlamentaria al pedido oficial, que se produjo en medio de una grave confrontación política entre los poderes del Estado (ver capítulo VI), los organismos financieros internacionales cerraron el crédito a Guatemala y lo declararon nuevamente "país moroso".

2. Impacto social de las políticas económicas

Los costos de las medidas devaluatorias aplicadas en 1989, sumados al plan de ajuste decretado dos años después, fueron resentidos por los sectores populares, si bien la economía recuperaba "su solvencia". Aunque el argumento oficial estaba sustentado en la necesidad de lograr mayores inversiones y

(62) Notimex, 20/4/93.

empleos, la mayoría de productos y servicios experimentaron una alza brusca de precios.

Los beneficios de la política gubernamental, que a grandes rasgos se podrían traducir en un aumento de las exportaciones e ingresos de inversión externa, fueron cargados a las cuentas de los grupos económicos al frente a cargo de esa actividad, mientras sus costos cayeron sobre los trabajadores y consumidores.

El plan económico se tradujo en un aumento de la inflación y del precio del transporte, cemento y combustible, sometido además a una escasez "artificial". Este problema se ubicó en la conjunción de dos dificultades: la imposibilidad del gobierno de cancelar su factura petrolera y los problemas de los importadores para definir el precio del producto en moneda nacional, ante la inestabilidad del tipo de cambio.

De acuerdo al documento "Perfil de la pobreza en Guatemala", editado por la ONU en 1991, el 80% de la población nacional vivía entonces en la pobreza, y de ellos el 59,3% era indigente. La situación era más crítica en departamentos del interior habitados por población indígena, donde el 50% de las viviendas carecía de agua potable, servicios sanitarios y energía eléctrica. (63)

Según la iglesia, la falta de empleo, el alto costo de la vida, el analfabetismo, la falta de vivienda y la delincuencia común, llevaron a los guatemaltecos "al borde de la desesperación". Un informe del obispado divulgado en 1992, indicó que apenas un privilegiado 10% de la población tenía acceso a los servicios básicos, mientras que la "continua y flagrante violación a los derechos humanos sociales tiene a un 84% de la población viviendo en extrema pobreza". (64)

En el mismo tono, el arzobispo Penados del Barrio calificó de "caótico" el futuro inmediato del país, debido a la pobreza, la delincuencia y la guerra, hechos que aumentaron los índices de la pobreza extrema y generaron "desigualdad, descontento, frustración y conflictos, que hacen imposible la convivencia pacífica".

Esta situación no se modificó pese al anuncio oficial de crear en Guatemala, como en Nicaragua, un ambicioso plan social que imitaba al mexicano "Solidaridad".

A inicios de 1993, según datos oficiales, el 89% de los nueve millones de guatemaltecos vivía ya por debajo del nivel de pobreza, especialmente en las áreas rurales, donde habita más del 65% de la población total.

De acuerdo a una investigación independiente, también crecieron entonces otros indicadores, como la tasa de mortalidad, principalmente por causas nutricionales, infecciosas y del período perinatal, seguido por homicidios, violencia y enfermedades degenerativas. El 55% de esas muertes ocurrían en niños menores de cinco años de edad.

El índice de mortalidad infantil y de la niñez en Guatemala se ubicó así como el más alto de Centroamérica (con un 34% de su población infantil afectada) siendo la población menor de un año

(63) EFE, 6/5/93.

(64) EFE, 31/8/92.

la más desprotegida en cuanto a salud, con un 21% del total de defunciones por factores nutricionales e infecciosos. (65)

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 60% de los niños de tres a 36 meses de edad presentan desnutrición y más de un tercio de los estudiantes de primaria muestran retrasos en su crecimiento.

Una investigación de UNICEF indicó, a fines de 1993, que al menos 49 de cada 1.000 nacidos vivos fallecen por falta de atención médica o desnutrición, y otros más a consecuencia de la violencia. Más de la mitad de las mujeres no reciben atención prenatal y sólo 20% de los partos son atendidos por médicos. El informe indicó que, si bien había bajado la tasa de morbilidad y mortalidad, 50.000 mueren anualmente antes de cumplir los cinco años, de un total de 325.000 nacidos anualmente. (66)

El sector Salud estuvo a punto de colapsar a fines del año, luego de que una deuda superior a los US\$7 millones con los proveedores de materiales médicos amenazó con el cierre de los hospitales más importantes del país (estatales) y de otros 450 centros. La Procuraduría de Derechos Humanos acusó al gobierno de violar el derecho a la salud, debido a la crisis en el sistema hospitalario y al recorte al presupuesto de US\$13 millones. Según sindicatos del sector, sólo 34 de cada 100 guatemaltecos tienen acceso a la salud, mientras el resto vive en condiciones precarias.

En cuanto a Educación, Guatemala registraba a mediados de 1993 la segunda tasa de analfabetismo de Latinoamérica. El sector magisterial demandó sin éxito al gobierno una urgente reforma educativa y un aumento al presupuesto, estimado en 1.6%, según la Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media (ANEEM).

Según UNICEF, el mayor número de analfabetas en Guatemala son mujeres (57%), en su mayoría indígenas y campesinas; la cobertura de primaria es de un 60% y la de educación media sólo de 16.4%. Un informe de la OEA reportó que la insuficiencia educativa en Guatemala es tan grande, que de cada 100 niños que ingresan a la escuela en el área rural, un 85% no termina el período escolar. (67)

Considerado uno de los países más ricos de Centroamérica, Guatemala presenta además el déficit habitacional más alto de la región: un millón de familias carecen de hogar. En el país se construyen apenas 670 viviendas por cada millón de habitantes al año, informó Francisco Melgar, representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Con el aumento de los índices de pobreza crecieron también los niveles de delincuencia y, paralelamente, el narcotráfico. The Washington Post reveló a fines de 1993 la existencia de una conexión entre altos oficiales del ejército guatemalteco y el cártel colombiano de Cali, convirtiendo al país en la bodega de cocaína más grande de Centroamérica. Campesinos del departamento de Izabal aseguraron a la prensa que altos oficiales del ejército

(65) Estudio de la Universidad de San Carlos, Guatemala.

Publicado en El Gallo Ilustrado, El Día, 17/1/93, p. 15.

(66) IPS, 2/11/93.

(67) Notimex, 25/6/93.

han construido una vía férrea para el transporte de la droga que ingresa al país por la costa atlántica.

Los principales consumidores de drogas son jóvenes, en su mayoría integrados a unas 200 pandillas conocidas, al igual que en El Salvador, como "maras". Según la prensa, unos 10.000 adolescentes guatemaltecos son adictos a las drogas y viven en medio de la violencia que psicólogos atribuyen a los graves problemas económicos.

Para Wellington Tello, "educador de la calle" y miembro de la organización internacional humanitaria Casa Alianza, el origen de las "maras" es la pobreza extrema en que viven sus miembros y sus numerosas familias: "Los mayores de la familia son generalmente los que se unen a las pandillas para delinquir y llevar al menos unos billetes a la casa". (68)

Según la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), el salario promedio de los guatemaltecos es inferior a US\$80 mensuales en la capital y a US\$50 en el campo, mientras el costo de la canasta básica supera los US\$150.

A mediados de 1994, el Estado enfrentaba una profunda crisis financiera por la disminución de ingresos fiscales, mientras los índices macroeconómicos empezaron a desmejorar. Un informe de la ONU conocido entonces recomendó al gobierno combinar sus ajustes económicos con medidas "de compensación social para los sectores más desfavorecidos".

Basado en datos del ministerio guatemalteco de Planificación Económica, UNICEF indicó que el 76% de las familias viven bajo la línea de pobreza y sostuvo que el modelo de desarrollo seguido por el gobierno creó desigualdad en la distribución de la tierra y del ingreso, "lo que ha alimentado desde los años 60 el conflicto armado que ha cobrado más de 100.000 vidas".

Pese a haber logrado importantes avances, Guatemala sigue mostrando algunos de los peores índices en salud infantil, señaló el documento. Agregó que el país logró reducir su tasa de mortalidad en niños menores de cinco años de 128 a 84.4 por cada 1.000 nacidos vivos; la llegada del cólera en 1991, que obligó a aplicar severas medidas de higiene, paradójicamente logró reducir en un 30% las muertes por esta causa.

Sin embargo, el 33.6% de los menores guatemaltecos muestra síntomas de desnutrición a causa de la pobreza. La dieta se redujo "en variedad, cantidad y calidad" tras el aumento a los precios de los alimentos. Según datos de 1988, el costo promedio de la alimentación diaria llegaba a US\$1,7 dólares y el salario promedio era de US\$0,97, lo que significaba que muchos no podían cubrir siquiera el costo de la canasta básica. Se estima que esa situación es hoy dramáticamente peor.

Como otros "factores limitantes" en el desarrollo de Guatemala, UNICEF ha señalado deficiencias en educación, marginamiento de la mujer, problemas del medio ambiente y "barreras socioculturales". Indicó que en los últimos años se aplicaron medidas que, dentro del plan de ajuste, "han permitido contener en algún grado los desequilibrios fundamentales, aunque

(68) Notimex, 19/5/94.

poco se ha logrado cambiar la configuración de las condiciones de pobreza". (69)

La incapacidad oficial para garantizar el servicio de salud a un 80% de la población en condiciones de pobreza, sigue reflejándose en la falta de insumos y problemas laborales en el sector. Los 35 hospitales, 214 centros y 785 puestos de salud estatales existentes en el país trabajan a media capacidad y con apenas 1.098 médicos para atenderlos.

El problema de la red hospitalaria nacional es "endémico", pues el gobierno no puede suministrar medicinas y equipo a todos los hospitales. Según Israel Lemus, director del hospital San Juan de Dios, el principal de Guatemala, el modelo de los servicios de salud en el país es "caduco" y tiene limitaciones de todo tipo.

Si bien en los últimos años se ha erradicado la poliomielitis y reducido la mortalidad infantil de un 80 a un 56 por 1.000, según los últimos datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo existe en Guatemala una cama y un médico por cada 1.000 habitantes. Se calcula que unos seis millones de personas (60% de la población) no tiene acceso a los servicios de salud.

En la capital, donde se estiman viven tres millones de personas, sólo hay dos hospitales que funcionan con recursos del Estado y a los que llega parte del 60% de los pobres que residen en asentamiento urbanos. (70)

3. Repercusiones de la guerra

La guerra en Guatemala ha causado al menos 175.000 muertos (de ellos 70.000 indígenas, según grupos humanitarios no oficiales), 46.000 desaparecidos por razones políticas, 50.000 viudas y 250.000 huérfanos, según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). (71)

La iglesia católica, a su vez, estima en más de un millón los desplazados internos y en 45.000 los refugiados fuera del país a raíz del conflicto, que en los últimos 30 años dejó más de 440 poblaciones arrasadas. (72)

Sólo en la última década, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el conflicto militar, la pobreza y la violencia en el campo desplazaron a 500.000 indígenas de 22 etnias hacia áreas urbanas, donde viven en extrema pobreza y sin atención del Estado.

El reporte indicó que sólo en la capital y área metropolitana los indígenas conforman el 11.5% de los 2.5 millones de habitantes, integrados al trabajo informal: vendedores de chicles

(69) AFP, 25/6/94.

(70) EFE, 26/6/94.

(71) Excelsior, México, 26/11/93.

(72) EFE, 23/8/92.

y estampas religiosas, verduras y artesanías, así como peones y empleadas domésticas.

Como paradoja Guatemala, con más de 80% de la población en la pobreza, es el país latinoamericano que posee más automóviles Mercedes Benz, cuyos precios alcanzan los US\$175.000.

Organismos de derechos humanos indican que sólo en 1982 uno de cada ocho nativos abandonó sus comunidades. El Consejo de Desplazados de Guatemala (CONDEG), aseguró que los campesinos desplazados de sus lugares de origen son obligados por el ejército a integrar los paramilitares Comités Voluntarios de Defensa Civil, o Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). (73)

En ese año, unos 20.000 guatemaltecos emigraron a Estados Unidos, en su mayoría en forma ilegal. De ellos, miles de indígenas carentes de todo tipo de servicios "nunca encontraron en Florida el paraíso, sino un purgatorio en el que están atrapados", señaló un estudio del antropólogo Julián Arturo.

En 1993, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) sólo aprobó el 0.3% (44) de las 13.521 solicitudes de asilo político presentadas. En los empleos que consiguen en territorio norteamericano, los indígenas reciben salarios que representan sólo un tercio del mínimo, mientras las etnias mayas son residentes semi-legales en Florida. "Tienen una situación legal suficiente para estar disponibles como mano de obrera, pero no para exigir", observó Arturo. (74)

Otro sector víctima de la guerra lo constituyen los soldados heridos en combate con la guerrilla. Si bien las fuerzas armadas se abstienen de revelar la cifra global de lisiados, fuentes no oficiales afirman que son varios cientos, en su mayoría indígenas reclutados en el interior del país.

(73) Notimex, 16/5/94.

(74) Notimex, 19/5/94.

CAPITULO IV

EL ESTADO TRANSNACIONAL

CAPITULO IV

El Estado Transnacional

Para efectos del presente trabajo consideraremos Estado Transnacional a aquél que, sin tener raíces nacionales, ejerce directa o indirectamente presiones e influencias sobre las futuras decisiones del Estado Nacional y determina, en muchas ocasiones, el rumbo y carácter de las políticas económicas nacionales. Nos referiremos fundamentalmente aquí a los máximos organismos financieros y de crédito internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Como organismo ejecutor de muchas presiones sobre los Estados Nacionales se encuentra Estados Unidos, garante en última instancia de los preceptos del gran capital en la región centroamericana.

A diferencia de El Salvador y Guatemala, donde el Estado no ha variado sustancialmente sus funciones, el advenimiento de la Revolución Sandinista en Nicaragua (1979-1990) marca una diferencia radical en relación con los otros dos casos estudiados.

Nicaragua

1. Presiones, interferencias e influencias del Estado Transnacional

En febrero de 1990 ganó las elecciones presidenciales, con un 51% de los votos (contra 39% del sandinismo), la candidata oficial de la derecha nicaragüense y de Washington, Violeta Barrios Vda. de Chamorro.

A diferencia del advenimiento de la Revolución Sandinista, que destruyó el viejo Estado somocista y generó uno nuevo, el triunfo de Chamorro no condujo a la destrucción del Estado sandinista, aunque sí a una paulatina transformación en los ámbitos económico, político y social, a lo largo de sus casi cinco años de gobierno.

La ultraderecha, que lidera el vicepresidente Virgilio Godoy en oposición al equipo de Chamorro, pretende la construcción de un nuevo Estado y la eliminación por la vía legal de todo lo realizado durante el sandinismo. El gobierno apuesta en cambio a un "Estado Nacional" pluripartidista, no antiimperialista (por lo menos no se definen), con economía privatizada y en estrecha alianza con el capital internacional.

En la Nicaragua actual, la diferencia entre el querer y el poder, por parte del actual gobierno, está determinada por la correlación de fuerzas en la sociedad.

Sin duda, claro está, el marco global del Estado Nacional nicaragüense aparece sujeto a un proceso de privatización (a

recomendación de la banca mundial) que conlleva severas repercusiones sociales: creciente desempleo, restricción progresiva de los servicios sociales, etcétera.

Pero como señala Rui Mauro Marini, "no se debe tener miedo a la reconversión económica [...] sino a los intereses que alienta en la actualidad" el capitalismo. (1)

En este sentido, la propuesta de reforma del Estado en cuanto a privatización económica, no es el problema. Se trata de que la privatización "no sea una simple transferencia de valor hacia los privados, sino que el Estado asuma el papel rector para cohibir a las transnacionales". (2)

Debido a las transformaciones político-sociales, el Estado nicaragüense presenta hoy un carácter capitalista y transnacionalizado, pese a que existen fuerzas políticas que se oponen a la forma y ritmo que trae aparejada la "modernización". La resistencia al neoliberalismo visceral está encabezada por amplios sectores de la sociedad y por una parte del gobierno -- las Fuerzas Armadas-- que conservan en esencia valores del sandinismo, lo que contribuye a la estabilización nacional y a la misma democracia política.

El hecho de que las fuerzas armadas no respalden plenamente el proceso de privatización planteado por la derecha, ha permitido que los espacios de lucha política se conserven por la vía activa y con relativamente escasa violencia. Esta situación sobrepasa lo que Pablo González Casanova llama formas de lucha informales: "lucha informal [...] que pasa por el abstencionismo [...] hasta formas de resistencia más originales, como los métodos de organización comunal por aldeas". (3)

Con la nueva situación en Nicaragua, marcada por una paz relativa (sin la guerra de la década pasada), el Estado varió sustancialmente sus funciones: la función de integración de la sociedad nicaragüense mediante el **consenso**, predomina hoy sobre la **coercitiva**. En ello ha contribuido el FSLN, a partir de posiciones más flexibles.

Las funciones del Estado relativas a la **administración** o bien a la **producción y reproducción**, están en Nicaragua directamente subordinadas a las decisiones de los organismos financieros internacionales de otorgar o no créditos para la reactivación económica.

Ahora bien, la situación antes descrita nos lleva a señalar una función "extra" del Estado nicaragüense: la de **administrador de crisis**: el desplazamiento de esfuerzos políticos y económicos con objeto de paliar o frenar los levantamientos sociales que son, al mismo tiempo, producto de la ejecución de planes de "ajuste" estructural.

(1) Marini, Rui Mauro. "América Latina en la encrucijada", ponencia en el evento América Latina a fines del siglo XX, México, 1990.

(2) **Idem.**

(3) González Casanova, Pablo. "Estado y política en América Latina", en América Latina Hoy, Editorial Siglo XXI, México, 1990, p. 96.

En el transcurso del período en estudio (1992-94) el Estado continuó supeditado a las decisiones de los organismos multilaterales del crédito en cuanto a las formas de ejecución de las políticas económicas internas. También ha habido una serie de presiones de Estados Unidos, que exponemos a continuación para ejemplificar algunos hechos relevantes.

En los primeros meses de 1992, en una maniobra dirigida a eludir disposiciones jurídicas internacionales, como la de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (1986), Estados Unidos condonó a Nicaragua una deuda de US\$280 millones, a cambio de lo cual el parlamento derogó la llamada Ley 82, que obligaba a Washington a pagar a Nicaragua cerca de US\$17.000 millones en indemnización por los daños de guerra, como lo estipulaba el referido fallo.

Ya para el mes de mayo, el gobierno estadounidense suspendió un paquete de ayuda por US\$127 millones, alegando influencia política del FSLN sobre el gobierno de Chamorro. El préstamo fue formalmente congelado un mes después, cuando se argumentó tardanza del gobierno de Nicaragua en compensar a los terratenientes confiscados años atrás por los sandinistas.

Un grupo de 61 congresistas estadounidenses pidió en agosto liberar la ayuda económica a Managua. Según versiones extraoficiales, aunado a las presiones en torno al tema de la propiedad, el general Humberto Ortega sería el próximo "sacrificado" a cambio de la asistencia de Washington.

El diputado sandinista William Ramírez afirmó: "Podemos confirmar que el (jefe nacional de la policía) comandante René Vivas y otros 12 altos mandos policiales fueron destituidos de sus cargos por presiones Estados Unidos". Por su parte Deborah Moss, asistente del senador Jesse Helms, afirmó que la ayuda estadounidense seguiría bloqueada hasta que el gobierno destituyera a los sandinistas al frente del ejército y la policía.

Tras una reunión de emergencia, el FSLN declaró que el cese de Vivas fue "dictado" por Washington y acusó al gobierno de Chamorro de practicar una política "dependiente" de Estados Unidos. (4)

Por su parte, el comandante Daniel Ortega denunció: Estados Unidos realiza "operaciones encubiertas" contra Nicaragua y desvía fondos a través de varias de sus agencias hacia medios de prensa locales antisandinistas, grupos extremistas, sectores económicos "privilegiados" y ex **contras**. Esas acciones, agregó, son "el caldo de cultivo de la violencia en Nicaragua y atentan contra los procesos de pacificación de El Salvador y Guatemala". (5)

Las presiones en torno al tema militar continuaron. El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Managua, Ronald Godard, expresó su "preocupación" por la profesionalización de la policía en Nicaragua, considerando que su formación no era "la adecuada". La directora de la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) en

(4) La Jornada, agencias, 8/8/92.

(5) La Jornada, agencias, 9/8/92, pp. 1 y 32.

Nicaragua, Janet Ballantyne, se refirió a los cambios en la jefatura de la policía: "No los vemos como injerencismo, solamente hemos identificado problemas con el gobierno nicaraguense, que es al que le corresponde tomar las medidas convenientes".

Mientras Jesse Helms anunciaba que publicaría un "libro blanco sobre la ayuda" a Nicaragua, el diario sandinista Barricada divulgó en Managua un informe suscrito por la asistente Moss, que contenía "siete condiciones" para destrabar los fondos a Nicaragua. El documento, de 140 páginas, era según el diario "una pieza minuciosa que desemboca en un injerencismo insaciable", pues recomendaba a Washington no otorgar ayuda alguna a Nicaragua en 1992 ni 1993 si el gobierno no cumplía sus exigencias. Entre otros puntos, se exigía la devolución de las propiedades confiscadas a supuestos norteamericanos, el nombramiento de nuevos magistrados en los poderes Judicial y Electoral, y el esclarecimiento del asesinato de 217 presuntos ex **contras**.

Citando "documentos sandinistas secretos", Moss sostuvo que Nicaragua estaba controlada por "comunistas, terroristas, matones, ladrones y asesinos a los más altos niveles", y pidió condicionar la ayuda también a la destitución de los sandinistas que controlan el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la policía, y a una investigación sobre el uso dado por el gobierno a más de US\$1.000 millones entregados desde 1990.

Indicó que Nicaragua era "el país más militarizado de América Latina después de Cuba", y señaló al EPS como "la fuerza militar más grande de Centroamérica y la que cuenta con los armamentos más modernos". (6)

El ministro de la Presidencia Antonio Lacayo calificó de "negativo" el reporte de Moss y pidió compararlo con uno antes suscrito por la oficina de la Contraloría de Estados Unidos (GAO), que eximía a Managua de las acusaciones del senador. Sin embargo, reveló los cambios en la cúpula de la estructura policial eran ya inminentes.

A inicios de septiembre, el gobierno estadounidense envió a Managua una delegación diplomática para "evaluar" las denuncias contenidas en el informe republicano en torno a que el gobierno de Chamorro estaba "controlado" por el FSLN.

La presidenta Chamorro admitió ante la prensa una serie de "presioncitas" de Estados Unidos y reveló que había rechazado la formación una "junta de notables" para "asesorarla" en temas económicos. La "sugerencia" fue planteada por John Maisto, a la sazón subsecretario adjunto para Asuntos Centroamericanos de la Casa Blanca. El episodio marcaría un mal precedente para Maisto, que un año más tarde sería nombrado embajador en Managua.

Chamorro insistió en que no cedería "ante imposición, injerencia e intolerancia" pues "no voy a vender a mi patria", lo que fue interpretado por Peter Hakim, miembro destacado de Diálogo Interamericano en Washington, de esta manera: "Violeta Chamorro está atrapada entre el FSLN y el Congreso de Estados Unidos, y enfrentará un caos social si acepta las condiciones, pero más pobreza si las rechaza. Si Washington retiene la ayuda,

(6) Excelsior, corresponsal en Washington, 1/9/92, pp. 1 y 12.

los sandinistas recobrarán la presidencia y, por ello, es un grave error imponer una política al actual gobierno. La única manera de afianzar la estabilidad, afirma, es permitir a Chamorro gobernar". (7)

Ante las presiones estadounidenses, el gobierno de Nicaragua pidió al FMI una prórroga de tres meses para cumplir con los compromisos pendientes.

El primero de octubre, el Senado norteamericano aprobó US\$190 millones en ayuda para el año fiscal 1993 la que, según un comunicado oficial, se otorgaría sin restricción ni condición. Para el gobierno nicaragüense, ello reflejó la voluntad de Washington de "continuar ayudando al gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos por reestructurar su economía". Aun quedaba pendiente, sin embargo, el desembolso de los US\$127 millones retenidos.

En Caracas, Violeta Chamorro afirmó que Nicaragua "vive de la caridad pública", pero rechazó que los nicaragüenses estuvieran dispuestos a "agachar la cabeza" frente a Estados Unidos. (8)

Un mes después, el presidente George Bush anunció que en 1993 congelaría la asistencia a Nicaragua hasta el final de su mandato. Según un vocero de la embajada en Managua, la decisión respondía a que "no ha mejorado la situación" en el país.

La injerencia del llamado Estado Transnacional se reflejaba también en materia económica. Según un informe del Banco Mundial, los problemas fundamentales del desarrollo en Nicaragua eran el atraso cambiario; la incertidumbre por la discrecionalidad observada en la aplicación de las leyes; la indefinición de los derechos de propiedad; la inseguridad física; la estructura de incentivos; la baja productividad y el exceso de personal.

El diagnóstico sacudió a los círculos económicos en Nicaragua. La iniciativa privada compartió la posición del Banco Mundial. "Todo eso ya lo habíamos detectado nosotros", dijo el empresario Gerardo Gutiérrez.

En febrero de 1993, Helms volvería a la carga, enviando una carta a los líderes de la UNO, en la cual acusó a la presidenta Chamorro de ser "la cara sonriente detrás de la cual el general Ortega lleva a cabo sus actividades crueles y brutales". Helms sostuvo que el general Humberto Ortega "ha robado millones de dólares mientras miles de nicaragüenses están hambrientos". (9)

La reacción local no se haría esperar. Un mes más tarde, Luis Humberto Guzmán, coordinador de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), viajó a Washington y a su regreso reveló que Estados Unidos había decidido desembolsar US\$49 millones "pero no incondicionalmente": la entrega estaría "vinculada" a la creación de una Comisión de la Verdad en Nicaragua, para investigar casos de crímenes y corrupción, y dar paso a un diálogo nacional.

"Coincidiendo" con esa posición, un informe del BM divulgado esos días en Washington indicó que Nicaragua lograba "progresos importantes", aunque aún no alcanzaba los resultados pretendidos al adoptarse las primeras medidas de ajuste económico. "El principal reto es intensificar las reformas y lograr un

(7) The Miami Herald, P. Hakim, 28/9/92.

(8) EFE, 5/10/92.

(9) Excelsior, agencias, 1/3/93, pp. 2 y 29.

crecimiento sostenido, al tiempo que se mantenga la estabilidad macroeconómica", advirtió.

Subrayó el reporte que en 1991 Nicaragua tenía el tercer nivel más bajo de ingresos per cápita de América (US\$340), y la tasa más alta de crecimiento de población (3,3%), y afirmó que a menos que se reanudara el crecimiento económico, los ya sombríos indicadores de pobreza empeorarían rápidamente.

Según expertos independientes, la paralización de las inversiones se debía tanto a la falta de seguridad pública como a la incertidumbre sobre las reglas de juego, los derechos de propiedad y las dificultades burocráticas en el proceso de exportaciones.

El 2 de abril siguiente, el Departamento de Estado anunció su decisión de descongelar US\$50 millones de la ayuda suspendida por casi un año e informó que, en "gesto recíproco", Managua habría asegurado a Washington que el general Ortega abandonaría la jefatura del EPS en 1995.

El vocero Richard Boucher afirmó que, para seguir recibiendo asistencia estadounidense, Nicaragua debía extender el mandato de la llamada Comisión Tripartita (integrada por el gobierno, la OEA y la iglesia, para investigar violaciones a los derechos humanos); suspender a policías culpables de abusos a derechos humanos; extender por dos años la misión de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV-OEA); establecer métodos para resolver reclamos de confiscados e iniciar un diálogo con partidos políticos para alcanzar un consenso nacional.

En un gesto poco usual, un editorial del New York Times acusó a Estados Unidos de haber contribuido a los estragos causados por la guerra civil en Nicaragua y, por consiguiente, "tiene motivos" para colaborar con la estabilización del país. Sobre las demandas de retiro de Humberto Ortega, el diario criticó al senador Helms, a quien "nunca le ha molestado que en Chile un gobierno democráticamente electo acceda pragmáticamente a permitirle al ex dictador derechista general Augusto Pinochet que continuara como máximo jefe militar". (10)

Meses después, el mismo periódico estadounidense señalaría que las tres últimas administraciones de Washington eran "las responsables de la mayoría de los problemas actuales de Nicaragua", desde el apoyo dado por los gobiernos de Reagan y Bush a la **contra**, hasta el respaldo de cubanos y nicaragüenses exiliados en Estados Unidos a los **recontras**, con cierta tolerancia de la Casa Blanca.

Cuando las presiones internacionales parecían disminuir, ocurrió un extraño suceso. El 23 de mayo, explotó en el barrio Santa Rosa de Managua un arsenal clandestino que contenía armas, explosivos y documentación sobre personas "secuestrables" en 23 países latinoamericanos. El estallido del "buzón", que luego se comprobó pertenecía a la guerrilla salvadoreña, causó dos muertos, varios heridos y la destrucción de viviendas vecinas, a la vez que dio a Washington un nuevo motivo para aumentar su injerencia en Nicaragua.

(10) The New York Times, 12/4/93.

Semanas después, una iniciativa conservadora respaldada por demócratas en el Congreso, demandó al presidente Bill Clinton a suspender toda asistencia al país en tanto el gobierno de Chamorro certificara que ninguno de sus funcionarios tenía vínculos con el terrorismo. Además del "buzonazo", estaba pendiente el hallazgo de pasaportes nicaragüenses en poder de los involucrados en la explosión del World Trade Center en Nueva York, en febrero pasado.

Tras la apertura de la XXIII Asamblea General de la OEA, en Managua, el general Ortega declaró a la prensa que las crisis latinoamericanas no son sólo fruto de "golpes militares", sino de las "oligarquías" y de fuerzas económicas y políticas equivocadas de Estados Unidos. Señaló que estos factores, unidos a la presencia de "militares en una línea antidemocrática y explotadora han hecho mucho daño" a la región. Calificó al ex subsecretario de Estado Bernard Aronson (presente en la reunión de la OEA) como "el símbolo de la injerencia, de la prepotencia, de la vulgaridad en las relaciones entre los Estados". (11)

Pese a todas las protestas, la presidenta Chamorro confirmó el 6 de julio que Estados Unidos reduciría casi en un 50% (a US\$66 millones) su asistencia al país para 1994, con relación a 1993, cuando la ayuda comenzó un gradual retroceso y se ubicó en US\$109 millones, según fuentes de la AID. La reducción del apoyo económico estadounidense significaba el seguro aumento de la dependencia del país con los organismos multilaterales: el BM, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hacia fines del mes, el Senado aprobó una resolución pidiendo al gobierno de Clinton congelar toda ayuda financiera a Nicaragua, a condición de que el gobierno identificara y capturara a los supuestos involucrados en el asunto de los pasaportes y la voladura del World Trade Center. Según líderes sandinistas, la resolución senatorial pretendía "querer ejercer la justicia en nuestros países de una manera intervencionista".

La "anuencia" de la presidenta Chamorro a las investigaciones de organismos policiales internacionales como el FBI y la Interpol, llevó a someter a Nicaragua a una investigación sobre la existencia de arsenales clandestinos y los presuntos vínculos de funcionarios del gobierno con el terrorismo internacional. La mandataria dijo que no tenía "nada que ocultar" y se declaró "horrorizada" por la violencia.

La prensa estadounidense continuó respaldando la presión oficial sobre Nicaragua. En un editorial, The New York Times sostuvo que el general Humberto Ortega debía dejar la jefatura del EPS, o la presidenta Chamorro perdería el apoyo de la "comunidad internacional". Según el diario, el principal problema del gobierno era la existencia de "un aparato militar abusivo" controlado por el FSLN. "Por lo que parece, Nicaragua ha tomado el camino de la triste tradición latinoamericana de un control débil o inexistente de los militares por el poder civil", destacó. (12)

(11) El Día, corresponsal, 8/6/93.

(12) La Jornada, agencias, 31/7/93, pp. 1 y 36.

A su vez The Washington Post pidió a Chamorro revisar su decisión de haber dejado al frente del EPS a "elementos sandinistas". Ante la ofensiva de la prensa norteamericana, el ex embajador nicaragüense en Estados Unidos, Carlos Tunnermann, denunció la existencia de una "campaña injerencista" contra el país.

Días después, el gobierno nicaragüense "invitó" a la ONU y la OEA para observar una actualización de los inventarios de armas del EPS. En una carta a Boutros Ghali, el canciller Ernesto Leal dijo que con esa medida se pretendía "dar un paso más en nuestra política de transparencia en relación a los asuntos militares".

Comentando la situación de Nicaragua, periodistas latinoamericanos observaron que, por considerar que el acceso de Chamorro al poder había sido un triunfo de la política exterior estadounidense, la Casa Blanca se sentía con derecho de presionar al gobierno, impidiendo alcanzar la democracia.

Rodrigo Carazo, ex presidente de Costa Rica y profundo conocedor de la realidad nicaragüense (fue contemporáneo del dictador Somoza en sus últimos meses de gobierno), se refirió a las presiones estadounidenses sobre Nicaragua: "No podemos permitir que haya quien quiera que doña Violeta haga lo que a ellos les parezca; deben dejarla gobernar. Tenemos una responsabilidad directa de ayudar a Nicaragua y de que allí se establezca un clima de tranquilidad mediante la voluntad política conjunta de los centroamericanos".

Tras declararse convencido de que Estados Unidos "no tiene capacidad para ayudar a nadie", Carazo recordó lo sucedido en 1991 cuando, siendo presidente, expulsó de Costa Rica a los representantes del Fondo Monetario Internacional: "El FMI me pidió que niveláramos el presupuesto a toda costa y que para ello debíamos cerrar hospitales, escuelas y servicios públicos para la gente de más escasos recursos. Les dije que lo único que íbamos a cerrar eran las puertas de este país a ellos y que se me fueran en 48 horas". (13)

Hacia fines de agosto de 1993, el vocero del Departamento de Estado, Mike McCurry, advirtió que Nicaragua necesitaba hacer progresos visibles en el establecimiento de un "genuino control" civil sobre las fuerzas de seguridad y los militares, a fin de que la ayuda externa continuara. No precisó entonces si toda nueva asistencia estaría sujeta a medidas en ese sentido, pero dijo haber "puesto en claro" a Chamorro que los referidos "progresos" eran "necesarios".

Esa "necesidad" fue corroborada por Managua con hechos casi inmediatos. El jefe de la inteligencia militar, coronel Lenín Cerna, fue separado de su cargo a fines de agosto, cuando se anunció además el inminente retiro de los altos oficiales del EPS.

Tras la separación de Cerna, ocurrió otro suceso aún más sorprendente. Al presidir un acto militar, Violeta Chamorro anunció que el general Ortega dejaría su cargo en 1994. El jefe militar minimizó la declaración y comentó que la mandataria "sólo expresó su deseo", pues los mandos castrenses sólo acatarían "lo establecido por la ley".

(13) Excelsior, 2/9/93.

La revelación en torno a la salida del polémico militar, la cual recibió el inmediato aplauso del Departamento de Estado, provocó una crisis de poder entre el gobierno y el ejército.

"Los deseos de la presidenta Chamorro tienen que ajustarse a la Ley de Organización Militar vigente y a la Constitución", dijo por su parte el general Joaquín Cuadra, posición que fue respaldada por los jefes de la policía.

En abierto desafío, los militares desconocieron la autoridad de Chamorro, quien pidió apoyo al Consejo Permanente de la OEA, que en menos de 24 horas emitió una declaración en respaldo a la mandataria.

El Frente Sandinista criticó al gobierno por haber recurrido a la OEA y calificó de "inaceptable" el anuncio de destitución del jefe del ejército. Daniel Ortega atribuyó la medida oficial a presiones de la "extrema derecha" y advirtió: "Hacer este anuncio simplemente porque hay una presión del señor Helms, es faltarle a las leyes nacionales, violentar el Estado de Derecho y alienar la autodeterminación y soberanía de Nicaragua".

El nuevo embajador estadounidense, John Maisto, iniciaba en esos días su gestión diplomática en Managua reiterando las declaraciones del secretario de Estado, Warren Christopher, en apoyo a "los valientes pasos hacia la afirmación del control civil sobre el ejército y el servicio de inteligencia". (14)

Sometida a la presión externa y limitada en su actuación por la posición nacionalista del ejército y el sandinismo, la presidenta Chamorro trató en más de una ocasión mostrar confianza en torno al futuro de sus relaciones con Washington, que consideró "muy optimista". En un intento de auto-reafirmación, repetiría: "No vendo mi patria por un centavo y no voy a hacer cambios bajo ninguna presión".

A inicios de octubre y luego de cuatro meses de "investigaciones", el subsecretario de Estado Alexander Watson admitió que el gobierno de Nicaragua estaba completamente desvinculado de actos terroristas internacionales. Sin embargo, dijo, el sandinismo ha operado en el país "casi como un Estado dentro de otro Estado", a la vez que acusó al ejército y la policía de violar los derechos humanos. Watson afirmó que uno de los problemas cruciales del país era "la impunidad de las Fuerzas Armadas" e insistió en el retiro del general Ortega. (15)

A raíz de la citada "certificación", Washington oficializaría a inicios de 1994 la entrega de los US\$40 millones retenidos desde mayo de 1993.

Meses después, a mediados de noviembre, el gobierno se aprestaba a negociar y firmar acuerdos con el FMI y el BM, para acceder a US\$220 millones en préstamos para el período 1994-96. Uno de los acuerdos claves era el llamado Servicio Financiero de Ajuste Estructural (ESAF), por US\$82 millones, previsto a aplicarse a cambio de "reformas moderadas" al plan de estabilización puesto en marcha en 1991.

Los términos del ESAF --que sería firmado a mediados de abril-- planteaban una reducción de US\$60 millones al gasto público

(14) AFP, 4/9/93.

(15) AFP, 6/10/93.

mediante el despido de empleados estatales y la privatización de empresas estatales. Ello implicaba "ajustes" que afectarían a unos 15.000 trabajadores, de los cuales 4.000 serían despedidos en 1994. Sin embargo, el FMI cedió en una de sus demandas para privatizar la banca estatal nicaragüense, al comprobar que los siete bancos privados del país tenían escasa participación en la producción nacional.

Debido a las excesivas exigencias del FMI, los productores buscaron sin éxito una alianza económica con el gobierno de Chamorro, para forzar a ese organismo a flexibilizar sus posiciones y lograr un cambio radical en la política del país. Según Daniel Núñez, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la estrategia fondomonetarista había promovido, en vez de detener, la migración del campo a la ciudad y perseguía el objetivo de "convertirnos en un país consumista, vendedores de mano de obra barata y migrante".

Los organismos internacionales insistieron en la necesidad del ajuste como condición del desarrollo. En declaraciones en Managua, el presidente del FMI, Michel Camdessus, afirmó: "el problema más urgente de Nicaragua es la pobreza, pero no se puede reducir sin cambiar nada".

Mientras el jefe del BID, Enrique Iglesias, dijo observar un "balance positivo de los planes económicos" del gobierno (con el cual el BID negoció créditos por US\$500 destinados a fortalecer la infraestructura, la empresa privada, las reformas económicas y los programas de desarrollo social), el director del Banco Mundial para América Latina y El Caribe, Robert Lacey, sostuvo: Nicaragua debe "continuar y profundizar" el programa de ajustes para salir del estancamiento económico. (16)

A inicios de abril, el vicepresidente Virgilio Godoy reveló que el FMI había pedido a Chamorro la destitución del general Ortega por considerarlo "un factor de desestabilización", además de otras presiones como la devolución de bienes confiscados a ciudadanos "estadunidenses". El gobierno negó que Estados Unidos le hubiera dado un ultimátum para resolver el conflicto de la propiedad (ver capítulo VI).

Al comentar una eventual aplicación en Nicaragua de la enmienda González-Helms (sobre propiedades), el embajador Maisto dijo que dependería de si "satisfacían" o no a Washington los mecanismos de indemnización aplicados por el gobierno nicaragüense; de lo contrario, Nicaragua podía ser sancionada con la suspensión de la ayuda económica. La enmienda también afectaría los préstamos concedidos a la nación por organismos financieros internacionales, calculados en US\$240 millones para el próximo trienio.

Según Maisto, de un total de 1.285 reclamos de propiedad por parte de "ciudadanos estadunidenses", sólo se habían resuelto 170 hasta mayo de 1994, aunque el gobierno de Managua afirmaba que únicamente quedaban por resolver 256 demandas. La diferencia de cifras se debe a que Nicaragua sólo reconoce como estadunidenses a los que tenían esa nacionalidad al momento de la expropiación (antes de 1980) y no después (contras y somocistas). Para que no

(16) EFE/UPI, 25/3/94.

quedaran dudas, Maisto sostuvo: "para nosotros sólo hay una clase de ciudadanos estadounidenses y punto".

A las presiones en torno al asunto de la propiedad se sumó Robert Torricelli, demócrata por New Jersey, quien declaró en Managua que la devolución de propiedades confiscadas era "necesaria" para seguir recibiendo ayuda de Estados Unidos.

En respuesta a Torricelli, el FSLN solicitó respaldo internacional tras indicar que el gobierno de Chamorro había demostrado disposición de solucionar el problema de la propiedad mediante la indemnización a los perjudicados.

Días después, el ex presidente James Carter visitó Nicaragua para reunirse con líderes políticos, en un intento de "conciliar posiciones" de cara a las elecciones de 1996". Carter ofreció mediar en el problema de la propiedad y propuso al gobierno la creación de tribunales especiales para resolver los reclamos de bienes confiscados, mediante la revalorización de los bonos de indemnización.

"Mucha gente no reconoce los tremendos logros alcanzados en este país en los últimos años", observó el ex mandatario estadounidense al elogiar "el gran progreso hecho aquí bajo la democracia y en circunstancias muy difíciles". En contraposición a los sectores estadounidenses que apoyaban la devolución de propiedades, Carter subrayó que las leyes 85 y 86 (emitidas por los sandinistas para beneficiar con propiedades urbanas y rurales a miles de personas), debían ser acatadas. Su declaración recibió airadas críticas de juristas nicaragüenses de derecha, que le calificaron de "injerencista".

El Salvador

1. Presiones, interferencias e influencias del Estado Transnacional

A lo largo de estos dos años la línea política de Washington hacia El Salvador sufrió modificaciones en su forma, mas no en su contenido. Ello influyó en las presiones económicas de los organismos internacionales que, igualmente, variaron su política económica.

No fue sino a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en enero de 1992, y sobre todo tras el desarme del FMLN 11 meses después, cuando Estados Unidos mostró un "cambio" en relación al apoyo incondicional mantenido al régimen salvadoreño en la década pasada.

Luego del cumplimiento exitoso de la estrategia de "guerra de baja intensidad" en su fase de **reversión de procesos y de contrainsurgencia**, el FMLN no representaba ya una amenaza seria para los intereses estratégicos de Washington en la región.

Por lo mismo, Estados Unidos se presentaría ahora "neutral" ante el cumplimiento de los acuerdos y, más aún, exhibiría un nuevo rostro: defensa de los derechos humanos y presión al gobierno salvadoreño en torno al cumplimiento de lo acordado con la guerrilla. Incluso, en un desborde de "generosidad", prometió ayudar a "encontrar" a los responsables de los escuadrones de la muerte.

Así, el período en estudio aparece marcado por la "nueva" imagen de Estados Unidos, convertido en el principal crítico del gobierno salvadoreño.

Sin embargo, la reestructuración del ejército emprendida hacia fines de 1990 (ver capítulo VI) e iniciada con el nombramiento del coronel Emilio Ponce como ministro de Defensa y del coronel "moderado" Mauricio Vargas como subjefe del Estado Mayor, se interpretaba ya como un resultado de las presiones de la Casa Blanca para forzar la mediatización de los sectores de ultraderecha y promover una negociación seria del gobierno con la guerrilla.

La supuesta "autodepuración" de las fuerzas armadas, calificada por la oposición como "cosmética", aparecía entonces como objetivo de Washington en momentos en que el Congreso discutía nuevamente el recorte de la asistencia militar estadounidense al gobierno salvadoreño. La nueva política norteamericana se reflejaba, hasta el momento, en un visible cambio en la retórica oficial hacia el FMLN y en el ascenso de "nuevas" caras en mandos claves del ejército. (17)

Tras la discusión sobre el apoyo bélico al ejército salvadoreño, el presidente Bush decidió, el 15 de enero siguiente, descongelar los US\$42.5 millones de asistencia militar retenidos por el Congreso en octubre anterior, en base a una supuesta violación del FMLN a los acuerdos de la ley de ayuda letal.

(17) Inforpress Centroamericana, 20/9/90, pp. 12 y 13.

Washington no olvidó a sus aliados salvadoreños, si bien varios analistas pronosticaban hasta entonces que la política exterior estadounidense hacia El Salvador estaría marginada durante un tiempo, pues sus intereses políticos y materiales se concentrarían en la guerra del Golfo Pérsico.

La guerrilla calificó la decisión de Bush como "otro error de los norteamericanos" y sostuvo que la asistencia militar no podría "doblegar sus esfuerzos para una negociación seria"; en tanto, la iglesia advirtió que la reanudación de la ayuda podría provocar "una tentación más manifiesta de que la guerra finalice en forma militar". (18)

Analistas estadounidenses consideraron que, al desembolsar la asistencia al ejército salvadoreño, el Departamento de Estado dejaba a un lado las causas que habían llevado a su retención: el esclarecimiento del crimen de los jesuitas y el proceso negociador con la guerrilla. Pero la cancillería norteamericana no tardó en revelar su propósito real: la ayuda no sería liberada si el FMLN aceptaba un cese del fuego, condicionamiento que dio origen a una novedosa propuesta de paz presentada en esos días por la guerrilla (ver capítulo VI).

En julio de 1992, el FMLN pidió una "pronta intervención" del Congreso de Estados Unidos en el proceso de paz, en vista de la "lentitud" mostrada por el gobierno de Alfredo Cristiani y la AID en la ejecución de los programas de pacificación.

Mientras, el jefe de la Misión de Observadores de Naciones Unidas (ONUSAL), Iqbal Riza, reconoció que el gobierno estaba retrasando la aplicación de acuerdos para la creación de la academia de seguridad pública y los programas de integración para los ex combatientes del FMLN, así como su legalización como partido político.

Según el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, existían signos preocupantes sobre el cumplimiento de los acuerdos, pese a que Washington había otorgado US\$90 millones al proceso de paz. Dijo que existía "desilusión" en la comunidad internacional con relación al inventario de armas entregado por el FMLN a la ONU, pues "no es exacto y nadie lo cree".

En un aparente intento de Washington por aliviar tensiones a lo interno y presionar a los mandos del ejército salvadoreño, a fines del año visitó el país el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Colin Powell. Se dijo que esa visita intentaba evitar un eventual golpe de Estado, en vista del malestar en la oficialidad castrense tras la purga de sus principales jefes (entre ellos el ministro y viceministro de Defensa, generales Emilio Ponce y Orlando Zepeda), involucrados en el informe de la Comisión Ad Hoc sobre depuración de las fuerzas armadas. (19)

En apoyo al objetivo de la visita de Powell, Washington confirmó que mantendría suspendida la ayuda militar a El Salvador para presionar al gobierno a concluir la depuración del ejército, acordada con el FMLN.

(18) Inforpress, 24/1/91, pp. 8 y 9.

(19) La Jornada, agencias, 13/11/92, pp. 52.

A su vez, salieron a luz informes hasta entonces no revelados. The New York Times y la cadena de televisión CBS acusaron al ex presidente Reagan de "ocultar la verdad" en sus informes al Congreso, para que éste autorizara la ayuda militar al gobierno salvadoreño. Los gobiernos de Reagan y Bush destinaron US\$6.000 millones de ayuda al gobierno y ejército durante los 12 años de guerra, y aprobaron el entrenamiento del batallón Atlacatl que, según el informe, "cometió las peores masacres de la guerra". (20)

Diversos sectores de Estados Unidos exigieron revisar la actitud del gobierno en El Salvador, así como el apoyo de exiliados salvadoreños en Miami a los escuadrones de la muerte.

Citando documentos oficiales, los diarios The Washington Post, The New York Times y Miami Herald, coincidieron en que los gobiernos de Reagan y Bush encubrieron crímenes políticos de las fuerzas armadas salvadoreñas, a fin de que el Congreso autorizara US\$6.000 millones en ayuda militar.

En el mismo sentido, el influyente congresista demócrata Joseph Moakley expresó su decepción por la aprobación de una amnistía para los señalados por la ONU como violadores de derechos humanos. "Nuestra esperanza hubiera sido que el pueblo de El Salvador tuviese la oportunidad de leer a fondo el reporte, asimilarlo y debatirlo antes de pasar a una amnistía", comentó Jim McGovern, asistente de Moakley.

A raíz del informe de la ONU, el secretario de Estado Warren Christopher ordenó revisar la conducta del Departamento de Estado durante la guerra en El Salvador, en vista de que la publicación de ese documento --dijo-- "repercute en las operaciones" de esa dependencia. (21)

La decisión de Christopher fue motivada también por la insistencia de la orden religiosa Maryknoll en torno a la creación de una Comisión de la Verdad en Estados Unidos: "Como El Salvador a través de su Comisión de la Verdad necesita enfrentar su propio pasado, nosotros también necesitamos hacer lo mismo con los estadounidenses. El esfuerzo para decir la verdad en El Salvador nos alienta a nosotros a hacer lo mismo. ¿Podremos ver los años y páginas de mentiras dichas y aceptadas, los intentos de reescribir la historia, la irresponsabilidad fiscal que contribuyó con miles de millones de dólares para la tortura y el asesinato en otro país?", señalaron los religiosos en una carta a Christopher.

En la última semana de marzo, el Pentágono y la CIA entregaron a los Archivos de Seguridad Nacional gran cantidad de informaciones secretas, donde se detallaba el caso Romero. Las mismas confirmaron los vínculos entre militares salvadoreños y dirigentes de grupos clandestinos de derecha en los primeros años de la guerra, junto a voluminosos documentos sobre diversos aspectos del papel norteamericano en la guerra salvadoreña.

Uno de esos reportes de la CIA, que comenzaron a ser difundidos casi de inmediato en Estados Unidos, señalaba: "La ultraderecha en El Salvador tiene una larga historia en el uso de

(20) El Financiero, agencias, 17/3/93.

(21) DPA, 24/3/93.

la violencia como arma política, marcada mayormente por la amplia represión y muerte de campesinos tras la rebelión de 1932". Según la Agencia, "tradicionalmente los escuadrones de la muerte incluían civiles mercenarios, grupos vinculados a las clases más ricas del país y miembros de los cuerpos de seguridad activos y en retiro". (22)

Intentando desconocer la amnistía para los militares, aprobada 8 por sólo tres partidos de derecha en el parlamento salvadoreños, abogados del gobierno de Estados Unidos estudiaron la posibilidad de llevar a los acusados ante la justicia. En Washington, diversos grupos de derechos humanos gestionaron ante el gobierno la publicación de los nombres de los militares y civiles que organizaron y financiaron los escuadrones de la muerte.

Al analizar la participación del gobierno estadounidense en apoyo al ejército salvadoreño y los grupos paramilitares, un diario mexicano retomó antiguas denuncias en torno a la injerencia de Washington en el país, entre las cuales destacaba una, publicada en 1985 por el desaparecido dirigente Guillermo Ungo en la Revista Internacional:

"El principal obstáculo que impide la búsqueda de un arreglo pacífico del conflicto salvadoreño es la política del gobierno de Reagan, que hace todo lo posible por apuntalar el régimen de Duarte. El Salvador recibe diariamente más de un millón y medio de dólares de la administración estadounidense. De manera que Estados Unidos es el que conduce y determina toda la estrategia de contrainsurgencia en nuestro país. No me refiero solamente a la conducción estratégica de la guerra, sino también a la conducción táctica y operacional de la misma. Así lo atestiguan periodistas que han visto y demostrado documentalmente la participación de asesores estadounidenses en aspectos estrictamente operacionales de la guerra. Son miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses los que entrenan a más de la mitad de los efectivos militares del régimen en El Salvador, los que vuelan con pilotos salvadoreños en misiones aéreas nocturnas, los que efectúan sus propias misiones de inteligencia y transmiten los datos al mando del Ejército.

"En Washington se deciden también muchas cuestiones políticas y sociales que atañen a nuestro país. Es allí donde se determina cuándo, cómo y dónde llevar a cabo una u otra acción, financian las elecciones como componente de la estrategia de contrainsurgencia, conducen la actividad política y diplomática del régimen. Y, como ya hemos dicho antes, Estados Unidos está claramente en contra del diálogo, pero no sólo en el caso salvadoreño. Ha saboteado, por ejemplo, las conversaciones con Nicaragua en Manzanillo, y obstaculiza continuamente la puesta en práctica de las iniciativas del Grupo de Contadora. De manera que Estados Unidos quiere imponer por la fuerza, como principal componente de su estrategia política y diplomática, su dominación en la región centroamericana.

"Dada la visión, estrictamente bipolar, de los conflictos locales que tiene el actual gobierno estadounidense, todos

(22) La Jornada, corresponsales, 4/4/93, p. 29.

aquellos movimientos o conflictos que parecen constituir, según él, una amenaza a los intereses de Estados Unidos, se atribuyen inmediatamente a la acción de la URSS o sus aliados regionales. Entre otras palabras, se sostiene que detrás de cada punto caliente en el mundo está la 'mano de Moscú' sin detenerse a mirar las condiciones de pobreza, desigualdad, injusticia y represión que motivan los conflictos. Sobre esta base, se pretende justificar una intervención militar cada vez mayor para aplastar los movimientos de liberación nacional.

"(...) El imperialismo ve que el auge de los movimientos de liberación nacional amenaza sus intereses hegemónicos. Por eso Estados Unidos se prepara nuevamente para un rol de 'gendarme global' como el que tuvo hasta antes de su derrota en Vietnam. Esto no va dirigido solamente contra los países socialistas. Las fuerzas estadounidenses de despliegue rápido tienen, como misión primordial, aplastar la resistencia de los pueblos agredidos en cualquier zona conflictiva del Tercer Mundo." (23)

Como parte de su presión sobre el gobierno salvadoreño, a fines de marzo de 1993 el secretario de Estado Warren Christopher exigió al presidente Cristiani cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en torno a la destitución de altos mandos del ejército y de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario se declaró "profundamente horrorizado" después de leer el documento.

Cuatro meses después, la llamada Comisión Christopher concluiría que Estados Unidos actuó de manera "deficiente" en materia de derechos humanos en El Salvador durante los 80 y cometió "errores" al investigar crímenes como la matanza de El Mozote. No obstante, indicó, el personal diplomático de Estados Unidos en el país actuó en forma "encomiable" y a veces con "actos de valentía personal".

De acuerdo al informe, no se encontraron evidencias de que funcionarios mintieran intencionalmente al Congreso de Estados Unidos acerca de El Salvador, aunque "definitivamente" hubo ocasiones en que la promoción política se mezcló con declaraciones interpretadas como un intento de engaño al Legislativo. Indicó que la embajada presionó firmemente al gobierno salvadoreño y a los militares para que llevaran ante la justicia a los acusados de violar los derechos humanos, y que pese a un gran esfuerzo se logró "un modesto progreso".

A juicio del influyente columnista Anthony Lewis, del New York Times, "el informe (de la Comisión de la Verdad) fue un reto directo a los funcionarios de Estados Unidos que aseguraron que nosotros armáramos y apoyáramos a esas fuerzas armadas" (salvadoreñas). "Los hombres responsables de la política hacia El Salvador no admiten ni lamentan nada. Su respuesta es: 'No sabíamos quién cometió las atrocidades y de todas formas, nuestra política era la correcta porque derrotó al comunismo'".

Según Lewis, los funcionarios norteamericanos conocían las atrocidades del ejército, como el asesinato de monseñor Romero. Aseguró tener información de que "el gobierno estadounidense tenía pruebas aún más devastadoras" sobre ese caso, procedentes de los aparatos de inteligencia. "La CIA sabía quién jaló el gatillo

bajo las órdenes de D'Abuissou. Era un oficial regular del ejército, cuyo nombre de guerra era 'Capitán V'." Señaló que esta información no se presentó al Congreso, con la excepción de una sola consulta con un senador, "y aun dentro de la CIA fue suprimida". (24)

En una carta enviada a Cristiani, un grupo de congresistas estadounidenses señaló que, para volver a recibir ayuda militar norteamericana, el gobierno de El Salvador debía remover a los militares acusados de violar los derechos humanos. El legislador estadounidense Dan Hamborg calificó de "preocupante" la posición de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en torno al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, debido a la negativa del presidente de ese cuerpo, Mauricio Gutiérrez, a la renuncia de los magistrados.

Días después, más de la tercera parte de los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos urgieron a Cristiani continuar las reformas en las fuerzas armadas y destituir a los acusados de corrupción y violación a los derechos humanos, o de lo contrario la ayuda económica de Washington continuaría suspendida.

Las presiones de Washington sobre el gobierno de Cristiani se trasladarían luego al FMLN, tras el hallazgo, el 23 de mayo, de un arsenal clandestino en Managua. La Casa Blanca expresó "profunda preocupación" por el "buzón" de la ex guerrilla salvadoreña y advirtió que ello pondría en duda el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del FMLN.

Al mes siguiente, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Peter Romero, informó que podrían descongelarse US\$11 millones en ayuda militar, una vez que se constatare la depuración de las fuerzas armadas. La ayuda había sido retenida en febrero anterior, a raíz de que continuaban en sus puestos 15 oficiales que integraban una lista de 102 militares señalados como violadores de los derechos humanos.

A esa revelación siguió el anuncio del jefe del comando Sur de Estados Unidos, general George Joulwan, en torno a la eventual reanudación de la ayuda militar a El Salvador y su apoyo al proceso de pacificación, instando a los militares salvadoreños a vivir "como verdaderos compañeros y aliados". (25)

Pese a la renovación de la asistencia bélica, la ayuda económica norteamericana fue condicionada, a inicios de septiembre, a la aplicación de medidas de tipo electoral por parte de las autoridades salvadoreñas. Al Tribunal Supremo Electoral --que a juicio de Washington no hacía "un esfuerzo real" por concluir el empadronamiento de cara a las elecciones de 1994-- se le exigió prorrogar por tres meses el empadronamiento, a la vez que se instó a los partidos políticos, en particular al FMLN, a no poner obstáculos a ese proceso.

El continuo accionar de los escuadrones de la muerte, que cobró la vida del alto dirigente del FMLN Francico Velis, motivó una nueva reacción de Washington. En un comunicado, el gobierno de Bill Clinton calificó el crimen como "acto despreciable" e

(24) La Jornada, correspondientes, 4/4/93, p. 29.

(25) La Jornada, agencias, 23/7/93.

"insulto a los innumerables salvadoreños que trabajan por la paz y la democracia".

La Casa Blanca ofreció brindar "informes y recursos necesarios" (que nunca aportó) para encontrar a los culpables del crimen. En ese mismo sentido, el subsecretario de Estado Watson declaró semanas después: El gobierno de Estados Unidos hará "todo lo que pueda para terminar con la violencia política que afecta a El Salvador".

A mediados de diciembre, el Departamento de Estado confirmó la autenticidad de unos documentos acerca del entrenamiento dado por oficiales militares de Estados Unidos a acaudalados civiles salvadoreños, supuestamente vinculados a los "escuadrones de la muerte". El vocero Mike McCurry confirmó que un artículo aparecido en The New York Times estaba basado en informes antes confidenciales que el Departamento decidió hacer públicos.

El artículo señaló que el entonces embajador de Estados Unidos, William G. Walker, había comunicado en un telegrama al Departamento de Estado en octubre de 1990, que había sabido del programa de entrenamiento a un grupo de 50 a 60 civiles autollamados "los patrióticos" e integrado por "extremistas jóvenes y acaudalados". Citando informes de la inteligencia estadounidense, aseguró que ese proyecto estaba "siendo usado para encubrir actividades de los escuadrones de la muerte".

Un nuevo elemento de tensión entre ambos gobiernos surgió a inicios de 1994, cuando Cristiani acusó a Estados Unidos de "pisotear" las leyes salvadoreñas al haber trasladado ilegalmente fuera del país al oficial mayor Ismael (Mike) López, agregado militar adjunto de la embajada en San Salvador, acusado del asesinato de su guardaespaldas salvadoreño, Cresencio Díaz.

La iglesia salvadoreña criticó la actitud "indecorosa" de la embajada norteamericana. "Es cierto que somos un pequeño país, pero debemos exigir respeto, incluso a las grandes potencias", afirmó el arzobispo Arturo Rivera y Damas. (26)

Las presiones del Congreso estadounidense en torno a los acuerdos de paz, continuaron durante 1994. El legislador Joseph Moakley, reiteró en San Salvador que toda asistencia de su país estaría condicionada al cumplimiento de todos los acuerdos entre el gobierno y la ex guerrilla.

Otras críticas surgieron a raíz de los comicios presidenciales de fines de marzo, cuando congresistas demócratas estadounidenses advirtieron que se opondrían a la liberación parcial de la ayuda económica (US\$55 millones en Fondos de Apoyo Económico (ESF) retenidos desde agosto anterior), debido a irregularidades detectadas en el proceso electoral salvadoreño.

Dan Hamburg, demócrata por California, denunció haber tenido "problemas" durante su estancia como parte de un grupo de 500 observadores del proceso electoral, que "podrían calificarse de negligencia premeditada" de las autoridades electorales. La "mala administración y confusión que caracterizaron el proceso pueden haber influido a que un mayor número de ciudadanos se abstuviera de votar", dijo Hamburg.

Una semana después, otros congresistas norteamericanos urgieron al presidente Clinton revisar y condicionar a los avances democráticos en El Salvador, los préstamos de organismos financieros internacionales. Se declararon "consternados" por las fallas registradas en las elecciones del 20 de marzo y pidieron mantener "la presión" a fin de corregirlas antes de la segunda ronda electoral.

Esa presión se mantuvo por varios días, hasta que a mediados de abril 74 congresistas coincidieron en que el gobierno debía retener la ayuda económica a El Salvador, hasta no obtener mayor avance en las reformas democráticas. Esta posición chocó con la mantenida por otros 40 legisladores demócratas y republicanos, que pidieron a Clinton respaldar económicamente "la transición histórica que se lleva a cabo" en el país. (27)

(27) Notimex, 29/4/94.

Guatemala

1. Presiones, interferencias e influencias del Estado Transnacional

Las conflictivas relaciones entre Guatemala y Estados Unidos estuvieron determinadas en los últimos años por sucesos políticos, vinculados especialmente a las constantes denuncias contra el ejército y grupos cercanos al gobierno guatemalteco en torno a casos de violación a los derechos humanos.

Estos casos, en cuya denuncia intervinieron activamente personajes y organismos humanitarios norteamericanos, políticos y miembros del Congreso y el Senado de Washington, se tornaron más graves una vez que diversos casos de secuestro, tortura y asesinato comenzaron a afectar a civiles de nacionalidad estadounidense. Uno de ellos fue el secuestro y posterior asesinato en Guatemala del estadounidense Michel Devine, muerto en 1990 por elementos vinculados a las fuerzas armadas, con supuesta participación de un coronel y un jefe de inteligencia militar. (28)

El asesinato de Devine y la masacre de 15 indígenas en Santiago Atitlán, fueron el detonante de nuevas protestas en torno a violación de derechos humanos por parte del ejército, lo cual --sumado a la presión desde Estados Unidos-- derivó a finales de año en la decisión del Departamento de Estado de retener la asistencia militar a Guatemala.

La ayuda bélica estadounidense había sido suspendida por primera vez en 1977 y reanudada en 1985, cuando se concedieron US\$500.000. Con el gobierno democristiano ascendió progresivamente, pasando de US\$5.4 millones en 1986 a US\$9.4 millones en 1989. El apoyo de Washington al ejército guatemalteco se redujo en 1990 a US\$3.3 millones, según la AID, y se estimaba que para 1991 la asignación ascendería a US\$5.5 millones. (29)

En 1992, a raíz de que Estados Unidos habría dado protección diplomática a una presunta guerrillera, el presidente Serrano expulsó del país al agregado de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos, George Chester, por su "inaceptable injerencia" en asuntos políticos.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, el conflicto entre ambos gobiernos inició cuando el agregado Chester acusó al ejército de haber secuestrado a Maritza Urrutia y haberla obligado a confesar públicamente que pertenecía a la guerrilla. Fuentes de la embajada estadounidense expresaron su "profundo malestar" por la situación y advirtieron que una virtual expulsión del funcionario "tendría nefastas consecuencias".

Los roces y presiones estadounidenses contra el gobierno guatemalteco se profundizaron cuando en octubre de ese año un tribunal militar declaró culpables a cinco soldados acusados de asesinar al estadounidense Michael Devine. No satisfecha con el fallo, la embajada norteamericana señalaría que la sentencia emitida "de ninguna manera cumple con la justicia".

(28) Inforpress, 27/9/90, p. 16.

(29) Inforpress, 10/1/91, p. 8.

"Todavía no ha sido resuelta la pregunta esencial referente a la responsabilidad dentro de la estructura de mando", indicó un informe diplomático y aseguró que el fallo era "solamente el final de la primera fase del proceso legal en el caso". El gobierno rechazó la "evidente intromisión" de la embajada de Estados Unidos.

Pese a que los soldados fueron condenados a 30 años de prisión por secuestrar y asesinar a Devine, el Congreso de Estados Unidos condicionó la ayuda económica a Guatemala, recortada ya en cerca de US\$30 millones, y eliminó la asistencia militar y la ayuda para la balanza de pagos para el período fiscal 1993.

El ascenso de Bill Clinton al gobierno de Estados Unidos, provocó nerviosismo y preocupación entre los sectores dominantes guatemaltecos. The Christian Science Monitor advirtió que Guatemala constituía para el gobierno de Clinton una oportunidad de promover los derechos humanos: si Estados Unidos apoyaba a Serrano y brindaba respaldo económico a los refugiados, podría ayudar a una paz real, según el diario. (30)

En otro sentido y como reflejo del paternalismo histórico de Estados Unidos hacia Guatemala, debe apuntarse que la propia URNG propuso incorporar al vecino del norte al "grupo de países amigos" que respaldaban las negociaciones de paz. Rodrigo Asturias (comandante Gaspar Illom), opinó que eso era "una manera de valorar la preocupación que ha manifestado Estados Unidos sobre el problema de los derechos humanos en Guatemala".

Según el jefe rebelde, Washington no había tenido en años anteriores una implicación directa en el tema militar en Guatemala; existía además "el antecedente de que a partir de la violación de derechos humanos se suspendió la ayuda militar" estadounidense al gobierno. Y agregó: "El papel militar de Estados Unidos en Guatemala no sólo se ha reducido, sino que hay una diferenciación política (con respecto a El Salvador, por ejemplo). La ayuda militar durante la administración de Ronald Reagan fue encubierta, nunca pudo llegar a ser oficial." (31)

A raíz del autogolpe de Jorge Serrano Elías, el Estado Transnacional --mediante los organismos internacionales de crédito y el propio gobierno de Estados Unidos, a cargo de la AID--, decidió suspender todo tipo de relación con el gobierno guatemalteco. Una vez colocado en el poder el nuevo presidente, Ramiro De León Carpio, Washington expresó su total apoyo a la consolidación de la democracia en el país.

El subsecretario de Estado Wharton calificó de "logro histórico, trascendental" la "restauración exitosa del gobierno democrático a través de un procedimiento pacífico, legal y constitucional". De inmediato Guatemala recuperó US\$147 millones en ayuda económica, de la cual US\$89 millones correspondían a la cooperación reanudada de la Unión Europea, y US\$48.2 millones a la ayuda económica de Estados Unidos. (32)

Con la asunción de De León, también comenzó a ser revaluada la asistencia militar de Estados Unidos, suspendida en 1991 por

(30) Excelsior, 29/2/93, Escena Mundial, pp. 1 y 3.

(31) La Jornada, 8/5/93.

(32) ANSA/IPS, 8/6/93.

violaciones a los derechos humanos. Del total de US\$45,3 millones en ayuda para 1993 (cantidad suspendida por el autogolpe de Serrano), unos US\$370.000 estaban destinados a un programa de "adiestramiento militar y educación".

El apoyo bélico de Washington a Guatemala había sido interrumpido por primera vez en 1977, bajo el gobierno de James Carter, cuando era de US\$7 millones. Se reanudó en 1985, durante la administración Reagan, y volvió a ser congelada por George Bush en 1991, tras el secuestro y crimen de Michael Devine. La ayuda militar "letal" era entonces de unos US\$2.8 millones y, durante los años en que duró su suspensión, Guatemala compró armas y equipo a Israel. (33)

En el mismo sentido, ante dudas en torno al respeto de los derechos laborales en Guatemala, el Senado estadounidense presentó una iniciativa de ley para reducir en un 25% la importación de tabaco guatemalteco, lo cual fue considerado violatorio a los principios de libre comercio por el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), máximo organismo empresarial de Guatemala.

En julio de 1993, cuando comenzaba a asentarse en el poder, el presidente De León anunció el fortalecimiento de las relaciones con el FMI, el BM y otros organismos financieros internacionales, al dar a conocer un cambio sustancial en su política exterior, en la que destacaba la preeminencia de los temas económicos por sobre la agenda política.

Sin embargo, las presiones de Estados Unidos en torno al tema de los derechos humanos continuaron al comenzar 1994. En su informe anual al Congreso, el Departamento de Estado indicó que la situación en esa materia continuaba en franco deterioro. Las violaciones incluían "ejecuciones extrajudiciales, secuestros políticos y amenazas de muerte", indicó el informe, según el cual la elección del nuevo mandatario había "suscitado esperanzas de que rápidamente se producirían mejoras en la situación de los derechos humanos".

"Sin embargo, los cambios no redujeron el número de abusos presuntamente cometidos por fuerzas gubernamentales", observó el reporte al añadir que los actos de la insurgencia constituían todavía "la mayor fuente de violaciones de derechos humanos". (34)

A fines de marzo, al conocerse el acuerdo sobre derechos humanos suscrito entre la URNG y el gobierno en Puebla, México, Estados Unidos anunció que seguiría colaborando para que las partes pudieran negociar los "asuntos difíciles" pendientes. "Nos alientan la voluntad política y la flexibilidad puestas de manifiesto por ambas partes", afirmó el portavoz Michael McCurry.

En materia comercial, el gobierno guatemalteco inició conversaciones con Washington sobre una "estrategia de bloques" dirigida a la liberalización gradual del comercio bilateral. El ministro de Economía Eduardo González dijo que el país estaba interesado en "conseguir la paridad" en los sectores textil --en especial maquilas-- y agrícola no tradicional (que reportan

(33) IPS/ASIN-AGUN, 23/6/93.

(34) AFP, 1/2/94.

anualmente a Guatemala unos US\$450 millones en concepto de exportaciones), para obtener un trato similar al establecido en el TLC norteamericano.

La asistencia militar a Guatemala, sin embargo, sería nuevamente bloqueada a mediados de julio de 1994 por el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos, debido a la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, al tiempo que demandó la disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La decisión, en base a un informe del senador Leahy, se había presentado el 16 de junio al Senado, como parte de un proyecto de la Ley de Apropiación para 1995 sobre operaciones extranjeras.

Según el diario guatemalteco La Hora, el comité estadounidense indicó que continuaba "recibiendo frecuentes informes de abusos a los derechos humanos en Guatemala, y nuevamente ha prohibido la ayuda militar y sometido al procedimiento regular de notificaciones" todas las demás ayudas al país centroamericano.
(35)

TERCERA PARTE

CAPITULO V

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SUS REACCIONES

CAPITULO V

El Movimiento Social y sus reacciones

El movimiento social en Centroamérica se ha desarrollado con serias limitaciones en las últimas décadas, debido a que ha tenido que convivir, en sus espacios de gestión, con regímenes políticos de corte autoritario-dictatoriales. Éstos, a su vez, se han desenvuelto históricamente en el marco de una economía altamente dependiente del capital transnacional, que a lo largo de varios años presionó e influyó en las decisiones internas del "Estado Nacional".

En estos países, el movimiento social ha sufrido una constante represión reflejada, en no pocas ocasiones, en casos de genocidio sobre zonas rurales de base social y de movimiento de grupos armados --como las llamadas políticas de "tierra arrasada" en Guatemala--, o bien mediante políticas de exterminio y "desapariciones" contra dirigentes altos e intermedios de sindicatos, organizaciones comunales y gremiales.

Las tres naciones objeto de nuestra investigación han tenido un desarrollo político, económico y social muy similar. Entre otros ejemplos, puede mencionarse el hecho de que los momentos de mayor auge represivo en el presente siglo tuvieron lugar durante las dictaduras militares de comienzos de la década de los 30.

En Nicaragua, el uso sistemático del terror fue desarrollado por la dictadura de los Somoza, que duraría casi medio siglo y que no requirió de muchos gobiernos "mampara": solamente los regímenes de Víctor Román y Reyes (1947), Lorenzo Guerrero (1966) y René Schick Gutiérrez (1963), fueron utilizados para dar una fachada democrática a la larga dinastía somocista.

En El Salvador, el gobierno del dictador Maximiliano Hernández Martínez se hizo sentir hasta mediados de los 40. No había cumplido todavía un año en el poder cuando ordenó la masacre campesina de 1932, ante la sublevación armada dirigida por el líder comunista Farabundo Martí. No menos crueles fueron los gobiernos siguientes, encabezados por seguidores de Hernández Martínez (socialdemócratas y arenistas escudados en juntas "cívico-militares") y por fieles discípulos como el general Carlos Humberto Romero y, más recientemente, José Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani y el actual presidente Armando Calderón Sol.

En Guatemala, al igual que los dos casos anteriores, también la década del 30 se caracterizó por el inicio de férreas dictaduras, como la del general Jorge Ubico, que se prolongó hasta 1944 y cedió el poder, tras un breve relevo del presidente Federico Ponce, a una Junta Nacional. Uno de los pocos gobiernos de corte nacionalista, aunque efímero, fue el de Juan José Arévalo, quien traspasó el mando a Jacobo Arbenz, víctima de una de las mayores confabulaciones de la oligarquía en alianza con el capital transnacional (enclaves bananeros). Los siguientes gobiernos girarían en torno a la élite militar, aferrada al poder tras el trono mediante sucesivos golpes de Estado.

En el presente siglo, la represión desatada sobre el movimiento social tuvo en los tres países momentos de auge y de represión limitada. Los más álgidos podemos ubicarlos en tres grandes épocas: luego de la gran depresión mundial, entre 1930 y 1941; después del triunfo de la revolución cubana, en la fase de auge de "alianza para el progreso", de 1960 a 1967; y durante la Revolución Sandinista, desde 1979 hasta finales de 1991.

Durante la última década, buena parte del movimiento social en Nicaragua, El Salvador y Guatemala desarrolló métodos de lucha basados en la resistencia armada. No fue sino hasta inicios de los 90 cuando muchos de ellos adoptaron la forma de partido político o de movimiento social en lucha por reivindicaciones de carácter laboral.

Así, los dos años que abarca esta investigación (que refleja los acontecimientos tal como fueron presentados por diversos medios de prensa), permiten ubicar las técnicas y métodos a los que actualmente recurre el movimiento social en su lucha por mayores espacios democráticos.

Antes de pasar a las acciones desarrolladas por el movimiento social en el período referido, es importante conocer primero tanto la estructuración de los movimientos que apoyan al sistema como la de los que lo adversan.

El poder de convocatoria y perspectivas de cada uno de estos bloques no aparece señalado de manera mecánica (cantidad de afiliados o militantes de cada organización) sino mediante sus acciones, a fin de poder medir su capacidad y posibilidad de acceso a mayores espacios democráticos.

Nicaragua

1. Configuración de las principales organizaciones patronales y sindicales

En Nicaragua, las organizaciones patronales y sindicales no escapan al ambiente de creciente polarización política.

Organizaciones sindicales como la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS) y Central de Unificación Sindical (CUS), se agrupan en el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT) y apoyan a menudo las posiciones de sectores de la ultraderecha, organizados en la Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por el vicepresidente Virgilio Godoy, el diputado Alfredo César y el alcalde de Managua Arnoldo Alemán.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) representa a la mayoría de las organizaciones empresariales y respalda a los sectores ultraderechistas de la UNO. En este sentido, no es extraño que su presidente, Ramiro Gurdián, insista en que "el alejamiento entre el gobierno y la UNO nos muestra a una Nicaragua cautiva y secuestrada por los sandinistas y a un

gobierno débil e incapaz de gobernar", y reconozca que "los que ganamos las elecciones, a veces sentimos que perdimos". (1)

Dentro de las organizaciones sindicales afines a la UNO, como la CTN Y la CUS, existen pequeños sectores que coyunturalmente se identifican con el llamado "grupo de centro" en el Congreso, que respalda a la presidenta Chamorro y se opone al directorio de la coalición política. En este sector, que no cuenta con organizaciones patronales y sindicales propias, se ubican funcionarios del aparato burocrático del Estado (ministros, viceministros y "personal de confianza"), así como casi todo el poder Judicial y parte del Legislativo.

En el otro extremo se encuentran las organizaciones patronales y sindicales que respaldan al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), siendo las más importantes la Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Productores y Ganaderos (UNAG) y la Unión Nacional de Empleados (UNE). Estas integran, en su mayoría, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).

2. Acciones del movimiento social por demandas económicas y políticas

Antecedentes inmediatos

Las huelgas han sido en este período el principal instrumento de los trabajadores de Nicaragua para enfrentar las medidas económicas (bajos salarios, altos precios, desocupación, etcétera.) Como antecedente, en 1990-91 las protestas más relevantes fueron:

Sistema Financiero Nacional: Huelga de 8.000 bancarios en demanda de un 39% de ajuste salarial y estabilidad laboral; tomas de edificios públicos y enfrentamientos con la policía. Paralización temporal de la banca estatal ante el intento de despido de 4.000 empleados. El gobierno accedió a un ajuste del 25 por ciento.

Sector Salud: Huelga de 23.000 trabajadores durante dos meses, por aumento salarial y abastecimiento técnico-material en los hospitales. Veinte médicos y enfermeras realizaron una huelga de hambre de 26 días, tras la firma de acuerdos ventajosos que, sin embargo, fueron incumplidos por el gobierno.

Sector Educación: Huelga de 18.000 maestros, por casi dos meses, en más de 300 centros públicos del país, junto a tomas de escuelas y colegios. El conflicto finalizó cuando el gobierno aceptó las demandas: ajuste salarial del 25% para los 30.000 trabajadores de la educación, ratificación de convenios colectivos y aplicación efectiva de la Ley de carrera docente.

También por demanda de ajustes salariales, incentivos de producción y propiedad obrera, 15.000 cañeros de cinco ingenios realizaron huelgas a lo largo de cinco meses. En el ingenio San Antonio, (que genera el 70% de la producción nacional de caña),

(1) El Día, 24/11/92.

2.700 trabajadores demandaron aumentos del 240%, reclasificación salarial y beneficios sociales.

Por iguales reclamos se paralizó el sector minero, tres importantes hoteles capitalinos, los siete mercados de Managua y los siete puertos del país, así como el aeropuerto internacional y la otrora línea aérea estatal Aeronica.

En 1992, las principales huelgas y movimientos fueron protagonizados por el estudiantado, que en junio desarrolló una de las más grandes protestas desde 1990, y por el sector de transportistas privados, que en una semana de paro laboral causó pérdidas por casi US\$2.800.000.

En julio de 1992, miles de estudiantes universitarios paralizaron durante una hora el acceso de las cuatro principales carreteras de la capital, escalando su protesta ante la negativa oficial de aumentar en unos US\$9 millones el presupuesto a las universidades. Según la ley, el gobierno debía destinar anualmente el 6% de su presupuesto a las universidades, transacción que el gobierno basa en "los ingresos corrientes", pero los universitarios insistieron en que debía ser sobre los "ingresos generales". (2)

Las diversas protestas por reivindicaciones económicas se vieron respaldadas por la concurrencia a la celebración del XIII aniversario de la Revolución. Allí, el líder sandinista Daniel Ortega amenazó al gobierno con "tomar las armas" ante posibles intentos de "instaurar una guardia o una policía somocista" en Nicaragua. Responsabilizó al gobierno de las protestas por la ejecución del plan de ajuste económico y de las pretensiones de implantar en el país "un capitalismo salvaje".

El 23 de julio, violentos enfrentamientos entre policías y ex militares sandinistas en Managua dejaron un saldo de 20 heridos y un número similar de golpeados. Los ex oficiales despedidos del Ejército Popular Sandinista (EPS) exigieron una indemnización inmediata y no a un plazo de 5 años, como ofrecía el gobierno.

En ese mismo mes, médicos de un hospital de Masaya iniciaron una huelga indefinida, en protesta por la falta de medicinas y material quirúrgico. Según el director del hospital "Hilario Sánchez" de Masaya, Julián Amador, en el mes de julio habían muerto 32 pacientes adultos y niños por falta de medicamentos.

Semanas más tarde (**agosto**), la Asociación Nacional de Educadores (ANDEN), que aglutina a más de 18.000 maestros, exigió la destitución del ministro de Educación Humberto Belli y de la viceministra Hortensia Rivas, a quienes calificó de "terroristas ideológicos". Según líderes de ANDEN, altos funcionarios del ministerio habían llevado a la crisis al sector educativo. Nathán Sevilla, diputado sandinista, indicó que ambos funcionarios fomentaron "la inestabilidad y han irrespetado la ley de carrera docente, aplicando un reglamento sobre el que pende una decisión de inconstitucionalidad".

Por su parte, trabajadores del transporte sufrieron cuantiosas pérdidas a raíz de un paro decretado por transportistas de carga y pasajeros a nivel internacional en las fronteras y entradas a

(2) El Día, corresponsal, 17/7/92.

la capital. Solamente en las aduanas fronterizas y en Managua, las pérdidas ascendieron a unos US\$400.000 diarios, a lo que se sumó el daño incalculable en productos perecederos e importaciones. La huelga fue realizada por dos federaciones de transportistas, que agrupan a 100 cooperativas y empresas, con unos 6.000 vehículos.

A su vez, policías antimotines reprimieron una protesta estudiantil, durante los festejos oficiales del 171 aniversario de la Independencia centroamericana en Managua, donde un grupo de lisiados demandaba un aumento del 200% en sus pensiones y la entrega de un paquete de alimentos básicos.

También se registraron protestas organizadas por sindicatos afines a la UNO. En noviembre, unos 2.000 obreros organizados en el Consejo Permanente de los Trabajadores (CPT) demandaron el cumplimiento de las promesas electorales de Violeta Chamorro, a quien advirtieron: "cumple o se va".

Las demandas de trabajo, empleo, salario y tierra para los campesinos tradicionales, no figuraban en las pancartas de los marchistas, en su mayoría obreros del campo. Los principales líderes del CPT exigieron con fogosidad la destitución del general Humberto Ortega, a la vez que reclamaban al gobierno le diera "su lugar al vicepresidente Godoy".

Otra marcha se realizó días más tarde, esta vez por parte de unos 10.000 trabajadores, en demanda de empleos y contra la privatización de los servicios públicos. Chamorro acusó a Daniel Ortega de avalar "presiones" de los trabajadores, que presentaron al gobierno una propuesta de 17 puntos: creación de puestos de trabajo, anulación del impuesto al consumo, reajuste salarial en el Estado y cumplimiento de acuerdos en torno a la privatización, entre otros.

Ante el aumento de las protestas, el gobierno optó por recurrir, por primera vez, al uso del ejército, en un afán de demostrar su fuerza, de acuerdo a algunos analistas. Así, a finales de noviembre y bajo un inusual despliegue de tropas apoyadas con armamento antiaéreo, unos 12.000 obreros agrupados en el FNT exigieron mejoras salariales y fuentes de empleo. Uno de los soldados que vigilaba los alrededores, frente a la sede de la Presidencia, comentó a la agencia AFP que semejante operativo pretendía "asustar a los trabajadores". (3)

Mientras tanto, una huelga general impulsada por el FNT logró paralizar parcialmente diversas actividades productivas y hospitalarias en varias ciudades del país. En respuesta, la presidenta Chamorro ordenó la ocupación militar del Ingenio San Antonio, principal centro de producción de azúcar, también en paro, a donde fueron enviadas tropas de la policía y el ejército, apoyadas con blindados y helicópteros, a fin de desalojar a los huelguistas.

En forma gradual, la tensión por el llamado a la huelga general creció tras la captura de varios líderes sindicales y el bloqueo a carreteras y edificios públicos. Las ciudades de Masaya, Tipitapa y Chinandega fueron militarizadas, impidiendo una negociación con el gobierno.

(3) La Jornada, agencias, 26/11/92, p. 47.

El líder del FNT, Lucio Jiménez, advirtió que los trabajadores tomarían "las armas" si el ejército o la policía atacaban a los huelguistas del ingenio San Antonio, que continuaron el paro bajo estricto cerco militar. La advertencia fue acompañada de una solicitud de reunión al ministro Antonio Lacayo, para negociar un aumento salarial del 20% y la solución de conflictos laborales en 49 empresas y 29 fincas, mientras otros sectores laborales se sumaban al llamado a huelga nacional.

El ingenio sería desalojado por la policía en marzo siguiente. En el enfrentamiento resultaron heridos dos civiles y un policía, además de 40 trabajadores azucareros detenidos.

El conflicto intergremial se prolongó hasta fines de 1992, cuando trabajadores de la salud (con seis semanas de huelga) limitaron sus servicios únicamente a las emergencias, a fin de profundizar sus demandas: aumento salarial, mayor presupuesto al sector y un contrato colectivo para más de 20.000 empleados.

Mientras las diversas organizaciones afines al sandinismo realizaban protestas contra la aplicación de los planes económicos, los sectores ligados a la UNO centraban sus reclamos en demandas de carácter político. Así, en los **primeros meses de 1993** se produjo en la zona ganadera de Chontales una manifestación antigubernamental de casi 3.000 personas, en su mayoría campesinos de la región, organizados por la UNO. En la marcha, preparada por los alcaldes de Chontales, Boaco y Zelaya Central, activistas de la coalición y ex **contras** amenazaron con "enmontañarse" y reanudar la guerra para "acabar con el cogobierno" de Chamorro y el FSLN.

En esos mismos días, la UNO logró reunir a miles de simpatizantes en una plaza de Managua, donde burócratas y campesinos exigieron a la mandataria "abandonar el cogobierno" con los sandinistas y separar de sus cargos al general Ortega y al ministro Lacayo. En la concentración, a la cual según la prensa habrían asistido unas 17.000 personas, el diputado Humberto Castilla leyó una carta enviada por el senador estadounidense Jesse Helms (ver capítulo IV), quien acusó a Chamorro de ser "la cara sonriente detrás de la cual el general Ortega lleva a cabo sus actividades crueles y brutales". (4)

En **abril**, ex trabajadores textiles y ex militares iniciaron una huelga de hambre de un mes en la sede de la Cruz Roja, en Managua. Pertenecientes a una empresa estatal declarada en quiebra a inicios del año, pedían al gobierno créditos para reiniciar labores en la fábrica, donde hasta 1989 trabajaban 600 empleados. Los ex militares, por su parte, demandaron cumplimiento a las prestaciones prometidas al momento de su desarme, indemnización por años laborados, viviendas y alimentos.

La mayoría de los ex soldados sandinistas demostraba resentimiento hacia sus antiguos jefes que, según dijeron, los habían "olvidado". Para Carlos José Lacayo, vocero de los huelguistas, este era "el pago a los hombres y mujeres que dimos todo a cambio de nada". En alusión a los altos mandos castrenses, el ex teniente Luis Ramírez dijo: "Ellos quedaron muy bien,

(4) AP/DPA, 28/2/93.

tienen tierras, animales y grandes negocios; no sufren el hambre como nosotros". (5)

Pocos días después inició una huelga de trabajadores del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y la Aduana, que durante varias semanas amenazaron con aumentar su presión mediante el corte de energía eléctrica y el cierre de puestos aduanales. Simultáneamente, cientos de obreros estatales de producción de azúcar reclamaron mayor estabilidad laboral y miles de bananeros exigieron la agilización de créditos y pagos salariales.

En **septiembre** y raíz de la crisis desatada entre el gobierno y el ejército en torno a la destitución del general Ortega (ver capítulo VI), unos 75 alcaldes de la UNO se concentraron frente a la Presidencia para ovacionar a la presidenta Chamorro. El polémico anuncio, que abrió nuevas fisuras entre el gobierno, las fuerzas armadas y el sandinismo, motivó un acercamiento de los sectores de derecha y la UNO al Ejecutivo, luego de tres años de férrea oposición.

La fuerza de los transportistas

Tras un llamado del FSLN a iniciar una campaña nacional de "desobediencia civil" ante el cobro de nuevos impuestos de tenencia vehicular, las diferentes corporaciones de taxistas se unieron contra las referidas medidas fiscales. Una gigantesca manifestación fue organizada en Managua por la Comisión Nacional de Transporte (CNT, privada) que demandó la reducción de los impuestos y del precio del combustible, y la suspensión del anteproyecto de ley de cooperativas.

La protesta de la CNT (que agrupa a más de 300 cooperativas de autobuses, taxis y camionetas, que representan al 90% de los propietarios privados de transporte público del país), fue respaldada por líderes de la UNO, que llamaron a la población a "tomarse las calles" para expresar su disgusto.

El movimiento antigubernamental creció en **septiembre** de 1993 al punto de incidir sobre las decisiones del gobierno, que apenas cinco días después de iniciada la protesta anunció la reducción del 50% y 25% en los impuestos de tenencia vehicular.

Por su parte, durante una reunión con dirigentes sandinistas de base, Daniel Ortega llamó a intensificar la lucha contra la política económica del gobierno, ya que la respuesta a la crisis económica y social "saldrá de la movilización popular".

Al paro del transporte siguió una verdadera insurrección cívica. Numerosos retenes de civiles con el rostro cubierto con pañuelos fueron colocados en la capital, donde ardió neumáticos y fueron derribados árboles, en una muestra sin precedente del rechazo popular al plan económico, en el cual el aspecto tributario era solamente uno de los puntos de conflicto.

Organismos gremiales llamaron a las autoridades a "rectificar su plan económico para evitar más desempleo y miseria". El FSLN, a su vez, no descartó la posibilidad de acortar el período presidencial mediante mecanismos legales, al tiempo que demandó una "reforma profunda" en la política económica, respeto a las

(5) IPS, 20/5/93.

leyes, financiamiento, generación de empleo, garantías a la propiedad y aseguramiento de la producción.

La protesta de los transportistas continuó pese a los constantes llamados oficiales. Los huelguistas levantaron barricadas en Managua, mientras lograban la paralización parcial de las actividades económicas en todo el país.

El aumento de las manifestaciones callejeras llevó al ministerio de Gobernación a solicitar la presencia del ejército para vigilar sitios "estratégicos" de Managua, con la advertencia de que se detendría y sometería a juicio a los responsables del desorden. Sin embargo, el EPS rechazó de inmediato la posibilidad de actuar contra los huelguistas, aclarando que el paro nacional de transporte era "un problema de orden público del gobierno".

Los disturbios causados por la huelga dejaron sólo en la capital cinco heridos (dos de ellos de bala) y varios golpeados y detenidos. El paro había alcanzado ya a unos 75.000 vehículos del servicio público, lo cual paralizó centros comerciales, colegios y universidades, que suspendieron las clases en apoyo al movimiento. Tras los violentos enfrentamientos armados con la policía, en los que murieron un oficial de conocida trayectoria sandinista y un civil, el FSLN instó a la población a "mantener firme" la huelga, teniendo presente que "el enemigo es uno: la política económica de este gobierno asesino".

Tras casi 100 horas de paro total, en una tardía decisión oficial, el gobierno aceptó finalmente una propuesta del parlamento y suspendió temporalmente la aplicación del impuesto sobre tenencia vehicular. Una semana después, para evitar nuevos levantamientos, el alcalde Arnoldo Alemán derogó un decreto municipal que estipulaba impuestos de hasta un 2% a unos 60.000 capitalinos arrendatarios de viviendas, edificios y terrenos.

El movimiento huelguístico fue considerado por los transportistas como una victoria, y por el FSLN como "la oportunidad del gobierno para realizar cambios profundos" en su política económica.

Sin embargo, pese al acuerdo que puso fin a las protestas, el conflicto se reinició pocas semanas después, en **octubre**, cuando la CNT acusó al gobierno de incumplir sus compromisos. Luego de maratónicas reuniones sin solución definitiva, se acordó una tregua que se rompería a inicios de 1994, al conocerse nuevos aumentos al precio del combustible.

Mientras esa tregua se mantuvo, se produjeron otras manifestaciones masivas encabezadas por el FNT, en rechazo al proceso de privatización de empresas de servicios públicos. Más de un millar de obreros marcharon en Managua, mientras el FSLN solicitaba "un plebiscito" para dirimir la situación. El FSLN respalda "el principio de que todos los activos, empresas, acciones y bienes del Estado en general no deben ser enajenados si no es por medio de una ley" pero "se opone categóricamente a la privatización total, abierta o disfrazada, de las instituciones, organismos o empresas responsables de los servicios de educación, salud y seguridad social", indicaron líderes sandinistas. (6)

(6) AFP, 10/11/93.

A la vez, se conocía el inicio de una negociación entre el gobierno, el FMI y el BM en torno a nuevos planes de "ajuste" económico. Los representantes de esos organismos fueron recibidos en Nicaragua con leyendas pintadas en las paredes: "FMI significa hambre". El Frente Sandinista pidió al gobierno no firmar un nuevo acuerdo y le propuso, sin éxito, integrar un "frente común" para exigir a los organismos internacionales flexibilizar el programa de ajuste.

Era precisamente la presión de los organismos multinacionales del crédito lo que impedía en verdad al gobierno acceder a las demandas populares. A raíz de esa presión, **al comenzar 1994** Managua volvería a la semiparalización y las barricadas, con el reinicio de la huelga del transporte. Luego de cinco días de negociación sin consenso, el paro se profundizó con la integración del 90% de las unidades de transporte de carga y pasajeros, que exigían al gobierno volver atrás en su decisión de aumentar en un 2% el precio del combustible. La tarifa, que se había incrementado en un 40% el año anterior, se colocaba así como la más alta de Centroamérica (US\$2.35 el galón de gasolina regular).

Ante la falta de una salida razonable al conflicto, la policía capitalina desató una represión sobre los transportistas en paro; al menos 230 huelguistas fueron detenidos y decenas de manifestantes heridos. En respuesta, otras cinco organizaciones del sector se sumaron al paro, respaldado además por la Asociación de Transportistas Internacional (ATI) de Centroamérica, con sede en Guatemala.

Tras algunas maniobras, el gobierno lograría finalmente acordar el fin del paro con cuatro organizaciones de transporte, lo cual fue desconocido por la CNT. Sin embargo, debido al desgaste de sus fuerzas en huelga y ante el compromiso oficial de "discutir" la reducción del precio del combustible, la huelga fue suspendida a inicios de febrero de 1994.

Protestas pacíficas de ex militares

La convulsa situación sociolaboral en Nicaragua no sólo se reflejó en la huelga del transporte. Simultáneamente a este conflicto, se desarrollaron otro tipo de protestas, vinculadas a un sector de ex miembros de las fuerzas armadas.

Así, **a fines de 1993**, unos 15 ex militares ocuparon la catedral de Managua para presionar al gobierno a negociar una serie de reclamos socioeconómicos. Semanas más tarde otro grupo de ex soldados bloqueó un trecho de la Carretera Panamericana, al sur de la ciudad de Estelí, en demanda de tierras, créditos y lotes para construir viviendas, como lo estipulaban los acuerdos de su desmovilización. La acción obligó al gobierno a negociar de

inmediato la posible entrega de terrenos y lotes o bien de una indemnización. (7)

A mediados de **enero** de 1994, en una manifestación conjunta en la zona ganadera de Camoapa, decenas de ex **contras** y ex soldados del EPS, junto a productores agrícolas y comerciantes, protestaron contra la política económica del gobierno y exigieron créditos a pequeños y medianos empresarios.

A las protestas de los ex militares se sumó, en esos mismos días, una de maestros organizados, la cual fue rápidamente sofocada por el gobierno mediante la concesión de terrenos a los educadores. La presidenta Chamorro ofreció terrenos para viviendas pero anunció que no aumentaría los salarios (de US\$47 a US\$94 dólares mensuales para los maestros), congelados desde 1991, pese a la realización de dos paros nacionales en los que participaron cerca de 20.000 docentes.

Comenzando el mes de **marzo**, representantes de miles de **recontras** desmovilizados ocuparon pacíficamente tres radioemisoras de Managua, a fin de "llamar la atención del gobierno" para extenderseles títulos de propiedad sobre miles de hectáreas entregadas. A la par de ello, una protesta de ex militares sandinistas que demandaban indemnización por años de servicio, fue violentamente reprimida por la policía.

Pocas semanas después, 34 ex militares sandinistas ocuparon la embajada italiana en Managua, para reclamar la entrega de ayuda alimentaria que el gobierno de Roma les había ofrecido al momento de su desarme. También serían ocupadas, esta vez por ex **contras** que pedían "protección a sus vidas", la sede de la OEA y la embajada de Colombia.

Otra marcha antigubernamental involucró, por primera vez en mucho tiempo, a unos 10.000 productores agropecuarios de todo el país, que tomaron las calles de la capital para exigir un "cambio global" en la política oficial.

Las demandas de los ex militares se fusionaron con las del sector laboral en torno a la no privatización de los servicios básicos y en contra de un acuerdo oficial con el FMI, que significaría el despido de al menos 13.500 empleados públicos en 1994 y la reducción de subsidios a la educación secundaria y superior, además de aumento en las tarifas de luz, agua, telecomunicaciones y combustible.

A mediados de **junio**, a la jornada de protestas contra la privatización de las telecomunicaciones y la energía, se unieron también los sindicatos sandinistas mediante marchas de empleados públicos en Managua.

(7) Excelsior, agencias, 27/10/93, pp. 2 y 22.

El Salvador

1. Configuración de las principales organizaciones patronales y sindicales

La cúpula empresarial salvadoreña está aglutinada en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), organismo cuyas posiciones coinciden con las de la oligarquía terrateniente y gozan de respaldo oficial. Según el líder sindical Carlos Enríquez, "el modelo económico de la oligarquía se terminó en los años sesenta. Luego surgió una nueva burguesía modernizante para adaptarse a la competencia internacional, pero que no ha cambiado las relaciones laborales". (8)

Por su parte y pese a las décadas de represión, el movimiento social organizado intenta levantar cabeza. Si bien no es muy fuerte la presencia de la Alianza Democrática Campesina (ADC) en zonas rurales, en la ciudad 90.000 de los 220.000 afiliados al Seguro Social están sindicalizados, en su mayoría en organismos gubernamentales; un 60% de ellos son miembros de la Unidad Nacional de Trabajadores (UNTS), organización muy cercana al FMLN, surgida en 1985.

La UNTS integra, junto a otras dos agrupaciones, la Coordinadora Intergremial. Fuera de ella pero también en oposición al gobierno, se encuentra la Central de Trabajadores de El Salvador (CTS), de orientación socialcristiana.

La instalación de un Foro de Concertación Nacional, integrado en 1992 por el gobierno, empresarios y trabajadores, intentó buscar soluciones comunes a los problemas más severos del país. De acuerdo al investigador Alfonso Goitia, presidente la Fundación para el Desarrollo de El Salvador (FUNDE), se trataba de "un mecanismo para viabilizar nuestras reglas de juego entre empresarios, gobierno y sector laboral en este período de tránsito", dirigido a "impulsar la transformación institucional, de política económica o ciertos marcos estructurales que vayan realmente modificando la base de la problemática del conflicto nacional". (9)

2. Acciones del movimiento social por demandas económicas y políticas

Antecedentes inmediatos

Las medidas de "ajuste" económico decretadas por el gobierno al iniciar 1990, provocaron el rechazo de múltiples sectores, partidos de derecha e izquierda, iglesia y centrales obreras, que advirtieron sobre el riesgo de un incremento de la polarización social en El Salvador.

En síntesis, las principales movilizaciones y protestas en 1990-91 fueron:

(8) El Nacional, 17/12/92.

(9) El Nacional, 5/8/92.

Sector Estatal: El aumento a los precios de la gasolina y servicios públicos originó en 1990 una serie de protestas contra el plan neoliberal que, según la UNTS, condenaba "a morir de hambre a millones de pobres" y a la quiebra de miles de empresarios, en tanto perseguía afianzar "los millones de los 20 grupos empresariales" del país, mediante una política económica basada en "la represión psicológica, física y jurídico-legal". (10)

En abril de 1990, una huelga de hambre de 12 trabajadores del ministerio de Agricultura --demandando la reincorporación de 11.000 empleados despedidos de varios organismos estatales en el primer trimestre del año-- finalizó sin lograr sus objetivos.

Sector Educación: Un anteproyecto de ley oficial para privatizar la educación pública, provocó en mayo amenazas de paro laboral de siete organizaciones miembros del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS). Según la Asociación Nacional de Educadores (ANDES), el plan pretendía extender la privatización de importantes centros educativos, convirtiendo esa actividad social en "un negocio más de los sectores poderosos", cuya "sed de lucro" no podría ser pagada por "los grupos mayoritarios y empobrecidos". (11)

Sector Portuario: El ejército militarizó el puerto de Acajutla y negó la entrada a 800 trabajadores, luego de un paro laboral de cuatro horas. Los obreros portuarios, que demandaban aumento salarial, denunciaron la "creación" de una huelga artificial por parte del gobierno y la "toma patronal" del puerto a través de los soldados.

Sector Campesino: En mayo de 1991, miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) iniciaron tomas de tierra en demanda del cumplimiento oficial a la segunda etapa de la reforma agraria. Los campesinos ocuparon en dos semanas al menos nueve haciendas en zonas cafetaleras, acciones atribuidas por el gobierno a un plan de la guerrilla para presionar en las negociaciones de paz. (12)

Hacienda: Una huelga respaldada por 4.500 empleados del área en todo el país, inició en marzo de 1991. El gobierno militarizó todas las oficinas del sector, a cuyos trabajadores amenazó con despidos masivos y penas de seis meses a tres años de cárcel. A fines de marzo se habían sumado al paro unos 70.000 empleados de otras instituciones estatales y públicas.

Servicios: Otra huelga en demanda de aumento salarial fue encabezada a fines de noviembre por empleados de Hacienda y apoyada por trabajadores de la alcaldía municipal de Santa Ana y sindicatos del sector servicios. El gobierno rechazó el reclamo salarial (125% del aguinaldo de su salario básico), por considerar que la huelga era "eminente política". (13)

Diversos: Otros paros laborales por reivindicaciones es de tipo económico desencadenaron enfrentamientos con la policía. Miembros de la Federación de Asociaciones de Sindicatos

(10) Inforpress Centroamericana, 1/3/90, p. 15.

(11) Inforpress, 17/10/90, pp. 7 y 8.

(12) Inforpress, 27/9/90, p. 8.

(13) Inforpress, 28/11/91, p. 1.

Independientes (FEASIES), apoyaron la huelga de los empleados de Hacienda.

A fines de 1991, en el marco del proceso negociador gobierno-guerrilla (ver capítulo VI), se produjeron dos manifestaciones. La primera, convocada por partidos de extrema derecha, el empresariado y el ejército, movilizó según el gobierno a entre 100.000 y 150.000 personas que respaldaron a las fuerzas armadas y exigieron el desarme del FMLN. En respuesta, la segunda movilización fue convocada por organismos sociales, con asistencia de unas 50.000 personas procedentes de todo el país.

A mediados de 1992, la iglesia católica salvadoreña justificó un llamado a paro general de labores, debido a que "más de la mitad de la población está siendo golpeada" por la pobreza, según afirmó el obispo auxiliar capitalino Gregorio Rosa Chávez al instar al gobierno a abstenerse de cualquier "actitud de represión o intolerancia". Con el paro intergremial, apoyado por casi 100.000 empleados públicos, se demandaban aumentos salariales y la suspensión del alza en las tarifas de los servicios de agua, energía y transporte.

Un día después, cinco centrales sindicales de la Intergremial exigieron mediante otra huelga la incorporación de la empresa privada al Foro de Concertación Económico-social, integrado por delegados del gobierno, la empresa privada y el sector laboral. Este movimiento fue apoyado por un 70% de los afiliados a la UNTS, si bien el gobierno aseguró que había sido desatendido por un 99% de los trabajadores.

En un intento por imponer el "orden" mediante la amenaza del uso de la fuerza, el gobierno declaró la huelga "ilegal" y "totalmente inconstitucional", y acusó al FMLN de "manipular" a los trabajadores.

Otras protestas sucedieron en agosto, cuando unos 3.000 lisiados de guerra marcharon ante el Congreso para exigir programas de rehabilitación. Miembros de la Asociación Salvadoreña de Lisiados de Guerra (ALSADIC, del FMLN) y de la Asociación de Lisiados de las Fuerza Armada (ALFAES) se unieron en sus demandas. El ex sargento Carlos Batres, de ALFAES, afirmó: "somos 1.000 amputados que no gozamos de ningún tipo de pensión, mientras que unos 2.000 soldados son víctimas de descuentos del 25 y 50% en los subsidios". Lisiados de ambos bandos dijeron: "Estuvimos separados en la guerra, hoy nos une la paz". (14)

El programa de ajuste económico oficial, que en 1992 aumentó los precios de los productos básicos en un 40%, fue también objeto de repudio por parte de miles de personas, convocadas por Comisión de Paz (COPAZ).

A ello se sumó la protesta de cientos de campesinos que demandaron al gobierno soluciones al problema agrario (punto clave en los acuerdos de Chapultepec) e instaron al FMLN a no demovilizar hasta que las autoridades cumplieran su compromiso.

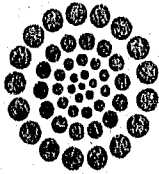
Dos días después, miles de militantes y simpatizantes del FMLN celebran en todo el país el 12 aniversario de su fundación. Era la primera celebración en paz que realizaba el movimiento

(14) EFE/AFP, 28/7/92.

**OR INSTITUCIONAL
CYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.

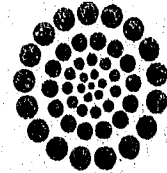


1995.

**COMEDOR INSTITUCIONAL
CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.



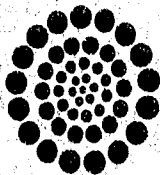
1995.

VALIDO SOLO
COMEDOR CONACYT
Av. Constituyentes 1046.

**OR INSTITUCIONAL
CYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.

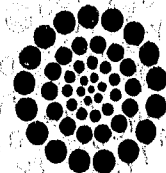


1995.

**COMEDOR INSTITUCIONAL
CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.



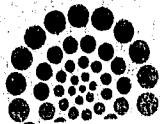
1995.

VALIDO SOLO
COMEDOR CONACYT
Av. Constituyentes 1046.

**OR INSTITUCIONAL
CYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.



**COMEDOR INSTITUCIONAL
CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

BUENO POR UN
MENU BASICO.



insurgente, fundado el 10 de octubre de 1980 en la clandestinidad, al fusionarse cinco organizaciones rebeldes. (15)

El 1 de octubre concluyó el plazo inicial para el cumplimiento de los acuerdos de paz, sin que el FMLN ni el gobierno hubieran cumplido a cabalidad sus compromisos. Millares de salvadoreños desfilaron por la capital para demandar al gobierno el cumplimiento total de lo convenido en torno a la reducción y depuración de las fuerzas armadas.

La marcha fue organizada por el Comité Permanente del Debate Nacional (CPDN). "Para un país sin males, sin militares" y "no al militarismo, sí a la paz", eran las consignas coreadas por campesinos, estudiantes, obreros y políticos. Se estima que esta marcha, en la que habrían participado unas 25.000 personas, ha sido una de las más grandes desde la firma de los acuerdos. (16)

Cuatro meses después, en febrero de 1993, la Intergremial, una de las más importantes organizaciones salvadoreñas, exhortó a no realizar huelgas y a elevar los niveles de productividad, a fin de activar el foro de concertación económica y social y "lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social de El Salvador". El Foro había sido hasta entonces incapaz de lograr decisiones hacia la estabilidad y mejoramiento de la vida en el país. (17)

No obstante el llamado conciliatorio, decenas de ex combatientes del FMLN marcharon en demanda del cumplimiento oficial de entrega de ayuda económica pactada en Chapultepec, a fin de lograr su inserción en la vida civil. "Tenemos necesidad en muchas áreas y consideramos que el retraso en la entrega de ayuda es un problema de falta de voluntad", dijo un representante de los ex rebeldes.

Semanas después, cerca de 500 jueces del interior amenazaron con una serie de paros laborales, incluso indefinidos, en protesta por los resultados del informe de la comisión Ad Hoc (ver capítulo VI) y para respaldar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, mencionado en la lista de "depurables".

Represión de las protestas

En mayo, cientos de trabajadores iniciaron una huelga en el ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía de Usulután y otros centros, para exigir mejores condiciones laborales y sociales. Líderes sindicales anunciaron allí el inicio de una campaña internacional de presión al gobierno y la empresa privada para lograr acuerdos que mejoraran las condiciones laborales.

Por su parte, buscando flexibilizar la posición de los representantes de la empresa privada en el Foro de Concertación, la UNOC anunció que pediría al gobierno de Estados Unidos la

(15) La Jornada, agencias, 10/10/92.

(16) AFP/AP, 31/10/92.

(17) Excelsior, corresponsal, 13/2/93, pp. 2 y 42.

suspensión inmediata del Tratado General de Preferencias para las Exportaciones (TGPE).

La serie interminable de protestas se extendió días después a unos 15.000 empleados estatales, que mediante una huelga demandaron aumentos salariales. A su vez, cerca de 1.200 ex combatientes del FMLN se manifestaron en la capital para exigir al gobierno transferencia de tierras y reducción en los intereses de sus créditos agropecuarios.

Según Mercedes Letona, miembro de la directiva de la Fundación 16 de Enero (organismo agropecuario del FMLN), el banco estatal de tierras a cargo de financiar a los ex combatientes se negaba a comprar los terrenos, colocándose "por encima de los acuerdos entre propietarios y beneficiarios". (18)

A raíz de las constantes protestas, el gobierno ordenó la represión violenta de policías antimotines sobre una manifestación de lisiados de la ex guerrilla y el ejército, provocando al menos cuatro muertos y 15 heridos. En protesta, estudiantes de la Universidad Nacional bloquearon con autobuses la carretera al norte de la capital, al tiempo que organismos sindicales pedían un antejudio al presidente Cristiani y la destitución del jefe de la Policía Nacional, coronel Francisco Salinas. En un comunicado, el gobierno acusó al FMLN de provocar disturbios para "desestabilizar al gobierno y lograr fines electorales". (19)

Convocadas por el FMLN y la Federación Nacional Sindical de Trabajadores (FENASTRAS), entre 5.000 y 7.000 personas participaron al día siguiente en la marcha-entierro de los lisiados asesinados por la policía, a quienes los manifestantes llamaron "asesinos" y "cobardes".

Otra huelga estalló a comienzos de julio en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde una manifestación de 1.200 empleados acusó a Cristiani y al Congreso de "intransigencia" para solucionar su problemática laboral.

A finales de agosto, más de 5.000 campesinos recorrieron las calles de San Salvador hasta la Casa Presidencial, donde reclamaron tierras prometidas en los Acuerdos de Paz.

Otro paro laboral se realizó días después, esta vez por parte del sector salud. Unos 7.000 empleados, cerca del 90% del total trabajadores del ramo, respaldaron la huelga en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto para el sector. El ministerio de Salud responsabilizó a los líderes sindicales del sector "de cualquier daño o muerte que ocurra en pacientes". (20)

A inicios de septiembre, en la ciudad de Zacatecoluca, activistas del FMLN repudiaron el inicio de las maniobras "cívico-militares" estadounidenses "Fuertes Caminos" en El Salvador. El presidente Cristiani y el jefe del comando sur de Estados Unidos, George Joulwan, presidieron el acto de inauguración.

Pese a la advertencia oficial en torno a represalias contra los empleados de Salud en huelga, 26 gremiales de trabajadores --

(18) Notimex, 13/5/93.

(19) La Jornada, corresponsal y agencias, 21/5/93, pp. 50 y 56.

(20) UPI, 1-2/9/93.

entre ellas sindicatos de varios ministerios-- llamaron a un paro escalonado al que convocaron a 60.000 trabajadores. Al menos 4.000 empleados públicos exigieron una solución favorable a la huelga en Salud, en un paro que, según la UNTS, fue apoyado por empleados de Telecomunicaciones, Energía Eléctrica, Educación y Seguro Social. (21)

Mientras Cristiani insistía en que los conflictos laborales eran parte de un "plan de desestabilización" del FMLN, la empresa privada pidió al gobierno aplicar medidas "enérgicas", mediante el despliegue del ejército contra los "huelguistas y delincuentes comunes que impiden el resurgimiento" de la economía local.

La huelga en el sector Salud, que se había extendido por más de un mes, concluyó el 27 de septiembre, luego de firmarse acuerdos con el gobierno para reintegrar a trabajadores despedidos y revisar un aumento salarial a partir de enero de 1994.

Pero los conflictos no terminaron allí. A fines de **noviembre** la Asociación de Desmovilizados de la Fuerza Armada (ADEFAES), denunció que al menos 30.000 ex soldados eran víctimas de abandono por parte de sus superiores y habían recibido amenazas de muerte por reclamar beneficios económicos. Dijeron haber sido "utilizados y manipulados como títeres" por sus jefes durante la guerra y que a la fecha carecían de tierras, créditos y becas de estudio, compromisos acordados en Acuerdos de Paz. (22)

Mientras Francisco Mena, dirigente del FMLN, instó al gobierno a asumir "con responsabilidad el asunto", Oscar Santamaría, ministro de la presidencia, advirtió que trataría como delincuentes comunes a los ex soldados, que amenazaron con retomar las armas y boicotear las elecciones.

Las protestas continuaron en 1994. En **marzo**, unas 500 se concentraron frente a la sede del TSE en rechazo al traslado de las juntas receptoras de votos de sus localidades. Según el FMLN, se trataba de una maniobra para evitar la votación en zonas donde la guerrilla tenía mayor base social.

A raíz del aumento de las manifestaciones y conflictos sociales, la alcaldía de San Salvador anunció a **inicios de junio** una prohibición para realizar en la capital, en los días de semana, manifestaciones y mítines políticos o por demandas económicas, disposición calificada de "fascista y autoritaria" por Rubén Zamora. (23)

Desafiando abiertamente la disposición municipal de ARENA, varios cientos de sindicalistas afiliados a la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes (FEASIES) y a la UNOC, realizaron una protesta pacífica en la capital contra el súbito aumento en el precio de los productos básicos y la política de privatización. Ese mismo mes, unos 30.000 estudiantes se plegaron a una huelga de empleados de la universidad estatal, UES.

También estaban en paro por incremento salarial más de 7.000 empleados del sistema judicial quienes, una semana después y luego de acordar un incremento de 10% en los sueldos,

(21) AFP, 21/9/93.

(22) Excelsior, corresponsal, 25/11/93, pp. 2 y 23.

(23) Excelsior, corresponsal, 4/6/94, pp. 2 y 44.

suspendieron su huelga. El mismo día, alrededor de 8.000 trabajadores del Instituto del Seguro Social iniciaban un movimiento similar, a nivel nacional, en demanda de incremento en sus salarios. (24)

A mediados del año, el conflicto de los desmovilizados de las fuerzas armadas cobró mayor fuerza, luego de que un grupo de 300 ex soldados ocuparon el Congreso para demandar el prometido pago de indemnizaciones. El ministro de Defensa, Humberto Corado, atribuyó el atraso en los pagos a problemas "administrativos". La protesta de los ex militares se produjo al conocerse que los 9.000 ex miembros del FMLN habían recibido parcelas de tierra o habían sido incluidos en programas de capacitación.

A fin de contener la ola generalizada de inconformidad social, el gobierno y la empresa privada acordaron incrementar en un 13% el salario mínimo nacional, aumento considerado insuficiente por la UNTS.

A tal grado amenazaban las protestas la estabilidad del nuevo gobierno (ver capítulo VI), que el presidente Calderón Sol advirtió que usaría las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, a quienes amenazó aplicar descuentos salariales y demandar "ante los tribunales correspondientes". Para los trabajadores, la advertencia oficial constituía una "ley mordaza". (25)

(24) La Jornada, agencias, 15/7/94, p. 54.

(25) Excelsior, corresponsal, 18/7/94, pp. 2 y 34.

Guatemala

1. Configuración de las principales organizaciones patronales y sindicales

Las organizaciones patronales en Guatemala se han caracterizado por mantenerse "imparciales" ante los intensos conflictos laborales ocurridos en los últimos años. Es usualmente el Estado el que asume el papel de negociador con los trabajadores cuando éstos se levantan en protestas. Sin embargo, la "imparcialidad" de esas agrupaciones se ha visto a menudo alterada cuando, mediante pronunciamientos diversos, llegan a exigir al ejército "mano dura" frente a quienes se atreven a poner en peligro sus intereses.

El sector patronal está representado por una serie de organizaciones, como la Asociación General de Agroexportadores (AGA), así como por las cámaras de Comercio, Industria, Turismo, etcétera. Sin embargo, una poderosa corporación de organizaciones empresariales maneja el control de las principales decisiones en el país: el Comité Coordinador de Agricultores, Comerciantes, Industriales y Financieros (CACIF), rector de las líneas básicas de acción del sector patronal.

Con frecuencia, la empresa privada guatemalteca se ha visto sometida a presiones de poderosos sindicatos estadounidenses que guían su accionar en el terreno político-laboral. Su actitud es calificada por el movimiento sindical como de permanente violación a las leyes y derechos laborales, y de férrea resistencia a un nuevo Código del Trabajo que sustituya al vigente, promulgado en 1940.

El gobierno dice apoyar la elaboración de una nueva ley al respecto, que establecería la libertad sindical y regularía sus violaciones mediante multas a los empresarios; podría otorgar en el asunto mayor facultad al gobierno y crearía tribunales permanentes de conciliación y arbitraje para actuar en conflictos laborales.

En la cara opuesta del conflicto se encuentra el sector sindical, en el cual destaca la Coordinadora de los Sectores Civiles (CSC), organización que agrupa a entidades religiosas, organismos de masas, instituciones de derechos humanos y grupos gremiales, así como a sindicatos y organismos no gubernamentales. La CSC ha exigido, hasta ahora sin éxito, su participación en la negociación política entre la URNG y el gobierno.

Otros sindicatos de relativa fuerza política en el país son el Comité de Unidad Campesina (CUC); la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Transporte; la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FENASTEG), que ha logrado movilizar en huelgas escalonadas a la gran mayoría de los 200.000 empleados públicos existentes en el país.

2. Acciones del movimiento social por demandas económicas y políticas

Antecedentes inmediatos

Entre las principales movilizaciones populares en el período 1990-91, las demandas de aumento salarial caracterizaron la acción del movimiento social urbano y rural:

Sector Campesino: Luego de un año de infructuosas negociaciones entre el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO), para resolver demandas de aumento salarial mínimo, reinició en 1990 un movimiento campesino de paro y manifestaciones en varias fincas agropecuarias agroexportadoras de la Costa Sur.

Sector Estatal: El generalizado reclamo salarial entre los empleados públicos se tradujo en protestas de la Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media, del Organismo Judicial, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como de empleados de hospitales y de la municipalidad en Retalhuleu, y trabajadores de la Zona de Libre Industria y Comercio en Santo Tomás de Castilla. (26)

La crisis en la infraestructura de los servicios sociales (ver capítulo III), provocó también múltiples protestas de estudiantes y padres de familia en distintos puntos del país, donde se registraron manifestaciones, obstrucción de calles e incluso tomas de rehenes por parte de pobladores de áreas marginales.

Uno de los movimientos más importantes en este sector fue el de los empleados de la empresa de vidrio CAVISA, que mantuvieron una huelga por casi seis meses. La fábrica fue desalojada por la policía, evidenciando la pérdida de eficacia de los métodos tradicionales de lucha sindical y la necesidad del sector de enfrentar al gobierno dentro de esquemas legales.

Sector Vivienda: Unas 20.000 personas invadieron terrenos baldíos del Banco Nacional de la Vivienda en la capital, mientras seguían empantanadas las negociaciones por aumento salarial en el sector público. (27)

Sector Transporte: Paro, a mediados de mayo, del servicio de transporte urbano capitalino, en demanda de aumento de tarifas o del subsidio estatal. Esta fue la más larga e importante huelga del período (12 días), y concluyó debido a presiones legales de la municipalidad capitalina. (28)

Diversos: Otras protestas, que rebasaron el ámbito económico, fueron ocurrieron tras una masacre de 15 indígenas a manos del ejército y fueron encabezadas por organizaciones de derechos humanos, refugiados, estudiantes y trabajadores, así como partidos políticos, organismos empresariales y académicos.

En 1991 también hubo protestas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyos empleados pedían reajuste salarial, autonomía y reclasificación de personal (29), así como en Correos y Telégrafos y en la Dirección General de Migración, cuyas sedes fueron tomadas temporalmente por afiliados a la FENASTEG.

(26) Inforpress, 8/2/90, pp. 14 y 15.

(27) Inforpress, 1/3/90, pp. 13 y 14.

(28) Inforpress, 24/5/90, pp. 1 y 2.

(29) Inforpress, 14/2/91, p. 13.

Las protestas por aumentos salariales fueron en Guatemala una constante también en 1992. Pese a la amenaza del presidente Serrano de "implantar el estado de excepción" contra los huelguistas, miles de empleados públicos afiliados a FENASTEG y FENASEP anunciaron una huelga general para paralizar la administración estatal y el transporte público en todo el país.

En el paro, iniciado el 13 de julio, participó un 90% de los empleados públicos (cerca de 170.000), afectando el sistema educativo, los hospitales, la dirección de Correos y Telégrafos y el aeropuerto internacional. Ante las amenazas oficiales sobre el despido de huelguistas y la eliminación de una prestación social aprobada por el Congreso, los burócratas exigieron un aumento salarial del 75% (frente a sólo el 12% ofrecido por el gobierno), para compensar un deterioro salarial estimado por los sindicatos en 83 por ciento. (30)

Esa huelga fue el primer movimiento de este tipo que enfrentó el gobierno en sus primeros 18 meses. Debido a sus efectos sobre la economía y los servicios, las autoridades se vieron obligadas a ofrecer entre 18% y 22% de aumento salarial, propuesta que fue rechazada por los huelguistas.

Sin embargo, los problemas del gobierno no acabarían ahí. El movimiento social continuó extendiéndose y se agudizó días más tarde, cuando un pelotón antimotines del ejército atacó con bombas lacrimógenas y golpes de macana a más de 500 campesinos (muchos de ellos niños) provenientes de Cajolá, Quetzaltenango, que demandaban en la plaza central de la capital apoyo oficial para recuperar tierras invadidas por terratenientes.

El director de la policía, José García, justificó la golpiza aduciendo que fueron los campesinos "los que buscaron el contacto con las macanas. Otros se golpearon al caerse, y los niños, pues ellos resultaron llorando por culpa de sus padres", dijo. (31)

La represión provocó horas después una protesta generalizada; más de 8.000 miembros de organizaciones de académicos, estudiantes, sindicalistas y religiosos se manifestaron contra los abusos de las fuerzas de seguridad. El presidente de la Comisión de Comunidades Indígenas del Congreso, Claudio Coxaj, advirtió que pediría al gobierno y a la PDH un examen psiquiátrico a los policías que atacaron a los campesinos, pues "se podía ver su felicidad cuando golpeaban a los niños".

Por su parte, la Premio Nobel Rigoberta Menchú comentó: Si los guatemaltecos "no hacen todos los esfuerzos" por democratizar el país y detener el sistema de segregación racial e injusticia, se corre el riesgo de que los mismos indígenas "arrebaten" sus derechos.

A raíz de las protestas, el gobierno decidió prohibir nuevas manifestaciones en lugares públicos. Ello no evitó los reclamos que continuaron, si bien no en forma de concentraciones masivas, por motivos económicos y políticos, incluso fuera de Guatemala.

En este sentido, representantes de la Coordinadora de Sectores Cíviles (CSC) acudieron en **septiembre** a la sede de las

(30) La Jornada, agencias, 14/7/92 p. 39.

(31) El Día, 28/7/92.

negociaciones gobierno-guerrilla, en México, para exigir sean tomadas en cuenta sus opiniones, planteadas en un documento que entregan al conciliador Rodolfo Quezada (ver capítulo VI).

La CSC demandó, entre otros puntos, la creación de una Comisión de Justicia y Verdad en Guatemala, y garantías para su participación en las negociaciones de paz, "ante la magnitud de los niveles de represión y violación de los derechos humanos, que han venido sumiendo a Guatemala en un verdadero holocausto". (32)

En el mismo sentido, durante su mensaje de fin de año, el obispo de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México), Samuel Ruiz, presidente del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, denunció que la represión en Guatemala no había cesado y se habían endurecido las posiciones oficiales del gobierno, siendo mayores los riesgos para la vida de las organizaciones sociales y populares.

El debate en torno a la creación de una Comisión de la Verdad tomaría mayor fuerza a mediados de marzo, por las repercusiones del informe de la Comisión de la ONU sobre El Salvador. Lorenzo Pérez, miembro de los Sectores Surgidos de la Represión y la Violencia (SSRV), pidió al gobierno que "la historia no se repita" en el caso guatemalteco y los responsables sean juzgados.

"No queremos venganza, pero la verdadera justicia no se limita a señalar a los responsables", dijo el miembro del SSRV, organismo que acusó al ejército de haber arrasado con 440 aldeas entre 1980 y 1983. También voceros del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que agrupa a familiares de 45.000 desaparecidos, dijeron que esa comisión podría darles las respuestas "que los gobiernos de turno nos negaron". (33)

A mediados de **febrero de 1993**, el CUC exigió al gobierno y al ejército suprimir el control y ocupación militar en aldeas, cantones y departamentos del país. En una carta al ministerio del Defensa, el CUC exigió respetar las decisiones de la población civil en cuanto a no querer participar en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC); el ministro José Domingo García respondió acusando al CUC de ser parte de la URNG.

Ante el aumento de la movilización popular, el gobierno suprimió días más tarde el derecho a huelga en unos 20 servicios públicos "esenciales" del Estado y privados, provocando nuevas protestas. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores (GTG), José Pinzón, condenó "las sanciones del gobierno en torno a la restricción de los derechos de los empleados públicos", mientras la FENASEP convocó a una asamblea permanente de más de 150.000 burócratas y decenas de empleados públicos protestaron ante el Congreso.

En tanto, unos 500 campesinos se manifestaron durante dos días frente al Palacio Presidencial en demanda del reintegro a su trabajo en las fincas cafetaleras, de donde habían sido despedidos en noviembre anterior por haberse organizado en sindicatos. Denunciaron que los cafetaleros no ganaban el salario

(32) La Jornada, 8/10/92, p. 48.

(33) EFE, 17/3/93.

mínimo de US\$2.18 la hora, sino apenas el equivalente US\$1.07, cifra dos veces menor en el caso de las mujeres y los niños. (34)

Desafiando la disposición oficial, unos 35.000 empleados de dependencias de Salud y de las direcciones de Correos y Caminos, declararon a inicios de **marzo** paros laborales en demanda de prestaciones sociales no cumplidas por el gobierno.

Otras huelgas tuvieron lugar en Puerto Quetzal, en el litoral Pacífico, y provocaron a fines de **abril** pérdidas de un millón de dólares diarios, según las autoridades portuarias. Como parte del paro, que fue calificado de ilegal por la cúpula empresarial, unos 250 obreros portuarios tomaron el lugar y atracaron nueve barcos, para reclamar mejores salarios y un convenio colectivo.

El conflicto social se agudizó en los primeros días de **mayo**, a raíz de la imposición oficial de un carné estudiantil de transporte colectivo, medida entendida por los jóvenes como un intento de identificar y reprimir con mayor facilidad a los dirigentes estudiantiles. En protestas callejeras protagonizadas por estudiantes, la policía capturó al menos a 50 jóvenes. (35)

Nuevas manifestaciones ocurrieron debido al aumento del 60% en las tarifas de luz. Unos 20.000 trabajadores se congregaron a inicios de mayo en la plaza central y llamaron a la población a la desobediencia civil, mientras cinco organizaciones sindicales convocaron a un paro nacional.

"Nos hemos opuesto al incremento porque la mayoría no lo puede pagar", dijo Víctor Moreira, dirigente de los sindicatos de la municipalidad capitalina. Si bien el gobierno aseguró que el aumento en la tarifa de energía equivalía al 40%, los usuarios denunciaron aumentos de hasta un 500% en sus facturas. (36)

Tensión social en aumento

En una escalada del doble conflicto, policías antimotines y estudiantes de nivel medio protagonizaron una batalla campal en la capital guatemalteca, donde los jóvenes levantaron barricadas y destruyeron comercios del centro de la ciudad, con un saldo preliminar de 20 heridos.

La confrontación se extendió por varios días. Tres agencias del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y su oficina central en la capital fueron blanco de atentados dinamiteros.

Como parte de sus protestas contra el ministerio de Educación, grupos de jóvenes quemaron neumáticos y destruyeron tres autobuses públicos. La muerte del joven Abdiel Hernández, baleado por el guardaespaldas de un diputado oficialista durante las protestas ante el parlamento, aumentó la tensión y su sepelio se convirtió en un acto antigubernamental masivo.

Al menos 35 personas resultaron heridas al día siguiente, cuando fuerzas antimotines rodearon la Universidad de San Carlos y protagonizaron, durante más de tres horas, violentos choques con unos 1.000 estudiantes. Mientras los transportistas demandaban al gobierno implantar un estado de excepción en todo

(34) Notimex, 23/2/93.

(35) UPI/Notimex, 3/5/93.

(36) IPS, 5/5/93.

el país, el presidente Serrano anunciaba la suspensión del alza a las tarifas de energía; eso sólo echaría más leña al fuego.

En el noveno día consecutivo de protestas, estudiantes de secundaria y universitarios hicieron barricadas en el centro de la capital y sectores periféricos, en medio de amenazas telefónicas contra dirigentes magisteriales y estudiantiles, y mientras el ejército patrullaba las calles. (37)

Desoyendo una oferta de Rigoberta Menchú para mediar en el conflicto gobierno-estudiantes, Serrano advirtió en un discurso a la Nación que las fuerzas de seguridad actuarían "con rigor" para detener el movimiento de protesta. El mensaje oficial enardeció a grupos estudiantiles y sindicales.

Apenas 48 horas después entraron en paro unos 60.000 trabajadores de Salud, Comunicaciones y Educación, mientras en medio de un fuerte dispositivo militar continuaban las marchas en la capital, en respaldo a las demandas de los estudiantes y en desafío a la advertencia oficial de reprimir con "mano dura" los desórdenes. El ministerio del Trabajo declaró ilegal la huelga y amenazó con despedir de sus puestos a todos los participantes.

El clímax de esta situación ocurrió el 25 de mayo, cuando el presidente declaró la suspensión del parlamento y del poder judicial, como parte de un "autogolpe" (ver capítulo VI). La medida oficial provocó cientos de protestas callejeras, en las que participaron dirigentes sindicales, estudiantiles y de la iglesia católica. Rigoberta Menchú llamó a la sociedad civil a "no resignarse ante estas medidas y apoyar la conformación de la unidad nacional, para darle una salida patriótica a la crisis que vive el país y lograr la recuperación de los derechos constitucionales". (38)

Dos días después, una misa realizada en la catedral "por el pronto restablecimiento del orden constitucional", devino en una manifestación frente al Palacio de Gobierno. Organizaciones cívicas y gremiales anunciaron horas después la formación de un Frente Amplio para presionar por el retorno a la democracia.

En medio de la tensión política generalizada, Menchú encabezó una manifestación en desafío al estado de emergencia, en la que llamó a los guatemaltecos a la "desobediencia civil" para exigir el regreso de la constitucionalidad. Miles de personas protestaron también contra las intenciones del vicepresidente Espina, apoyado por el ejército, de legitimarse como nuevo mandatario.

La movilización interna, sumada a las presiones internacionales, obligó a las fuerzas armadas a mantenerse "neutrales" frente a los acontecimientos, que bajaron de tono cuando el parlamento designó presidente al ex procurador de los Derechos Humanos, Ramiro De León (ver capítulo VI).

Durante esos días se conoció de la conformación de un "frente nacional", integrado por dos grandes corrientes: la Coordinadora Multisectorial agrupando a los sectores civiles, y la Coalición por el Consenso, formada por miembros de la cúpula empresarial,

(37) Excelsior, corresponsal, 19/5/93, pp. 2 y 18.

(38) El Financiero, 26/5/93, agencias, p. 46.

algunas organizaciones sindicales y partidos políticos de oposición, como la DC y el PSD.

Tras la asunción del presidente De León, la Multisectorial citó a dos manifestaciones, en las que participaron 2.000 trabajadores sindicalizados y más de 10.000 personas convocadas por organizaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos. Otra manifestación se produjo días después, cuando unos 500 miembros del magisterio y activistas del GAM exigieron frente al Congreso la renuncia de 116 diputados, varios de ellos acusados de actos de corrupción.

Miembros del Foro Multisectorial, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) y de la Instancia Nacional de Consenso (INC) afirmaron que continuarían presionando para lograr la depuración de los tres poderes del Estado. El Foro advirtió al nuevo presidente que de no resolverse las causas de la crisis política, podría ocurrir en el país un estallido social más grande y violento. (39)

Paralelamente, continuaba el movimiento por reivindicaciones de tipo económico. En la primera semana de julio, unos 5.000 trabajadores de la Empresa Bananera de Guatemala, subsidiaria de la transnacional "Del Monte", decretaron una huelga. Esta se extendió a unas 20 parcelas en varias fincas del departamento de Izabal, al noroeste de la capital, para presionar al cumplimiento de los acuerdos laborales firmados entre el sindicato y la dirección de la compañía frutera. El paro alcanzaría un mes después a las principales empresas bananeras del país, pese a la intervención del ministerio del Trabajo. (40)

Mientras, decenas de efectivos policiales antimotines fueron desplegados en el centro de la capital, luego de una advertencia oficial a los estudiantes en protesta. Dirigentes de la FENASTEG denunciaron que grupos paramilitares estaban propiciando la continuación de la violencia, al tiempo que el GAM informó del asalto a la casa de un líder sindical.

En rechazo a la represión en zonas rurales, más de 100 campesinos exigieron a fines del mes la disolución de las PAC, a las que acusaron de haber sido creadas para reprimir a las poblaciones indígenas. En una marcha del Consejo Nacional de Desplazados (CONDEG), los indígenas y desplazados pidieron a gritos: "ya no más patrullas civiles, queremos tranquilidad en nuestras comunidades".

Pocos días después, tres campesinos fueron masacrados y un número indeterminado herido, cuando paramilitares dispararon sobre una manifestación de 4.000 personas que protestaba ante la Procuraduría de Derechos Humanos contra el servicio militar obligatorio en Colotenango, Huehuetenango. La repulsa masiva obligó a De León a anunciar que atendería personalmente el caso.

La protesta continuó por semanas. Más de 5.000 campesinos de varias regiones del país presentaron al Congreso una propuesta de "objeción de conciencia" contra el servicio militar forzoso.

A nivel urbano, en tanto, la FENASTEG renovó sus presiones para obtener un pago pendiente de bonificación salarial,

(39) Notimex, 17/6/93.

(40) IPS, 2/8/93.

amenazando con llevar a la huelga a los más de 165.000 empleados públicos del país. El primero de **septiembre**, la Federación encabezó una manifestación donde se exigió la renuncia de los 116 diputados y los nueve miembros del Poder Judicial: Más de 1.000 burócratas pidieron además un aumento del 100% en sus salarios.

Tampoco la iglesia quedó fuera del conflicto. En un comunicado, la Conferencia Episcopal (CEG) advirtió: La crisis política que afronta Guatemala obedece "al despertar del pueblo que clama por extirpar la corrupción que le corroe" los organismos estatales y a la empresa privada. Indicó que el fracasado autogolpe de Serrano y la elección del nuevo presidente habían llevado a la población a comprender "la necesidad de cambiar la mentalidad y las estructuras". (41)

Ante la no depuración de los legisladores, unos 300 miembros de la UASP ocuparon con violencia el Palacio Legislativo y exigieron al gobierno adelantar las elecciones, a fin de resolver la crisis de forma radical e impedir una depuración "de fachada".

La ocupación del Congreso se repitió al día siguiente. "Renuncien, ratas del Congreso. Fuera, ratas de la INC", gritaron los manifestantes. (42)

Semanas más tarde, unos 2.000 trabajadores del poder Judicial realizaron un paro de tres horas para exigir la renuncia del presidente de esa entidad, Juan José Rodil y la depuración de los tres poderes del Estado. A su vez, organizaciones sindicales y de base exhortaron a iniciar cabildos abiertos, favorables a la iniciativa presidencial de una consulta popular sobre la depuración de los organismos legislativo y judicial de Guatemala. "Si esa consulta se hiciera con mecanismos auténticamente populares, como los cabildos abiertos, avanzaríamos mucho más", dijo Nineth Montenegro, presidenta del GAM. (43)

Hacia fines de **octubre**, más de 5.000 sindicalistas, indígenas y miembros de grupos de izquierda acusaron a De León de olvidar sus promesas de cambio y "ser complaciente" con el ejército y el sector privado. Los manifestantes corearon consignas contra el mandatario durante una marcha para conmemorar el 49º aniversario de la revolución de Juan José Arévalo.

Una nueva toma del Congreso se produjo el 26 de octubre. Unos 200 miembros del GAM ocuparon su sede, mientras otros, de la Coordinadora de Derechos Humanos (CONADEHGUA), de la Comisión Nacional de Viudas (CONAVIGUA) y del CUC, tomaron la Procuraduría de Derechos Humanos, en demanda de crear una Comisión de la Verdad para investigar crímenes del pasado. También exigieron a los diputados demostrar su voluntad política de cambiar el estado actual de cosas y de darle oportunidad al duelo y duda de miles de familias del campo y la ciudad sobre sus seres queridos.

El GAM lleva 10 años reclamando la investigación sobre los casos de 45.000 detenidos-desaparecidos y 150.000 personas asesinadas, "sin que jamás se haya dado mínima satisfacción para las víctimas y sus deudos". (44)

(41) EFE, 5/9/93.

(42) Excelsior, corresponsal, 8/9/93, pp. 2 y 15.

(43) IPS, 27/9/93.

(44) El Día, 26/10/93, agencias.

Un mes después, a una semana de haberse aprobado el plan de reformas constitucionales, aumentó la oposición por parte de las organizaciones populares, que califican el acuerdo entre gobierno y diputados de "componenda". El Foro Multisectorial anunció una nueva serie de manifestaciones populares, en protesta por "la traición que cometió Ramiro De León" al negociar con el Congreso.

El día 26, miles de manifestantes marcharon contra el "arreglo cupular" de la crisis institucional entre el gobierno y el Congreso. Convocadas por la UASP, poco más de 5.000 personas recorrieron las calles coreando consignas contra el presidente y los legisladores.

El año 1994 comenzó con la semiparalización de la administración pública, al secundar la mayoría de sus 140.000 empleados la huelga de un día convocada por la FENASTEG en demanda de un 40% de aumento salarial. Era el primer movimiento laboral nacional que enfrentaba el gobierno del presidente De León Carpio.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), que aglutina al 90% de las empresas de transporte de carga, pasajeros y combustible de todo el país, anunció una huelga general para exigir la autorización oficial a un aumento en la prestación de sus servicios. La huelga cesó tres días más tarde, luego de una ardua negociación con el gobierno; tras el paro de los burócratas, la FENASTEG anunció nuevas medidas "de tipo político" para exigir un aumento salarial.

Pese a la amenaza de posibles despidos, cientos de maestros de la influyente Asociación Nacional de Educadores de Educación Media (ENEEM) se sumaron a mediados de febrero a la huelga parcial de la FENASTEG, que habían iniciado profesionales empleados del gobierno y que había paralizado ya las labores del 30% de las instituciones públicas. El paro en demanda de un aumento salarial del 40%, afectaba a unos 100 centros de primaria y secundaria, así como hospitales y algunas entidades descentralizadas. (45)

La expansión de las huelgas

La FENASTEG, que aglutina un 80% de los empleados públicos sindicalizados, ratificó su decisión de paralizar el país. Según uno de sus dirigentes, Edgard Batres, el paro sería apoyado por un 95% de los trabajadores afiliados, incluidos los maestros y unos 22.000 empleados de Salud. El salario promedio mensual de los trabajadores públicos se calcula en US\$82, mientras que la canasta básica familiar supera los US\$150 mensuales. (46)

Como parte del aumento de las protestas, unos 200.000 trabajadores de la Instancia Unitaria de Trabajadores del Estado (IUTE) demandaron un aumento salarial del 40% y la no privatización de los servicios públicos, anunciando que tomarían medidas "más radicales".

(45) Excelsior, corresponsal, 14/2/94. pp. 2 y 12.

(46) Notimex, 17/2/94.

A su vez, los trabajadores del Estado iniciaron un paro de 72 horas. Miles de huelguistas ocuparon por varias horas el Palacio de Gobierno y exigieron reunirse con Ramiro De León. Se firmó un acuerdo preliminar, en el que el gobierno se comprometió a negociar las demandas de los trabajadores.

Horas más tarde, el mandatario desconoció el acuerdo firmado con los empleados en huelga. Altos funcionarios alegaron que los huelguistas habían "interpretado mal" el convenio y que el presidente no negociaría mientras los sindicatos mantuvieran las medidas de fuerza.

Al día siguiente y pese a lo acordado, De León se negó a iniciar la negociación directa con los huelguistas, por los que éstos decidieron continuar sus paros, mientras el vocero oficial Félix Loarca afirmó que se usaría "mano dura" contra los huelguistas. (47)

En su quinta semana, la huelga de FENASTEG había afectado totalmente los servicios de salud, obras públicas y educación media, mientras la otra central, FENASEP, estudiaba el inicio de paros en correos, aduanas, telecomunicaciones y energía eléctrica.

Telésforo Guerra, fiscal general, pidió al gobierno decretar un estado de excepción, mientras un portavoz del Ministerio Público denunciaba la presunta existencia de un plan desestabilizador para derrocar al gobierno, encabezado por los trabajadores públicos en paro y en el que estarían involucrados "más de dos partidos políticos" y algunos jueces de la Corte Suprema.

La FENASTEG inició el 10 de febrero una huelga que afectó al sector Salud y a la Dirección General de Caminos. Un día después, el gobierno accedió a reunirse con los líderes de la Confederación de Unidad Sindical (CUSG), que a cambio suspendió los paros programados en varios servicios. La CUSG demandaba, además del 40% de aumento salarial, la no privatización de las instituciones públicas y la ampliación del presupuesto de los ministerios.

A inicios de marzo, en su tercera propuesta a los burócratas en paro, el gobierno ofreció aumentar los salarios en US\$12 mensuales. La oferta, que incluía un bono anual, fue rechazada por la FENASEP. Empleados públicos ocuparon oficinas gubernamentales en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Jalapa, en demanda de un aumento salarial del 40% y de una negociación personal con De León, que declaró ilegal el paro.

Una semana más tarde, el gobierno y la FENASEP suscribieron un acuerdo de aumento salarial mensual mediante bonos de entre 17 y 20 dólares, lo cual no satisfacía al total de empleados en huelga. La FENASTEG, en cambio, anunció que seguiría con su presión hasta lograr un aumento de 50 por ciento. (48)

Grupos de base interpretaron los levantamientos populares contra las autoridades policiales y militares en dos municipios,

(47) AP y EFE, 25/2/94.

(48) Notimex, 12/7/94)NSA/EFE, 15/3/94.

como "las pruebas claras de la 'descomposición social del sistema". El ejército los atribuyó a maniobras de la guerrilla.

En tanto, la iglesia católica alertó sobre el riesgo de expansión de las revueltas populares en el interior del país. "La incapacidad estatal para encontrar solución a la crisis y resolver las urgentes necesidades de la población ha llevado al país a las puertas de un estallido social", indicó un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA). (49)

Al cumplir su segundo mes en huelga, empleados públicos tomaron por unas horas el aeropuerto internacional capitalino y las sedes del Banco de Guatemala, ministerio de Finanzas y oficinas de Rentas Internas en el occidente del país.

El 8 de abril, el gobierno y los trabajadores estatales llegaron a un acuerdo para poner fin al paro laboral. La FENASTEG aceptó un aumento salarial de US\$12 al sueldo base, para unos 200.000 trabajadores del servicio público, a cambio de lo cual el gobierno prometió aumentar la bonificación de emergencia de los burócratas, revisar los salarios y diseñar mecanismos para que accedieran a diversas prestaciones sociales.

Mientras, el desalojo violento de unos 2.000 campesinos que ocupaban una finca al sur de la capital en demanda de tierras, dejó como saldo 65 heridos y 45 capturados. El hecho puso en evidencia uno de los problemas más agudos en Guatemala, donde el 2.2% de la población total acapara el 67% de la tierra cultivable y el campesinado pobre suma seis millones de personas.

A raíz de la constante expansión de latifundios mediante la expropiación a indígenas, sobre todo en el occidente y norte del país, miles de campesinos que antes tenían tierra han pasado a formar parte de un enorme ejército de obreros agrícolas que año con año se trasladan de sus comunidades a las zonas de cultivo de algodón, café, caña de azúcar y fincas ganaderas del sur del país, a cambio de salarios de miseria.

La organización campesina ha crecido al calor del conflicto por la tierra y por mejores condiciones de vida. Además del CUC, la Unión Campesina del Norte (UNICAN) es una de las principales agrupaciones del sector, junto a la Unión Campesina del Sur (UCS), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Unión Campesina Petenera (UCP).

El enfrentamiento de intereses entre los campesinos pobres y los latifundistas (unos 200.000), ha colocado al Estado como instrumento de control y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, en momentos en que el salario mínimo en el campo es de 15 quetzales diarios (unos US\$2.8). Según la iglesia católica, existen en Guatemala unas 231.000 hectáreas de tierra ociosas.

Recientes declaraciones del ministro de Gobernación en cuanto a que "no se admitirán más invasiones en el país", pone de manifiesto el endurecimiento en las posiciones del gobierno y los terratenientes.

A comienzos de mayo, cerca de 300 campesinos se instalaron frente al Palacio Nacional. "Los indígenas estamos profundamente decepcionados... reclamamos tierras y nos acusan de guerrilleros,

(49) La Jornada, agencias, 18/3/94, p.57.

pedimos comida y nos dan la espalda", dijo Julio René Pech, presidente de la Asociación Campesina "San Julián".

Según datos económicos, un 2% de la población concentra en Guatemala el 65% de la tierra cultivable, mientras el 98% restantes, en su mayoría indígenas mayas, usufructúa sólo el 35%, conformado por una masa de campesinos pobres. (50)

Otra fuerte movilización campesina estuvo a cargo de unos 4.000 indígenas, que exigieron cambiar el reclutamiento militar forzoso por un "Servicio Patriótico Social Civil". En una marcha convocada por CONAVIGUA en el día internacional de la "objeción de conciencia", gritaron consignas contra el gobierno y contra el servicio militar.

Un mes más tarde, otras 700 personas se manifestaron frente al Palacio Nacional, en la plaza de la Constitución, para demandar al gobierno "un pedazo de tierra" para poder vivir. El grupo, organizado por el CONDEG, conformaba 150 familias llegadas de varias zonas rurales, carentes de las mínimas condiciones de subsistencia.

Por otro lado, el presidente De León rechazó dialogar con los líderes de varios cientos de médicos que habían iniciado una huelga en reclamo de un aumento salarial de 40%, a quienes amenazó con el despido. "No vamos a dialogar con los médicos, pues ellos no promovieron el diálogo sino que tomaron medidas de hecho. Empezaremos las medidas judiciales correspondientes", señaló. (51)

Tras nueve días de paro, los 540 médicos en huelga retornaron a sus labores, sin obtener el aumento salarial pedido. A causa de la huelga, el gobierno destituyó a unos 20 médicos, cuyo salario real oscila entre US\$384 y US\$562. El reajuste exigido por los galenos significaba, según el gobierno, una erogación de US\$2.2 millones.

En julio, la iglesia católica y organismos gremiales repudiaron el aumento de la violencia contra el sector sindical en el primer semestre de 1994 cuando, según la UASP, se registraron ocho asesinatos de personas vinculadas con grupos laborales.. Sólo entre mayo y junio, la ODHA recibió 18 denuncias de violación al derecho sindical.

Guatemala es el segundo país de América Latina, después de Haití, con mayor incidencia de violaciones a los derechos laborales y socioeconómicos, según Luis Marius, secretario general adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT).

En un informe presentado al presidente De León y a organismos de derechos humanos, Marius señaló que un 50% de los guatemaltecos son analfabetas, el déficit habitacional supera el millón de viviendas y los servicios de salud pública sólo atienden al 30% de la población. Objetó también los bajos salarios, inferiores en promedio a US\$80 mensuales en la capital y a US\$50 en el campo, mientras el costo de la canasta básica supera los US\$150. (52)

(50) Notimex, 6/5/94.

(51) Notimex, 20/6/94.

(52) Idem.

CAPITULO VI

POLITICA GENERAL

CAPITULO VI

Política general

Nicaragua

1. Configuración de los principales partidos políticos

Existen en Nicaragua 22 partidos políticos, que pueden caracterizarse a partir de tres sectores o posiciones:

1. La Unión Nacional Opositora (UNO) es una coalición de partidos políticos que exhibe un arcoiris de ideologías, cuya unidad coyuntural llevó al poder al actual gobierno de Violeta Chamorro y que hoy mantiene serias diferencias con el Ejecutivo. El vicepresidente Godoy ha sido uno de los primeros en acusar a la mandataria de mantener "un bochornoso co-gobierno con el sandinismo, que nos está llevando a una reedición, con distintos matices, de la guerra civil". (1)

Muy cercano a él Alfredo César, hasta el 10 de enero de 1993 presidente del Parlamento, asegura que "debido a las actitudes dictatoriales del gobierno, no existe en Nicaragua un régimen de derecho y la incipiente democracia está herida de muerte". (2)

Pese a estas estruendosas palabras, la mayoría de las organizaciones de la UNO sólo funciona de nombre; su influencia es prácticamente nula. Conforman la coalición gobernante los partidos Liberal Independiente (PLI), Neo Liberal (PNL), Liberal Constitucionalista (PLC), Popular Social Cristiano (PPSC), Comunista de Nicaragua (PCN), Socialista Nicaragüense (PSN), Social Demócrata (PSD), Conservador Demócrata de Nicaragua (PCDN), Social Conservatismo (PSOC), Alianza Popular Conservadora (APC), Democrático de Confianza Nacional (PDCN), Nacional Conservador (PNC), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN).

2. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es el principal partido de oposición.

3. El resto de partidos políticos, como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Movimiento de Acción Popular (MAP), Partido Social Cristiano (PSC), Unionista Centroamericano (PUCA) y Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) son agrupaciones que, aunque existen en lo formal, carecen prácticamente de incidencia en el panorama político nacional; de ellos sólo el MUR cuenta con una representación parlamentaria.

Tras las elecciones presidenciales de febrero de 1990, la UNO obtuvo la mayoría en el parlamento: 51 representantes frente a 39 del FSLN y uno del MUR. De entonces a hoy, la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional ha variado mucho y este foro de debate sobrevive entre avances y estancamientos. Las contradicciones de la coalición gobernante se reflejan también en el Legislativo: un grupo de ocho diputados (que se autollaman "de centro" y respaldan al Ejecutivo frente al sector "duro" de la

(1) La Jornada, 23/1/93, p. 38.

(2) La Jornada, 27/1/93, p. 45.

UNO), es hoy por hoy el que determina la mayoría simple parlamentaria al momento de las votaciones, apoyando en ocasiones las posiciones del FSLN.

A continuación se expone un análisis más amplio de los principales partidos y coaliciones, como son la UNO y el FSLN. No pretendemos obviamente llegar a la verdad última sobre las contradicciones internas de estas agrupaciones (un análisis de ese tipo ameritaría un estudio particular), aunque sí ofrecer algunas pautas que permitan acercarse de forma global a la situación interna de ambas fuerzas políticas.

La UNO:

Con pugnas intestinas en varios de los 14 partidos que la integraban inicialmente, la coalición política UNO se encuentra en franca oposición al gobierno. Desde finales de 1990 a la fecha varios alcaldes de este grupo fueron destituidos o "renunciaron" tras riñas en ayuntamientos pueblo. El jefe de la comuna capitalina, Arnoldo Alemán, llegó a organizar desfiles de tractores para demandar mayor poder y control sobre planes urbanísticos oficiales aún inexistentes.

Excluyendo al equipo de la presidenta Violeta Chamorro, acusada de negligencia e incapacidad por quienes hace casi dos años la colocaron en el gobierno, la UNO ha intentado realizar "concertaciones contra el FSLN", con la participación de ex **contras**, miembros de empresarios privados agrupados en el COSEP y alcaldes del llamado "Movimiento Salvemos la Democracia", creado por el vicepresidente Godoy, a quien se unió luego Alfredo César, luego de amagar fracasadas alianzas con el FSLN y el Ejecutivo.

Una guerra de epítetos, acusaciones y hasta amenazas de muerte, marcaron un período legislativo tenso y complejo. Las ambiciones de poder mostraron a una bancada oficialista confrontada al gobierno y dividida en los debates de las comisiones especiales y las votaciones en plenario.

Las alianzas tácticas entre diputados, fracciones y grupos parlamentarios comenzaron en 1991, con un acercamiento real entre César, Luis Sánchez --un ex socialista y ex defensor del marxismo--, y Elí Altamirano, dirigente de un partido "comunista" enfrentado por igual al gobierno y al FSLN.

En reuniones con Antonio Lacayo, los líderes de la UNO demandaron mayores cuotas de poder, exigiendo a la vez reformas constitucionales, cambios en los mandos de las fuerzas armadas y ampliación de la Corte Suprema, con mayoría a su favor.

El Poder Judicial se vio también confrontado a la UNO. Aunque meses atrás el presidente de la Corte Suprema fue ilegalmente destituido por el gobierno y la coalición política sustituyó a cuatro magistrados sandinistas, este organismo no vaciló al rechazar proyectos y reformas de ley del parlamento. Debido a que ninguno de esos decretos llegó a ser promulgado, los magistrados fueron considerados "colaboracionistas".

En los primeros meses de 1994 y después de que esa coalición perdiera el control casi total del parlamento (debido entre otras cosas a la consolidación del ya mencionado "grupo de centro") la UNO siguió desmoronándose. De los 14 partidos que llegaron a

conformarla, actualmente puede contar apenas con el respaldo incondicional de siete.

En ese sentido, a lo largo de los últimos meses varios líderes unistas han hablado de la necesidad de disolver la coalición. A raíz de las elecciones regionales en la Costa Atlántica, donde un partido liberal tradicional demostró tener un relativo apoyo popular, dirigentes políticos liberales como Godoy y Alemán no descartan ahora la posibilidad de aspirar a la presidencia, apoyados solamente en la fuerza que pudiera darles el liberalismo.

El FSLN:

En torno al plan de ajuste económico, la gestión de recursos externos y la propiedad, el FSLN ha jugado en los últimos años un papel de "mediador" entre las autoridades y los sectores populares. Ese rol no siempre fue comprendido por sandinistas de base, que exigieron una oposición más beligerante, ni "tampoco concedió a los líderes del FSLN demasiados réditos políticos".

(3)

En el parlamento, la actuación de la bancada sandinista --que en ocasiones priorizó negociaciones no públicas y alianzas políticas transitorias--, siguió en el período 1991-93 orientaciones de la máxima dirigencia, acorde con los acuerdos de transición y de concertación.

Fue precisamente sobre esos acontecimientos, así como durante una larga discusión de cara a su Primer Congreso nacional, en julio de 1991, que el FSLN definió mejor su perfil y estrategia política en una situación hasta ahora inédita y compleja.

Veintidós años después de su primer programa, emitido en la clandestinidad, el FSLN descartó la vía armada para retomar el poder y sostuvo que las elecciones son el medio para acceder al gobierno.

Sin embargo, tras el citado congreso y producto de un aumento de las contradicciones con la ultraderecha, el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, declaró: "Defendemos nuestro derecho a la rebelión" contra un "plan para destruir el sandinismo y reinstaurar el somocismo que nació después del triunfo revolucionario; [...] fuerzas revanchistas, la contrarrevolución y políticos dentro y fuera del país vieron en la vía constitucional la oportunidad de conseguir lo que no habían obtenido con las armas..." (4)

El Primer Congreso del FSLN reunió a 557 delegados que durante tres días analizaron problemas nacionales y definieron ideológicamente a su partido como revolucionario, democrático, antiimperialista y defensor de intereses populares. Con la incorporación de dirigentes locales, se renovó a más del 64% de los miembros de la Asamblea Sandinista, principal órgano consultivo, y fue diametralmente modificada --al menos de manera formal-- la estructura general del partido.

(3) El Nacional, 8/12/91, Entrevista a Luis Carrión, p. 12.

(4) Barricada, entrevista a Daniel Ortega, 1/7/91, pp. 1-7.

Tras el congreso, el sandinismo se comprometió a trabajar por "un proyecto nacional que una a los nicaragüenses y distribuya mejor la riqueza", según se dijo en la declaración final. Para muchos, la primera tarea sería la recuperación de un consenso nacional que permita el retorno del FSLN al poder, en 1996.

Para recuperar la confianza de los militantes y simpatizantes, se creó a lo interno una comisión de ética, que investigaría a miembros del partido enriquecidos ilícitamente durante la llamada "piñata" de 1990. A la fecha, amplios sectores del sandinismo califican a la comisión como tímida e ineficiente, pues no ha dado los resultados esperados.

Un año después (mayo de 1994) y a las puertas del segundo Congreso de este partido, las posiciones políticas adversas dentro del seno del sandinismo se hicieron más evidentes.

La discusión interna se desarrolló entre dos corrientes sandinistas. Por un lado, la encabezada por el ex presidente Ortega, con una posición calificada por sus oponentes como ortodoxa, pero respaldada por la gran mayoría de militantes y miembros; por el otro, la posición de los "renovadores", encabezados por el ex vicepresidente Sergio Ramírez, considerado socialdemócrata por sus detractores. Esta corriente es respaldada por la mayoría de los diputados del FSLN en el parlamento, por intelectuales, artistas y los llamados "empresarios" sandinistas, si bien también en el grupo afín a Ortega no falta quien sea señalado como "nuevo rico".

Ambos grupos se enfrentaron crudamente en el segundo Congreso, donde una votación mayoritariamente favorable a Daniel Ortega desplazó al grupo liderado por Ramírez, que no obtuvo el control de la Dirección Nacional ni de la Asamblea Sandinista, principales órganos de dirección en el seno del FSLN. Más aún, el propio Ramírez no fue reelecto miembro del directorio sandinista, hecho que, para algunos, vino a agudizar las desavenencias de los "renovadores" hacia los "ortodoxos".

Aunque no pocos analistas sostienen que el problema de las corrientes en el sandinismo no es de carácter ideológico, lo cierto es que, tras los discursos, asoman diferencias que no pueden catalogarse sólo como divergencias políticas de cara a la forma de conducción del partido, señalada por amplios sectores del FSLN como verticalista y autoritaria.

2. Panorama político y parlamentario

La discusión de proyectos y leyes en torno al explosivo asunto de la propiedad, centró en los últimos cuatro años la atención del dividido parlamento y puso al descubierto una de las mayores causas de conflicto político en Nicaragua.

La decisión de la Asamblea Nacional, controlada en 1991-92 por el sector más derechista del gobierno de Chamorro, de expropiar a millares de nicaragüenses beneficiados con viviendas, se sumó a casos de desalojo violento de campesinos, así como al intento de crear cuerpos paramilitares urbanos y rurales. Todos estos elementos tensionaron en extremo la vida política en Nicaragua.

La crisis estalló en **abril de 1991**, cuando diputados de la UNO presentaron un proyecto derogatorio de la Ley 85, que garantizaba propiedades a casi 400.000 nicaragüenses. En su editorial del 23 de abril de ese año, **Barricada** dijo que el proyecto intentaba "aumentar la desestabilización que el gobierno de la UNO no ha podido conjurar, debido a su insistencia en aplicar medidas que afectan a la mayoría de la población trabajadora, para congraciarse con una minoría". (5)

El proyecto de ley afectaba a unos 200.000 pobladores urbanos y al 85% de las 4.000 cooperativas de Nicaragua, y dejaba sin efecto las asignaciones individuales al campesinado, que al culminar el gobierno sandinista recibió más de 9.000 títulos de reforma agraria.

Demandando anular la transferencia de propiedad aplicando la ley con carácter retroactivo (procedimiento vetado en la Constitución), 48 diputados oficialistas respaldaron el proyecto, que en esencia invadía las facultades de los poderes Ejecutivo y Judicial, violando además los acuerdos de concertación y de Transición, estos últimos firmados entre gobierno y sandinistas en marzo de 1990.

El primer intento de derogación de las leyes 85 y 86, coincidió con el retiro oficial de la demanda judicial contra Estados Unidos en La Haya y con una campaña política por la destitución de jefes policiales afines al sandinismo.

Alfredo César, entonces presidente del parlamento, "recomendó" prohibir la enajenación de bienes inmuebles del Estado sin la autorización del parlamento, devolver al Estado la tierra afectada por la reforma agraria; cobrar a precio real las viviendas mayores de 60 m² adjudicadas por la ley 85, y devolver todos los terrenos urbanos traspasados al amparo de la ley 86.

Según los sandinistas, el proyecto pretendía dismantelar el régimen de propiedad vigente, al proponer declarar "de utilidad pública" las tierras en poder de campesinos. La condonación de deudas y asignación legal de viviendas y lotes urbanos no comenzó con las leyes 85 y 86: durante la década pasada, el FSLN adjudicó lotes y repartos urbanos a más de medio millón de pobladores.

La ley 85, aprobada por la Asamblea Nacional en 1990, beneficia a todo aquel que al 25 de febrero de ese año habitaba en viviendas confiscadas, expropiadas, afectadas u ocupadas por el Estado, al margen de su filiación política. La ley 86 otorga propiedad sobre lotes de terrenos urbanos asignados al 25 de febrero de 1990.

El FSLN demandó al gobierno legalizar por igual la propiedad a trabajadores agrícolas, ex **contras** y sandinistas, brindar garantías a las cooperativas y no devolver bienes a somocistas. Hubo intensas reuniones para enfrentar lo que una y otra parte consideraron "la más grave crisis política e institucional" desde la asunción de Violeta Chamorro.

Si bien en la Concertación se acordó la no devolución a los confiscados y el Ejecutivo anunció que legalizaría los convenios sobre propiedad allí suscritos, la bancada oficialista en el parlamento confrontó la decisión presidencial: la ley 133, o "ley

(5) Barricada, 23/4/91, p. 3.

César" fue aprobada en agosto de 1991, en lo que Antonio Lacayo calificó como "el peor abuso" contra el gobierno.

A fines de julio de 1992, ante la crisis política nacional (huelgas, enfrentamiento gobierno-ejército y denuncias de corrupción contra el ministro Lacayo), el vicepresidente Godoy se declaró "listo para asumir en cualquier momento" la presidencia, en caso de que Violeta Chamorro renunciara a su cargo. (6)

Los 39 diputados del minoritario FSLN, apoyados por ocho colegas oficialistas, paralizaron la Asamblea Nacional, al no asistir a la reunión plenaria por considerar "ilegal" su convocatoria.

Godoy, César y el alcalde Alemán, instaron por escrito a la presidenta Chamorro a "aceptar la promulgación de una ley de restitución de la propiedad que fue usurpada, o de justa y pronta indemnización" a sus ex dueños. La propuesta de ocho puntos, apoyada por el cardenal Miguel Obando, incluía además la demanda de garantizar el buen uso de la ayuda internacional, reorganizar la banca estatal y "llamar a retiro" al jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), general Humberto Ortega, y al jefe de la policía, René Vivas. Chamorro respondió a la propuesta de los tres políticos: "Ellos tienen derecho a decir lo que les dé la gana, yo soy la presidenta". (7)

A mediados de agosto se desató una nueva crisis en el Parlamento, después que César suspendió voz y voto al diputado Iván Salvador Madriz, del bloque "de centro". La situación provocó el retiro de la bancada del FSLN y los "centristas".

De hecho, por orden de su presidente, la Asamblea Nacional sesionaría a inicios de septiembre sin el quórum requerido, al llenar con suplentes las vacantes de dos miembros de la directiva, en una votación en la cual participaron sólo 45 diputados de la UNO. La bancada del FSLN y nueve diputados de "centro" introdujeron un recurso de amparo para anular la sesión.

Mientras, el ex presidente Ortega acusaba al gobierno de empobrecer al país y ceder a las presiones de sectores conservadores de Estados Unidos, con la advertencia de que si el gobierno "no corrige sus políticas tendrá que ser desplazado", pues "el chance se acabó". (8)

Ante las presiones de la oposición sandinista y la extrema derecha, la presidenta Chamorro firmó tres decretos y un acuerdo presidencial para dar una solución "justa" a los 4.600 reclamos sobre expropiaciones del gobierno anterior. Las medidas no incluyeron a los ex propietarios somocistas e introdujeron una "privatización especial, única en América Latina" para resarcir a aquellos a quienes no se les pudiera devolver sus propiedades.

Sin embargo, empresarios confiscados rechazaron el anuncio oficial de indemnización y exigieron la devolución de sus antiguos bienes. La UNO, empero, decidió "congelar" el debate en torno al asunto después que un veto presidencial declarara inconstitucionales 20 artículos aprobados en el parlamento.

(6) La Jornada, 25/7/92, p. 36.

(7) AFP/AP, 10/8/92.

(8) El Día, corresponsal, 2/9/92 .

Buscando una solución conciliatoria al problema, el ministro de Finanzas, Emilio Pereira, anunció a fines de **octubre** que el gobierno devolvería tierras confiscadas por el FSLN. Informó que se pagaría US\$250 millones en bonos y propiedades a 5.384 nicaragüenses y extranjeros confiscados, medida con la cual --dijo-- "se resolverá de manera definitiva el problema de la tenencia de la tierra y otros bienes que generan un clima de inseguridad en el país". (9)

La crisis parlamentaria había empeorado a mediados del mes, después que Alfredo César desconoció una resolución de la Corte Suprema de Justicia que anuló las decisiones tomadas durante la última sesión legislativa. El FSLN y los del "centro" anunciaron que no regresarían a las sesiones tanto se acatará la resolución judicial.

La Corte Suprema pidió al Ejecutivo obligar al presidente del parlamento a acatar la resolución. César alegó que ningún poder del Estado tenía facultad "para inmiscuirse en los asuntos internos de otro poder", y denunció que Chamorro usaría "la fuerza militar" para arrestarlo y clausurar la Asamblea Nacional. "Me informaron que el gobierno cortará el presupuesto estatal al Parlamento y que me arrestará", dijo. (10)

Agudizando el enfrentamiento entre los tres poderes, César anunció que desacataría el fallo de la Corte Suprema y expulsaría de la Asamblea a todos los diputados sandinistas y de "centro", a fin de reelegirse como presidente en base a nuevos estatutos.

Como estaba previsto, el 27 de **noviembre** la Corte Suprema falló inconstitucionalidad en los estatutos del parlamento. Según la resolución definitiva, que negaba facultades a César para suspender o sustituir diputados, la Corte declaró nulo todo lo actuado durante los dos meses anteriores. Dos días después, el gobierno ordenó la destitución de la junta directiva parlamentaria.

El último día del año y en vista del desacato de César al fallo judicial, el gobierno envió fuerzas policiales a "resguardar" las instalaciones del parlamento, en receso. La medida oficial fue calificada de "monstruosa" por la UNO. (11) En el mismo tono, el diputado de la UNO Luis Sánchez Sancho, afirmó que la destitución de la junta directiva encabezada por César era "un golpe de Estado" contra el Legislativo, que quedó entregado a "la nueva mayoría sandinista".

La pugna se reavivó al iniciar **1993**, cuando el destituido César acusó al gobierno de romper el orden constitucional. "La incipiente democracia está herida de muerte", dijo a la prensa, mientras llamó a los partidarios de la UNO a formar "un cordón humano" alrededor del parlamento para evitar el reinicio de las sesiones, mientras diputados de la coalición amenazaban con convertirse en una fracción de "oposición".

El día 9, bajo estrictas medidas de seguridad, los 39 diputados sandinistas y nueve disidentes de la UNO (convertidos en mayoría parlamentaria) eligieron una nueva directiva del

(9) La Jornada, agencias, 20/10/92.

(10) Excelsior, agencias, 1/10/92, pp. 2 y 37.

(11) El Financiero, agencias, 31/12/92.

Legislativo. Quedó integrada por tres del FSLN, dos del "centro" y uno de la minoritaria Alianza Nacional Conservadora.

A raíz de lo anterior se produciría el 26 de enero, durante la inauguración del noveno período legislativo, el abrupto retiro de 42 diputados de la UNO, que impugnaron por "ilegal e inconstitucional" la nueva junta, presidida por Gustavo Tablada. El parlamento, no obstante, sesionó normalmente.

La ofensiva política de la UNO contra el gobierno se reflejó en el intento de llamar a un plebiscito (rechazado por Chamorro) y en la "orden" del contralor general Guillermo Potoy (afín a Alfredo César) de destituir "por negligencia administrativa" al ministro Lacayo, yerno de la mandataria. Cinco días más tarde, Chamorro solicitaría a la Asamblea Nacional la "urgente" destitución de Potoy, alegando "irregularidades cometidas en sus funciones" y por "arrogarse atribuciones que no le corresponden".

Pese a las críticas internas, la legitimidad del nuevo directorio de la Asamblea fue reconocida por el parlamento Europeo. "Me complace comprobar que la normalidad institucional reina en Nicaragua, habiéndose puesto fin al conflicto que imperaba en la Asamblea Legislativa", señaló una del presidente de la Comisión para Centroamérica y México del PE, Fernando Suárez, en lo que fue interpretado en medios políticos de Nicaragua como un respaldo a la alianza de diputados sandinistas y disidentes de la UNO, bajo control del Parlamento. (12)

Convencido de que Chamorro "no iba a renunciar" a la presidencia, el vicepresidente Godoy anunció el inicio de una "campaña de movilización popular" para exigir el adelanto de los comicios de 1996. Según lo declaró públicamente, Godoy pretendía poner fin al "co-gobierno" de Chamorro y los sandinistas.

En contraste con las demandas de los principales líderes de la UNO, la Unión Demócrata Cristiana (UDC, que agrupa a cuatro partidos socialcristianos miembros de la coalición) se declaró en contra de una renuncia anticipada de la presidenta. Ello "abortaría el frágil proceso de democratización" en Nicaragua, señaló una declaración de ese partido, en vísperas del tercer aniversario del triunfo electoral de Chamorro, el 25 de febrero.

Al celebrar su tercer período de gobierno (**abril**), la mandataria instó a la población a "olvidar odios y rencores", ya que "es muy difícil trabajar en un país dividido y confrontado". (13)

Pese a ello, la UNO inició una ofensiva diplomática contra el gobierno, al solicitar a la OEA incluir el caso de Nicaragua en el temario de su XXIII Asamblea General, prevista para junio en Managua. El político Luis Sánchez se pronunció por la creación en Nicaragua de una Comisión de la Verdad (similar a la de El Salvador), para investigar las acusaciones contra el gobierno. La idea había sido planteada días atrás al gobierno por un grupo de congresistas estadounidenses.

Al respecto, Antonio Lacayo opinó que no se trataba de formar un organismo similar al salvadoreño, sino "una comisión de alto nivel" que, con el apoyo de la ONU, constatará el "avance

(12) AFP, 9/2/93.

(13) La Jornada, agencias, 26/2/93, p. 54.

democrático" en Nicaragua. "Jamás hemos dicho que se había pedido una Comisión de la Verdad, porque en Nicaragua nuestra política de amnistía y reconciliación perdona el pasado", dijo. (14) Coincidiendo con el funcionario gubernamental, el líder sandinista Daniel Ortega sostuvo que una Comisión de la Verdad "no contribuiría a superar la crisis en el país".

A inicios de abril, debido al agotamiento de su capacidad de presión política, la UNO pidió al gobierno el inicio inmediato de un diálogo nacional, que iniciaría un mes después. Representantes de fuerzas políticas, sociales y gremiales del país, entre ellos el FSLN, se reunieron para discutir formas de alcanzar acuerdos de consenso en torno a la crisis económica nacional.

En un primer encuentro, Chamorro y 12 altos funcionarios del gobierno se reunieron con el Consejo Político de la UNO y con líderes del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), formado por cuatro centrales obreras no sandinistas.

La segunda ronda tuvo lugar dos semanas después, entre el gobierno, el FSLN y la UNO (ésta representada por el COSEP) para "salvar el ciclo agrícola 1993-94". Los líderes de la UNO condicionaron su presencia a la discusión prioritaria de los asuntos políticos, tras intentar en vano incluir el polémico tema de la remoción del general Ortega y la modificación del gabinete y la directiva del Parlamento.

Pese al acercamiento logrado con el gobierno en torno al tema económico, el vicepresidente Godoy insistió en la necesidad de definir el futuro de la presidenta Chamorro, mediante un "único camino: recurrir a la consulta o a un plebiscito". (15)

Un nuevo intento de diálogo nacional tuvo lugar a mediados de junio. El gabinete discutió con líderes de la UNO su regreso a las conversaciones iniciadas el 3 de mayo. La posición sandinista en la reunión de la mesa multisectorial, que abordó el tema del Poder Legislativo, se basó en un rechazo a todo intento de "negociar" reformas en la directiva del parlamento, eje de presión de la UNO.

Por su parte, la UNO y el gobierno coincidieron en que buscarían un acuerdo de consenso nacional mediante el diálogo para enfrentar la crisis integral del país. El delegado de la alianza UDC, Luis Humberto Guzmán, propuso reformar la Constitución para forjar un clima democrático y de estabilidad social. No se logró, sin embargo, firmar acuerdos, ante lo cual Virgilio Godoy se retiró del diálogo.

En medio de esta situación, el alcalde Alemán presentó su precandidatura presidencial para las elecciones de 1996. En una convención de su partido, el Liberal Constitucionalista (PLC), afirmó que alcanzar el poder era su "principalísima meta indeclinable". La convención del PLC se realizó, según medios de prensa, en medio de controversias entre esa organización y el Partido Liberal Independiente (PLI), liderado por Godoy, que habría establecido vínculos con liberales nacionalistas (somocistas) exiliados en Miami y ex contras. (16)

(14) La Jornada, agencias, 23/3/93, p. 42.

(15) Xinhua, 1/6/93.

(16) DPA, 4/7/93.

Uná semana después, Alemán concentró a unas 18.000 personas en un acto en una plaza de Managua, lo que sorprendió por igual al gobierno y a la oposición sandinista, que interpretaron el apoyo al político ultraderechista como una "señal" de la confusión generada entre la población por la alianza gobierno-FSLN.

Así, un grupo de 29 militantes sandinistas pidieron a la dirección del partido "distanciarse claramente y sin ambigüedades" del gobierno de Chamorro, para "encabezar la lucha popular en defensa de los pobres y los humildes".

En el mismo sentido, ante unas 50.000 personas que celebraron en Managua el 14 aniversario del triunfo de la revolución (julio), Daniel Ortega sostuvo que la gestión de Chamorro se había "agotado" y propuso la formación de "un nuevo gobierno de unidad nacional".

Ortega dijo que la política económica y social del gobierno "ha pauperizado a los nicaragüenses por la imposición de organismos financieros internacionales". Aunque aclaró que no hablaba de "derrocar" a la mandataria sino de un "cambio en la Constitución y las leyes", Ortega afirmó: "los pueblos ponen los gobiernos y así como los ponen los pueden quitar". (17)

Días más tarde, a raíz de la toma violenta de la ciudad de Estelí por grupos **recompas**, Violeta Chamorro culpó al FSLN de promover la violencia en el país. Mientras, empresarios privados pidieron la intervención de fuerzas militares de la ONU en Nicaragua. "Estamos en contra de una salida militar, pero queremos dejar claro que no aceptaríamos la intervención de esas fuerzas en el país", pues "la guerra no debe volver a Nicaragua", respondió Daniel Ortega. (18)

La violencia con que actuó el ejército contra los ex soldados sandinistas que tomaron Estelí, generó reacciones de condena en la iglesia. El Cardenal Obando sostuvo que "la paz impuesta por la fuerza infunde miedo, y la que quieren imponer con un ejército formidable no es paz". Mientras, el obispo estiliano Abelardo Matta advirtió que los sucesos armados en esa ciudad tenían su origen en los problemas socio-económicos, reflejados en "una acción suicida" capitalizada por "el hambre de nuestro pueblo".

Sobre la ocupación de Estelí señaló el diario estadounidense **The Christian Science Monitor** que los **recompas** dirigidos por Víctor Gallegos ("Pedrito el Hondureño"), representaban a una legión de miles de desempleados. "Mientras es un criminal común para algunos, para otros Gallegos es un Robin Hood en el fatigado ejército nicaragüense. En Estelí, algunos afirman que entregó el dinero proveniente de una serie de asaltos bancarios a campesinos pobres a los que se les había negado el crédito por parte del gobierno y en algunos casos no tenían nada que comer". (19)

Cuando el impacto político de los sucesos de Estelí hubo cesado, la UNO reanudó su lucha contra el gobierno, al promover la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La propuesta fue nuevamente rechazada por Chamorro y por el FSLN. A juicio del general Humberto Ortega, la ultraderecha intentaba llevar a

(17) ANSA, 19/7/93.

(18) El Día, agencias, 25/7/93.

(19) Excelsior, 29/7/93.

Nicaragua al caos, para justificar la presencia en el país de una fuerza multinacional de la ONU y hacer desaparecer al ejército.

En la acera contraria, el COSEP pidió a Chamorro la destitución del general Ortega y el ministro Lacayo, a quienes señaló como "los responsables de la mala imagen internacional de Nicaragua".

A fines de agosto y pese a la oposición total de la UNO, la Asamblea Nacional aprobó una tercera ley de amnistía para beneficiar a rearmados que habían delinquido antes del 15 de agosto anterior. El proyecto, que incluía a los ex soldados sandinistas que ocuparon Estelí, provocó el retiro del debate parlamentario de los 36 diputados de la UNO.

La amnistía, a la que también se opuso el COSEP y la Conferencia Episcopal, beneficiaba a unos 1.500 **recompas** y **recontras** "sin excepción", a diferencia de la propuesta por la UNO, la iglesia y el COSEP, que defendía un perdón parcial.

En otro orden, el parlamento condenó mayoritariamente la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda financiera al gobierno, a propuesta del senador republicano Hesse Helms. En el debate, del cual se ausentaron 41 diputados de la UNO, los 46 legisladores que aprobaron la condena expresaron que la medida estadounidense se amparaba en "falsas acusaciones que tratan de proyectar a Nicaragua como un centro de conspiración terrorista internacional y lesiona gravemente nuestra soberanía, independencia y autodeterminación". (20)

A finales de agosto, en el marco del doble secuestro de políticos, militares y diputados, conocido como "crisis de los rehenes", el FSLN propuso el reinicio de negociaciones "sin precondiciones" con el gobierno y la UNO para lograr un "acuerdo de salvación nacional" dirigido a superar la crisis política en el país.

Si bien aquel episodio político-militar concluyó sin graves consecuencias, las causas que lo provocaron continuaron vigentes, según analistas políticos de distinto signo ideológico. Para los protagonistas del hecho (**recontras** y **recompas**), la acción de los primeros sirvió para "llamar la atención" sobre su difícil situación económica, mientras que la de los segundos fue "un llamado urgente" a que los políticos nicaragüenses se pongan de acuerdo para solucionar los problemas del pueblo.

"Se llega al uso de los métodos violentos cuando se ha perdido la capacidad de dialogar. La dirigencia política no tiene respuestas adecuadas para los problemas del país, entonces son otros los que toman las iniciativas, es el problema a resolver", opinó por su parte del dirigente sandinista Sergio Ramírez. (21)

En tanto, articulistas extranjeros ofrecían una versión errada sobre la situación nicaragüense, atribuyendo la crisis política a los acuerdos de transición firmados entre el gobierno y los sandinistas en 1990): "Poco antes de que la presidente Barrios asumiera la presidencia, una delegación nombrada por ella y encabezada por el hoy ministro de la presidencia A. Lacayo, se enfrascó en maratónicas negociaciones con una comisión sandinista

(20) AFP, 19/8/93.

(21) IPS, 26/8/93.

liderada por el general Ortega. De ahí salieron los Acuerdos para la Transición; eran, en suma, unos compromisos que, más allá de transiciones, garantizaban el poder de veto del FSLN sobre las decisiones del gobierno. Estos acuerdos produjeron además la casi total marginación en la composición del gobierno de los políticos de la UNO, la coalición de 14 mini-partidos políticos que sirvió de plataforma para la exitosa campaña electoral de Barrios". (22)

Con una posición similar, el diario francés Le Monde advirtió que Violeta Chamorro "sucumbiría" de no asumir el "papel de árbitro" en la crisis nacional. El periódico comentó que la llamada crisis de los rehenes reflejaba "el fracaso de la política de reconciliación de la viuda de Pedro Joaquín Chamorro", quien "hizo la ambiciosa apuesta (...) de sacar al país de la miseria en la que se encontraba, pero dejando a sus adversarios el control del ejército y la policía".

"Preocupada por evitar que el ejército se subleve contra ella, Chamorro, cuya propia familia está dividida, sin duda concedió demasiado al permitir a los dirigentes sandinistas conservar las propiedades que confiscaron justo antes de ceder el poder", indicó Le Monde. (23)

No se había olvidado aún el levantamiento armado en Estelí ni la llamada "crisis de los rehenes", cuando estalló otro conflicto, esta vez entre el Ejecutivo y el ejército. Agregando nuevos elementos de tensión política, Violeta Chamorro anunció sorpresivamente, a inicios de septiembre y ante cientos de jefes militares, que el general Ortega dejaría en 1994 su cargo en el EPS.

La actitud de Chamorro, que reanudó viejas pugnas entre el gobierno y el ejército tuvo tales efectos, que la mandataria se vio obligada a recurrir al apoyo de la OEA, ante el "desacato y sublevación" de los mandos del ejército y la policía. Su postura le valió sin embargo, por primera vez en tres años, el apoyo público "sin limitaciones" del vicepresidente Godoy.

También el derechista Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN, miembro de la UNO), defendió públicamente a la presidenta por su actitud "valiente y firme" ante los militares y los líderes del FSLN, que reprobaron el anuncio. "La grosera e irrespetuosa manifestación del jefe del partido sandinista (Daniel Ortega) ofende a todos los nicaragüenses en su dignidad y soberanía" y atenta contra la paz y la reconciliación, indicó un informe del MDN. (24)

En entrevista al diario mexicano El Financiero, Daniel Ortega observó: "La sociedad de Nicaragua está dividida "entre una mayoría cada vez más pobre y una minoría cada vez más rica. En la base social del país hay una división más económica que política. Los sectores civiles se tienen que armar para que los escuchen, lo cual es terrible". La nación --agregó-- "vive un proceso de fortalecimiento de sus instituciones, por lo que ningún paso que se dé en el país debe ser resultado de presiones externas". (25)

(22) La Jornada, Josetxo Zaldúa, 23/8/93.

(23) AFP, 27/8/93.

(24) AFP, 3/9/93.

(25) El Financiero, 19/9/93.

El conflicto gobierno-ejército se resolvería semanas después, cuando un acuerdo entre el FSLN y la UNO dispuso la salida del general Ortega una vez promulgada la nueva Ley de Organización Militar. En medios políticos se dijo que allí se había negociado también la destitución del hasta entonces jefe de la inteligencia militar, coronel Lenín Cerna (ex jefe de la desaparecida Seguridad del Estado sandinista, muy criticada por la derecha), cuyo retiro fue anunciado por Chamorro a inicios de octubre. Poco después, el gobierno crearía la llamada Dirección de Asuntos de Inteligencia (DAI), a cargo de un civil y bajo el mando directo del Ejecutivo, y colocaría a Cerna en el cargo de "inspector general" del ejército.

"Con este paso, la presidenta considera que se avanza en la institucionalización de las fuerzas armadas y de seguridad, tal como corresponde al compromiso democrático de su gobierno, con la subordinación del poder militar a la autoridad civil", indicó un comunicado oficial.

Meses más tarde, Chamorro enviaría al Parlamento el proyecto de una nueva ley militar y confirmaría, en un mensaje a la Nación, que el jefe del EPS dejaría el cargo el 21 de febrero de 1995. Por "mutuo acuerdo", el nombre de su sucesor se daría a conocer dos meses antes.

Tras superarse momentáneamente el enfrentamiento gobierno-ejército, y en medio de un fuerte movimiento huelguístico por reivindicaciones sociales (ver capítulo V), se reanudaron las presiones políticas en torno a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Según el ministro del Trabajo, Francisco Rosales, la mandataria evaluaba "de manera seria" esa posibilidad, que se convertiría en "un tema central en el diálogo nacional".

Arnoldo Alemán opinó: "La UNO no ha cambiado su posición con respecto a su demanda del cese de Humberto Ortega y Antonio Lacayo, (pero) la instalación de una Constituyente es la salida más viable a la actual crisis política, económica y social". (26)

Virgilio Godoy insistió: "La elección de una Constituyente sería la solución a la crisis de Nicaragua y costaría menos que una guerra civil (...) Sería la llave más suave para evitar asonadas y confrontaciones estériles". (27)

Reforzando las declaraciones antigubernamentales, el Cardenal Obando sentó una vez más su posición al sugerir: Si la presidenta no cumple con las funciones para las que fue electa, "el Señor puede quitarle el cargo y entregarlo a otra persona".

Los malos funcionarios son como la higuera que no da frutos, "y por eso hay que cortarla", dijo el prelado y añadió, en tática alusión a la mandataria: "El Señor espera uno, dos, tres años, pero si no correspondemos puede quitarnos ese cargo que no dio y entregarlo a otra persona que sea más digna". (28)

A fines de **septiembre**, Daniel Ortega planteó ante una asamblea de trabajadores, la posibilidad de acortar el período presidencial con mecanismos legales, mediante los cuales Chamorro podría ser destituida antes de enero de 1997. Si el gobierno no

(26) Xinhua, 27/9/93.

(27) UPI, 26/9/93.

(28) La Jornada, agencias, 4/10/93.

rectifica su política económica, "el pueblo podrá destituir la" con la misma fuerza que la llevó al poder en 1990, dijo Ortega tras reclamar una "reforma profunda" de la política económica, respeto a las leyes, financiamiento, generación de empleo, garantías a la propiedad y aseguramiento de la producción.

El líder sandinista rechazó sin embargo la propuesta de la UNO para convocar a una Constituyente, y reiteró la posición del FSLN de discutir reformas profundas a la Constitución. Esta fue apoyada casi de inmediato por la UNO, que aceptó negociar "reformas parciales" a la Carta Magna y relegar a un segundo plano su demanda anterior. El acuerdo fue firmado por los diez partidos integrantes de la coalición.

En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (UDC) se pronunció por un acuerdo nacional de gobernabilidad y propuso un programa de 18 puntos que incluyera el rechazo a la reelección presidencial y el retiro de Ortega del ejército. La alianza negó que su propuesta significara una ruptura con la UNO y que, por el contrario, los cuatro partidos socialcristianos se declaraban a favor de la eliminación del servicio militar, la disolución de la inteligencia militar y el cambio de nombre del EPS; así como la recomposición de los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, un plan económico concertado, garantías a la propiedad privada, fin de las confiscaciones y mayores atribuciones al vicepresidente Godoy.

En lo que se considera los más importantes acuerdos logrados desde la asunción de Chamorro en 1990, el FSLN y la UNO anunciaron el 11 de **noviembre** su respaldo a las reformas constitucionales. La presidenta apoyó a su vez "pequeños cambios" a la Carta Magna, tras rechazar una propuesta de la Iglesia para celebrar un plebiscito para avalar o reprobar esa decisión.

Como resultado de un diálogo que continuó por varios días, líderes sandinistas y de la UNO discutieron unas 35 reformas básicas a la Constitución, referidas a aspectos económicos, servicios públicos, autonomía universitaria, propiedad, no reelección presidencial y defensa nacional.

Las principales coincidencias en materia militar se ubicaron en el derecho de los militares al voto y la abolición del servicio militar y de todo tipo de reclutamiento forzoso. También se acordó la prohibición de confiscar bienes muebles e inmuebles, excepto en casos de utilidad pública e interés social, previo pago de indemnización.

Este proceso causó profundas discrepancias al interior de la UNO, donde no todos sus miembros compartieron el consenso logrado con el FSLN. Ello derivó en la eliminación, a inicios de **diciembre**, del Consejo Político de la coalición derechista (que funcionaba como órgano ejecutivo), obligada ya a dar "libertad de acción" a sus integrantes. La UNO quedó entonces dividida en dos fracciones al parecer irreconciliables: los partidos a favor de un acuerdo con los sandinistas en torno a las reformas constitucionales, y los que (como la jerarquía de la Iglesia) insistían en convocar a una Constituyente.

Como efecto aparente de las pugnas internas, la UNO no tardaría demasiado en retomar su antigua práctica de presiones al gobierno y al FSLN, a quienes instó a cederle el control del

Parlamento, como "condición" de su apoyo a las reformas constitucionales negociadas, que llegaron a sumar casi un centenar. Exigió a ambas partes "acciones concretas" para recomponer la directiva parlamentaria, a fin de recuperar la mayoría en la Cámara, y demandó la separación de sus cargos de los diez diputados "de centro" aliados al sandinismo.

Dos días después, desafiando esa posición, la UDC se reintegró al parlamento tras un año de ausencia, para aprobar reformas a dos artículos constitucionales. La posición de los siete diputados democristianos suscitó fuertes críticas de tres partidos liberales y conservadores, y fue interpretada como una ruptura en el seno de la alianza, ahora integrada solamente por siete partidos, de la mitad de los que reunió inicialmente.

La guerra retornó a fines de diciembre, cuando líderes de la UNO volvieron sobre su viejo objetivo: con reuniones en diversas ciudades del país, buscaron respaldo para convocar a una Constituyente destinada a redactar una nueva Carta Magna en 1994 y cambiar autoridades antes de las elecciones presidenciales previstas para 1996. La UNO cambiaba así su estrategia de "guerrilla parlamentaria" por una movilización de sus adeptos (entre ellos el propio vicepresidente Godoy, dedicado a recolectar firmas en las calles), la cual no logró mayor éxito.

La primera y gran acción política de sus líderes en 1994 fue expulsar de su seno a tres partidos, en lo que varias fuerzas políticas calificaron como "una cacería de brujas". La fragmentada coalición separó a la UDC, al MDN y a la Alianza Popular Conservadora (APC), que se habían manifestado anuentes a reincorporarse a las labores legislativas, después de un año de boicot impuesto por la coalición. (29)

Al comentar la situación, Virgilio Godoy sostuvo que los partidos que apoyaron los cambios parciales a la Constitución "cayeron en una trampa autofabricada por el anuncio que hicieron los sandinistas de que estaban dispuestos a reformarla" e indicó que, a largo plazo, pagarían "muy caro" su error.

Para el embajador de Nicaragua en México, Ernesto Fonseca, la gran falla de la UNO fue "que nunca cambió de nombre y sigue siendo opositora". En su interior, dijo, existen "partidos de izquierda de un marxismo radical y por otro lado individuos que sostienen una postura fascista brutal, así como partidos integrados sólo por una familia". (30)

La división de las fuerzas políticas de derecha permitiría, entre otras cosas, que el novel Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN), formado por ex **contras**, obtuviera representación en el parlamento. El PRN adoptó en sus filas al socialcristiano Humberto Castilla, quien renunció a la Unión Demócrata Cristiana (UDC) a causa de pugnas internas.

La Asamblea Nacional comenzó a funcionar el 10 de enero, como estaba previsto, con 70 de sus 92 diputados. Además de los tres partidos ex-UNO mencionados, se reintegraron al parlamento una fracción del Partido Social Demócrata (PSD) y la nueva Bancada Unidad y Reconciliación (BUR).

(29) PL, Xinhua, 4/1/94.

(30) EFE, 24/1/94.

Al inaugurar la X Legislatura (**enero**), Violeta Chamorro respaldó a los partidos abocados a las reformas constitucionales y rechazó la instalación de una Constituyente, que "polarizaría a la población". "Disolver esta Asamblea Nacional, como quieren algunos, significa interrumpir el mandato popular, a un costo económico que el país no está en posibilidad de afrontar", dijo al pedir a la UNO una "tregua política" por la estabilidad.

Chamorro recibió así el respaldo sandinista a su gestión: El FSLN defendió la "legalidad" del período de seis años de su gobierno, si bien la ley establece una fase presidencial de cinco años. Se decidió otorgar a la presidenta un año adicional, pues los comicios de 1990 se habían adelantado para acortar el mandato del entonces presidente Daniel Ortega, que debía entregar en 1991. Chamorro "legalmente puede quedarse" hasta enero de 1997, aunque si se retira un año antes, sería "una cuestión de conciencia política", dijo Ortega. (31)

A inicios de **febrero**, inició el debate en torno a las reformas constitucionales. El presidente del parlamento, Luis Humberto Guzmán, se declaró en contra de la reelección presidencial y a favor de una prohibición a familiares del presidente de la República a ejercer cargos públicos.

Lo anterior afectaba directamente al ministro Antonio Lacayo (por su vínculo familiar con Chamorro), quien no solamente se vería obligado a dimitir sino también a abandonar sus aspiraciones presidenciales para 1996. A inicios de año, circuló la versión de que el yerno de la presidenta se preparaba para postularse como candidato presidencial, luego de formar un "equipo político" que trabajaría en "mejorar su imagen".

Con respecto a los comicios de 1996, el Cardenal Obando reconoció que "volverá al poder el Frente Sandinista; ellos tienen la estructura y los mecanismos necesarios para ganar y cuentan con gran parte de la simpatía electoral". (32)

Sin embargo, la presencia del PLC continuó siendo un motivo de preocupación para los sandinistas. En una entrevista al diario madrileño El País, Daniel Ortega advirtió: "El somocismo estuvo en el poder durante más de 40 años, hizo una base social, se montó sobre un partido histórico, el liberal, y ahora resurge en Nicaragua bajo la bandera del liberalismo", en referencia al PLC y su líder, Arnoldo Alemán. (33)

Esa preocupación quedó sustentada en el resultado de las elecciones en la Costa Atlántica, el 27 de febrero. Con una abstención del 30% de sus 112.000 electores, en los comicios se eligió a 90 miembros de los Consejos Regionales Autónomos del Norte y Sur, organismos con independencia relativa del gobierno central y creados en un proceso de autonomía que propició el FSLN en los 80. También se eligió a los respectivos gobernadores, con sede en Bluefields y Puerto Cabezas, capitales de la zona Caribe.

En los comicios generales de 1990, la UNO había obtenido mayoría de votos en el Atlántico (un 64%) cuyos pobladores guardaban entonces profundo resentimiento hacia el FSLN. El

(31) AFP, 12/1/94.

(32) Excelsior, corresponsal, 18/2/94.

(33) AFP/AP, 16/2/94.

denunciado maltrato sufrido en los primeros años de la revolución, a raíz de lo cual miles de indígenas se incorporaron a la guerra **contra**, fue cobrado con sólo un 35.9% de la votación favorable a los sandinistas.

La campaña electoral del Atlántico, la zona más despoblada de Nicaragua donde conviven indígenas de seis etnias (garifonas, sumus, creoles, mestizos, ramas y negros), dejó dos grandes contendientes: el FSLN y el PLC, declarado vencedor al obtener 37 de los 90 escaños para los dos consejos autónomos, frente a 32 puestos logrados por el FSLN, 11 para la organización indígena Yatama y seis para la UNO, la gran perdedora en la elección.

Ante el confuso panorama político y la crisis económica nacional, analistas han estimado que el FSLN tendría que buscar una alianza con otros sectores si desea una victoria en las presidenciales de 1996. Los insistentes rumores sobre una posible futura alianza "centrista" entre sectores del gobierno y el sandinismo --con ese objetivo-- parecieron confirmarse en mayo, cuando Antonio Lacayo anunció a la prensa que buscaría la primera magistratura de Nicaragua.

El funcionario abogó por una unión que se ubicara en "el centro" del espectro político. "Si ya he tenido cuatro años en esto y el país va avanzando, no voy a rehuir el bulto; no voy a permitir el ascenso de un extremista", dijo en alusión al alcalde Alemán. Y agregó: "Mientras exista una opción política de centro como la que representa la presidenta Chamorro, la derecha no tiene ninguna oportunidad, ni en 1996 ni en el 2002." (34)

Dos meses después, Lacayo anunciaría su anuencia a divorciarse de Cristiana Chamorro (hija de la presidenta), saliendo al paso a la reforma constitucional que prohíbe la sucesión a familiares de un presidente en funciones.

A finales de **mayo**, tras la clausura de su polémico II Congreso extraordinario, el FSLN reinició su ofensiva contra la política económica oficial. Daniel Ortega, reelecto como secretario general del partido, aseguró que buscaría "promover las luchas del pueblo, de los sectores económicos y sociales afectados por la crisis".

En tanto, continuó en la Asamblea Nacional el debate en torno a un nuevo Código Militar. Uno de los aspectos más polémicos fue la propuesta de creación de un Instituto de Previsión Social Militar, que se abastecería con recursos públicos y bienes generados por empresas del cuerpo armado. Alfredo César declaró que se pretendía "crear una casta militar" capaz de administrar bienes económicos y competir deslealmente con la empresa privada.

A la posición de César se sumaron los principales líderes de la UNO. El llamado Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar recibió también la crítica del presidente del parlamento, quien recomendó "asegurar con transparencia la subordinación castrense" a la sociedad civil.

El general Ortega advirtió en esas críticas "una campaña de desestabilización" contra el EPS "promovida por sectores de la extrema derecha".

(34) Notimex, 17/5/94.

Sobre el contenido del Código Militar conversaron en Managua el general Ortega y el ex presidente estadounidense James Carter invitado a la Conferencia Internacional sobre Reflexiones a la Transición Democrática. Al evento, que llamó a la reconciliación y a poner fin al autoritarismo, asistió también el ex mandatario polaco Wojciech Jaruzelski, quien se declaró a favor de una política de centro como la alternativa para "reconciliar a las sociedades que intentan superar conflictos internos y consolidar la democracia". (35)

A inicios de julio, el pleno de la Asamblea Nacional inició el debate sobre el Código Militar. Se conocieron dos dictámenes, uno de minoría presentado por 24 diputados de la UNO, y otro de mayoría, respaldado por el FSLN, la UDC y el Grupo de Centro.

La ultraderecha sostuvo que el Código confería a los militares poderes por encima del propio Estado. Sin embargo, el proyecto reconocía al presidente de la República como "jefe supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación", con la facultad de nombrar al jefe del cuerpo castrense "a propuesta del comandante en jefe del ejército".

Establecía además que "el comandante en jefe del ejército no puede ser removido por razones políticas, partidarias o personales u otras razones arbitrarias", descartando la obligación legal de constituir un ministerio de Defensa. En cuanto a la justicia militar, estipulaba que los efectivos de las fuerzas armadas serían juzgados por tribunales ordinarios, con iniciativa penal reservada a la Procuraduría General de Justicia.

Por primera vez en la historia de la Asamblea Nacional, con la aprobación del Código (por 49 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones) Nicaragua legislaba sobre el ordenamiento jurídico de las fuerzas armadas, cuyas anteriores leyes habían sido dictadas por el Ejecutivo. Según la nueva ley, la presidenta Chamorro deberá aprobar o rechazar los candidatos a sucesor del jefe del ejército, previamente seleccionados por el Consejo Militar, un cuerpo de 30 altos oficiales.

De hecho, los parlamentarios votaron un texto según el cual "la propuesta del Consejo Militar (sobre el nombramiento del jefe del ejército) puede ser desaprobada" y el presidente de la República puede "solicitar otra propuesta". Según la UNO, sin embargo, esa disposición dejaría "al gobernante con las manos atadas". (36)

(35) Notimex, 23/6/94.

(36) Notimex, 13/7/94.

El Salvador

1. Configuración de los principales partidos políticos

La historia política de El Salvador ha estado marcada por la entronización en el gobierno de 14 poderosas familias, que se ampararon en los cuerpos armados para mantener durante décadas el control de la sociedad.

El espectro político salvadoreño actual muestra a una derecha representada fundamentalmente por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), organización controlada casi totalmente por los grandes empresarios y el aparato armado estatal.

En una posición considerada de "centro" se encuentra el Partido Demócrata Cristiano, dirigido por Gerardo le Chevalier. Su último período de gobierno fue con la administración de José Napoleón Duarte. Con los comicios de 1994 (triumfo de Arena) quedó relegado a un tercer puesto entre las fuerzas políticas por el ahora partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Al otro extremo, la izquierda salvadoreña exhibe un nuevo abanico con tres cabezas visibles: el FMLN, la Convergencia Democrática (CD) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de orientación socialdemócrata liderado por Rubén Zamora.

El FMLN se transformó en partido en diciembre de 1993, con una directiva integrada por cada una de las tres agrupaciones que lo conformaron como movimiento político-militar hace 12 años. El comandante Fermán Cienfuegos se refiere a "una nueva izquierda dentro del FMLN, marcada por contradicciones en el liderazgo social y el político, entre quienes están a favor de la estabilidad y el sistema democrático y los contestatarios". (37)

A mediados de 1993, salieron a luz contradicciones en el FMLN. Reunidos en un foro político, líderes del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Resistencia Nacional (RN) y la Expresión Renovadora del Pueblo (ERP, antes Ejército Revolucionario del Pueblo) coincidieron en que "la inviabilidad del neoliberalismo y de un sistema socialista estatizante en El Salvador, sitúa a la socialdemocracia como una opción de poder y desarrollo en el país". Esta posición difiere de la sostenida por las demás agrupaciones que conforman la organización. (38)

Estas diferencias se materializaron con la separación formal, a fines de 1994, de la ERP, liderada por el ex comandante Joaquín Villalobos.

2. Panorama político y parlamentario

(37) Barricada, 4/1/94, p. 4.

(38) Excelsior, corresponsal, 23/7/93, pp. 2 y 15.

Tras la ofensiva militar del FMLN en noviembre de 1989, que incluyó ataques contra áreas urbanas de San Salvador, Usulután y San Miguel, comenzó a hablarse del fracaso del programa contrainsurgente dirigido y financiado por Estados Unidos en El Salvador. Según la dirigencia rebelde, la estrategia de "baja intensidad" aplicada diez años atrás por Washington, obligó al gobierno a presionar con medidas antipopulares, en franca posición defensiva ante la guerrilla, obligando al gobierno a implantar el estado de sitio y el toque de queda.

A simple vista, el FMLN no pudo conseguir las metas políticas planteadas al inicio de la ofensiva: presionar al gobierno para realizar un diálogo-negociación y llevar a la población a una insurrección popular. Sin embargo, desde el punto de vista militar, comparando los recursos humanos y logísticos de ambos ejércitos, la guerrilla mostró una capacidad militar acumulada, abrió un nuevo frente de guerra (la capital) y puso en juego su capacidad de combate, coordinación y abastecimiento, obligando al ejército a concentrar sus efectivos en San Salvador y abandonar posiciones en el interior del país.

En el aspecto político, el gobierno enfrentaba el proceso judicial por el asesinato de seis jesuitas, entre ellos el padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), realizado en noviembre de 1989 por miembros de las fuerzas armadas, según admitieron las autoridades.

Pese a ello, mientras organizaciones internacionales y gobiernos reclamaban en los primeros dos años de la década el cese de las violaciones a los derechos humanos, muchos otros atentados políticos continuaban impunes. Persistían también las capturas de líderes sindicales, comunales y cooperativistas en todo el país.

Ya estaba dado entonces el primer paso para iniciar las conversaciones entre el gobierno y el FMLN, después que ambos aceptaran la participación de la ONU en el proceso negociador. En el mismo contexto, una serie de cambios registrados en las fuerzas armadas apuntaban a la moderación, entre ellos la destitución de varios oficiales opuestos al proceso de pacificación. (39)

Según analistas, cuatro factores movían entonces el ajedrez político a favor la negociación: el interés de la mayoría de la sociedad en el fin de la guerra; la presión centroamericana, también determinada por factores económicos (comercio interregional); la influencia internacional, especialmente de Estados Unidos, sobre las fuerzas armadas, y la presión interna ejercida por la oposición política, las organizaciones populares y el FMLN. (40)

Rodeado por las críticas, el empresario Alfredo Cristiani guiaba los destinos del país. El arribo de ARENA al gobierno había representado el retorno al poder del poderoso sector económico. Es decir, el fin de las débiles reformas emprendidas por gobiernos de corte populista y la reactivación de un modelo neoliberal que, ajustado a las demandas de los organismos

(39) Inforpress Centroamericana, 22/3/90, p. 15.

(40) Inforpress, 31/5/90, p. 5.

internacionales, chocaba con la ya precaria situación de la mayoría de los salvadoreños.

La polarización era económica, política y social, en momentos en que el único logro obtenido hasta entonces por ARENA había sido, paradójicamente, el inicio de un proceso serio de negociación con la guerrilla, afincado en una cada vez mayor presión internacional y en la unidad de importantes grupos obreros en la oposición.

En el diálogo gobierno-guerrilla, cuyo proceso tuvo varias importantes reuniones directas en el período 1990-91, el punto central lo constituía el tema del futuro de las fuerzas armadas. En ese lapso, la negociación bilateral pasó a ser parte, junto a la guerra, de la vida cotidiana del país, y constituía un factor de enfrentamiento entre el gobierno y los sectores humanitarios, laborales, campesinos y políticos, que cuestionaban la falta de interés de ARENA en una negociación seria con los rebeldes y, mucho menos, en la tan exigida depuración castrense.

Los acuerdos políticos logrados entre el FMLN y el gobierno a comienzos de 1991, en torno a 47 reformas constitucionales para viabilizar el proceso de paz (referidas a las fuerzas armadas, derechos humanos, sistema judicial y electoral), fueron el punto de arranque de la firma de los acuerdos definitivos de paz, a inicios de 1992 en Chapultepec, México.

La ONU había creado ya la misión de observadores en El Salvador (ONUSAL), para verificar el cumplimiento de acuerdos gobierno-guerrilla en materia de derechos humanos en una primera fase, y un eventual cese al fuego en fechas posteriores.

Si bien los primeros pasos para acatar los acuerdos comenzaron de inmediato, las acusaciones mutuas de incumplimiento serían una constante a lo largo de los siguientes años.

En sus puntos medulares, los Acuerdos de Paz establecían la desmovilización de los diferentes batallones de lucha irregular, de la policía de Hacienda y de los cuerpos de inteligencia, así como la creación de una Comisión de la Verdad imparcial que permitiese la depuración de los principales mandos del ejército involucrados en violaciones a los derechos humanos.

En lo económico, el gobierno se comprometía a entregar tierras a los desmovilizados, tanto de la guerrilla como del ejército. Por su parte, el FMLN aseguraba su desarme total en cinco etapas, (cada una de ellas se verificaría en forma simultánea al cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno), la última de las cuales culminaría el último día del mes de octubre.

La complejidad del proceso de paz salvadoreño, plagado de los estira-y-encojes tan comunes en toda negociación, se observó en toda su magnitud en los primeros meses de 1992, como lo refleja el siguiente recuento de los hechos.

A mediados de **julio de 1992**, el FMLN insistió en la necesidad de ampliar y legalizar sus espacios de comunicación, mientras denunciaba constantes atentados contra sus medios informativos.

En ese mes, un "raro" incendio destruyó el local de la agencia salvadoreña de prensa (SALPRESS), acabando con su archivo histórico. El FMLN denunció la existencia de un proyecto oficial para "monopolizar los medios de comunicación, tendiente a cerrar

los espacios" políticos en el país, donde el 90% de los periódicos está en manos de sectores tradicionales.

Según Joaquín Villalobos, el gobierno pretendía "meternos en una batalla (de cara a las elecciones del 94) que prácticamente tendríamos perdida" por la desigualdad de condiciones. (41)

Ese mismo mes se instaló oficialmente, en la sede de la ONU en Nueva York, la Comisión de la Verdad, integrada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el ex canciller venezolano Reynaldo Figueredo y el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Thomas Buergenthal.

La formación de ese organismo coincidía con un aumento en las denuncias en torno a la falta de condiciones para la desmovilización del FMLN. Según Shafick Handal, coordinador del FMLN, no existían hasta el momento "condiciones para la reinserción de los combatientes a la vida civil", lo cual fue admitido por el presidente Cristiani al señalar la escasez de recursos económicos para ejecutar esos programas.

El diario estadounidense The New York Times observó: "Después de una demora de varios meses, el gobierno salvadoreño y sus ex adversarios rebeldes han adoptado las primeras medidas hacia la desmovilización, si bien las dos partes se acusan de no cumplir plenamente los acuerdos de paz alcanzados el 16 de enero pasado.

"A lo largo de varios días a fines de junio y principios de julio, el gobierno decretó la desaparición de dos de las fuerzas de seguridad (la Policía de la Hacienda y la Guardia Nacional), en tanto los ex rebeldes desmovilizaron a más de 1.600 personas que, dijeron, eran el 20% de su fuerza.

"Sin embargo el gobierno incorporó a la mayoría de los miembros de las dos fuerzas de seguridad desmanteladas, estimadas en 8.000 hombres, en dos nuevos grupos, la Policía Fronteriza y la Policía Militar, que formarán parte del ejército." (42)

El 15 de agosto se conoció el informe de tres civiles agrupados en la llamada comisión Ad Hoc, establecida por los acuerdos de paz para evaluar el historial de los efectivos del ejército, a fin de purgar a los miembros de las fuerzas armadas responsables de crímenes. El trabajo de la comisión, que según Los Angeles Times pondría en "una dura prueba, con posibilidades de fracaso" al acuerdo de paz de enero, fue obstaculizado por el gobierno de George Bush, que retuvo documentos en poder del Departamento de Defensa y la CIA, la fuente de información más importante sobre el ejército salvadoreño.

El artículo del Times observó: "Siete meses después de que el gobierno y los guerrilleros firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra de 12 años en El Salvador, su alto al fuego se mantiene. El ejército y las fuerzas rebeldes han sido confinados a sus bases y no han habido enfrentamientos importantes. (...) El presidente Cristiani insiste en que es sagrado el plazo para la desmovilización de los 8.000 miembros del FMLN y la puesta en marcha de las reformas democráticas. Pero ya se habla ampliamente de prolongar la participación de la ONU en El Salvador.

(41) El Día, 4/7/92.

(42) Excelsior, 30/7/92, pp. 41 y 43.

"La profunda desconfianza entre las dos partes y las acusaciones mutuas siguen provocando retrasos. El gobierno y el ejército creen que el frente guerrillero izquierdista quiere ser un partido político armado, capaz de reanudar la batalla si le va mal en las elecciones de 1994. Los rebeldes creen que el gobierno derechista quiere desarmarlos sin llevar a cabo los amplios cambios democráticos que impulsaron al secretario general de la ONU, Boutros Ghali a calificar el acuerdo como 'una revolución negociada'. Temen que la extrema derecha reanude sus asesinatos en masa al estilo 1980, tan pronto y los 800 observadores de la ONU abandonen el país. (...)

"El primer contingente de 1.700 rebeldes se desmovilizó el pasado 30 de junio, pero el gobierno se quejó de que la mayoría eran viejos y lisiados, cocineros y mensajeros, no combatientes activos. Pero todavía más importante: el ejército se quejó de que los guerrilleros entregaron sólo 179 armas 'viejas y deterioradas' y los acusó de que esconden los pertrechos militares. (...)

"Los dirigentes rebeldes ahora afirman que no desmovilizarán el segundo contingente hasta que el primero reciba ayuda y títulos de propiedad que también son parte de los convenios. La tierra es uno de los asuntos más complicados e históricamente divisorios en el pequeño El Salvador. Según los acuerdos, el gobierno aceptó comprar tierras de cultivo a los dueños originales en las zonas de combate a precio del mercado y venderlas a los guerrilleros y sus partidarios. (...) Según la ONU, los rebeldes presentaron un reclamo inflado de las propiedades que tenían que ser verificadas. El área en cuestión es de alrededor de 208.000 hectáreas (...)

"Los acuerdos piden el establecimiento de una Policía Nacional Civil en sustitución de la actual Policía Nacional. La organización de esta nueva fuerza, que podría incluir a antiguos miembros del ejército y del FMLN, todavía no está programada. (...)

"Los convenios de paz exigen que el ejército elimine sus batallones de contrainsurgencia de élite y reduzca sus fuerzas a la mitad. El general Vargas dijo que 20.000 soldados ya han sido despedidos y que el batallón de élite Bracamonte ha sido eliminado. Indicó que las fuerzas armadas serían reducidas a 31.000 miembros para fines de este año. (43)

El 21 de agosto, el gobierno y la ex guerrilla acordaron reprogramar el calendario del proceso de paz, suspendiendo por un mes la segunda desmovilización rebelde. El líder del FMLN Salvador Samayoa indicó que la siguiente desmovilización de guerrilleros no se realizaría hasta que el gobierno cumpliera con los programas de reinserción de los ex combatientes y se hubiera anunciado la creación de la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente Cristiani acusó al FMLN de hacer "exagerados reclamos" de tierras y dijo que la ONU no debía suspender la desmovilización de los ex guerrilleros, quienes deberán desarmarse totalmente antes del 31 de octubre. "El FMLN insiste en continuar con peticiones que están totalmente fuera de las

(43) Excelsior, 19/8/92, pp. 46 y 47.

posibilidades del gobierno en materia de recursos, tanto en extensión de tierras como en recursos económicos", dijo.

Según el gobierno, el FMLN había pedido "cantidades astronómicas" de tierra, que superarían el 25 y 30% del territorio salvadoreño. Funcionarios aseguraron contar con los recursos para entregar tierras a 7.500 ex rebeldes y a un poco más de 10.000 efectivos de las fuerzas armadas.

De acuerdo con analistas, al FMLN no le quedaba otra opción que aceptar un plan de reparto agrario propuesto por la ONU y enfrentar los costos políticos que esa decisión traería entre sus bases. Así, pese a las amenazas de suspensión del desarme, el FMLN desmovilizó a fines de septiembre otro 20% de sus combatientes. Cristiani consideró "positivo" el suceso pero insistió en el cumplimiento del plazo fijado del 31 de octubre siguiente.

En el mismo sentido, el arzobispo Arturo Rivera y Damas expresó: "El 31 de octubre debería terminar el periodo de paz armada para dar a la paz social una fisonomía civil, caracterizada por la cultura del diálogo y la concertación como camino para resolver los conflictos"; al tiempo que destacó la necesidad del diálogo y la concertación para alcanzar la paz y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. (44)

El proyecto de Naciones Unidas en torno al reparto agrario, dado a conocer a mediados de octubre y aceptado por el gobierno y la guerrilla, sentó las bases para beneficiar con tierras a 47.500 salvadoreños: 7.500 ex FMLN, 15.000 ex soldados y unos 25.000 "tenedores" (actuales pobladores de las tierras a distribuir). Boutros Ghali admitiría con acierto que dicho plan, resultado de consultas entre las partes en pugna, no "satisfará plenamente" a ninguna de ellas.

Mientras, el FMLN denunció una "guerra sucia" de sectores extremistas en contra del plan de paz. Ubicó al frente de ese plan al viceministro de Defensa, Orlando Zepeda, a los jefes de los batallones de contrainsurgencia y al presidente de ARENA, Armando Calderón Sol, a quienes acusó de azuzar a grupos ultraderechistas para provocar al FMLN y exigir su desarme total, mientras el gobierno incumplía lo pactado.

En tanto, el gobierno insistió en el plazo para la desmovilización total de la guerrilla. "No vamos a participar en ninguna negociación, ni con el FMLN ni con la ONU, ni con quien sea para fijar nuevas fechas", advirtió Cristiani al rechazar una propuesta rebelde, respaldada por la ONU, para extender el plazo al 15 de diciembre de ese año.

En momentos en que el ejército y los rebeldes habían suspendido sus compromisos de desarme, y al borde de una seria crisis política frente a sus colegas de ARENA, Cristiani accedió a reunirse de emergencia con la comandancia del FMLN, mientras la ONU anunciaba que propondría una prórroga de dos meses para cumplir los acuerdos de paz.

De hecho, Cristiani estaba presionado por Naciones Unidas y también por el dictamen de la Comisión Ad Hoc sobre los militares. Según versiones de prensa, los oficiales acusados en

(44) ANSA, 4/10/92.

el informe habían amenazado con desafiar a Cristiani, amparados en el hecho de que, en la mayor parte del historial de represión de las fuerzas armadas, abundan los testimonios pero no existen pruebas válidas para determinar judicialmente la responsabilidad de los oficiales.

"Es cierto que en nuestro trabajo nunca logramos reunir pruebas para inculpar a los militares", admitió Joaquín Cáceres, dirigente de la no oficial Comisión de Derechos Humanos (CDHES).

Estados Unidos, por su parte, puso el peso de su influencia en favor de los acuerdos de paz y contra los militares salvadoreños. Para que no quedaran dudas, el jefe del Comando Sur, George Joulwan, y el subsecretario de Estado, Bernard Aronson, viajaron a mediados de octubre a El Salvador para "respaldar al presidente Cristiani en el difícil paso que debe dar" para depurar el ejército, según indicó el semanario Proceso, de la universidad jesuita.

La ONUSAL, por su parte, intentaba enfriar los ánimos. "Las partes me han asegurado con toda firmeza que no tienen la más mínima intención de volver al conflicto armado", dijo su jefe, Iqbal Riza, en tanto los medios de difusión locales eran saturados de propaganda de grupos de extrema derecha que insistían en que el 31 de octubre sería el último e irrevocable día de vida de la guerrilla.

El FMLN va a mantener el cese del fuego y "no caerá en la trampa de provocación ultraderechista que quiere boicotear el proceso de pacificación", dijo la comandante Nidia Díaz al proponer una recalendarización del proceso de paz, que comprometiera a las partes y facilitara "equilibrio y correspondencia mutua".

Finalmente, **pocos días antes** de cumplirse el plazo del **31 de octubre**, el gobierno aceptó la recalendarización propuesta por la ONU para finalizar el proceso de desarme el 15 de diciembre, pero reprobó otros plazos propuestos, concernientes a diversos aspectos de los acuerdos de paz.

Cristiani resolvió unilateralmente suspender la desmovilización, reducción y reestructuración de la fuerza armada. Ante ello, el FMLN reiteró que cumpliría con la nueva propuesta de la ONU y desarmaría el 31 de octubre a otro 20% de su fuerza (unos 1.200 hombres) para finalizar con el desarme total el 15 de diciembre. "Vamos a cumplir y a exigir que la contraparte cumpla", dijeron los ex comandantes Joaquín Villalobos y Shafick Handal. Según Villalobos, Cristiani "no logra hacer sentir su autoridad por encima del ejército y la Fuerza Armada, supeditándose al poder militar". (45)

Como estaba previsto, la guerrilla inició el 30 de octubre el desarme de 1.860 combatientes (tercer contingente) en 15 campamentos a nivel nacional, para cubrir el 60% de sus fuerzas desmovilizadas.

La negativa de Cristiani a acatar totalmente los nuevos plazos de la ONU en cuanto a desmilitarización, transferencia de tierras y reforma política, despertó inquietud entre la población y fue aplaudida por ARENA. Sin embargo, miembros de ONUSAL la

(45) La Jornada, enviada, 29/10/92, pp. 44 y 56.

interpretaron como un "no pero sí", como un "mensaje de consumo interno" dirigido a aplacar las presiones de la oficialidad militar y la ultraderecha.

Un día después concluyó el plazo inicial para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Unos 25.000 salvadoreños desfilaron por las principales calles de la capital, en lo que se consideró como una de las más grandes marchas desde la firma de los acuerdos.

En **noviembre**, el arzobispo Arturo Rivera y Damas exhortó a las partes a cumplir la nueva recalendarización, para lograr "un desenlace feliz" el 15 de diciembre, en tanto la ONU reiteraba al gobierno sus demandas para legalizar al FMLN como partido político. Dos semanas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció su decisión de legalizar al FMLN apenas la ONU presentara un documento oficial confirmando su desmovilización total.

El FMLN rechazó esa posición, a la que calificó como una "muestra de la falta de voluntad" de cumplir los acuerdos y un reflejo de "los temores" del oficialista ARENA por la eventual participación de la ex guerrilla en las elecciones de 1994.

Al comentar el incumplimiento oficial a los acuerdos, el corresponsal del New York Times insistió en la depuración castrense: "Una comisión creada en el marco de los acuerdos para destituir a los oficiales que hayan cometido abusos o sean corruptos ordenó el cese de más de 70 y la transferencia de más de 40, dijeron personas con acceso al informe que aún se mantiene en secreto. Tanto el ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, como su viceministro, general Juan Orlando Zepeda, están incluidos en el informe." (46)

En este ambiente, circularon reiterados rumores sobre un intento de golpe de estado. El ministro de Defensa René Ponce, negó la versión que, dijo, provenía de la "izquierda" para desprestigiar al cuerpo armado.

En tanto, el jefe de la misión de ONUSAL, Iqbal Riza, advirtió al gobierno que podría incurrir en violación a los acuerdos de paz, al pretender incorporar a la futura PNC a antiguos miembros del ejército y otras unidades disueltas.

El 7 de noviembre, el gobierno y el FMLN llegaron a un nuevo acuerdo "sobre un nuevo calendario para la implementación de las reformas pendientes y el desarme de la guerrilla". Aunque su contenido fue confidencial, trascendió que las partes habían accedido a elaborar un cronograma para purgar a decenas de oficiales del ejército, con base en el informe de la Comisión Ad Hoc. Líderes del FMLN dijeron estar dispuestos a extender el tope de cumplimiento del acuerdo más allá del 15 de diciembre para completar la purga, con la garantía de que ésta seguiría aun después del desarme de la guerrilla.

Ante las acusaciones de voceros castrenses, el FMLN negó que intentara almacenar armas después del proceso de desarme e informó, por el contrario, del inicio de un proceso de autodestrucción de armamento bajo la supervisión de observadores de la ONU. El dirigente farabundista Sigfrido Reyes rechazó "categóricamente las pretensiones del general Ponce" y recordó

(46) Excelsior, 5/11/92, Escena Mundial, pp. 1 y 3.

que el ejército aún tenía almacenadas unas 10.000 armas que había decomisado al FMLN durante la guerra, las cuales "no se sabe qué rumbo han tomado". (47)

El 14 de diciembre, ONUSAL confirmó el desarme del quinto y último contingente del FMLN, conformado por 800 rebeldes. La guerra se dio por concluida en una ceremonia especial a la que asistieron personalidades internacionales y donde se elogió la llamada "fiesta de la reconciliación nacional".

Pero, aunque la guerra había acabado oficialmente, quedaban aún muchas cuentas pendientes, entre ellas la verdad que surgiría en el informe de la Comisión de la ONU, previsto a divulgarse en 1994. En un mensaje, Boutros Ghali afirmó: "Bien podría ser que el momento definitivo en el proceso de la reunificación llegue solamente cuando se haga conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Las escrituras dicen que 'la verdad os hará libres'. Los salvadoreños sólo podrán dejar atrás el pasado una vez que la verdad sobre el pasado haya salido a la luz. Esperamos con expectación los resultados de la ardua labor llevada a cabo por estos tres hombres eminentes y sabios" (en alusión al ex presidente colombiano Belisario Betancur, el ex canciller costarricense Reynaldo Figueredo y el jurista estadounidense Thomas Buergenthal).

Al comenzar 1993, el 1 de enero, Ghali advirtió que el ejército no había realizado los cambios sugeridos por la comisión Ad Hoc, en torno a la dimisión de más de 100 oficiales, entre ellos el ministro y viceministro de Defensa. De acuerdo con la orden general, sólo tres oficiales involucrados en crímenes habían sido dados de baja tras ser acusados judicialmente. (48)

Argumentando insatisfacción por la débil depuración del ejército, especialmente de los 15 altos militares señalados por violar los derechos humanos, el FMLN suspendió la destrucción de un último lote de 50 misiles tierra-aire. Cristiani, a su vez, propuso formalmente a la ONU le permitiera completar de manera escalonada la depuración de las fuerzas armadas, en un proceso previsto a culminar en mayo de 1994.

Ante esa solicitud, el PDC reaccionaría pidiendo al gobierno y al FMLN suspender las negociaciones sobre los mecanismos para depurar el ejército. "Ya no es tiempo para negociaciones", dijo Fidel Chávez Mena, dirigente del partido.

Días más tarde, desafiando la posible reacción del gobierno de Estados Unidos y de la ONU, Cristiani anunció que una depuración de tipo "gradual". Reconoció que esa decisión, a la que calificó de "definitiva", podría generar "presiones en el Congreso (de Estados Unidos) en favor de la congelación o el condicionamiento" de fondos a su país. Sin embargo negó haberla tomado "con las manos atadas", aunque --reconoció-- lo contrario hubiera "enojado" a algunos jefes del ejército. (49)

"Será un duro golpe" para Cristiani y pagaría un alto costo político si mantiene la hegemonía militar en la estructura del

(47) Notimex/EFE, 3/12/92.

(48) La Jornada, agencias, 1/1/93. pp. 26 y 44.

(49) El Día, agencias, 9/1/93.

Estado y rechaza la depuración del ejército, opinó Shafick Handal.

Mientras, Ghali denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el FMLN no había terminado la destrucción de sus armas establecida en los acuerdos de paz; a inicios de mes, el secretario general había informado sobre el incumplimiento del gobierno sobre la depuración del ejército. Según Galileo Martínez, vocero del FMLN, la falta de cumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz, como la plena despistolización y el retiro de militares de alto rango acusados de violar los derechos humanos, se presentaba como un obstáculo para las campañas electorales de 1994.

En otro orden, a mediados de febrero y como parte de lo estipulado en Chapultepec, trabajadores, empresarios y funcionarios de gobierno inauguraron el "Foro para la Concertación Económica y Social", tras un retraso de más de ocho meses por falta de consenso.

En ese foro, destinado a discutir la nueva legislación laboral, se llegó a una serie de compromisos "de buena fe" para iniciar el diálogo, debido a la presión de organismos laborales que en enero habían pedido al Congreso de Estados Unidos suspender las preferencias arancelarias para los productos locales. La UNOC, una de las principales centrales campesinas del país, advirtió: "En muchos centros de trabajo no se permiten sindicatos y en el caso de las huelgas todas, aunque sean justas, son declaradas ilegales" por los tribunales. (50)

La cúpula empresarial de ANEP se retiraría del diálogo a fines de abril, en protesta por denuncias sobre incumplimiento de sus obligaciones y demora en todo tipo de arreglo en las relaciones obrero-patronales a incluir en el nuevo código laboral. Según la ANEP, uno de los logros conseguidos en la concertación, era el referido a la ratificación de varios convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe de la Comisión de la Verdad

A inicios de marzo y sin conocerse aún el informe de la Comisión de la Verdad, el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, declaró: "Mirar de frente la historia de El Salvador en lo que tiene de más repugnante, es decir, la historia de los hechos violentos más abominables ocurridos durante los años de guerra, va a servir para que eso nunca más vuelva a ocurrir". Dijo que la Comisión "acudió reiteradamente, en algunos casos como el del crimen de los jesuitas, a los organismos correspondientes, como el Departamento de Estado. Buscaron la información por todas partes pero no siempre la respuesta fue la que ellos esperaban". (51)

En medio de la expectación nacional en torno al informe de la ONU, descalificado de antemano por ARENA, el FMLN declaró que asumiría sus resultados, en tanto el gobierno y el ejército

(50) AFP, 18/2/93.

(51) El Día, corresponsal, 6/3/93.

pidieron que el documento se diera a conocer hasta después de las elecciones de 1994.

Antes de divulgarse el informe, el gobierno salvadoreño había concedido amnistía a los militares involucrados. Organismos como Convergencia Democrática (CD), el Comité Permanente de Debate Nacional (CPDN) y la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) se opusieron a la medida oficial.

En el exterior también hubo reclamos, como el del académico estadounidense Daniel M. Lund, para quien la amnistía fue "un acto de perversidad política" que sin duda influiría en el Congreso norteamericano para hacer público un "libro blanco" sobre la participación de Washington en la guerra salvadoreña.

Presionado por su implicación en los crímenes señalados por la Comisión, el ministro de Defensa renunció en el mismo mes de marzo.

Luego de más de siete meses de investigaciones, la Comisión de la Verdad entregó su informe a una subcomisión del Congreso de Estados Unidos. En una audiencia legislativa en Washington, sus miembros exigieron la purga de los militares culpables de crímenes y formularon un enérgico llamado a "Estados Unidos y a toda la comunidad internacional a demandar la plena puesta en efecto del informe de la Comisión Ad Hoc, cuyas aparentes conclusiones acerca de ciertos oficiales militares son avaladas por determinaciones actuales específicas de esta comisión". (52)

Entre sus puntos principales, el informe recomendaba la destitución inmediata e inhabilitación del ministro general Ponce, del viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Maldonado; del jefe de Estado mayor, general Rafael Bustillos, y de los coroneles Francisco Elena Fuentes y Guillermo Benavides.

El documento, que instaba a depurar también la Corte Suprema de Justicia (acusada de "negligencia") había desatado una "una crisis de Estado", según observó Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. De hecho, el presidente de la Corte, Mauricio Gutiérrez, rechazó el informe y advirtió que ni él ni ninguno de sus magistrados renunciaría ni podría ser destituido, como recomendaba la instancia de la ONU.

"Aquí --dijo Gutiérrez-- el único que nos puede destituir a nosotros es Dios, quitándonos la vida, pero no existen mecanismos o vinculación legal para estar atendiendo recomendaciones de una comisión que no tiene fuerza". Como era de esperar, ARENA rechazó el informe de la ONU y dio su respaldo al poder Judicial.

Citando documentos oficiales, los diarios estadounidenses The Washington Post, The New York Times y Miami Herald coincidieron en afirmar que los gobiernos de Reagan y Bush encubrieron crímenes políticos de las fuerzas armadas salvadoreñas, a fin de que el Congreso autorizara US\$6.000 millones en ayuda militar.

El informe de la Comisión de la Verdad y la apresurada aprobación de una ley que concedía el perdón a los involucrados en violaciones a los derechos humanos, generó un verdadero torbellino político en el país. Cerca de 500 jueces del interior amenazaron con iniciar una serie de paros laborales, incluso indefinidos, en protesta por los resultados de la investigación y

(52) El Nacional, agencias, 17/3/93, p. 18.

ofrecieron su "apoyo total e incondicional" al presidente de la Corte.

Funcionarios del gobierno estadounidense aludieron a la posibilidad de realizar acciones "por otros medios" para castigar a los culpables de crímenes de guerra. "Nadie pasará sobre las leyes salvadoreñas", respondió Cristiani tras señalar que no permitiría injerencia ni presiones externas.

Ante la postura del presidente salvadoreño, el secretario de Estado norteamericano Warren Christopher pidió al gobierno acatar las recomendaciones de la ONU y destituir a los altos mandos del ejército y la Corte Suprema. Christopher se declaró "profundamente horrorizado" ante el informe de la Comisión, y se comprometió a tener en cuenta en adelante la situación de los derechos humanos en países respaldados de Estados Unidos. (53)

Según Boutros Ghali, el gobierno salvadoreño había dado ya a la ONU seguridades de que retiraría a los 15 altos militares de sus "funciones oficiales" antes del 30 de junio, con un plazo para su jubilación que vencía el 31 de diciembre siguiente.

El ex comandante Handal advirtió que el no cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad por todos los sectores de la sociedad salvadoreña, significaría que "no habrá ruptura de la impunidad", y sostuvo que mientras el gobierno no acatará esas recomendaciones, el FMLN tampoco lo haría.

En realidad, la Comisión puso al desnudo y **confirmó** hechos ampliamente denunciados durante años por diversos sectores políticos y organismos de derechos humanos; uno de éstos fue sin duda el crimen de las monjas maryknoll, en 1980, sobre el cual el organismo obtuvo "suficiente evidencia" de que las religiosas habían sido detenidas en el aeropuerto de San Salvador en base a un operativo detalladamente planificado.

Otro de los terribles casos imputados al ejército salvadoreño fueron la matanza de campesinos en El Mozote, Morazán (diciembre de 1981), la protección estadounidense al jefe de los "escuadrones" Roberto D'Abuissou, y la masacre de los seis religiosos jesuitas en la UCA de San Salvador, el 16 de noviembre de 1989.

Uno de los pocos extranjeros críticos al informe de la Comisión de la Verdad, era el ex subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, quien calificó el documento de "injusto" porque "favoreció a la izquierda". El informe "no fue justo, fue parcial", dijo Abrams y añadió que fue el FMLN el que, con los acuerdos de paz, perdió la guerra en El Salvador: "Tenía el objetivo de ganar con ofensivas, con su ejército, como en Cuba y Nicaragua, y lo que ha pasado es que se han integrado a un sistema democrático". (54)

En medio de esta situación, el proceso pre-electoral seguía su curso. El 28 de **marzo**, ARENA había elegido a su presidente, Armando Calderón Sol, como candidato presidencial. Calderón Sol, abogado, había fundado ARENA en 1981 junto al mayor Roberto D'Abuissou; y trabajado como diputado y alcalde de San Salvador desde 1988.

(53) EFE/Notimex, 30/3/93.

(54) EFE, 10/6/93.

Dos meses después se conocería la designación de Rubén Zamora, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, como candidato a presidente por la coalición Convergencia Democrática (CD), integrada los partidos Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Social Demócrata (PSD) y Unión Democrática Nacionalista (UDN).

Sin embargo, Zamora aceptaría la postulación, a inicios de julio, como candidato del naciente partido FMLN, que le eligió tras intensos debates y a pesar de la oposición del ERP y la RN (que proponían como candidatos a Fidel Chávez Mena y Arturo Rodríguez). La fórmula de la CD-FMLN se conocería a fines de agosto: Zamora para presidente y Francisco Roberto Lima, abogado y empresario, para vicepresidente.

Los tres partidos políticos que formaban la CD decidieron disolverse en septiembre, para convertirse en uno: el Partido Convergencia Democrática (PCD). Mario Aguiñada, hasta entonces secretario general de la Unión Democrática Nacionalista (UDN), opinó que la decisión de unir los tres partidos, con nuevos estatutos y principios, era "una muestra de madurez política".

En tanto, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue elegido candidato el ex canciller Chávez Mena, derrotado en las presidenciales de 1989.

Por su parte, el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN) designaría candidato presidencial, en julio siguiente, al general (r) Rafael Bustillo, conocido militar de línea dura que durante casi diez años fue comandante inamovible de la Fuerza Aérea. Pese a su nominación política, el nombre de Bustillo apareció en el informe de la Comisión de la Verdad como la persona que, confabulada con el entonces coronel René Emilio Ponce, "dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de dar muerte a los sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana".

El ex jefe militar, también señalado por organismos humanitarios por haber ordenado el bombardeo de zonas rurales pobladas, había sido separado del cargo en diciembre de 1989, tras fuertes presiones internacionales. Bustillo renunciaría sorpresivamente a su candidatura dos meses después, alegando divergencias intrapartidarias y acusando a líderes del PCN de haber querido utilizarlo como una "figura decorativa", algo "indigno para un militar".

Mientras salían a luz el informe de la Comisión, transcurría el proceso preelectoral, que incluía la planificación de los comicios a cargo de la ONU y el gobierno. ONUSAL instaló equipos de verificación del proceso, en el cual 2.5 millones de electores elegirían a un nuevo presidente, 84 diputados al Congreso y 262 consejos municipales. El FMLN había declarado su "satisfacción" por la participación de Naciones Unidas en el proceso.

Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHES) expresó su "más profunda preocupación" por el aumento de hechos de violencia con presuntos móviles políticos, denunciando la "negligencia" de las autoridades ante la "impunidad" de los responsables de los crímenes. Carlos Molina, procurador general, declaró que al menos 12 crímenes bajo investigación, presentaban señales de tortura y violencia antes de la ejecución, y que

existían "elementos suficientes para reafirmar que muchos de estos casos han tenido móviles políticos".

Según el arzobispo Arturo Rivera, el proceso de paz ya había "perdido credibilidad a raíz de las últimas medidas en torno a las sugerencias de las comisiones Ad Hoc y de la Verdad, lo que puede interpretarse como un empantanamiento". Dijo que el incumplimiento cabal a lo señalado por ambas comisiones había reducido el apoyo de la comunidad internacional.

En mayo, el FMLN presentó a la ONU un nuevo calendario para los acuerdos aún incumplidos, demandando a Cristiani concluir la depuración de las fuerzas armadas. Miguel Sáenz, vocero del Frente, acusó al gobierno por el estancamiento en el proceso de paz y su falta de voluntad de cumplir acuerdos como la reinserción de ex rebeldes a la vida civil, transferencia de tierras, desmovilización de soldados y despliegue de la nueva PNC.

Paralelamente, tras infructuosas negociaciones con el gobierno, líderes de organizaciones sindicales se retiraron del Foro de Concertación y convocaron a paros y manifestaciones callejeras (ver capítulo V), ante la falta de acuerdos sobre la sindicalización del sector público, rechazada por las autoridades al amparo de la Constitución. Entre 19 acuerdos globales con la OIT, faltaban cuatro por cumplir por parte del gobierno.

Al día siguiente, la policía antimotines reprimió violentamente una manifestación de lisiados de la ex guerrilla y el ejército, provocando al menos cuatro muertos y 15 heridos (ver capítulo V).

Tras una marcha-entierro de los lisiados del FMLN y el ejército asesinados por la policía, en la que participaron entre 5.000 y 7.000 personas, el gobierno se vio obligado a arrestar a cinco policías y relevar al oficial que ordenó disolver la manifestación, prometiendo remitir al juzgado a los responsables.

El presidente declaró a la prensa que el consenso de paz entre su gobierno y el FMLN era irreversible y lo calificó como "un injerto nutritivo que ha venido a darle fuerza y dinamismo al proceso democrático".

Cristiani destacó el cumplimiento de acuerdos de paz relativos a la PNC, a la concertación y la transferencia de tierras, a la vez que defendió su plan económico, el cual --dijo-- ha traído como resultado el crecimiento del PIB en 4,6%, el más alto desde 1968: "Nuestro modelo económico basado en una economía social de mercado, es un sistema en el que el desarrollo económico y social van de la mano".

La oposición respondió de inmediato al presidente. El FMLN le acusó de retrasar el camino hacia la paz, provocando una severa crisis entre la población inmersa en los planes de reinversión.

A fines de mayo, tras el hallazgo de un arsenal clandestino en Nicaragua, el panorama político nacional hasta entonces relativamente favorable al FMLN se revirtió y posibilitó al gobierno retomar la ofensiva política, exigiendo al TSE sancionar al Frente por violar el código electoral y la Constitución. Éste rechazó las acusaciones oficiales y ofreció realizar un nuevo inventario de sus armas, en un intento por no perder su registro como partido político.

Como parte de las presiones a la ex guerrilla, Cristiani pidió a la ONU dejar "en suspenso" la certificación de desarme del FMLN emitida en diciembre anterior, hasta que la insurgencia no se desarmara y desmovilizara totalmente. La Cámara de Comercio e Industria (CCI), a su vez, demandó a la ex guerrilla demostrar que no estaba ligada a organizaciones terroristas internacionales, para brindar seguridad a potenciales inversionistas.

El FMLN denunció una "intensa campaña publicitaria" para desprestigiarlo y "reducir la credibilidad que hemos despertado entre los salvadoreños" de cara a los comicios de 1994, y desmintió denuncias oficiales sobre supuestos nexos con grupos armados de España y Palestina. Sin embargo, ante un ultimátum de la ONU, a mediados de junio, se comprometió a declarar todo remanente de armas pendientes después de anteriores inventarios.

Si bien admitió la existencia de ex combatientes rearmados en el norte del departamento de Morazán, alzados en protesta por el atraso en la distribución de tierras, la dirección del FMLN anunció que no retornaría a las armas y se declaró dispuesta a colaborar con el gobierno para localizar otros arsenales "perdidos", a los que calificó como "reductos de la desconfianza original en el proceso" de paz. (55)

No obstante, en meses siguientes continuarían "apareciendo" otros arsenales clandestinos, incluso fuera de El Salvador, a partir de lo cual el gobierno, el ejército y ARENA arreciaron su campaña antifarabundista.

Hacia fines de julio, se instaló una nueva comisión para verificar la destrucción de remanentes bélicos del FMLN, conformada por la Comisión de Paz (COPAZ) y la ONU. En agosto, el Frente entregó el nuevo inventario de armas no destruidas y aseguró que no existía más armamento dentro o fuera del país. Según funcionarios de ONUSAL, se había destruido más de un 90% del material bélico declarado por el FMLN, a raíz de lo cual anunciaron la "desaparición total" de su estructura militar.

Simultáneamente, el conflicto por la tierra continuaba. El gobierno acusó durante meses al FMLN de "engañarlo" con listas de falsos tenedores "fantasmas", en tanto la ex guerrilla señaló a las autoridades por hacer "un juego de cifras, una guerra de números" para confundir a la población.

Según la prensa, la cifra de 25.000 futuros beneficiarios de tierras propuesta por la ONU, fue rebasada por un estudio realizado por COPAZ. Sin embargo, el total general de beneficiarios por la transferencia de unas 147.000 has. podría alcanzar a 49.000 personas, divididas entre 32.000 tenedores, 7.000 ex rebeldes y 15.000 soldados. Hasta junio de 1993, se habían transferido 6.988 has. (56)

El gobierno reconoció el retraso en la entrega de tierra a los ex insurgentes, argumentando que ésta se debía al burocratismo. De acuerdo a analistas citados por el diario Excelsior, el incumplimiento en torno a los acuerdos sobre la tierra tornaba conflictiva la situación, pues hasta julio de 1993 de casi 50.000

(55) EFE/AFP, 16/6/93.

(56) IPS, 18/6/93.

personas contempladas como beneficiarias de terrenos, sólo se había dado respuesta al 2 por ciento.

Miles de campesinos realizaron marchas hasta la capital para exigir al gobierno las tierras prometidas en los Acuerdos de Paz (ver capítulo V).

De acuerdo al FMLN, sólo un 9% de los 19.400 beneficiarios de tierras tenía escrituradas sus parcelas a fines de septiembre. De los 6.242 ex guerrilleros que prefirieron insertarse a la vida civil en labores agrícolas, sólo 4.000 recibieron créditos para trabajar la tierra; en igual situación estaban otros 1.500 que decidieron montar microempresas, explicó Shafick Handal. En cuanto a las viviendas, dijo que sólo había crédito disponible para construir 4.000 de las 9.035 prometidas, en tanto ningún lisiado había recibido ayuda para su manutención por parte del fondo especial para la protección a lisiados. (57)

La ex guerrilla demandó al gobierno "despolitizar" el acuerdo sobre transferencia agraria y reincorporar a la vida civil a sus antiguos combatientes. El ex comandante Juan Ramón Medrano comentó que el gobierno intentaba impedir la asignación agraria a los ex guerrilleros "porque cree que ello se convertiría en un logro político (para el FMLN) en las elecciones de 1994".

También prosiguió la confrontación en torno a la depuración de las fuerzas armadas, cuyos cuatro principales generales, entre ellos el ministro y viceministro de Defensa dimitieron formalmente el 1 de julio. Semanas después, el gobierno estadounidense anunciaba su decisión de descongelar US\$11 millones en ayuda militar, retenida en febrero anterior.

Sin embargo, y pese a las demandas para su depuración, el sistema judicial continuaba intacto. El gobierno tampoco había acatado la recomendación de la Comisión de la Verdad para inhabilitar por diez años a los involucrados en violaciones a los derechos humanos, en tanto la delincuencia experimentaba un alarmante incremento, a consecuencia de la guerra y las medidas económicas neoliberales.

Lejos de buscar una solución de carácter social, el gobierno optó por la fuerza y a mediados de julio anunció que sacaría a la calle a 3.000 soldados para "prevenir" la delincuencia, lo cual fue rechazado con energía por partidos de oposición.

Mientras, a sólo ocho meses de los comicios, siete partidos de oposición concentraban sus esfuerzos en supervisar los preparativos de un proceso electoral ya entonces sometido a críticas. Las principales señalaban deficiencias en el empadronamiento, la "carnetización" y la depuración del registro electoral, en momentos en que 700.000 ciudadanos no habían sido censados y 295.000 más esperaban la entrega de su carné para votar. (58)

Entre otras presiones ejercidas sobre el gobierno para asegurar la "limpieza" de los comicios, el gobierno de Estados Unidos condicionó la ayuda económica prometida a El Salvador a la aplicación de medidas de tipo electoral (ver capítulo IV).

(57) Excelsior, corresponsal, 30/9/93, pp. 2 y 45.

(58) UPI, 31/7/93.

Al respecto, el diario The New York Times editorializó: "Se cree que decenas de miles de nombres registrados en las listas de empadronamiento son duplicados o pertenecen a personas ya fallecidas. En un país donde el actual presidente, Alfredo Cristiani, recibió apenas 506.000 votos para ganar las elecciones celebradas en 1989, la inexactitud de las listas ha provocado temores de que en una estrecha carrera los electores fantasmas harían la diferencia." (59)

Pese a ello, miembros de ONUSAL no ocultaban su confianza de que el proceso electoral sería "positivo y seguro".

En tanto, la crisis político-social se reflejaba también en el estancamiento de la concertación económica. Para Cristiani, esto era responsabilidad de la "posición intransigente del sector laboral" frente a los temas más críticos del debate: código laboral, ley orgánica del ministerio del trabajo, ley sobre relaciones laborales en la administración pública y seguridad social.

Al respecto, el obispo Rosa Chávez instó al gobierno a emprender un "un cambio radical" en el programa económico, que permitiera "respirar a los más pobres" y construir un "proyecto de nación" que sustituyera los programas neoliberales impuestos por los organismos internacionales del crédito. Esas medidas mantienen al país en "la zozobra de la inseguridad y en la angustia del desempleo y del alto costo de la vida", dijo.

Como resultado de las tensiones sociales, 26 agrupaciones gremiales, entre ellas organismos de varios entes del Estado, convocaron a fines de **septiembre** a un paro escalonado. Uno de los movimientos más importantes fue el realizado por empleados del sector Salud, que duró más de un mes y concluyó con acuerdos entre trabajadores y gobierno (ver capítulo V).

A raíz del aumento de las huelgas, la empresa privada demandó aplicar medidas "enérgicas", mediante el despliegue del ejército, contra los "huelguistas y delincuentes comunes, que impiden el resurgimiento" de la economía local.

A ello se sumó un recrudecimiento de los crímenes callejeros, atribuidos en su mayoría a los "escuadrones de la muerte". A éstos se señaló como responsables del asesinato, a fines de **octubre**, del ex comandante del FMLN Francisco Velis, crimen condenado por el gobierno de Estados Unidos.

En lo que el FMLN consideró "una cortina de humo" para desviar la atención sobre el crimen de Velis, organismos policiales denunciaron un presunto complot contra el presidente Cristiani. Las diversas acciones de los grupos paramilitares tuvieron efectos políticos inmediatos, entre ellos la renuncia del candidato democristiano a la vicepresidencia, Ulises González.

A fin de calmar los ánimos, el nuevo ministro de Defensa, coronel Humberto Corado, aseguró que el ejército actuaría como "garante" del proceso electoral y "respetaría un eventual triunfo de la izquierda, (ex guerrilla). En el mismo sentido, Cristiani prometió formar una "comisión especial" para comprobar la existencia de los "escuadrones".

(59) Excelsior, 11/10/93, Escena Mundial pp. 2 y 3.

Antes de que la ONU hubiera creado el anunciado mecanismo para aclarar los hechos de violencia política en El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz, la campaña proselitista arrancó oficialmente el 20 de noviembre. Con fuegos artificiales y caravanas que recorrieron el país anunciando su próxima victoria electoral, ARENA dio a conocer su lema electoral: "Patria sí, comunismo no", frase tomada del himno del partido fundado por Roberto D'Abuissou en 1980.

También la izquierda promovió festejos callejeros, en los que destacaron las banderas roji-blancas de la ex guerrilla. Bajo el lema de campaña "Ahora sí, primero la gente", los candidatos del FMLN y CD recorrieron la capital.

Cubiertas por la aparente alegría en las campañas políticas y por las inusuales declaraciones conciliatorias de voceros gubernamentales, la eliminación física de dirigentes revolucionarios continuó en distintos puntos del país. En menos de dos meses fueron asesinados el ex comandante del FMLN Mario López y el candidato a regidor Simeón de Jesús Cartagena, en lo que el FMLN interpretó como un intento de evitar su ascenso al poder. "El gran plan de la ultraderecha es seguir eliminando a dirigentes intermedios y presentar los hechos como actividades delictivas", dijo el ex comandante Medrano.

Cumplimiento de acuerdos y elecciones presidenciales

A inicios de 1994, al cumplirse dos años de la firma de los acuerdos de Chapultepec, un reporte de la UCA alertó sobre la fragilidad del proceso de paz y reconciliación y calificaba de "grave" la situación política, en tanto no se había atacado las causas del conflicto armado. Si bien lo pactado "sólo tiene sentido si ayuda a que las mayorías populares tengan vida", todo el incumplimiento se suma a una especie de autoengaño de la comunidad internacional, y especialmente de ONUSAL, señaló el documento al concluir que "ciudadanos y gobernantes están dispuestos a cerrar los ojos para no tener que preguntarse por su responsabilidad en lo que ocurre".

Un informe especial de la ONU sobre el tema refrendó la posición de los jesuitas, al señalar la persistencia de violaciones a los derechos humanos y la deficiencia en el sistema judicial como factores clave que debilitaron el proceso de pacificación en El Salvador.

Se reavivaron así las críticas en torno a la gestión del presidente Cristiani, quien atribuiría a "falta de tiempo y recursos" su admitido incumplimiento a las promesas de campaña, formuladas seis años atrás.

Las viejas promesas se repetían ahora en boca de los candidatos de ARENA, que proclamaban su seguridad en la victoria. Si bien en distintos medios se insistía sobre las irregularidades del proceso electoral, los expertos de ONUSAL consideraban difícil la ejecución de un "fraude significativo", confiados en la labor que realizarían los 400 observadores asignados por ese organismo para supervisar los comicios. A fines de enero, según la prensa, al menos 70.000 personas carecían todavía de

documentos personales básicos, como actas de nacimiento, que les permitieran sufragar.

Semanas antes de la votación, un informe de la ONU confirmaría que casi 400.000 personas estaban impedidas de sufragar por carecer de documentos, lo cual fue negado por el gobierno.

Al iniciar febrero, nueve partidos políticos habían sido confirmados por el TSE para participar en la justa electoral: ARENA, FMLN-CD, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN), así como los movimientos de Unidad (MU), Solidaridad Nacional (MSN), Auténtico Cristiano (MAC) y Nacional Revolucionario (MNR). La población votaría para elegir presidente, vicepresidente, 84 diputados, 262 alcaldes y 20 delegados al Parlamento Centroamericano. (60)

A juicio de la Iglesia católica, las nueve organizaciones contendientes no presentaron al electorado más que "propuestas vagas" y "expresiones más bien demagógicas". El obispo auxiliar Rosa Chávez señaló: "Necesitamos propuestas consistentes y candidatos que de verdad merezcan la confianza del pueblo".

Lejos de atender las demandas de los religiosos, las acusaciones entre los principales contendientes políticos arreciaron semanas antes de los comicios. El FMLN, acusó a Cristiani de dirigir fondos públicos en favor de la campaña de ARENA, que a la fecha gastaba "alrededor de medio millón de dólares diarios en propaganda, abonados a las agencias publicitarias por instituciones estatales".

En medio de un ambiente electoral matizado desde un inicio por un marcado tono de violencia, en el cual la izquierda tipificó a los oficialistas como "escuadroneros y asesinos", la campaña proselitista de ARENA reavivó entre la población el pasado de guerra que todos querían olvidar. Con un lenguaje confrontativo y radical, el himno del partido derechista resonaba en los medios de comunicación afines al gobierno: "Alianza Republicana Nacionalista/por la patria/Libertad se escribe con sangre/trabajo/unamos sudor y sangre/El Salvador será la tumba en donde los rojos terminarán/ salvando aquí a América, nuestra América inmortal". (61)

La violencia continuó en las semanas siguientes, pese a los esfuerzos de Washington por presentarse ante el mundo como el patrocinador de unos comicios pacíficos, "comprometido con un proceso electoral libre y justo para todos los participantes", según lo indicó ante el Congreso salvadoreño el enviado especial Bryan Atwood, al asegurar que los gobernantes estadounidenses estaban dispuestos a trabajar con quien ganara la contienda pues eran "estrictamente neutrales con respecto a cualquier partido o candidato particular".

Menos diplomático, el ex presidente Ronald Reagan envió una carta de respaldo absoluto al candidato de ARENA. "Sentimos un alto grado de orgullo y satisfacción (al ver) que nuestro largo y continuado apoyo a la libertad y la democracia en El Salvador está teniendo frutos", escribió Reagan. (62)

(60) Notimex, 1/2/94.

(61) Notimex, 16/2/94.

(62) Excelsior corresponsal, 20/3/94.

La tensión política aumentó a fines de febrero, al producirse un nuevo atentado contra la comandante del FMLN Nidia Díaz, mientras el FMLN denunciaba acciones de intimidación del ejército sobre la población civil, en el interior del país, a fin de favorecer a ARENA con la amenaza de que, si la ex guerrilla vencía en las elecciones, volvería la guerra a El Salvador.

La iglesia, por su parte, sentó una posición clara frente a los comicios, donde por primera vez en la historia aparecieron dos partidos de carácter evangélico. El arzobispo católico Arturo Rivera llamó a la feligresía a votar "pensando en el futuro", lo que fue interpretado como una exhortación contraria al voto por ARENA. "¿Cómo se puede votar por el futuro si se pasa por alto (a) quienes son los asesinos de monseñor Romero?, ¿quién organizó el complot contra su vida y dio la orden de matarlo?", preguntó el prelado Arturo Rivera.

Una postura similar tuvieron los jesuitas. El vicerrector de la UCA, Rodolfo Cardenal, declaró: "Si hay que dar un voto de castigo, ahora es el mejor momento para recordarlo".

Previo a las elecciones, todos los candidatos presidenciales suscribieron un "pacto de caballeros", que establecía su compromiso de respetar el resultado de los comicios y la obligación del vencedor de dar cumplimiento a los acuerdos de paz.

Observadores políticos salvadoreños, en tanto, observaban las elecciones como la oportunidad de la población de decidir entre continuar con el neoliberalismo o cambiar a un programa económico de mayor inversión social para combatir la pobreza.

Las campañas proselitistas concluyeron los días 11 y 12 de marzo. Más de 20.000 simpatizantes de ARENA asistieron a su acto de cierre electoral, en la plaza de San Salvador, donde 33 personas resultaron heridas por presuntas agresiones de miembros del FMLN, partido que logró concentrar a un número similar de manifestantes en su último acto público. Según el FMLN, más de 28.000 de sus activistas participarían en las elecciones.

El 20 de marzo, la jornada electoral se desarrolló sin mayores incidentes. Sin embargo, la coalición FMLN-CD culpó al TSE de irregularidades que impidieron a miles de electores a emitir su voto, pues "no encontraron sus nombres en el padrón".

Según informes de prensa, el registro electoral no fue adecuadamente depurado, pues contenía los nombres de unas 15.000 personas que habían muerto en la pasada guerra. Además, unos 70.000 jóvenes aptos para votar no fueron inscritos en las listas; más 300.000 solicitudes de carné electoral no se hicieron efectivas y cerca de 100.000 salvadoreños fueron excluidos del padrón por razones desconocidas. (63)

Al momento del conteo de votos, el TSE expulsó del centro de cómputo a los delegados del FMLN-CD y MNR y a observadores internacionales y oficiales, según declaró el FMLN al acusar a las autoridades de ejercer un "fraude absoluto" en los comicios. Tras calificar de "sinvergüenzas" a los cinco miembros del TSE, la oposición aseguró que representantes de ARENA en las urnas usaron brazaletes que desprendían tinta, con la cual mancharon

(63) Excelsior, corresponsal, 20/3/94.

papeletas ganadas por el FMLN, que fueron por lo tanto impugnadas.

Líderes de la ex guerrilla dijeron también que la impresión de las papeletas de votación se había realizado en una imprenta propiedad del general Eugenio Vides, ex ministro de Defensa y familiar del presidente Cristiani. Las denuncias fueron rechazadas por observadores internacionales. Bryan Atwood, administrador de la AID, señaló que si bien muchas personas no habían podido votar, "no hubo intención deliberada de fraude".

Los resultados nacionales definitivos, anunciados por el TSE pocas horas más tarde, conferían 49.3% de los votos a ARENA y el 24.9% al FMLN-CD, seguidos por la DC (16.3%), PCN (5.3%), MU (2.4%), MSN (1%) y MAC (0.8%). En la elección de 84 diputaciones ARENA obtuvo 39 escaños, frente a 22 de la coalición FMLN-CD. El abstencionismo registrado por las autoridades electorales fue de un 47 por ciento. (64)

Pese a la decepción por la derrota, el FMLN consideró cumplidas sus expectativas en cuanto a los curules conseguidos en el parlamento (23), no así en el caso de los gobiernos municipales, donde obtuvo apenas el tercer lugar en la lista final de sufragios. Dado que en la votación presidencial ningún partido alcanzó el porcentaje requerido (mayoría simple) para ser proclamado vencedor de los comicios, el TSE anunció una segunda ronda electoral, fijada para el 24 de abril.

Entre los columnistas estadounidenses que siguieron el proceso electoral, hubo opiniones diversas. Para Howard French, de The New York Times, la derecha salvadoreña tendría asegurada la victoria en la segunda vuelta, debido a que los votos logrados por los candidatos ARENA al parlamento habían "desactivado" al FMLN-CD.

El mismo rotativo, empero, advirtió que aunque las elecciones habían sido oficialmente declaradas "aceptables", "la opinión caritativa es que fueron claramente nubladas por la incompetencia" y que "muchos observadores estiman que hubo instancias significativas de fraude".

Tras criticar la política de Washington hacia el país ("en vista de que El Salvador dejó de ser un campo de batalla de la Guerra Fría, Estados Unidos ha dedicado escasa atención a despejar el lío que produjo la guerra"), el Times alertó sobre la posibilidad de que "la victoria de ARENA envaleantone a este partido a abandonar su compromiso con los acuerdos" de paz inconclusos, entre los cuales mencionó la distribución de tierras, la formación de una policía civil y la puesta en práctica de recomendaciones de la Comisión de la Verdad de la ONU para investigar "años de abusos a los derechos humanos" en El Salvador. (65)

Las denuncias contra el TSE continuaron. Mientras el FMLN solicitaba sin éxito la anulación de los comicios en 31 municipios del país, el arzobispo Rivera y Damas aseguró que "en el proceso electoral hubo muchas irregularidades y violaciones a fundamentales derechos constitucionales". El prelado reconoció

(64) AFP, 21/3/94.

(65) AFP, 23/3/94.

sin embargo que un gran número de electores había votado "con el estómago y no con la cabeza" y, de cara a la segunda vuelta electoral, instó a la población a "razonar, discernir, procurar distanciar el estómago de la mente, y guiarse por una mente más crítica".

Más críticas al proceso electoral provinieron de otros partidos opositores. Líderes del PDC y el MU acusaron a la autoridad electoral de haber "manoseado gravemente" los resultados de las elecciones para favorecer a ARENA. Entre otras pruebas comprometedoras, ambos partidos presentaron decenas de originales del TSE, que comprobaban que el número votos emitidos en las mesas electorales era mayor al de las papeletas a ellas asignadas. Dijeron que en el departamento de La Libertad, donde se asignaron 400 papeletas, hubo 881 votantes, la mayoría de ellos favorables a ARENA.

Ante las constantes críticas, ONUSAL pidió al TSE superar las "anomalías" registradas, a fin de que la segunda vuelta "se realice sin dificultades".

La solicitud de la misión de la ONU coincidió con una carta enviada a inicios de abril al Consejo de Seguridad por su secretario general, Boutros Ghali, exhortando al gobierno de Cristiani a "rectificar" su incumplimiento a ciertos acuerdos de paz (reintegración de ex combatientes a la vida civil, reformas constitucionales y aspectos relativos a la seguridad pública), pues esa actitud ponía "en peligro el proceso de paz en El Salvador". (66)

La respuesta oficial no se hizo esperar. El mandatario calificó de "extraño" el reclamo y atribuyó a "cosas del pasado" el involucramiento del ex ministro de Defensa, René Ponce, en la matanza de seis jesuitas en noviembre de 1989. Cristiani reconoció que no se había entregado tierras a más de 47.000 personas y que tampoco se había desplegado la nueva PNC, pero ello --dijo-- no es por falta de voluntad del gobierno. Un mes más tarde, el mandatario pretextaría un supuesto combate a la delincuencia --las llamadas "maras" o pandillas juveniles-- para posponer nuevamente la desmovilización de la criticada Policía Nacional. Debido a múltiples presiones internas e internacionales, Cristiani no lograría, sin embargo, incluir masivamente en la PNC a ex miembros del ejército y a una unidad completa de la vieja policía.

En tanto, días antes de la segunda ronda electoral, el FMLN denunció el despliegue de "propaganda negra" por parte de ARENA en los principales medios de comunicación, que intentaba desprestigiar a la ex guerrilla vinculándola con actos de delincuencia común.

Líderes farabundistas rechazaron también versiones atribuidas al oficialismo, según las cuales el FMLN proyectaba aplicar una política confiscaciones y racionamiento, en caso de llegar al gobierno.

Como se esperaba y fue reconocido por miembros de ONUSAL y el propio TSE, los vicios electorales de la primera vuelta volvieron a repetirse el 24 de abril, cuando Armando Calderón Sol y el

(66) El Día, agencias, 5/4/94.

acaudalado empresario Enrique Borgo obtuvieron el triunfo en la segunda ronda de elecciones, con un 68.27% de los votos, para gobernar El Salvador hasta el 31 de mayo de 1999.

Con un nivel de abstencionismo estimado en un 55.5%, la alianza FMLN-CD-MNR tuvo el 31.7% de los sufragios. (67)

Tras denunciar nuevamente anomalías en los comicios (votos "fantasmas" y confusión en el uso de boletas), observadores internacionales señalaron "incapacidad" y falta de voluntad de las autoridades para realizar "elecciones libres y limpias". Unos 134 observadores extranjeros pidieron a las autoridades electas reformar el sistema electoral, a la vez que denunciaron haber sido objeto de amenazas y actos de intimidación a su trabajo.

La segunda vuelta deparó otras sorpresas, como la renuncia a sus cargos de los secretarios generales de los partidos DC y MNR, Fidel Chávez Mena y Víctor Valle, agobiados por los desastrosos resultados obtenidos. El PDC apenas había llegado al 17% de los votos (tercer lugar de la votación total), mientras que el MNR (del ya desaparecido Guillermo Ungo) no logró siquiera una diputación.

Con mayor mesura fueron aceptados los resultados electorales por parte del FMLN, que anunció una lucha por transformaciones democráticas del país desde el Congreso, mediante el trabajo de sus 21 diputados. Entre otras importantes tareas, la nueva Asamblea Legislativa debería dar continuidad a las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz; su primera prueba de fuego sería la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, hecho que habría constituido uno de los mayores ejes de presión de la ONU sobre Cristiani y Calderón Sol.

Tres días después de los comicios, la izquierda propuso al mandatario electo un programa de seis puntos, en aras de la concertación para gobernar en paz. Los planteamientos fueron: despliegue total de la PNC; reforma electoral; enmiendas constitucionales al sistema judicial; medidas para la protección del medio ambiente, políticas de defensa al consumidor, y pacto social para asegurar la gobernabilidad.

Contradicciones en el FMLN, despliegue de la PNC y depuración castrense

A fines de abril, el Congreso aprobó nuevas reformas que orientaban la modernización de las fuerzas armadas, a partir de una Ley Orgánica que estableció la creación de una "inspectoría" (auditoría) castrense y de unidades de mando independientes en cada rama de las tres armas, que a su vez integrarían un Estado Mayor Conjunto para asesorar al ministerio de Defensa.

El FMLN destacaba por primera vez como segunda fuerza política en la nueva Asamblea Legislativa, donde sus 84 escaños fueron repartidos así: 39 para ARENA; 21 para el FMLN y 18 para el PDC, distribuyéndose los seis restantes entre los partidos minoritarios.

Según analistas, Calderón Sol gobernaría el país con todo el poder en sus manos, con una mayoría simple en la Asamblea y una

oposición fragmentada que, a juicio del propio Alfredo Cristiani, no presentaría al nuevo mandatario "una oposición real y fuerte".

En efecto, en su primera aparición en la arena parlamentaria, el Frente votó de forma fraccionada una ley para renovar la directiva del organismo. Sólo tres de las cinco organizaciones del FMLN se abstuvieron de votar, mientras el ERP (Expresión Renovadora del Pueblo) y la RN (Resistencia Nacional) votaron a favor de la propuesta de ARENA. Este suceso derivaría, en los meses siguientes, en fuertes pugnas internas al interior del Frente, que fracturaron sensiblemente a la organización.

Como parte de las modificaciones a la estructura institucional del país, el Parlamento acordó a mediados de mayo la eliminación de las partidas secretas asignadas hasta entonces a los presidentes de los órganos legislativos y judicial, así como las franquicias aduaneras de que gozaban funcionarios de estos poderes de el Estado.

Con respecto a las reformas en la CSJ, a finales de junio y tras varias semanas de debates el Congreso pospondría, por falta de consenso, la votación para elegir nuevos magistrados (14 titulares y sus suplentes). Se requería el voto de dos tercios del plenario, lo cual ARENA no logró conseguir por sí sola.

Mientras, continuaron las presiones de la ONU sobre el gobierno, para corregir los "desequilibrios" en la nueva PNC: El acuerdo para su formación establecía el compromiso de ubicar civiles en 60% de los puestos de mando, mientras el resto de los cargos se distribuiría equitativamente a ex soldados y ex rebeldes. Hasta fines de mayo, 30 subcomisionados de la PNC eran todavía miembros del viejo sistema de seguridad pública y sólo 17 eran civiles. (68)

En el mismo orden, sectores del FMLN y de la sociedad civil abogaron por el nombramiento de un civil como ministro de Defensa, mientras Calderón Sol insistía en mantener en el puesto al general Corado.

A fines de mayo, representantes del gobierno, el FMLN y ONUSAL fijaron un nuevo calendario para el cumplimiento de acuerdos, que estableció el despliegue de los 7.500 agentes de la PNC para marzo de 1995. El acuerdo fijó además plazos para la entrega de ex combatientes y campesinos; la reinstalación del foro de concertación; la creación de un viceministerio adscrito a Seguridad Pública, y la concesión a ONUSAL de acceso irrestricto a toda información oficial.

En cuanto al programa de transferencia de tierras, las partes acordaron concluirlo en abril de 1995. Unas 110.000 manzanas de tierra quedaban pendientes de entrega, a cerca de 21.000 beneficiarios, al 31 de mayo, fecha en que finalizó el mandato de Alfredo Cristiani.

Al evaluar la recién concluida gestión presidencial, la iglesia católica sostuvo que el saldo menos halagador del período de gobierno de Cristiani fue el relativo a la situación económica, pues el mandatario "no cumplió las promesas hechas a los más pobres de los pobres", así como a los derechos humanos.

(68) Excelsior, corresponsal, 18/5/94, pp. 2 y 29.

En ese sentido, el llamado 'Grupo Conjunto' (formado por delegados oficiales, de ONUSAL y el Procurador para los Derechos Humanos) dijo tener en su poder "suficientes indicios de que subsiste la voluntad de emplear medios violentos con fines políticos", y rechazó versiones de altos funcionarios del anterior gobierno, que atribuían atentados políticos a la delincuencia común.

El presidente Armando Calderón Sol asumió el poder en junio, y con él asumió el alcalde de ARENA en San Salvador, Mario Valiente, que entre sus primeras medidas dispuso prohibir manifestaciones y mítines los días laborales, excepto los fines de semana y por las noches. El ex candidato presidencial del FMLN, Rubén Zamora, calificó la medida como "fascista y autoritaria". (69)

Reforzando esa posición y ante las protestas generales por la situación económica (ver capítulo V), el nuevo presidente no dudó en amagar con el uso de la fuerza, aplicar descuentos salariales y demandar penalmente a quien participara en huelgas laborales.

La tensa situación económica y los paros que se avecinan pondrán a prueba la capacidad de diálogo del nuevo gobierno, advirtieron los obispos Rivera y Damas y Rosa Chávez, que también recibieron amenazas anónimas de muerte. Ello es una "manifestación de impunidad y el resultado de no haber tocado las estructuras de los escuadrones de la muerte", dijo Arturo Rivera.

Para la iglesia, "la clave" de la solución a la ola de violencia y criminalidad, pasaba por la ejecución de las reformas judiciales establecidas en los Acuerdos de Paz, y de las medidas aún pendientes relativas a los cuerpos policiales. Una investigación de los más altos mandos castrenses y policiales, sería "algo bueno y necesario para la nación y la paz", afirmó el obispo Rosa Chávez, en los primeros días de julio. (70)

Según admitiría días después el ex director de la PNC, José María Monterrey (reemplazado a fines de junio por Rodrigo Avila), "altas esferas" del Estado son cabecillas del crimen organizado, que en los últimos meses han cobrado decenas de víctimas. Los autores materiales del crimen, dijo, son generalmente capturados, y "obedecen órdenes al ejecutar sus acciones". (71)

A raíz de estas denuncias, el gobierno anunció la aceleración de la desmovilización de la PN, el único de los tres antiguos cuerpos de seguridad cuya desaparición se había cumplido.

(69) Excelsior, corresponsal, 8/6/94, pp. 2 y 44.

(70) AFP, 26/6/94.

(71) Excelsior, corresponsal, 26/6/94, pp. 2 y 15.

Guatemala

1. Configuración de los principales partidos políticos

En Guatemala están oficialmente inscritos y gozan de personería jurídica las siguientes organizaciones políticas: Frente Republicano Guatemalteco (FRG), cuyo secretario es el ex presidente, general Efraín Ríos Montt; y Partido Socialista Democrático (PSD), liderado por Mario Solórzano Martínez.

Debido a que carece de mayoría en el parlamento, el gobernante Movimiento de Acción Solidaria (MAS) realiza frecuentemente alianzas con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que dirige Alfonso Cabrera Hidalgo y la Unión de Centro Nacional (UCN), autocalificados ambos como opositores al régimen.

A manera de antecedente de la actual situación política, cabe señalar que la misma Constitución política de 1985 estuvo viciada desde su origen, al ser discutida y aprobada por un conglomerado de derecha y sin oposición. Ni siquiera el Partido Social Demócrata (PSD), que participó en el co-gobierno con Jorge Serrano, intervino entonces en la elección de diputados para formar la Asamblea Nacional Constituyente, debido a la ausencia de condiciones para funcionar como partido opositor.

Fue tan avasallante la violencia en la campaña electoral de 1985, que el PSD se negó a integrar el sistema político oficial, aduciendo falta de seguridad para sus vidas: la violencia se había mantenido después de los golpes de Estado de los generales Efraín Ríos Montt (1982) y Oscar Mejía Víctores (1983).

Así, la promulgación de la Carta Magna guatemalteca ocurrió en medio de condiciones políticas inadecuadas y constantes violaciones a los derechos humanos, pero fue descalificada sobre todo por la presencia de la guerra civil y la preponderancia de los militares en la vida política nacional.

Sin embargo, tiene matices que reflejan las presiones de movimiento popular y la guerrilla, como la creación de instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, a fin de equilibrar los Poderes del Estado, lo cual tampoco ha significado un cambio inmediato o radical.

2. Panorama político y parlamentario

El nivel de violencia política que ha caracterizado la historia reciente de Guatemala, fue una constante al iniciar la década de los 90, cuyos dos primeros años se vieron marcados por agudas tensiones políticas y sociales.

Mientras, el enfrentamiento armado tomaba un nuevo giro, después que la guerrilla diera prioridad a las acciones de propaganda armada y sabotaje económico, sin abandonar los hostigamientos a puestos militares o blancos fijos de fuerzas policiales. Si bien la publicidad sobre las acciones rebeldes acaparaba la atención de la prensa local, el gobierno argumentaba

que la nueva táctica guerrillera se debía a una pérdida de apoyo de la población, "tras el retroceso mundial del socialismo". (72)

La apertura de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) al diálogo con el gobierno, que tomaría mayor fuerza a partir de 1992, se enmarcó en el proceso de paz regional, no sólo en materia de procedimientos sino en cuanto a la interpretación que a raíz de las elecciones nicaragüenses (derrota del Frente Sandinista) se venía dando abiertamente a ese plan de paz.

Para muchos sectores, los acuerdos de Esquipulas permitieron la "democratización" de Nicaragua y la desaparición del espectro de la guerra, lo cual encerraba una tesis aplicable al caso guatemalteco: la guerra es motivada por regímenes y movimientos revolucionarios y este peligro sólo desaparece al ceder estos espacios a la democracia occidental.

En efecto, como lo afirmó el entonces presidente Vinicio Cerezo, tanto lo ocurrido en Nicaragua como las intenciones de diálogo del FMLN salvadoreño y el desarme del M-19 en Colombia, constituían una lección para Guatemala y las posibilidades de paz a partir de la incorporación de la insurgencia a la vida legal.

Sacudidos por constantes rumores de golpes de Estado y reiteradas protestas de sectores sindicales y gremiales a la "modernización económica", los guatemaltecos vivieron ese período con poca esperanza de reducir la polarización política y lograr el fin del conflicto armado que había iniciado 34 años antes.

A inicios de 1991, el triunfo presidencial del máximo dirigente del MAS Jorge Serrano Elías (quien gobernaría el país hasta dar un "autogolpe" dos años después), significó el comienzo de una nueva etapa del llamado proceso democrático, iniciado en 1986 por los democristianos. Su superación se presentaba como el principal desafío del futuro gobernante, un político de la nueva derecha y miembro prominente de una secta fundamentalista, convertido ya en el segundo presidente civil electo popularmente desde el inicio del llamado proceso democrático.

Ese proceso, instaurado de acuerdo a la visión del ejército y plasmado en la doctrina de la Estabilidad Nacional, había sido preparado como parte de una estrategia contrainsurgente, definida por el golpe de Estado de Ríos Montt en 1982 y que luego generó las condiciones para el establecimiento de un gobierno civil, apoyado por el ejército. Sin embargo, la democracia no logró pasar de un nivel meramente formal, en tanto se mantuvo duramente cuestionada por el aumento en las violaciones a los derechos humanos y sujeta a una constante presión internacional. (73)

Pese a haber sido hasta entonces uno de los principales negociadores con la guerrilla en Oslo, Serrano no detuvo la represión del ejército sobre los civiles el interior del país, en respuesta a una campaña político-militar de la URNG para afectar la infraestructura económica y distraer a las fuerzas armadas. Contrariamente a lo previsto, los sabotajes armados rebeldes recibieron múltiples condenas, por considerarse actos de terrorismo que afectaban finalmente a la población.

(72) Inforpress, 15/2/90, pp 1 y 2.

(73) Inforpress, 15/11/90, pp. 1, 2 y 12.

Esa situación se acompañó de una serie de cambios decididos por Serrano en los altos mandos castrenses, que incluyeron la salida de más de 20 oficiales generales, superiores y subalternos, y permitieron un frágil acercamiento con la URNG y la continuación del diálogo de paz, cuyos pilares y obstáculos han sido los temas de democratización y derechos humanos.

En noviembre de 1992, luego de que el ex presidente Vinicio Cerezo advertía a Jorge Serrano sobre un presunto plan para desestabilizar el país y provocar un golpe de Estado, impulsado por "políticos civiles enemigos de la democracia", el ejército confirmaba la existencia de un plan desestabilizador impulsado por políticos y militares. El vocero Julio Yon dijo que el gobierno tenía "nombres de políticos y militares fracasados que están intentando provocar inestabilidad para propiciar un golpe de Estado", pero negó que se hubiera realizado una "redada" y capturado a seis oficiales castrenses no identificados involucrados en el plan, como lo indicaron denuncias anónimas.

Los mencionados planes de desestabilización no eran nada nuevo en la historia guatemalteca, caracterizada por la violencia institucional. Según el investigador uruguayo Germán Wettstein, desde 1954 (derrocamiento del presidente constitucional Jacobo Arbenz) la población guatemalteca ha venido sufriendo "un terrorismo avasallador (abierto o clandestino, selectivo o masivo) que exterminó a 150.000 ciudadanos". Ese proceso, "fue acompañado de una cultura política del terror, compuesta por la extorsión del trabajo, el racismo, la apelación dictatorial y el síndrome del fantasma del comunismo", pues los militares se consideran "apóstoles de la paz y el orden". (74)

Mas los "apóstoles" no tardaban en hacer acto de presencia cuando las circunstancias políticas lo requerían. En noviembre, los llamados "oficiales de la montaña", grupo de militares de línea dura en la clandestinidad, llamaron al ejército a frenar "el caos, la anarquía y el desgobierno que nos trata de invadir", y atacaron a la iglesia católica y grupos de derechos humanos.

"Una vez más nos vemos obligados a hacer oír nuestra voz de alerta, para poner a consideración de los oficiales dignos la agresión conspiradora de que somos objeto", indicó en noviembre un comunicado del grupo militar, según el cual el gobierno de Estados Unidos, la iglesia, la guerrilla y los organismos de derechos humanos pretendían reducir a las fuerzas armadas para favorecer a los rebeldes. Recordó además "a los oficiales dignos, que la victoria militar fue producto de nuestro esfuerzo y que fuimos nosotros los que soportamos las privaciones, los rigores de la guerra y el sacrificio". (75)

Dos días después, el presidente Serrano criticó duramente a los defensores de los derechos humanos y elogió al ejército. "Vamos a ir poniendo un alto a esas múltiples acusaciones. El ejército no tortura, el gobierno no tortura", sostuvo, en un intento por autoconvencerse de sus palabras.

(74) Enfoprensa, 28/9/92.

(75) Excelsior, corresponsal, 6/11/92, pp. 2 y 22.

Sin embargo, pese al despliegue propagandístico para legitimar el uso de la fuerza y la represión, ello no pareció repercutir demasiado en la opinión pública internacional, que observaba el progresivo deterioro de la imagen del gobierno.

En ese sentido, la publicación estadounidense The Economist criticó a Serrano por vincular a la guerrilla con la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala (ODHA) y con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. "El gobierno la llamó guerrillera y se ridiculizó a sí mismo", indicó el artículo y agregó que el "mayor error" de Serrano había sido "mostrar su patanería" ante Menchú.

En los primeros días de 1993, el gobierno y la guerrilla preparaban ya el reinicio de reuniones que pusieran fin al largo conflicto político-militar. A fines de mes, el Consejo Permanente de la OEA respaldó la propuesta de Serrano para la firma de un acuerdo de paz en los siguientes 90 días, al tiempo que el gobierno descalificaba una contra-propuesta de la URNG, que instaba a proseguir las conversaciones sin condicionamientos previos.

La forma en que se debería llevar a cabo el diálogo era parte del debate no sólo entre el gobierno y la guerrilla; importantes sectores de la sociedad civil pedían participar.

Un amplio movimiento social demandaba también la creación de una Comisión de la Verdad similar a la de El Salvador, cuyos resultados provocaron en Guatemala un debate en pro de su formación entre amplios sectores de la sociedad civil guatemalteca. Lorenzo Pérez, miembro de los llamados Sectores Surgidos de la Represión y la Violencia (SSRV), instó a crear en el país una comisión semejante, "para que la historia no se repita" y los responsables de crímenes fueran juzgados.

"No queremos venganza, pero la verdadera justicia no se limita a señalar a los responsables", dijo el representante del SSRV, organismo que acusaba al ejército de haber arrasado con 440 aldeas entre 1980 y 1983. También voceros del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que agrupa a familiares de 45.000 desaparecidos, dijeron que una instancia de investigación podría darles las respuestas "que los gobiernos de turno nos negaron".

En tanto, ante los vanos y continuos llamados al gobierno para flexibilizar su actitud ante el diálogo, el CUC denunció la falta de voluntad oficial para resolver el conflicto militar y alcanzar la paz. "La represión política y la violación de los derechos humanos es la respuesta del gobierno a la crisis, para cerrar los caminos de participación democrática", señaló el CUC en un documento, que agregaba: También son muchos los conflictos por la tierra "y no hay ninguna política agraria seria", mientras los pocos campesinos e indígenas con tierras enfrentan problemas de comercialización y créditos, por lo que muchos terrenos les son arrebatados por blancos.

A las demandas de los sectores civiles en favor de integrar una Comisión de la Verdad se sumó la alta jerarquía católica. El arzobispo capitalino Próspero Penados defendió la propuesta a fin de que "hechos dolorosos no queden en la completa impunidad".

A finales de marzo se reanudaron las pláticas de paz en México, donde gobierno y guerrilla decidieron trabajar para

"llegar a un acuerdo en materia de derechos humanos". No obstante, las agotadoras reuniones no rindieron los frutos esperados y fueron calificadas de "evidente fracaso" por el mediador, monseñor Rodolfo Quezada, que rechazó la negativa oficial a la formación de una Comisión de la Verdad integrada por observadores de ONU. A juicio de Quezada, los gobernantes "temían" a los posibles resultados de una comisión de ese tipo.

Un acercamiento en el diálogo bilateral pareció observarse **dos meses más tarde**, cuando la URNG difundió una propuesta para establecer un cese al fuego condicionado a la previa reducción del ejército en un 50% y a la desarticulación de las temibles Patrullas de Autodefensa (PAC).

Mientras se desarrollaban en Guatemala gestiones para reanudar el diálogo nacional, la violencia aumentaba a partir de una serie de protestas populares por reivindicaciones económicas. Las continuas huelgas en centros productivos y de servicios se trasladaron a las calles y fueron reprimidas por las fuerzas armadas (ver capítulo V). Esta situación, que enrareció la atmósfera política, ponía al descubierto una crisis de gobernabilidad; simultáneamente era perceptible un amplio movimiento en el seno de las fuerzas armadas, que auguraba un futuro movimiento en contra del gobierno.

A comienzos de **mayo**, la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió sobre el peligro de un golpe militar, debido entre otras cosas al "vacío de poder" en el régimen de Serrano. La situación tendía a agravarse, tomando en cuenta el despliegue de fuerzas políticas que se disputaban el poder en las municipalidades, de cara a los próximos comicios.

Elecciones Municipales

La falta de credibilidad de los partidos políticos para las elecciones municipales llevó a las diferentes poblaciones, especialmente indígenas, a postular como candidatos a 101 comités cívicos (surgidos en 1985), 21 más que en 1990. Según el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arturo Herbruger, la existencia de esos comités (cada uno de los cuales presentó un solo candidato) haría que la abstención (que en los comicios de 1990 fue de 57%) fuera inferior al 50 por ciento.

De un total de diez millones de habitantes divididos en 22 departamentos y 331 municipios, fueron empadronados 3.406.700 ciudadanos. Los principales partidos contendientes fueron el MAS (272 candidatos), PAN (225), DC (211), UCN (207) y el Partido Socialista Democrático (PSD, 102). Las principales coaliciones fueron la UCN-DC (26 candidatos) y la UCN-PSD (8 candidatos).

Los comicios municipales sirvieron para renovar alcaldes en 276 ayuntamientos: 30 de ellos para cinco años (de 20 a 22.000 habitantes) y 246 para dos años y medio (menos de 20.000 habitantes). (76)

A diferencia de las elecciones de medio período de 1988, los partidos políticos desarrollaron esta vez una intensa campaña para motivar a un electorado que concede escasa importancia a los

(76) La Jornada, agencias, 9/5/93, p. 47.

comicios legislativos. En ese sentido, el resultado electoral dio al traste con las aspiraciones de la cúpula en el poder, al registrarse un abstencionismo del 70%, superior al de la experiencia anterior. Y, como comentó el funcionario del TSE Héctor López, la gente del interior "prefirió ir a la iglesia que a las urnas".

Por su parte, antes de conocer el cómputo definitivo, Jorge Morales, alcalde de la localidad rural de El Tejar y miembro del opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijo que sí había "buena concurrencia" a las urnas, pero que eso se debía a que a muchos motivaba la oferta de materiales de construcción por parte del MAS, o de dinero en efectivo por parte de la UCN y la DC.

No obstante el resultado final favoreció al gobernante MAS, que logró 103 alcaldías, diversas organizaciones políticas se vanagloriaron de haber triunfado. Sin embargo, por primera vez en la historia, los 101 comités cívicos que participaron superaron a los 16 partidos tradicionales.

El "serranazo". Antecedentes inmediatos

Una vez finalizadas las elecciones municipales, el panorama político volvió a centrarse en el problema de la ingobernabilidad interior y la falta de acuerdos sustanciales en el diálogo gobierno-guerrilla.

La ingobernabilidad se reflejaba en casi todos los aspectos de la vida cotidiana: acusaciones, huelgas, marchas y manifestaciones de protesta eran continuas. En adelante, la crisis se profundizaría por diversas razones, como la falta de respaldo político a Serrano, imposibilitado de desarrollar diversas iniciativas de ley. De hecho el presidente, para obtener alguna reforma en el parlamento debía literalmente "comprar" el costoso voto de los diputados, que según la prensa en algunos casos ascendía hasta US\$10.000.

El mandatario guatemalteco había dirigido un gobierno débil desde su nacimiento. Tras llegar al poder con el apoyo de apenas un 28% del electorado y un 10% de la población total, careció de mayoría en el parlamento, lo cual le llevó a funcionar en base a alianzas y pactos de dudosa moralidad con otras bancadas. Para integrar su gabinete, el mandatario recurrió a profesionales independientes y otras fuerzas políticas, como los socialdemócratas de Mario Solórzano.

Pero el raquitismo oficialista del MAS y del gobierno era un mal compartido por todas las entidades de la sociedad civil. En el Congreso, los principales aliados de Serrano (la DC y la UCN) pronto darían por concluida la alianza táctica, debilitando aún más al mandatario.

Por ende, al Ejecutivo se le hizo mucho más fácil --y a la vez más costoso-- obtener el apoyo necesario para sus proyectos de eliminación de subsidios, privatizaciones y cumplimiento de los acuerdos con el FMI, y para sus iniciativas destinadas a prevenir o reprimir las manifestaciones populares provocadas por la aplicación de políticas de libre mercado.

Por otro lado, la situación en el poder Judicial la ilustró un presidiario: "En la cárcel donde yo estaba llegó un narco. Nos

contó que había distribuido un millón de dólares entre cuatro agentes que llegaron a su casa, a cambio de que dejaran huir a su familia. Estaba tranquilo y confiado en que permanecería muy pocos días en la cárcel: 'Tengo comprado a los jueces y a algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia', aseguró."

El aislamiento de Serrano se profundizó debido a que podía confiar en muy pocos ministros, asesores y operadores. Tampoco las fuerzas armadas eran una garantía, pues el mandatario sabía perfectamente (según la costumbre histórica del país) que en cualquier momento podría ser víctima de un golpe militar.

"La mayoría participa en el banquete con un cuchillo oculto entre las ropas, para tratar de llevarse la tajada más grande", confesó un allegado del presidente. Era esta situación, sumada al alejamiento de la paz con la guerrilla y a la falta de unidad y consenso entre la sociedad civil, lo que motivaba a Serrano a dar un salto en el vacío.

En efecto, los sectores populares aumentaban entonces su resistencia a los planes económicos del gobierno, que a nivel internacional sufría una progresiva deslegitimación por los recurrentes casos de violación a los derechos humanos. El entonces procurador en la materia, Ramiro de León Carpio, había acusado a Serrano de apoyar la impunidad y encabezar un gobierno violador de las garantías individuales.

La resistencia popular creció luego de la muerte del estudiante Abdiel Hernández, asesinado por un guardaespaldas del diputado Obdulio Chinchilla cuando participaba en una protesta masiva ante el parlamento. La protesta tenía inicialmente que ver con una disposición del gobierno de crear un documento de identificación del estudiantado que sería utilizado para el transporte público, proyecto rechazado por los alumnos, que argumentaron serviría sólo a las autoridades para controlar mejor y reprimir más fácilmente a la dirigencia estudiantil.

Las protestas, durante las cuales fueron quemados más de siete autobuses colectivos (lo que llevó a la paralización del transporte por parte de empresarios privados), tuvieron su punto culminante a mediados de mayo, durante el sepelio de Abdiel Hernández, el cual se convirtió en una inmensa manifestación antigubernamental (ver capítulo V).

Dos días más tarde y luego de violentos choques entre policías y estudiantes que dejaron un saldo de 35 heridos, Serrano desplegó fuerzas de seguridad en la Universidad de San Carlos mientras convocó a su gabinete; según la prensa, el mandatario estudiaba ya la posibilidad de imponer un estado de excepción.

Pese a las amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y populares, la ola de protesta estudiantil iba en aumento. Grupos de estudiantes de secundaria y la Universidad de San Carlos colocaron barricadas en el centro de la capital y en sectores periféricos, en tanto Rigoberta Menchú denunciaba la existencia de una "lista negra" de líderes populares a quienes grupos clandestinos tratarían de eliminar.

Fue entonces cuando, en una maniobra sorpresiva, Serrano decidió suspender "parcial y temporalmente" la Constitución y disolvió el Congreso, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. El virtual "autogolpe" pretendía, según el

mandatario, "depurar a fondo" el Estado y convocar a elecciones parlamentarias dos meses después.

El movimiento de tropas se inició en la madrugada, cuando fueron rodeadas las viviendas particulares de los presidentes del Congreso, José Lobo, y de la Corte, Juan José Rodil, así como la del Procurador Ramiro De León Carpio.

Al justificar el autogolpe, Serrano afirmaría que "las debilidades del sistema democrático han permitido que sea aprovechado por las mafias y el narcotráfico para sus fines espurios". Dijo que la decisión, que fue propia y no del ejército, obedecía a que "la situación (...) se ha venido deteriorando". (77)

La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. La iglesia lamentó la suspensión de garantías constitucionales: Sólo puedo "lamentar, deplorar" esta situación. "Lo que nos interesa es que se respeten sus derechos (de la población) y su dignidad", dijo el obispo auxiliar Juan Gerardi.

Mientras la CSJ declaraba lo dispuesto por el "hoy gobernante de facto" como carente "de validez en lo absoluto (pues) es sedicioso y apareja responsabilidad criminal", los miembros del poder Legislativo, que sesionaban clandestinamente, decidieron pedir al ejército la deposición del presidente, a quien acusaron de haber dado "un golpe de Estado técnico", en "contubernio con la policía nacional" antes de que prosperara una petición de juicio por corrupción.

La respuesta de la cúpula castrense fue de apoyo a Serrano. El ministro de Defensa, general José Domingo García, dio inicialmente su respaldo a la "decisión política" del presidente, porque "se estaba llegando a un caos político, por la falta de respeto y el desorden". Sin embargo, tres días después y ante la creciente resistencia de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional al "serranazo", el jefe castrense pediría un rápido regreso a la institucionalidad, reclamo al que se sumó también la cúpula empresarial.

Presionado, Serrano cambió su estrategia. Tras el rechazo del TSE a su solicitud de convocar a elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, propuso efectuar una consulta popular para reformar la Constitución. Según Serrano, sus acciones se orientaban a lograr una "democracia real" y a dejar atrás "la democracia de fachada, corroída por la corrupción, el narcotráfico y otras porquerías". (78)

En el mismo tono, el "justiciero" general y ex presidente Efraín Ríos Montt declaró: "Me cuesta y me duele decirlo tan rotundo, pero Guatemala se merece este autogolpe". Agrega que "lo que tenemos es el resultado de una pelea entre mafiosos" y que "la democracia en Guatemala ha sido desde 1986 una farsa". (79)

A fines de mayo, Rigoberta Menchú llamó a la "desobediencia civil" para exigir el retorno de la constitucionalidad. Al encabezar una manifestación en la plaza central en desafío al estado de emergencia, la dirigente indígena rechazó la propuesta

(77) DPA, 25/5/93.

(78) UPI, 30/5/93.

(79) AFP, 31/5/93.

de una consulta popular y aclaró que toda convocatoria oficial era ya carente de validez por provenir de "un gobierno de facto".

Los graves sucesos motivaron el envío, por parte de la OEA, de una misión de información encabezada por su secretario general, Joao Baena Soares, al término de la cual el organismo instó al regreso a constitucionalidad en el país.

La protesta masiva se extendió también al Procurador De León Carpio, quien en una manifestación de ex diputados frente al Palacio Nacional exigió la renuncia de Serrano pues, dijo, "se convirtió en un simple dictador a quien le quedan contadas las horas para que retornemos al orden constitucional". (80)

De León aceptó encabezar una fórmula que diera solución a la crisis y "coordinara" el esfuerzo de todos los sectores: Así, el 2 de junio Jorge Serrano Elías renunció a su cargo y delegó el poder al ejército, si bien el vicepresidente, Gustavo Adolfo Espina, asumía "temporalmente" la presidencia, en lo que Menchú calificó como "un gobierno militar con un disfraz civil". Las organizaciones civiles se movilizaron para "evitar que se legitime el golpe de Estado".

Horas más tarde, desde su exilio en El Salvador Serrano declaraba: "No he renunciado a la presidencia de la República: fui obligado por un golpe de una pequeña cúpula militar".

Gustavo Espina, señalado por la oposición como protagonista del autogolpe, anunció que asumiría la jefatura del Estado y pidió la renuncia del gabinete ministerial. Autoproclamado presidente en cadena de radio y televisión, Espina tuvo el inmediato respaldo del ejército, que dio un giro de 180 grados al apoyar su nominación.

Rápidamente recorrió el país una ola de rumores sobre presuntas purgas de oficiales de las fuerzas armadas (entre ellos el general Mario Enríquez) que se oponían al apoyo castrense a Espina. Según la prensa internacional, el ejército estaba ya dividido en dos facciones: los llamados "oficiales de la montaña", que proponían la formación de una junta cívico-militar compuesta por dos militares y un civil, que convocara a una Constituyente; y el también clandestino grupo de "oficiales éticos", que fustigaba a los altos mandos por haber apoyado al nuevo presidente. (81)

El 4 de junio, el Congreso se reunió para designar formalmente al nuevo mandatario guatemalteco, que al parecer tenía además el respaldo de la Corte de Constitucionalidad, el parlamento y la Procuraduría. Sin embargo, la sorpresiva renuncia de Espina se conoció horas después, mientras el ejército apoyaba la formación de una Instancia Nacional de Consenso (INC), que agrupaba a seis partidos políticos, la cúpula empresarial, diversas centrales sindicales, la Multisectorial Social y el sector universitario.

Como resultado de la negociación entre el ejército, la INC y el parlamento, el 6 de junio fue designado presidente Ramiro De León Carpio. Obtuvo el apoyo de 106 de los 116 diputados del Congreso y fue elegido tras declinar su candidatura el otro

(80) AFP, 31/5/93.

(81) El Nacional, agencias, 4/6/93, pp 1 y 14.

contendiente, el presidente del TSE Arturo Herbruger, designado luego vicepresidente de la República.

"La caída de Serrano, obra de líderes empresariales guatemaltecos", tituló The New York Times al comentar la situación en el país. Según el corresponsal Tim Golden, fueron demasiadas las presiones de empresarios locales que temían a las sanciones económicas de Estados Unidos y a la consecuente caída de las exportaciones.

El Times indicó que la negociación con todas las fuerzas políticas fue la única opción del gobierno, en momentos de una gran incertidumbre que también maniató al ejército, incapaz de reprimir las protestas populares. La fuerte oposición nacional e internacional a los golpistas, observó el diario, impidió a la vez que el ejército se afianzara en el poder. (82)

La calma retornó al país con la asunción de De León Carpio, apoyado según las encuestas por un 80% de la sociedad guatemalteca, que había aplaudido su gestión como procurador y sus críticas a los desmanes del gobierno y las fuerzas armadas. El fin de la crisis institucional devino en una rápida distensión entre la población, si bien la sombra de los militares y la vieja historia de golpes de Estado continuaba presente en el país.

Frente al ejército, las acciones del nuevo presidente fueron inmediatas. El 7 de junio, De León removió a la cúpula militar, nombrando ministro y viceministro de Defensa a los generales Roberto Perussina y Julio Otzoy. Mario René Enríquez fue designado jefe de Estado Mayor.

La destitución de la cúpula castrense fue interpretada por la guerrilla como "una buena señal" para la implantación de la democracia. Así, la URNG reiteró su disposición de reanudar las conversaciones de paz.

Los vertiginosos sucesos en el país incluyeron una rápida visita del subsecretario de Estado norteamericano, Clifton Wharton, y el anuncio de la reanudación de la ayuda económica y militar a Guatemala (ver capítulo III). El nuevo gobierno tuvo también el apoyo inmediato de los cancilleres del Grupo de los Tres (G-3, integrado por México, Venezuela y Colombia).

A ello siguió la renuncia ante la INC, de 40 diputados anuentes con el proceso de depuración en el Congreso, quienes pidieron a su presidente, Fernando Lobo Dubón, promover la dimisión del resto de los 116 legisladores. De los diputados renunciantes, seis pertenecían al FRG, 17 a la UCN, 12 al PAN, cuatro a la Bancada del Cambio y uno al PSD.

Otros cambios realizados en días siguientes fueron la nominación del nuevo canciller: el abogado Arturo Fajardo, ex embajador de Guatemala en la ONU, OEA y la Comunidad Europea tenía, según los observadores, la misión inicial de rescatar y fortalecer la imagen del país.

También fue nombrado como vicepresidente Arturo Herbruger, un abogado 81 años vinculado a la "revolución de octubre" de 1944, que derrocó al general Federico Ponce y puso fin al régimen de Jorge Ubico. Había sido también vicecanciller, procurador de la

(82) Excelsior, 7/6/93.p.1 y 4

Nación y ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951).

A mediados de junio y en un gesto de "buena voluntad" hacia el gobierno, la URNG declaró una tregua unilateral temporal de las hostilidades. De León calificó la medida como "una esperanza" para el reinicio de las negociaciones de paz.

Mientras, el nuevo presidente de la CSJ, Juan José Rodil, pidió a De León promover una reforma en el poder Judicial y concluir con anticipación el período del actual personal (90 días a partir de aprobadas las reformas). La Corte venía siendo blanco de constantes denuncias de corrupción y manipulación de la justicia. Según la reforma propuesta, los magistrados deberían ser electos en forma directa por la población y no por el Congreso, como hasta entonces.

Al 26 de junio habían renunciado 63 diputados, entre ellos 16 de la UCN, 13 del PAN y 13 del MAS. (83) Sólo dos diputados dimitieron por la Democracia Cristiana, partido separado de la INC por cuestionar el proceso de depuración del Congreso. En respuesta, el líder democristiano Alfonso Cabrera propuso otra forma de "sanear" al parlamento adelantando las elecciones, reduciendo curules y reformando algunas leyes.

Pese a los cambios promovidos por el presidente De León, Rigoberta Menchú declaró al diario francés Le Monde que el sistema seguía intacto en Guatemala, donde "aún no se ha realizado ninguna reforma en el poder del Estado" y "todavía existe un conflicto armado interno", mientras "los militares siguen imponiendo la ley en el campo".

En efecto, el nuevo gobierno tendría su primera situación difícil a inicios de julio, a raíz del asesinato de Jorge Carpio Nicolle, ex candidato presidencial, ideólogo del "centrismo" y primo del presidente. El crimen fue considerado por analistas como "una señal" enviada por grupos paramilitares a De León y a sus proyectos de reformas.

La muerte de Carpio sacudió al país pero no impidió que el gobierno y la guerrilla volvieran a la mesa de negociaciones, para lo cual la parte oficial propuso sin éxito separar los temas de tipo económico de la discusión en torno al cese de hostilidades militares. "No puede separarse el conflicto armado interno de las raíces y causas económicas, políticas, sociales que lo originaron", respondió la URNG, cuyo planteo encontró eco en la mayoría de sectores políticos y sociales.

Otro punto de desacuerdo fue la separación del hasta entonces conciliador en las pláticas, monseñor Rodolfo Quezada. La labor del prelado había sido cuestionada por militares y empresarios, quienes insistían en que el gobierno debía solamente negociar con los rebeldes su desarme e integración a la vida civil, en vista del interés del ejército de impedir que la firma de la paz implicara cambios y mucho menos logros "políticos" que la guerrilla no había obtenido en el campo de batalla.

La posición castrense, sin embargo, eliminaba "arbitrariamente tres años de actividad negociadora", en los que han estado

(83) Enfoprensa, 25/6/93.

jurídica y políticamente comprometidos dos sucesivos gobiernos, el mediador y la ONU, de acuerdo a voceros de la guerrilla.

El plan oficial de negociaciones, que proponía reiniciar de inmediato las negociaciones bajo mediación de la ONU y permitir el ingreso a Guatemala de dirigentes rebeldes en el exilio, fue recibido con escepticismo también por sectores populares, que advirtieron la falta de condiciones para la reconciliación nacional, en un país donde continuaban operando "grupos oscurantistas".

En este sentido María Eugenia Sierra, titular adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos, afirmó: "A pesar de que en Guatemala ya no se cometen violaciones masivas, aún se debe considerar como preocupante la actual situación de los derechos humanos", pues si bien algunas personas ya no están en el gobierno, "las estructuras siguen siendo las mismas".

También la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (USTG) advirtió que la "represión y el terror" contra los sindicalistas no había cambiado con la llegada del presidente De León al gobierno, situación que, según la organización gremial FENASTEG, permitía "a los grupos represivos la militarización" del país. (84)

El proyecto de diálogo obtuvo, sin embargo, el total respaldo del ministro de Defensa Enríquez, quien opinó que el diálogo era "la única opción" para los alzados en armas pues "por la vía militar nunca alcanzarán el poder". El jefe castrense aceptó incluir en la agenda el tema de la renovación de las fuerzas armadas, en vista de que ejército tiene una "imagen monstruosa" frente a la credibilidad de la URNG. (85)

La evidente alianza del gobierno con el ejército, la empresa privada y los organismos de crédito internacional (ver capítulo III), motivó la protesta de sectores de prensa, magisteriales y grupos humanitarios, que advirtieron que el alejamiento del mandatario de los reclamos populares conllevaría un gradual deterioro de su credibilidad y nuevos desórdenes sociales.

Según el diario local El Gráfico, los guatemaltecos habían aplaudido la elección de De León porque esperaban que la conciencia social del ex procurador de Derechos Humanos se concretara en obras en favor del pueblo, "pero no lo ha hecho".

Intentando revertir esa imagen, el presidente anunció a inicios de agosto que combatiría la corrupción y "limpiaría" la administración federal, comenzando con la Policía Nacional (remoción de su jefe) y siguiendo con el Ejército, la empresa de telecomunicaciones y el Banco de Desarrollo Agropecuario. Como parte de su programa, De León destituyó a los 22 gobernadores departamentales del país y anunció que haría lo mismo con los presidentes de los Consejos de Desarrollo, para completar en los diez días siguientes la "depuración política" del Ejecutivo.

Las medidas coincidieron con el anuncio del secretario de la Corte Suprema, Julio Rivera, sobre la complicidad en actos de corrupción de ocho jueces y un magistrado de la Corte de Apelaciones, suspendidos y sometidos a juicio. La crítica de la

(84) La Jornada, agencias, 22/7/93, p. 40.

(85) La Jornada, agencias, 14/7/93.

Iglesia católica a la corrupción en los aparatos de "justicia", provocó una denuncia por difamación (que finalmente no prosperó) interpuesta por un juez contra el arzobispo Penados, acusado de "denunciar sin pruebas" varios delitos, entre ellos presuntas "compras" de jueces.

"Depurables" y "no depurables"

Tras anunciar que tomaría "decisiones políticas" para "depurar y reestructurar" el Congreso y el poder Judicial, Ramiro De León pidió a la población su apoyo para enfrentarse a los "sectores poderosos". (86) La demanda popular en favor de la depuración tuvo el respaldo de la URNG y el rechazo de los diputados aludidos, que en campos pagados en los diarios retaron al presidente a demostrar su supuesta falta de "legitimidad".

Cada vez más presionado y convencido de que Guatemala vivía "una crisis de gobernabilidad" iniciada con el autogolpe de Serrano, De León exigió la renuncia de los 116 diputados del parlamento y los nueve jueces de la Corte Suprema. De lo contrario, dijo, pediría al TSE convocar un referéndum y al pueblo salir a las calles para ejercer su derecho a la "resistencia".

La Corte de Constitucionalidad avaló la legalidad de la depuración, pero sólo por la vía de la renuncia de los diputados y magistrados y no por la de una convocatoria a elecciones u otras medidas no legales.

En un ambiente de tensión e inquietud generalizada, los diputados amenazaron con movilizar a sus "simpatizantes" contra la pretendida depuración (dado que habían sido "electos popularmente") y con inhabilitar al presidente, a quien algunos legisladores llamaron "autoritario" y "neofascista". El diputado Andrés Girón le acusó de "desestabilizar" al país con apoyo de la empresa privada, que teme se aprueben leyes contra sus intereses.

Inmersa en el conflicto, la iglesia exhortó a diputados y jueces a dimitir "por moral, ética y por el bien de la Patria". "Para nadie es un secreto la corrupción que hay a todo nivel... es el pan nuestro de cada día", declaró el arzobispo Penados al comunicar su "total respaldo y adhesión" a la iniciativa presidencial.

Por su parte, en una propuesta más mediatizada, la INC pidió al Legislativo "autodepurar" a 16 diputados considerados corruptos, en su mayoría democristianos y entre quienes se incluía al presidente del parlamento, José Lobo Dubón. Al concluir el plazo oficial de 72 horas para la dimisión de funcionarios, los 23 diputados de la DC condicionaron su renuncia a la salida de los 96 restantes miembros del Congreso.

El rechazo a su plan de depuración llevó al presidente De León a preparar su solicitud de referéndum en torno a la "limpia" en el Congreso y la CSJ, mientras dirigentes populares insistían en que tal depuración debía alcanzar a todos los entes del Estado, "administrativos, políticos, económicos, militares, policiales,

(86) La Jornada, agencias, 16/8/93.

judiciales, asistenciales, y abarcar a todo el país, de frontera a frontera". (87)

Ante la crisis con el Ejecutivo, el Congreso suspendió sus actividades a inicios de **septiembre** y por tiempo indefinido. Unos 70 diputados autollamados "honestos" (no depurables, según su criterio) comenzaron a sesionar de forma independiente en un centro cultural capitalino, a cuyas puertas llegaron a protestar cientos de personas, bajo la consigna "que renuncien 16 y 100 más".

Los 70 legisladores alegaban que debía sanearse el Congreso pero retirando sólo a 16 diputados que daban "mala imagen"; por su parte, los "depurables" (bloque formado por 23 democristianos y los 16 cuestionados de diversos grupos) insistían en una recomposición total del parlamento.

Diversas instancias empresariales, sindicales, religiosas, universitarias e indígenas insistieron durante días en la renuncia de todos los diputados, mediante una campaña en medios de comunicación en la que se preguntaba a los guatemaltecos: "Si estos son los padres de la Patria, ¿no preferirías ser huérfano?" (88)

El 5 de septiembre, al vencer el plazo, la INC consideró que era "suficiente" depurar sólo a los 16 diputados que manchaban la "imagen" del Legislativo. Tras cinco horas de sesión en la que se llegó hasta los golpes, el dividido Congreso suspendió el debate mientras, ante la falta de consenso, algunos analistas consideraban como única alternativa la inminente realización de la consulta popular sugerida por De León.

La crisis parlamentaria y el intento de depuración del Congreso fue calificado como "una farsa" por la comandancia de la URNG, mostrando una posición poco inteligente tomando en cuenta la correlación de fuerzas en ese momento. En un comunicado, la guerrilla catalogó la propuesta presidencial de referéndum como "una maniobra demagógica" del parlamento y la CSJ, y exigió una limpieza "legítima" mediante la "depuración de los tres organismos del Estado y sus instituciones, incluyendo al ejército".

"Todo indica que en lugar de una solución democrática se está fraguando una componenda que burla el clamor de la depuración y reformas que demanda nuestro pueblo", advirtió la URNG.

En ese sentido, el Congreso designó una nueva cúpula presidida por el diputado del FRG Arturo Soto Aguirre (en lugar de Lobo Dubón), y con el ex serranista Mario Solórzano entre sus vicepresidentes. Lobo Dubón calificó los hechos como un "golpe de Estado técnico" en su contra.

"Quienes violan la Constitución pueden ser condenados de tres a diez años de cárcel", dijo el depuesto jefe del Congreso al indicar que el llamado "gran bloque" parlamentario lo había despojado ilegalmente de su cargo. Pistola en mano, Lobo Dubón se lió a golpes con varios diputados, en su intento por permanecer en su despacho.

(87) La Jornada, agencias, 31/8/93, p. 52.

(88) IPS, 3/9/93.

Los hechos de violencia en el parlamento fueron para los sectores populares la confirmación de que la "limpia" en el Congreso era no sólo necesaria, sino obligatoria. "No hay uno solo de ellos (los diputados) que merezca estar en ese lugar", dijo Byron Morales, líder de la Unión Sindical de Trabajadores (UST).

El Palacio Legislativo fue ocupado con violencia por unos 300 miembros de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Uno de los manifestantes dijo que la acción pretendía evitar se siguiera debatiendo la "depuración selectiva" de la Cámara, porque "no tienen solvencia moral". Según la UASP, los políticos sólo querían una depuración "de fachada" para perpetuarse en el poder.

En rueda de prensa, el presidente De León reiteró que, de no haber acuerdo parlamentario, convocaría a un plebiscito y a la resistencia cívica para lograr la renuncia de todos los diputados.

Sumando nuevos elementos de tensión a la crisis política, el procurador general de la Nación, Acisclo Valladares, reclamó su derecho de reasumir el cargo horas antes de ser nombrado su sucesor, en lo que se consideró como una dura prueba para la justicia. Valladares, quien había formado parte del gabinete de Serrano Elías, enfrentaba acusaciones judiciales por presunto encubrimiento de manejo ilícito de fondos.

Días después reasumió funciones la vieja directiva parlamentaria que respaldaba al depuesto Lobo Dubón, quien acusó al presidente De León de "violiar la Constitución" al "meter las manos" en el Legislativo. Como lo había anunciado, el mandatario pidió al TSE convocar a un referéndum para realizar la programada depuración.

En contraparte y en reacción de lo propuesto por el presidente, el PCD propuso al Congreso reformar la Constitución para reducir el mandato del presidente, de los diputados al Congreso y de los magistrados del Poder Judicial.

No obstante, para el rector de la Universidad de San Carlos, Alfonso Fuentes Soria, el simple cambio de personas en los aparatos de poder no lograría por sí solo superar la grave crisis institucional del país: "Ya el sistema político guatemalteco se agotó y debe modernizarse; se necesita un cambio que permita a la población expresarse y participar en la toma de decisiones".

A cuatro meses de haber iniciado su gobierno, De León estaba ya prácticamente aislado. Rotas las alianzas internas y en medio de un peligroso vacío político, el intento del presidente por reformar la Constitución no consiguió evitar el rompimiento entre su gobierno y el Congreso, ahora fraccionado.

El diario Siglo Veintiuno observó que a nivel interno, también el Foro Multisectorial Social tomaba distancia, debido al respaldo presidencial a la existencia de las paramilitares PAC. La posición del sector popular en el Foro provocó además el rompimiento de la INC, a raíz del desencanto producido por los fracasos en materia económica.

Al priorizar la "democracia interna" por sobre las negociaciones de paz con la guerrilla, el gobierno también profundizó su brecha con la URNG mientras el diálogo seguía en un **impasse**. Consciente de esa situación, De León dio a conocer a

inicios de octubre un plan nacional de paz, que incluía la convocatoria a un diálogo nacional y una propuesta para reanudar las negociaciones con la guerrilla.

Los ejes principales de la propuesta eran formar un Foro Nacional de Paz, dar respuesta a los problemas sociales y sentar las bases para un cambio profundo en la sociedad a partir de la consolidación de la defensa de los derechos humanos, la reestructuración del sistema fiscal y el gasto público, y el acercamiento con la guerrilla.

Para los sectores populares, entre ellos la Coordinadora de Sectores Civiles (CSC) y la Coordinadora Civil por la Paz (COCIPAZ), el plan de paz oficial era sólo una "reformulación" de planteamientos del anterior gobierno: eliminaba el acuerdo sobre protección a los derechos humanos con una verificación internacional, sustituyéndolo por una simple declaración de buenas intenciones. Para Rigoberta Menchú, la propuesta representaba un "retroceso", pues pretendía volver al plan de paz centroamericano de Esquipulas II, firmado en 1987. (89)

El mismo día y acatando el pedido presidencial, el TSE llamó a la población a una consulta popular prevista para el día 28 de noviembre, para decidir si apoyaba la depuración en el Estado. Sin embargo, la convocatoria fue suspendida el 13 de octubre por la CSJ, atendiendo un recurso de amparo presentado por seis diputados; éstos alegaron el principio constitucional de independencia de Poderes, al acusar de injerencia al TSE por permitir la intromisión de un organismo del Estado, como el Ejecutivo, en la acción de otros.

Mientras, en el Congreso --que barajaba incluso la posibilidad de llevar a un "juicio político" al presidente guatemalteco-- los dos principales bloques parlamentarios acordaron reducir un año el período presidencial de De León y crear el cargo de Primer Ministro de la Nación. La medida fue interpretada como una "venganza" de los legisladores contra el mandatario y sus planes de depuración institucional.

Y así lo asumió también el propio presidente, que acusó al Congreso y a la Corte de "conspirar" en su contra. En medios periodísticos trascendió que diputados y militares buscaban una alianza para sustituir a De León en su cargo. Se habló incluso de un frustrado intento militar golpista, el 19 de octubre, so pretexto de la guerra política entre poderes. (90)

El conflicto institucional aumentó cuando Ramiro De León rechazó la pretensión del Congreso de adelantar las elecciones generales a 1994, señalando que recurriría a la Corte de Constitucionalidad para impedirlo.

La tensión social crecía. Unos 200 activistas del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) ocuparon el Congreso, mientras otros miembros de organismos populares tomaron la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos (ver capítulo V).

Según Rigoberta Menchú, realmente existían condiciones para un golpe, pues "no se sabe quién gobierna en este país, sumido en una crisis total". En el mismo sentido se pronunciaron

(89) EFE y ANSA, 6/10/93.

(90) Excelsior, corresponsal, 22/10/93, pp 2 y 23)

representantes de la Conferencia Episcopal, que ofreció mediar en un diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para terminar con la "guerra política" entre ambos.

La propuesta de la iglesia fue aceptada de inmediato por los congresistas, que suspendieron la aprobación de un paquete de 76 reformas constitucionales. En una actitud conservadora, los jerarcas católicos plantearon el fin de las hostilidades verbales y el "inmediato inicio de las conversaciones", recomendando al presidente "reconsiderar" su llamado a referéndum.

Sin embargo, tras señalar que la iniciativa eclesial había sido planteada "demasiado tarde", De León descartó suspender la consulta popular --a la que calificó de "irreversible"-- y anunció el inicio de su campaña en favor del "SI" para la depuración del Estado.

Sin embargo la oferta de diálogo de la iglesia fue escuchada. El 8 de noviembre dieron inicio conversaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, ya en franca desventaja y totalmente acosado por las presiones. En una reacción "tardía", la guerrilla rechazó entonces la posibilidad de una "componenda" y llamó a la población a movilizarse para defender al gobierno.

"Hay sectores dentro del ejército y la iniciativa privada que, aunque minoritarios son muy poderosos y pretenden imponer una solución militar a la problemática general de nuestra sociedad, silenciar la protesta y reprimir el descontento", indicó un comunicado de la URNG publicado en diarios guatemaltecos. En él, la dirigencia rebelde reconoció en De León "legitimidad de proyectos, como la depuración del Congreso y la reforma constitucional". (91)

Pero ya no había tiempo para respaldar al debilitado presidente, quien sufrió un nuevo revés. En un inesperado fallo que ahondó la incertidumbre política nacional, la Corte de Constitucionalidad (a la que De León había recurrido en busca de apoyo) ordenó al TSE suspender temporalmente la convocatoria al referéndum. La decisión de la Corte fue calificada como una "estafa política" por diversos sectores sociales, que sin embargo tampoco respondieron con energía en defensa del presidente.

El mencionado diálogo concluyó a mediados del mes con un acuerdo de "reformas mínimas" a la Constitución, como la única "salida a la crisis de gobernabilidad", según la opinión de la iglesia. Entre otras reformas se planteó la reducción del número de curules en el nuevo Congreso (de 116 a no más de 100) y la modificación de la forma de elección de diputados (por votación directa y no como resultado de la elección presidencial).

También se dispuso reducir de cinco a cuatro años el mandato de los legisladores y del presidente de la República a partir del siguiente período presidencial, y acortar el período de los alcaldes y corporaciones municipales. En materia judicial, se acordó "despolitizar" la CSJ, modificando la forma de elección de magistrados y reduciendo su mandato a cinco años.

Según analistas independientes, las intenciones del mandatario guatemalteco de lograr mayores espacios democráticos mediante la depuración del Congreso y la CSJ fueron frustradas, por lo que se

(91) AFP y EFE, 8/11/93.)

vio obligado a mediatizar sus objetivos y a entrar, finalmente, en una componenda entre poderes.

De hecho, Ramiro De León hablaría poco después de un "gran acuerdo político nacional", al anunciar la firma de un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo. El documento estipulaba la realización de elecciones parlamentarias anticipadas que permitieran la integración de un nuevo Congreso y la posterior renovación de la Corte Suprema.

Las medidas se resumían en seis puntos: 1) Presentar al pleno del Congreso el paquete de reformas a la Constitución negociado durante una semana con mediación del episcopado, 2) Convocar a elecciones del Congreso "dentro de los plazos legales", 3) Elegir una nueva CSJ, de conformidad con la reforma constitucional, 4) Someter a consulta popular las reformas constitucionales, 5) Una agenda legislativa de 11 puntos que deberían cubrir los actuales diputados antes de la integración de un nuevo Congreso, y 6) Compromiso del Ejecutivo para buscar "un acuerdo nacional para alcanzar un pacto de gobernabilidad que establezca las bases del proyecto de Nación".

Sectores populares y sindicales calificaron el pacto de "turbio y frustrante negocio político". (92)

Conforme a lo acordado con el Ejecutivo, y pese a la creciente oposición de organizaciones populares, el Congreso formalizó sin demora la aprobación de 43 reformas constitucionales. En respuesta, el Foro Multisectorial anunció una serie de manifestaciones populares, en protesta por "la traición que cometió Ramiro De León" al negociar con el Congreso.

Fortalecido, el parlamento intentó sin éxito introducir sustanciales modificaciones al presupuesto para 1994, entre éstas un aumento de US\$14.5 millones a la partida de la CSJ. "No es posible hablar de depuración de un organismo de Estado y a la vez asignarle más recursos", dijo el presidente al vetar el proyecto.

Reinicio de negociaciones y "remedo" de depuración

Hacia finales del año, una vez apaciguado el grave conflicto institucional, el gobierno reinició sus gestiones de acercamiento a la guerrilla. Declaró su voluntad de pactar una tregua con la URNG y anunció el nombramiento del asesor en temas militares, Héctor Rosada, como jefe de la comisión gubernamental de paz, así como el apoyo oficial a la labor del conciliador Quezada.

Luego de una nueva ronda de conversaciones, en la primera semana de 1994, el presidente De León aseguró que el fin del conflicto armado estaba cerca. "Guatemala está haciendo historia", dijo al señalar que ambas partes estaban decididas a firmar la paz antes de terminar el año. (93)

La posición de la URNG, en tanto, giraba en torno a la necesidad de discutir, como primer punto, el tema de los derechos humanos y su verificación internacional. Según el nuevo procurador de Derechos Humanos, Jorge García, la situación

(92) La Jornada, corresponsal, 17/11/93, p. 51)

(93) La Jornada, corresponsal y agencias, 12/1/94, p. 53.

continuaba siendo "pésima", en tanto no se había registrado "ninguna mejoría" durante el gobierno de De León Carpio.

Criticado por su desatención al reclamo de importantes organizaciones humanitarias en torno al problema de los derechos humanos y la violencia, el gobierno volvió a enfrentar una ola de atentados. Mientras el presidente anunciaba el reforzamiento de la seguridad nacional, al menos 76 torres de electricidad fueron derribadas por bombazos en varios departamentos del país.

Estos sucesos fueron interpretados como una forma de rechazo de la guerrilla guatemalteca a la consulta popular prevista para el 30 de enero, en la cual De León intentaría obtener respaldo nacional a las reformas constitucionales.

La comandancia de la URNG llamó a la población a rechazar la consulta mediante el abstencionismo, que finalmente superaría el 80%. El respaldo a las reformas, entonces, provino solamente de poco menos del 20% del electorado convocado a las urnas.

El cómputo oficial final del referéndum arrojó: 84,13% de abstención; 10,75% votos por el "SI", 2% por el "NO" y 3,2% votos anulados.

Partidarios "SI" atribuyeron el alarmante abstencionismo a la falta de líderes y a los atentados dinamiteros ocurridos la víspera. Los resultados reflejan "un problema de liderazgo del presidente", dijo Mario Solórzano, del PSD, en tanto el diputado Arturo Soto, del FRG, declaró: con la consulta "evitamos otro golpe de Estado". (94)

Por su parte, en aras de alcanzar el espacio requerido para la gobernabilidad del país, el presidente instó a la unidad nacional, alegando: "La ley no habla de porcentajes (sino del) indiscutible triunfo" del SI sobre el NO, lo cual "demuestra claramente que el pueblo de Guatemala apoya la revolución moral iniciada por el presidente de la República, que da paso a una etapa renovadora (...) respetando el marco legal e institucional y, en este caso, por medio del arma más poderosa de la democracia, es decir el voto de los ciudadanos".

Para la URNG, "el intento del gobierno por presentar como un triunfo el escaso 'SI' alcanzado en las urnas, constituye una imposición más al pueblo de Guatemala".

Una opinión más interesante provino del diario Siglo Veintiuno, al señalar que varios altos mandos militares, descontentos con el proceso de paz, habrían boicoteado la consulta con la intención de mostrar un gobierno débil y frágil. La estrategia castrense sería impedir que las PAC, formadas por casi medio millón de campesinos bajo el control del ejército, votaran por el 'SI', indicó el periódico.

Reveló que antes de la consulta, hubo reuniones secretas entre altos mandos del ejército. Allí, "un general con mucha influencia en las filas castrenses, respetado por su pasado, declaró que no era posible ver que un ejército ganador estaba siendo llevado al terreno de los perdedores", en alusión a que el gobierno estaba aceptando a la URNG como fuerza beligerante. (95)

(94) El Día, agencias, 1/2/94.

(95) Excelsior, corresponsal, 7/2/94, pp 2 y 21.

Según la prensa, la posición del gobierno frente a la guerrilla estaba dividiendo a las fuerzas armadas. La versión fue rechazada por De León y por el ministro de Defensa, quien negó presuntos levantamientos o intentos de golpe de Estado. El jefe militar admitió, sin embargo, que "en varias oportunidades, civiles han tocado las puertas del cuartel con la intención de desestabilizar", en acciones en las que podrían participar civiles y militares "que fueron frustrados de las filas del ejército".

La posición castrense era igualmente intransigente en torno a la reclamada formación de una Comisión de la Verdad. Aunque reconoció "mínimas" violaciones a los derechos humanos, el general Mario Enríquez aclaró: "Nosotros objetamos la Comisión de la Verdad porque sería una comisión de venganza".

A estas alturas, el gobierno aparecía realmente "maniatado" por el ejército. A juicio de la guerrilla, el presidente ejecutaba una política de "guerra sucia" para entorpecer las negociaciones de paz, debido a su falta de autonomía frente a la institución armada.

En el mismo sentido, el arzobispo Próspero Penados observó que De León estaba "cercado" y era incapaz de resolver la crisis política, económica y social del país, en momentos en que aumentaban las violaciones a los derechos humanos y se acusaba a las PAC del asesinato del político Carpio Nicolle.

Para demostrar lo contrario, el presidente aceptó en febrero la renuncia del ministro de Gobernación, Arnoldo Ortiz, y destituyó al jefe de Estado Mayor General, general José Luis Quilo, en lo que se consideró un desplazamiento de la "línea dura" del ejército.

La teoría manejada en medios de prensa y fuentes cercanas al ejército, en torno a que la reorganización de la cúpula militar pudo responder al interés del mandatario y de un sector de las fuerzas armadas de facilitar las negociaciones de paz con la URNG, habría sido confirmada a fines de febrero, cuando el ejército aceptó formalmente discutir con la guerrilla la creación de una Comisión de la Verdad y la verificación internacional en materia de derechos humanos.

Un mes después, gobierno y URNG firmaron en México un acuerdo global sobre derechos humanos, que contemplaba la formación de una comisión de la ONU para verificar el respeto a las garantías fundamentales en Guatemala. El gobierno se comprometió a depurar las fuerzas de seguridad, combatir los aparatos clandestinos paramilitares, y fortalecer el órgano judicial, el ministerio público y la procuraduría de Derechos Humanos, a la vez que encomendó constatar la voluntariedad de las tan cuestionadas PAC.

La iglesia calificó de "halagador" el acuerdo, al que siguió el anuncio oficial de una amnistía para los combatientes guerrilleros y sus jefes.

En un comunicado, la URNG exhortó al gobierno y al ejército a respetar lo pactado, aclarando que el acuerdo sobre derechos humanos firmado en México no significaba "el fin del conflicto (sino) el paso fundamental de un proceso que requiere de la participación y movilización permanente de todos los sectores de la sociedad". La iglesia anunciaría luego su reincorporación al

proceso de negociaciones, designando al obispo Rodolfo Quezada como representante de la Asociación de Sectores Civiles (ASC).

Apenas horas después de divulgarse el nuevo acuerdo, el país fue sacudido por una serie de atentados terroristas, entre ellos el asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, y el ataque armado contra el diputado Obdulio Chinchilla, del pequeño Partido Revolucionario (PR, centroizquierda).

Estos hechos provocaron reclamos de diversos grupos políticos de implantar un estado de emergencia en el país, lo cual fue descartado por el gobierno. Sin embargo, el ministerio de Defensa anunció al Congreso que, en un plan conjunto con Gobernación, las tropas del ejército saldrían a "combatir la ola de criminalidad".

Al comentar el recrudecimiento de la violencia el ex presidente Vinicio Cerezo acusó a "políticos, civiles y militares" retirados, interesados en "propiciar un golpe de Estado". (96)

La situación anterior coincidió con una "marcha atrás" en la posición oficial en torno a la creación de una Comisión de la Verdad. Ello "podría ahondar heridas y obstaculizar las conversaciones de paz", expresó De León, cuyas declaraciones fueron atribuidas por la prensa a presiones del ejército, en momentos en que, paradójicamente, el ministro de Defensa hacía pública su anuencia de acatar el fallo de la futura instancia.

Un día después, el mandatario guatemalteco se refirió a la imposibilidad del gobierno de establecer un cese al fuego inmediato con la guerrilla, bajo el argumento de que "debe respetarse el calendario de negociaciones".

El gobierno pretende que la negociación "se acomode a una simple deposición de las armas por parte de la URNG, sin haber resuelto ninguna de las causas que generaron y mantienen el conflicto armado", respondió la dirigencia insurgente, saliendo al paso a la demanda de tregua unilateral planteada por organismos de la empresa privada.

La inflexibilidad del gobierno ante la guerrilla cobró fuerza a inicios de mayo, cuando el ministro de Defensa propuso armar a trabajadores campesinos para enfrentar a la URNG. La propuesta fue repudiada por amplios sectores sociales, entre ellos la iglesia católica y la propia iniciativa privada, que admitió que tal medida implicaba la creación de otro ejército en el país.

Reflejo del endurecimiento castrense fueron las declaraciones del ex presidente y general Efraín Ríos, quien reveló su anuencia a participar en otro golpe de Estado (similar al ejecutado en 1982), para "salvar la democracia". "Si hay baches e intenciones oscuras" en el proceso democrático --dijo-- podría dirigir una "nueva toma de la Bastilla".

Tras reiterar sus aspiraciones presidenciales, Ríos Montt (que encabezó el listado nacional para los comicios legislativos por su partido, el FRG), expresó "una profunda pena" por la mediación de la ONU en la negociación de paz. "Esto es algo así como si la

amante fuera a platicar con la mujer para resolver los problemas del marido", comentó a la prensa. (97)

Una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno y la URNG tuvo lugar a mediados de mayo en la ciudad mexicana de Puebla. En base a una propuesta de consenso elaborada por la ASC, fue discutido el complejo tema de los desarraigados por la guerra, población que incluye a millares de exiliados, repatriados y desplazados internos.

Si bien el documento planteaba una "solución integral" al problema, pasando por el cese de la "represión y la discriminación política" contra la población civil, la formación inmediata de una Comisión de la Verdad y el establecimiento de una política agraria acompañada de apoyo técnico y crediticio, la reunión concluyó sin acuerdo.

Según el delegado gubernamental Héctor Rosada, la URNG pretendió "politizar" el problema de los desarraigados. La guerrilla, a su vez, fustigó la "engañosa, incoherente y obstruccionista" posición oficial.

"Es engañosa porque ha pretendido calificar como humanitaria su posición, que ignora los aspectos sustanciales del desarraigo (...) reduciéndola al ridículo espacio de las ínfimas y precarias políticas gubernamentales puestas en marcha", indicó un comunicado de la dirigencia rebelde.

Es "incoherente --agregó-- porque rechaza el clamor de la sociedad y las exigencias de justicia que han expresado la ASC y la propia URNG", y es obstruccionista "porque antepone como condición el establecimiento de un cese del fuego cuando esta posibilidad está totalmente fuera de lugar pues no corresponde al tema ni la vigencia del acuerdo". (98)

Sin embargo, semanas más tarde, reuniones simultáneas en México y Noruega permitirían suscribir dos importantes acuerdos hacia la distensión, referidos al reasentamiento de las poblaciones desplazadas y a la formación de la Comisión de la Verdad.

En Oslo, las partes convinieron la participación de un representante de la ONU y dos guatemaltecos independientes en la futura Comisión de la Verdad que, según se acordó, no tendría "funciones ni objetivos judiciales" y debería "contribuir a la reconciliación nacional".

En su primera reacción ante lo acordado, el ministro Enríquez dijo parcamente: "los dos acuerdos son buenos para lograr la paz y la reconciliación".

Sin embargo, casi simultáneamente, voceros militares declararían que el poder de la guerrilla estaba "disminuido" por carecer de apoyo social. "Calculamos que no tienen más de 800 hombres en armas y únicamente operan en cinco de los 22 departamentos del país (...) La población ya no cree en ellos", dijo el portavoz castrense, coronel Morris Eugenio De León. (99)

En tanto, la acción de los paramilitares pareció resurgir. La organización privada estadounidense Americas Watch responsabilizó

(97) Notimex, 10/5/94.

(98) La Jornada, 31/5/94.

(99) AFP, 23/6/94.

de los hechos de violencia a presuntos "escuadrones de la muerte", vinculados a las fuerzas de seguridad. En un informe, en el que acusó a las PAC de cometer graves abusos, asesinatos y detenciones ilegales en el campo, señaló que esos grupos operaban con impunidad, mientras continuaban los crímenes extrajudiciales, amenazas de muerte e intimidación a líderes sindicales.

A fines de junio, otro "hecho" enrarecía la atmósfera política: un supuesto complot contra el presidente durante un desfile militar el día del ejército. Su veracidad fue puesta en duda poco después y, según Nineth Montenegro, del GAM, se trató de una "medida de distracción" para "inmovilizar a la opinión pública, imponiéndole temores de desestabilización".

En igual sentido el fiscal general, Ramsés Cuestas, opinó que pudo tratarse de un "montaje publicitario". Sin embargo, en medios de prensa trascendió que en el frustrado magnicidio habrían estado involucrados varios diputados del Congreso, lo cual nunca llegó a ser comprobado por las autoridades.

Elecciones legislativas

A inicios de julio, 18 partidos y 866 candidatos se habían inscrito para participar en los comicios parlamentarios. El nuevo Congreso, previsto a asumir en septiembre, debía elegir también a una nueva Corte Suprema de Justicia, para completar así la "renovación" de dos de los tres poderes del Estado.

Sin embargo, a menos de un mes de las elecciones, más del 85% de los votantes guatemaltecos desconocía a los candidatos, según una encuesta publicada en el diario Prensa Libre, la cual concedía mayor fuerza al derechista PAN (un 29%), seguido por el FRG de Ríos Montt (25 por ciento). (100)

De los resultados de estos comicios saldría vencedor el general Efraín Ríos Montt con la presidencia del parlamento. Ello auguró pocas esperanzas al proceso de lucha por la democracia que realizan los diversos movimientos sociales de Guatemala.

FALTA PAGINA

No. 192

1193

CUARTA PARTE

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

CAPITULO VII

Conclusiones y Perspectivas

I. Conclusiones

Síntesis, consideraciones finales e hipótesis conclusivas

En el presente trabajo se ha intentado reunir un conjunto de reflexiones teórico-prácticas que, si bien no dan la última palabra sobre el tema, contribuyen a un análisis de la situación planteada y ofrecen numerosos elementos para continuar investigando.

Se ha estudiado la lucha de los movimientos sociales por conquistar nuevos espacios democráticos, en el marco de los efectos de una cruenta y desgastante guerra iniciada con la década de los 80; en medio de procesos de paz y negociación política (fines de los 80 y comienzos del presente decenio), y de la aplicación de políticas económicas neoliberales caracterizadas por agudizar los problemas de los sectores más desfavorecidos.

Consideramos haber alcanzado buena parte de los objetivos propuestos al inicio de la investigación. A partir de ello, presentamos ahora una síntesis de los aspectos medulares del trabajo, para luego entrar a las consideraciones finales y señalar, posteriormente, algunas hipótesis que se desprenden del presente trabajo.

Por último expondremos las perspectivas y tendencias que exhiben los movimientos sociales, tomando en cuenta el entorno político económico en que se desenvuelven.

a. Síntesis

Partiendo del marco teórico esbozado mediante la exposición de las principales categorías y conceptos, entraremos directamente a señalar que:

Los datos socio-demográficos expuestos en la primera parte del estudio, brindan una visión general en las áreas de tasas vitales, salud, educación, vivienda y, fundamentalmente, en el comportamiento migratorio observado en los últimos cuatro años. Estos datos se complementan a su vez con los gráficos anexos, que permiten realizar una comparación de los países en estudio.

El marco global del presente trabajo está particularmente determinado por una situación regional caracterizada por violentos conflictos armados, que incidieron en el progresivo descalabro de la ya precaria situación de Centroamérica.

Nicaragua, con un conflicto militar en maduración desde 1975 y agudizado en la década de los 80 con la agresión contrarrevolucionaria promovida por Estados Unidos en el marco de

su estrategia de "guerra de baja intensidad", exhibe el cuadro más dramático en cuanto a las repercusiones de una guerra que postró su economía y afectó a la sociedad en su conjunto.

En el caso de El Salvador, la profundización del conflicto tuvo lugar a comienzos de los 80, cuando el FMLN logró unificar fuerzas y pasó a la ofensiva militar, obligando a Estados Unidos a destinar uno de los mayores presupuestos de asistencia exterior en las últimas décadas, a fin de revertir la situación y sostener militarmente a los últimos gobiernos de turno en ese país.

Guatemala, con uno de los conflictos de mayor duración en el área centroamericana, enfrentó una situación particular, debido a que a la larga guerra se sumó una no menos extensa historia de golpes militares que reduce las posibilidades de alcanzar una solución pacífica a la crisis.

Los tres países que aborda nuestra investigación presentan además otras similitudes. Han entrado en un proceso de negociación (iniciado a raíz de los acuerdos de paz de Contadora y Esquipulas, en los 80), siendo su conflicto visto desde la perspectiva de las metrópolis (en particular de Estados Unidos) como un reflejo de la confrontación Este-Oeste.

Como tal, se aplicó en estas naciones una estrategia de guerra dirigida a revertir procesos revolucionarios (aun los nacionalistas) y a desarrollar además un programa militar de contrainsurgencia en aquellos países donde los movimientos revolucionarios no alcanzaban todavía el poder.

Los procesos de negociación política, dieron como resultado: En Nicaragua, las elecciones de 1990 a partir de los Acuerdos de Sapó para el desarme de la **contra** (1988); en El Salvador, los Acuerdos de Chapultepec de enero de 1992 para el fin de la guerra; y en Guatemala el proceso de negociación iniciado en 1991 y retomado a mediados de 1993 (Oslo y México), que si bien aún no logra un consenso en torno a la paz definitiva, ha permitido hasta el momento establecer convenios para la repatriación de refugiados y la creación de condiciones para la protección de los derechos humanos.

De esta forma, las tres naciones examinadas se encuentran en un complejo proceso de flujo y reflujo de fuerzas, donde el movimiento social que ha optado por la vía pacífica como forma de lucha, viene a obtener ahora mayor importancia y vigencia.

Sumado a ello, la compleja situación en estos países presenta otra característica semejante, que determina su postración económica y social: la aplicación postergada de una estrategia económica neoliberal, que no permite superar (sino, por el contrario, agudiza) la ya dramática situación de cientos de miles de personas afectadas por la guerra.

Al igual que en el resto de América Latina, las políticas económicas vigentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala obedecen a planes globales de "desarrollo" impulsados por las organizaciones internacionales del crédito y las finanzas, como el FMI, el BID y el Banco Mundial, que continúan condicionando medidas altamente restrictivas a naciones que se encuentran en la ruina económica.

La problemática económica de los tres países fue expuesta a lo largo del estudio. Se destacó, a manera de ejemplo, un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que delata la forma global y somera con que esta institución adscrita a Naciones Unidas intenta explicar la situación referida.

Ese documento está plagado de análisis fríos, profundamente técnicos y por lo tanto sumamente limitados por su ahistoricismo y economicismo, ofreciendo una visión distorsionada y hasta cierto punto manipulada de la realidad de estos países.

En otro orden, la vasta información sistematizada de los hechos objetivos recogidos a lo largo de nuestra investigación, intenta complementar la información estadística y dar al análisis político y social un mayor alcance.

Situación Económica y Estado Transnacional

Los proyectos de desarrollo económico-social aplicados por los gobiernos de los tres países no habían podido ser ejecutados con éxito anteriormente, debido a la situación de inestabilidad militar que se mantuvo durante los años 80. No fue sino a partir de la presente década que estos proyectos comenzaron a ejecutarse, siendo sus ejes principales, la **reducción del gasto público** y el **fomento del ahorro**.

Los planes de "reconstrucción nacional" fueron iniciados por los gobiernos de Violeta Chamorro en Nicaragua, Alfredo Cristiani en El Salvador y Jorge Serrano en Guatemala, y no representaron más que la aplicación estricta y mecánica de las "sugerencias" de la banca mundial en los tres países.

La primera medida (reducción del gasto) se aplicó mediante el cierre y privatizaciones de diversas empresas del Estado (rentables o no), productivas, comerciales o de servicios. La reducción del gasto implicó a su vez el recorte de programas sociales en las áreas de salud, educación, vivienda y seguridad social; también se privatizó buena parte de los servicios básicos a la población, como energía eléctrica, agua potable y comunicaciones.

La segunda "sugerencia" de los organismos transnacionales se aplicó por la vía del aumento a las tarifas a los servicios básicos (teléfonos, agua, luz y mantenimiento público), efectuados generalmente aprovechando el aumento de los precios internacionales del combustible.

El "ahorro estatal" se conseguía además a través de impuestos a las colegiaturas, aumentando así el costo de la educación pública y privada. Los gravámenes sobre viviendas, uso de vehículos y de carreteras fueron una constante de los planes de "ajuste", adicionados al ya común Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos suntuarios y de consumo básico.

La progresiva depreciación del salario fue producto, a su vez, del constante recurso oficial a las llamadas "mini-devaluaciones", así como del aumento sistemático en los precios de los derivados del petróleo.

Simultáneamente a la ejecución de esas dos grandes "sugerencias", los organismos financieros internacionales han utilizado un discurso que alienta a los gobiernos de estas

naciones a ingresar al proceso de "modernización" económica, mediante la apertura total de sus fronteras al comercio internacional (léase comercio de las metrópolis).

Esto ha provocado mayor dependencia de los "préstamos y donaciones", así como de las mercancías de los países del Centro. Así, los pocos recursos con que estos países pueden "competir" en el mercado mundial se reducen ya a productos de "consumo de mesa" (carne de res, pescado, camarón) y, peor aún, a productos del "postre" de la mesa, como banano, café y azúcar.

También la incipiente y deprimida industria manufacturera de estos países entró al "Primer Mundo" en calidad de maquila. Sumado a lo anterior, hasta hace 15 o 20 años podía hacerse referencia a una producción centroamericana de granos básicos, la cual es hoy realmente escasa y ocurre solamente en años "benditos", pues en la mayor parte de los casos se debe recurrir a la importación de estos productos.

Lo mismo sucede con el sector pecuario, caracterizado por un altísimo costo de los insumos, por lo que sale más caro "el caldo que los huevos". Resulta ahora más económica la importación de aves listas para su consumo, que su crianza en estas naciones.

En este sentido, los descabellados proyectos de importación en los primeros años de la presente década, llevaron a la postración casi absoluta de lo poco que quedaba de la industria manufacturera y del sector agropecuario, ambos sin visos de reactivación a mediano plazo.

Como muchos otros países latinoamericanos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala no tienen hoy por hoy más alternativa económica que convertirse en el prototipo de naciones consumidoras, pues ni siquiera la explotación de los escasos recursos naturales que aún poseen está en sus manos, sino en las de empresas transnacionales estadounidenses y asiáticas, éstas últimas protagonistas de una verdadera invasión de "inversiones" en los últimos cuatro años.

Cabe señalar que las actuales políticas económicas no serían tan catastróficas, si no se ejecutaran de forma irracional y obedeciendo a planes foráneos. La aplicación de medidas de "liberalización" se ha realizado en países que apenas han salido de guerras devastadoras (Nicaragua y El Salvador), que en los últimos 20 años causaron al menos 200.000 muertos, más de medio millón de heridos, miles de lisiados, mutilados y viudas, y cientos de miles de huérfanos: un 80% de la población traumatizada por los estragos de la guerra.

El caso guatemalteco no es menos traumático. Las políticas de "ajuste", que comenzaron a aplicarse en 1989 bajo la administración de Vinicio Cerezo, no repararon en el hecho de que, tras más de 30 años de vigencia, el conflicto militar ha cobrado ya 170.000 vidas, 45.000 refugiados externos, más de un millón de desplazados, 250.000 huérfanos y 45.000 viudas. (1)

Las secuelas del conflicto militar en Centroamérica no pueden ser cuantificadas en términos meramente económicos, mucho menos humanos. Pero, para tener una idea global, puede señalarse que sólo en el caso de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia

(1) El Día, agencias, 15/1/93, p. 14.

de La Haya obligó sin éxito a Estados Unidos a indemnizar al país por cinco años de agresión militar, económica y financiera.

Según el tribunal internacional, Washington debía pagar a Nicaragua la suma de US\$17.000 millones, cifra equivalente al monto de la deuda pública total de los tres países en estudio, acumulada durante varias décadas.

Los daños ocasionados a Centroamérica durante la llamada "guerra de baja intensidad" en su fase de "contrainsurgencia y reversión de procesos revolucionarios", ha tenido sólo entre 1980-90 costos incalculables para sus pueblos. Como si esto fuera poco, la región es sometida hoy a políticas marginalizantes y excluyentes de grandes sectores sociales, mismas que constituyeron el origen de los conflictos armados.

Las políticas de "ajuste estructural" asumidas dócilmente por estos gobiernos se basan en el poco razonado argumento de que es necesaria la aplicación de la "medicina amarga" como única vía para la solución de los problemas económicos. Los autores de esta estrategia no reparan, empero, en el hecho de que ese tipo de "remedio", por lo demás caduco, fue impuesto en repetidas ocasiones a lo largo del presente siglo con los mismos resultados: exclusión, marginamiento y mayor dependencia.

Con el prefijo "neo" (el mismo con que se intenta hoy "renovar" viejas fórmulas tanto en la economía como en la política), el poder transnacional recurre así a sus autoproclamadas facultades para imponer a los gobiernos nacionales sus dictados, en carácter de "sugerencia".

Las repercusiones de la "amarga medicina" en los países "enfermos" son hartamente conocidas. Sin embargo, a manera de ejemplo, señalaremos solamente algunas en cada uno de los países estudiados.

Repercusiones sociales

1. Nicaragua:

En octubre de 1992 se anunciaron restricciones al crédito y un aumento en el Impuesto General al Valor del 10 al 15%. En ese mismo mes y pese a la resistencia de los farmacéuticos, se gravaron con un 15% los medicamentos y con un 6% los servicios médicos privados.

Como parte de los planes de importaciones y los deprimidos precios internacionales del algodón, que provocaron la casi total desaparición de este cultivo (fuente principal de empleo en el Occidente de Nicaragua), una hambruna azotó la zona, donde el 95% de la PEA está desempleada y la desnutrición en niños y adultos se calcula en un 70%.

Según funcionarios nicaragüenses del sector Salud, unas 250 personas, en su mayoría de indigentes, mueren por tuberculosis cada año, período en que se detectan al menos 3.000 casos. La expansión de la tuberculosis en el país es tal que la mayoría de

la población ha estado en contacto con el bacilo, sin desarrollar la enfermedad. (2)

En cuanto a la mortalidad materna en Nicaragua, datos oficiales indican que el índice aumentó de 108 en 1991, a 120 en 1992, cifra que se duplicó en el período 1993-94. La mortalidad materna es mayor en el interior del país, y se debe en su mayoría a falta de recursos y medicamentos, en tanto el 47% de los partos se realiza en viviendas con escasas condiciones sanitarias. El 68% de las muertes de mujeres en los últimos meses ocurrió en zonas rurales y un 32% en el sector urbano. (3)

A la par de esto, un informe de UNICEF conocido a mediados de 1993, daba cuenta de la caótica situación de la niñez nicaragüense, con 860.000 menores en pobreza extrema. De ese total, 500.000 infantes viven en circunstancias especialmente difíciles, 240.000 son víctimas de guerra sin acceso a servicios básicos, y 120.000 fueron afectados por desastres naturales y carentes de vivienda digna. De ese total de niños desprotegidos, indicó el documento, 20.000 trabajan en el sector informal, pese a que el código laboral limita esta actividad a menores de 14 años. (4)

Tan precaria es la situación de los niños nicaragüenses, que la UNICEF ha ubicado al país en el primer lugar en los datos de mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo en América Latina. De cada 1000 nacidos vivos en Nicaragua, mueren al menos 71, en tanto el 23% de los menores de 6 años presentan algún grado de desnutrición, y 860.000 menores de 7 años no reciben educación primaria, debido a lo cual anualmente unos 20.000 niños cumplen los 10 años de edad como analfabetas. (5)

Otros indicadores que aportan mayor dramatismo a esta situación son los proporcionados por Orlando Pineda, director de la Asociación de Alfabetización Popular Carlos Fonseca: "Actualmente, no son 150.000 los niños que no van a escuela, como dice el gobierno, sino que por lo menos medio millón no recibe educación porque sus padres no pueden pagar las cuotas escolares o simplemente no tienen con qué alimentar y vestir a sus hijos". (6)

Pero el problema no se limita a la niñez. Según un informe del **gubernamental** Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el 67% de la población de Nicaragua vive en condiciones de extrema pobreza y, de ellos, un 52% no tiene acceso a los servicios básicos. La población en pobreza extrema presenta trastornos por desnutrición, carece de agua potable, electricidad y telefonía, y no tiene acceso a centros asistenciales.

La pobreza va de la mano con un galopante desempleo y salarios miserables, estimados en un promedio de 800 córdobas mensuales (US\$110), 10 dólares menos que el costo de la canasta básica, según el ministerio del Trabajo. En el hipotético caso de que estas cifras fueran reales (estudios independientes sitúan el

(2) El Nuevo Diario. 19/11/92, p. 12.

(3) IPS, 25/6/93.

(4) Xinhua, 1/6/93.

(5) Xinhua, 3/7/93.

(6) Barricada Internacional, No. 373, mayo 1994, p. 19.

salario promedio mensual en US\$60), lo más grave problema sería, no tanto los bajos salarios, sino, que la mayoría de la población carece de empleo.

En este sentido, una reciente investigación realizada en Nicaragua señala: De cada 7 nicaragüenses aptos para trabajar sólo 1 tiene empleo. Si en 1991 Nicaragua ocupaba el lugar 85 entre los países más pobres del planeta, en 1992 retrocedió 14 peldaños, comparando su nivel de miseria con el de muchos países africanos. Y agrega: De los 4.1 millones de nicaragüenses, más de 800.000 están desempleados, cifra que explotó durante el gobierno de Chamorro. La PEA es de 675.000 personas, con salarios por debajo del costo de la canasta básica.

El sector habitacional presenta también un cuadro deprimente. Unas 440.000 viviendas en el país son inadecuadas (construidas con cartones y pedazos de madera), mientras más de 3 millones de personas carecen de servicios básicos: 3.239.000 no tienen agua, 2.532.000 carecen de luz y 3.086.000 no tienen letrinas (76% de la población). El 51% de la población de la capital utiliza leña para cocinar, por lo que cada año desaparecen en Nicaragua 150.000 hectáreas de bosques. (7)

Este problema podría ser relativamente aliviado con políticas de incentivo a la pequeña industria, pero ella está prácticamente postrada ante la falta de apoyo oficial y la escasa demanda de los consumidores. Se estima que sobreviven apenas un 30% de los 10.000 talleres que en 1987 estaban afiliados a la Corporación Nicaragüense de la Pequeña Industria (CONAPI). (8)

Como efecto colateral, la situación económica nacional ha conllevado al resurgimiento desmedido de la delincuencia. Según datos de organismos independientes, unos 300.000 nicaragüenses consumen marihuana y cocaína (50.000 más que en 1991). Solamente entre enero y septiembre de 1992, se registraron 343 delitos por drogas; las estadísticas de incautación disminuyen debido a nuevas rutas de narcotráfico y a la falta de recursos policiales para controlar este fenómeno. (9)

2. El Salvador:

La situación económica en El Salvador, si bien no es nada halagüeña, presenta un cuadro un poco menos triste que el de Nicaragua.

Las políticas de "ajuste estructural" comenzaron a acelerarse en 1991, poco antes de la firma de los Acuerdos de Chapultepec. En los años siguientes al acuerdo de paz, el gobierno salvadoreño implementó una serie de proyectos económicos, rezagados a causa del conflicto bélico, apoyándose en fuertes recursos externos enviados al país como parte de la ayuda al proceso de "pacificación". Ello permitió "suavizar" los costos sociales del

(7) Barricada, 15/11/92, pp. 1 y 14.

(8) El Nuevo Diario, 23/11/92, p. 7.

(9) Barricada, 6/11/92, p. 2.

plan económico, mas no ocultar una situación que hoy presenta las siguientes características:

A raíz del traspaso de gobierno del presidente Cristiani a Armando Calderón Sol, en julio de 1994, una serie de organizaciones sociales criticaron con dureza los "logros" económicos de la administración anterior. Según un análisis del corresponsal del diario mexicano Excelsior, el gobierno de Cristiani dejó un gran déficit social en El Salvador, ya que la pobreza abatió en los últimos años a más de la mitad de la población y un 90% de los gastos de salud y educación provienen del financiamiento externo, de acuerdo a informes del independiente Centro de Estudios Económico-Sociales (CENITEC).

Cuando Cristiani asumió el poder en 1989, el gasto social alcanzaba el 2,7% en relación con el PIB. Tras el fin de la guerra, en enero de 1992, aumentó a 3,08%. En los años 70, más de 4.5% de las riquezas generadas en el país se dirigía al campo social, pero a partir de 1982 esta cifra comenzó a disminuir y en la actualidad representa sólo el 2,3%. En contraste y pese al fin de la guerra, el presupuesto destinado a la defensa es aún del 9 por ciento. (10)

Medios de prensa internacionales aseguran que, tras la llegada de Calderón Sol al gobierno, la mayoría de los productos de la canasta básica aumentó entre 30 y 40%, y subieron las tarifas los servicios básicos.

Según cifras oficiales, más del 54% de la población salvadoreña vive en la pobreza y más del 60% no sabe leer ni escribir. La tasa de desempleo y subempleo alcanza el 46% y sólo el 48% de la gente tiene acceso al agua potable, mientras que un 56% acceso a los servicios de salud. Pese a las notables necesidades, sólo 3% de la riqueza nacional se dedica a gastos sociales, 90% de los cuales provienen de recursos externos. (11)

Si bien el gobierno sitúa el índice de analfabetismo en apenas 20%, la Universidad de Estudiantes Salvadoreños (UES) lo ubica en 65%. Según su rector, Fabio Castillo, las oportunidades de educación en el país son limitadas a "un pequeño sector" mientras que "más de la mitad de la población no tiene oportunidad absoluta de ir a la escuela (...)" (12)

En cuanto a la tasa de empleos y salarios, el primero mantuvo una tendencia "estable" (a juicio de la CEPAL) con un poco más del 47% de la PEA en el sector informal, es decir, en el subempleo; situación atribuida a la integración a la sociedad de decenas de miles de ex combatientes y repatriados en los últimos dos años.

En el medio rural, el empleo presenta una situación más difícil si se toma en cuenta que, como en Nicaragua y Guatemala, el trabajo estacionario y los salarios están directamente determinados por los precios internacionales de los productos de exportación.

Pese a un débil incremento salarial y un alza moderada en los precios al consumidor, las remuneraciones no han podido

(10) Excelsior, corresponsal, 27/5/94, pp. 2 y 34.

(11) Reuter, 11/7/94.

(12) Notimex, 18/5/94.

restablecer las pérdidas del poder adquisitivo en la población general, acumuladas durante los últimos años. A ello se suman los efectos de las privatizaciones y recortes presupuestarios, a raíz de lo cual quedaron cesantes, sólo en 1993, al menos 4.000 trabajadores públicos, de acuerdo al Banco Central de El Salvador.

En tanto, la delincuencia común y "no común" (escuadrones de la muerte) se ha desarrollado en proporciones inimaginables en los últimos dos años. La primera ha "obligado" al gobierno a sacar al ejército a la calle para prevenir el delito, bajo el argumento de falta de capacidad en la nueva estructura de la Policía Nacional Civil (PNC), creada tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Según el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, "la delincuencia común es un fenómeno tan nocivo como la guerra misma", en tanto son comunes los asaltos en carreteras por parte de hombres armados con fusiles de guerra y altos grados de organización a quienes la población identifica como "bandas de ex militares y ex guerrilleros".

En efecto, algunos analistas atribuyen la creciente ola delictiva en El Salvador a la desmovilización de más de 33.000 soldados y unos 2.000 guerrilleros; de acuerdo al director del Sistema Penitenciario, la delincuencia era un "fenómeno esperado". Cada mes ingresan a las cárceles del país un promedio de 648 delincuentes, de los cuales un 46% cometió delitos contra el patrimonio (robo, hurto, etc.) mientras el 31.6% son acusados de asesinatos y lesiones. El 66.8% de los reos tienen entre 16 y 29 años. (13)

La iglesia católica salvadoreña, que ha tenido un papel destacado en la denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, se ha pronunciado en no pocas ocasiones en torno a este fenómeno. Al comentar el plan de seguridad aplicado por el gobierno para enfrentar la delincuencia, el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez se refirió a los factores económicos y el atraso histórico cultural como los puntos medulares de este problema: "Ese plan no profundiza suficientemente en las causas de la violencia. El incremento de la extrema pobreza es sin duda un factor que no podemos menospreciar". (14)

3. Guatemala:

Como hemos señalado, el gobierno de Vinicio Cerezo inició la aplicación de un plan económico neoliberal, cuya intensidad aumentó durante la administración de su sucesor Serrano Elías. Éste acrecentó los niveles de restricción del gasto público y creó las condiciones para el "ahorro" por la vía del aumento en el costo de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, salud, educación y vivienda) y no básicos, lo que repercutió directamente sobre los sectores sociales de menores ingresos.

En un informe del obispado guatemalteco, reconocido como menos beligerante en términos políticos en relación con su par

(13) La Jornada, corresponsal, 15/2/93, p. 45.

(14) La Jornada, agencias, 21/2/93.

salvadoreño, la iglesia católica advertía a fines de 1992 que la sociedad estaba al borde de la desesperación por la falta de empleo, el alto costo de la vida, el analfabetismo, la falta de vivienda y la delincuencia común. El documento señaló que sólo un privilegiado 10% de la población tenía entonces acceso a los servicios básicos. (15)

En el mismo sentido, un documento de la ONU conocido a inicios de 1993, hacía similares apreciaciones en torno a la situación del país. Según el documento "Perfil de la pobreza en Guatemala", el 80% de la población nacional vivía entonces en la pobreza, y de este porcentaje el 59.3% era indigente. La situación era más grave en departamentos cuyas poblaciones descienden de los mayas y hablan algunas de las 23 lenguas indígenas, comunidades del interior del país, donde el 50% de las viviendas carecen de agua potable, servicios sanitarios y energía eléctrica. (16)

La vivienda es, efectivamente, uno de los problemas más comunes en Guatemala. Informes de prensa indican que, si bien es considerado uno de los países más ricos de Centroamérica, tiene el mayor déficit habitacional de la región: un millón de familias carecen de casas. Según Francisco Melgar, representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en el país sólo se construyen anualmente 670 viviendas por cada millón de habitantes. (17)

En cuanto a la salud, considerado uno de los sectores más atrasados en América Latina, la población infantil constituye la principal víctima de las medidas económicas. El grupo más desprotegido es el de los menores de un año, con un 21% del total de defunciones por causas nutricionales e infecciosas. El nivel de la mortalidad infantil y de la niñez en Guatemala es el más alto de Centroamérica. (18)

Al menos 49 de cada 1.000 nacidos vivos, fallecen en Guatemala por falta de atención médica o desnutrición, y otro tanto a consecuencia de la violencia. Según UNICEF, más de la mitad de las mujeres no reciben atención prenatal y sólo 20% de los partos son atendidos por médicos; cada año nacen 325.000 niños y, si bien la tasa de morbilidad y mortalidad se ha reducido, 50.000 infantes mueren anualmente antes de cumplir los 5 años.

Pese a haber logrado ciertos avances en torno al problema nutricional, Guatemala sigue mostrando los peores indicadores en este rubro, indicó una evaluación de UNICEF emitida en julio de 1994. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguró que 60% de los niños de tres a 36 meses de edad presentan desnutrición y más de un tercio de los estudiantes de primaria muestran retrasos en su crecimiento.

En el sector educación, las estadísticas no son más alentadoras.

Partiendo del raquítico presupuesto asignado para 1994 (US\$14 millones frente a los US\$88 millones dirigidos a los gastos del

(15) EFE, 31/8/92.

(16) EFE, 6/5/93.

(17) IPS, 2/9/93.

(18) Informe de la Universidad de San Carlos, Guatemala.
Publicado en El Gallo Ilustrado, El Día, 17/1/93, p. 15.

Ejecutivo; ver tablas estadísticas comparativas) y con un nivel de analfabetismo que ya sobrepasa el 50%, las posibilidades de enseñanza se verán más reducidas. Según la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), los servicios de salud pública en Guatemala sólo atienden al 30% de sus 10 millones de habitantes.

Por otra parte, durante 1992-94 el sector salario y precios registró un comportamiento variable: el salario aumentó casi un 7%, acorde con la tendencia alcista registrada desde 1990; sin embargo, está lejos de recuperar los índices de 1980. Pero también los precios han aumentado; la inflación promedio ha fluctuado entre el 12% y el 15%, lo que ha impedido al sector laboral lograr un mayor poder adquisitivo.

El empleo, a su vez, "no experimentó retrocesos" sino un leve aumento, según la CEPAL, si bien los niveles de desempleo abierto han mostrado una tendencia acorde con el ensanchamiento del sector informal de la economía. Actualmente un 47% de la PEA en Guatemala está en el desempleo y subempleo.

A ello se sumó el inicio de un plan arrasador, iniciado por el ex presidente Serrano, para privatizar la mayor parte del sector eléctrico y otras instalaciones estatales, incluyendo los servicios básicos. "Educación, salud y vías de comunicación serían un mejor uso del dinero", alegó entonces el mandatario al anunciar que sería también ofertada la compañía de ferrocarriles FEGUA.

El proceso de privatización fue suspendido temporalmente tras la asunción del presidente De León Carpio, cuya decisión provocó reacciones de repudio por parte de la iniciativa privada y el respaldo de los principales sindicatos del país. Si bien en su momento el nuevo mandatario aseguró que la venta de empresas estatales no sería "una prioridad" de su gobierno, proyectando romper los monopolios en las entidades que prestan servicios esenciales, la presión de los grupos económicos de poder, e incluso de las fuerzas armadas, le llevaría poco después a incumplir sus propósitos.

A partir de este cuadro económico-social, existe consenso en cuanto a que Guatemala requiere de ajustes económicos con medidas "de compensación social para los sectores más desfavorecidos", de acuerdo con un informe de UNICEF basado en datos del ministerio guatemalteco de Planificación Económica.

Según este organismo, las medidas económicas "han permitido contener en algún grado los desequilibrios fundamentales, aunque poco se ha logrado en cambiar la configuración de las condiciones de pobreza". La dieta de la población se ha reducido "en variedad, cantidad y calidad" debido al aumento en los precios de los alimentos. En los últimos años, el costo promedio de la alimentación diaria llegó a US\$1.7 por habitante, mientras que el salario promedio se ubicó en US\$0.97, no llegando a cubrir siquiera el costo de la canasta básica. De no modificarse esta situación, es lógico prever un empeoramiento en las condiciones de vida de la población.

Otras limitantes en el desarrollo del país tienen que ver con las deficiencias en educación, la marginación de la mujer y el deterioro del medio ambiente, como expresión de la crisis

económica nacional (19), que ha conllevado a su vez el auge de la violencia delictiva: según reportes de prensa, unos 10.000 jóvenes guatemaltecos adictos a las drogas viven en la indigencia e integran 200 pandillas conocidas como "maras", un problema social que nadie ha logrado hasta ahora resolver.

Este complejo cuadro de marginación e inequidad, persiste a pesar de que Guatemala cuenta con importantes reservas mineras, de flora y fauna, además de fuerza laboral disponible. Esto ha sido corroborado por el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Norman L. Hicks, quien observó que, siendo Guatemala uno de los países más ricos de Centroamérica, registra los índices más altos de concentración de la riqueza pero es (junto con Brasil) la nación con términos de distribución más desiguales en América Latina. (20)

Entorno político y movimientos sociales

El esbozo socio-demográfico expuesto a lo largo de la investigación, unido a los datos en torno a la situación económico-social y la influencia del llamado Estado Transnacional, permiten observar con mayor claridad la realidad de los países en estudio y brindan un marco global del terreno en que se desenvuelven los movimientos populares (sociales, políticos y corporativos) de Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

El panorama político en que se desarrollaron los movimientos sociales en los dos últimos años estuvo marcado por un rejuego de las fuerzas políticas, en busca de posiciones adecuadas para obtener mayores réditos políticos y espacios de poder, como lo refleja la síntesis que exponemos más adelante.

1. Nicaragua:

En el caso de Nicaragua, los principales conflictos ocurrieron, desde el mismo comienzo de la gestión de Chamorro, a raíz de los proyectos de ley presentados por la UNO para la derogación de las leyes de vivienda 85 y 86, promulgadas por el anterior gobierno sandinista, los cuales avivaron protestas políticas del FSLN, respaldadas por un amplio movimiento social. El conflicto en torno a la propiedad se prolongaría por muchos meses más, incidiendo en fuertes pugnas al interior del Poder Legislativo.

La correlación de fuerzas en el parlamento había estado hegemonícamente controlada por la UNO y el gobierno a inicios de 1990, cuando aún no afloraban sus contradicciones actuales, agudizadas durante el período que comprende nuestro estudio y que llevaron al rompimiento entre la frágil coalición política y el Ejecutivo. A partir de entonces y tras el surgimiento del grupo parlamentario de "centro", la recomposición de las fuerzas políticas estuvo reflejada en un traslado de la hegemonía hacia

(19) AFP, 25/6/94.

(20) EFE, 27/4/94.

los sectores de la alianza FSLN-gobierno, respaldada por el Poder Judicial.

Simultáneamente al rejuego político en el parlamento tuvieron lugar constantes movilizaciones sociales contra las políticas económicas de "ajuste estructural" emprendidas por el gobierno, lo que hasta ahora ha dado como resultado una tendencia en la que predominan las decisiones oficiales, aunque "suavizadas" en su intensidad por la resistencia ejercida por amplios sectores populares. Las principales ciudades de Nicaragua fueron sacudidas por una serie de protestas y movimientos huelguísticos protagonizados por empleados de los sectores transporte, educación, salud y otras empresas en las cuales se demandó estabilidad laboral, mejoras salariales y privatización a favor de los trabajadores.

Mientras, tenían lugar en áreas rurales de Nicaragua fuertes combates entre el ejército y realizados en armas, que no aceptaron las ofertas oficiales de desmovilización o bien que volvieron a levantarse en armas al comprobar que la entrega de tierras por parte del gobierno no era suficiente para asegurar su subsistencia, debido a la falta de crédito.

En ese sentido, en el período 1992-94 ocurrieron hechos convulsos, tales como la toma armada de la ciudad de Estelí, el doble secuestro de políticos conocido como "crisis de los rehenes", conatos de insurrección social en Managua y fricciones políticas entre la cúpula del ejército y el Ejecutivo, reflejada en el anuncio de retiro definitivo del general Humberto Ortega tras repetidas presiones de Washington dirigidas a descabezar las estructuras de mando del ejército y la policía.

El extraño episodio en torno al "buzonazo" de Managua, vino a reavivar la paranoia de senadores y congresistas estadounidenses hacia Nicaragua, que derivó en la suspensión de créditos aprobados por la Casa Blanca y por organismos financieros transnacionales.

Paralelo a estos sucesos, la ofensiva de la derecha encabezada por la UNO apuntó a lograr la deslegitimación del gobierno de Chamorro mediante una frustrada convocatoria para una Asamblea Constituyente. En esta ofensiva, la iglesia ocupó un lugar importante de respaldo a la UNO, acorde con la posición ultraconservadora mantenida durante el régimen sandinista.

Sin embargo, el empecinamiento de la UNO por vencer políticamente a Chamorro no llevó sino a un mayor fraccionamiento entre los partidos que la integraban. Una parte de éstos, rebelándose a las directrices generales de la coalición para boicotear el debate parlamentario, se reintegró al trabajo legislativo, cuyo eje central ha sido, en los últimos meses de 1994, la discusión de reformas constitucionales.

Entre estas reformas, destaca la aprobación de la nueva ley de organización castrense, que asegura la subordinación del poder militar al civil y faculta al presidente para designar al nuevo jefe de las fuerzas armadas, pero en base a una terna propuesta por la cúpula del ejército.

2. El Salvador:

La situación en El Salvador se presentó en forma algo similar a la de Nicaragua, con la diferencia de que en este período -- pese al proceso negociador-- los tres poderes de la Nación han permanecido bajo el control de las élites políticas tradicionales, por lo que las respuestas sociales se han presentado fundamentalmente en forma de protesta en las calles.

La ofensiva guerrilla de fines de 1989 había acelerado el proceso de paz. Desde entonces hasta 1991, a la par de que se desarrollaron intensas negociaciones que culminarían en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Chapultepec, tuvieron lugar enfrentamientos armados de envergadura en distintas zonas del país.

Tras los acuerdos de paz, el panorama político durante ese año estuvo determinado por un largo proceso de verificación de su cumplimiento (que conllevó sucesivas acusaciones de una y otra parte), destacando entre otros puntos la reducción de las fuerzas armadas hasta en un 50% y depuración de algunos de sus mandos, así como la desmovilización total del FMLN y su conversión en partido político legal.

El cumplimiento oficial de acuerdos en el área económica continuaba siendo muy limitado aun en 1993-94, cuando un nuevo elemento de tensión afectó las filas gubernamentales: al informe de la llamada comisión Ad-hoc, que el año anterior había recomendado una "limpieza" del aparato castrense, se sumó el veredicto final de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre derechos humanos, que acusó a los principales responsables de famosos casos de ejecuciones sumarias, tales como la matanza campesina en El Mozote, el asesinato de las monjas Marynoll y el crimen de los sacerdotes jesuitas en San Salvador.

La Comisión propuso, colateralmente, la depuración del Poder Judicial y la destitución de los principales jefes del ejército (cumplidas a mediados de 1994), así como una investigación seria sobre las acciones de los escuadrones de la muerte, que en este período aumentaron su actividad contra los principales dirigentes del FMLN, varios de los cuales fueron asesinados.

El auge de los grupos paramilitares motivó la suspensión de la asistencia militar del gobierno de Estados Unidos a El Salvador. La nueva situación política, marcada por la presión internacional en torno al asunto de los derechos humanos, llevó a un brusco viraje en la posición mantenida durante años por Washington (otrota "padrino" de los últimos gobiernos represivos), interesado esta vez en "promover la democracia" mediante la preparación de un proceso electoral supervigilado por la ONU y que culminaría con los comicios de marzo de 1994.

Lo anterior no impidió sin embargo que los escuadrones, en una nueva fase operativa, cambiaran luego de rostro para transformarse en "bandas de delincuentes" como mampara para encubrir sus acciones políticas.

En este contexto, el sector social organizado fue protagonista, durante el período en estudio, de importantes

movilizaciones en demanda de aumentos salariales, estabilidad laboral cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno y en contra de las medidas de privatización y ajuste económico. Destacaron en las protestas los sectores de empleados públicos, campesinos, universitarios y personal de salud, así como ex combatientes del FMLN y ex soldados del ejército.

A diferencia de Nicaragua, la resistencia social al proyecto de privatización no tuvo en El Salvador el impacto esperado por los líderes gremiales debido, entre otras razones, a que el gobierno logró captar mayor financiamiento externo y paliar en buena medida los costos sociales del ajuste estructural.

La situación político-social antes descrita fue el marco de un proceso electoral que, ampliamente criticado pero legitimado por Naciones Unidas, llevó nuevamente al poder al partido ARENA. La persistencia de un régimen de arbitrariedad en El Salvador ha sido reprobada durante las últimas décadas por una iglesia católica crítica y beligerante, identificada con los sectores sociales de menores recursos y considerada una de las principales gestoras del proceso de negociación hacia la paz.

Al respecto debe destacarse que, a diferencia de los conservadores jerarcas católicos de Nicaragua, y de los titubeantes obispos guatemaltecos, la iglesia de El Salvador ha mantenido una gestión de permanente investigación y denuncia de la desigual distribución de la riqueza, la represión política y la impunidad institucional, y ha avalado con firmeza la movilización de los sectores populares en demanda de sus reivindicaciones sociales.

En cuanto al FMLN, no fue sino hasta después de las elecciones de marzo de 1994, cuando esta organización logró colocarse como la segunda fuerza política a nivel nacional, lo cual tampoco fue suficiente para incidir con modificaciones sustanciales en los trabajos del Legislativo. De hecho, el gobernante partido ARENA cuenta con el **quorum** necesario para continuar manteniendo el **status** del sector oligárquico al que representa e incluso para aumentarlo a mediano plazo.

3. Guatemala:

Con relación a Guatemala, la situación es aún más preocupante, pese a que en los últimos dos años y a partir del gobierno del presidente De León Carpio las perspectivas auguraban una mejor posición para los sectores populares.

En respuesta a una situación general de terrorismo de Estado, la URNG incorporó a su accionar táctico métodos más propagandísticos y fortaleció algunas estructuras militares urbanas. Teniendo como antecedente los acuerdos de paz de Esquipulas II, firmados por el ex presidente Cerezo, la guerrilla guatemalteca accedió a reiniciar en 1991 con el gobierno de Jorge Serrano un proceso de negociaciones para la paz, que aún continúa.

Serrano, quien ascendió al poder tras eliminar políticamente a su oponente, el general golpista Efraín Ríos Montt, inició una tibia depuración de los mandos de las fuerzas armadas que se oponían a un diálogo con la insurgencia, a la vez que profundizó

el proceso de privatización económica iniciado por Cerezo. Carente del apoyo de los sectores oligárquico y burgués, Serrano debió recurrir a la alianza con ambos grupos de poder económico, misma que en poco tiempo limitaría enormemente su gestión de gobierno.

De esta manera toda iniciativa presidencial, por ser obstaculizada en el parlamento, "ameritaba" la compra oficial de votos y, en consecuencia, el alarmante aumento de la corrupción institucionalizada. En el ámbito legislativo, fue evidente una lucha por el poder entre sectores que se disputaron el control de los planes de privatización de empresas estatales, entre otros varios proyectos económicos.

En este escenario, creció la resistencia popular a las políticas económicas, que se expresó fundamentalmente en huelgas y movilizaciones callejeras emprendidas por empleados del sector salud, transporte, educación y alumnos de nivel medio y superior, en especial de la universidad capitalina de San Carlos.

La situación de desestabilización nacional, que presagiaba inminentes golpes militares, llevó a un resurgimiento de la división interna en las fuerzas armadas (entre los "oficiales de la montaña" y los "oficiales éticos") y al aislamiento total de Serrano quien, acorralado por varios flancos, optó por un autogolpe, sumiendo al país en la convulsión.

El cisma político provocado por el "serranazo", que tornó la violencia social en un fenómeno incontrolable, sólo fue resuelto tras la elección del actual presidente, Ramiro De León. Su ascenso al gobierno, sin embargo, estaba mediatizado por los mismos grupos de poder, que también le hicieron frente desde el parlamento y el poder Judicial, opacando rápidamente el amplio respaldo social recibido al asumir la presidencia e impidiéndole cumplir sus propósitos para "limpiar" el Congreso y las fuerzas armadas.

La convocatoria presidencial a un plebiscito resultó también frustrada por la presión de estos sectores y por la ambigua postura asumida por la jerarquía católica, que demandó al gobierno olvidar su proyecto de depuración. En este sentido, la iglesia guatemalteca mantuvo en los últimos años posiciones vacilantes en cuanto a la defensa de los sectores marginados, prestándose a su vez al juego político establecido por los grupos de poder.

El frágil proceso de democratización que pudo haber promovido De León y sus primeros intentos hacia un cambio institucional (flexibilización económica, depuración de los poderes del Estado y del ejército, y acercamiento con los sectores sociales) no tuvieron tampoco el respaldo de las organizaciones populares ni de la guerrilla en armas, que ofrecieron al mandatario un tímido apoyo cuando, por cierto, ya era demasiado tarde.

Sin interrumpir sus acciones militares en el país, la URNG ha participado en conversaciones con delegados gubernamentales, llegando a la fecha a suscribir acuerdos en materia de repatriación de refugiados y a un consenso inicial en torno al polémico tema de los derechos humanos.

Al remedo de "depuración" (que incluyó unas cuantas e insustanciales reformas a la Constitución) se sumó un

resurgimiento del terrorismo de Estado, expresado en la sistemática violación a los derechos humanos y el accionar de bandas paramilitares, encargadas de la "desaparición" y asesinato de líderes sindicales y políticos. Al igual que su antecesor, el mandatario fue progresivamente aislado de las decisiones de poder y también del respaldo inicial dado por el movimiento social.

Actualmente, la intransigencia de los sectores oligárquicos (en contradicción no antagónica con grupos de la creciente burguesía) ha alejado en Guatemala las posibilidades de un probable acuerdo de paz gobierno-guerrilla. Pese a ello, el movimiento social experimentó en estos dos años un crecimiento tanto en sus acciones como en su organización; cada vez son más frecuentes las denuncias contra los abusos del gobierno y las fuerzas armadas, y el movimiento popular se involucra con mayor intensidad en la resistencia a las políticas económicas marginalizantes.

Las reformas constitucionales aprobadas a inicios de 1994 estipularon, entre otras cosas, un proceso de elecciones legislativas (efectuado en agosto siguiente) que fortaleció, contrariamente a lo previsto por el gobierno, a los sectores de ultraderecha encabezados por el general Ríos Montt.

Los ejes centrales de la situación política que acabamos de describir, contribuyen a plasmar una visión integral de la problemática actual, al tiempo que permiten el desprendimiento de otras conclusiones en torno a la lucha de los movimientos sociales por la democracia.

Los tres países presentaron diferentes formas de resistencia, pero participaron en ella similares sujetos sociales, con casi idénticos motivos de lucha.

En términos estadísticos, entre un 85% y un 90% de las acciones del movimiento social estuvieron a cargo de organizaciones de izquierda en Guatemala y El Salvador; en el caso de Nicaragua éstas protagonizaron el 75% de las acciones, comprendiendo el restante 25% actos por reivindicaciones salariales o políticas impulsadas por gremios y sindicatos bajo el control de élites empresariales.

Lo anterior permite destacar, en el período en estudio, la casi absoluta primacía y beligerancia del movimiento social de izquierda a cargo de distintas actividades.

Ahora bien, para comprender más claramente el desarrollo del movimiento social en Nicaragua, Guatemala y El Salvador es preciso recurrir a tres elementos fundamentales: las causas de la movilización social, los sujetos sociales más beligerantes, y las formas y métodos de lucha aplicados.

Causas de la movilización social. Sujetos sociales beligerantes. Métodos y técnicas de lucha popular.

En los tres países la movilización social ha tenido causas similares. La lucha por mejores condiciones económicas ha estado

presente en la mayoría de las marchas, plantones y huelgas, destacando la demanda de aumento salarial.

Una segunda causa observada en el período que aborda nuestra investigación, es la resistencia del movimiento social al **proceso de privatización** de empresas estatales; así como la protesta contra el alza de los precios de productos básicos y servicios esenciales. También hubo movilizaciones de rechazo a los efectos de la reducción del gasto público y al escaso acceso de la población a los servicios de salud, educación y vivienda.

Otro elemento que ha incidido en la vida de estas naciones ha sido la **lucha permanente por la tierra** y por el **respeto a los derechos humanos**, libradas en su mayor parte por el movimiento indígena y campesino pobre.

Son muchas las movilizaciones realizadas en esta etapa por indígenas guatemaltecos (marchas a la capital y plantones frente al Palacio Presidencial, entre otras), así como una cantidad de acciones del campesinado pobre salvadoreño en demanda del cumplimiento de los acuerdos gobierno-guerrilla. En el caso nicaragüense, la lucha por la tierra se materializó, a diferencia de los otros países, en el uso sistemático de métodos violentos.

Sujetos sociales más beligerantes:

La mayor parte de las huelgas y movilizaciones, así como las tomas de tierras, embajadas, carreteras, iglesias y medios de comunicación, han sido realizadas por **empleados (o ex empleados) del sector estatal** en los tres países, es decir, el sector social que durante las décadas del 70 y 80 laboró para el sector público y que hoy, a raíz de la aplicación de las políticas de ajuste estructural, ve amenazado su trabajo y sus prestaciones sociales en general, en tanto se descubre a sí mismo como seguro candidato al desempleo, disfrazado con el ostentoso nombre de "reconversión ocupacional".

Además de los empleados públicos, otros sectores han tenido una activa participación. No nos referimos al sector obrero, que está bastante desarticulado, **sino al de servicios** (especialmente los transportistas) que a lo largo de esta fase ha protagonizado largas y violentas protestas (que desafortunadamente, dejaron miles de millones de dólares en pérdidas) contra el alza al precio de los combustibles, en demanda de mejores condiciones laborales y, sobre todo, en rechazo a los sucesivos impuestos decretados por el gobierno.

Los sectores salud y educación mostraron a su vez alta capacidad de convocatoria, debido entre otras cosas a que fueron objeto de las mayores restricciones en sus presupuestos.

Otro sector social con una destacada participación por sus reivindicaciones sociales ha sido el **indígena** (en especial guatemalteco), cuyos niveles de organización y actividad destacaron en el período en cuestión con perspectivas de un mayor crecimiento a corto plazo.

También el **estudiantado**, fundamentalmente del sector medio y superior, desarrolló protestas, exigiendo aumentos en su presupuesto. En los tres países, el papel de este sector fue

relevante en cuanto al apoyo de la lucha de otras organizaciones, como la de los sectores salud y transporte.

En la etapa analizada, el **movimiento campesino** ha mantenido su lucha por un mayor acceso a la tierra, pero no con la relevancia de años anteriores sobre todo en El Salvador y Nicaragua.

Métodos y técnicas de lucha:

Los métodos y técnicas de lucha implementados por el movimiento popular en sus acciones por mayores espacios democráticos, han sido variadas en los tres países, destacando en el caso de Nicaragua el uso de métodos más activos y en cierta forma un poco más violentos.

En cuanto a El Salvador, las movilizaciones sociales se presentaron en forma de **marchas** más bien pacíficas y menos frecuentes que en los otros dos países; su tendencia presagia, a corto plazo, una baja en los niveles de movilización, debido entre otros factores al revés electoral de marzo de 1994, que en los meses siguientes incidió negativamente los ritmos de movilización.

Por su parte, el movimiento social en Guatemala presentó en estos dos años un amplio espectro de técnicas de lucha, que abarcó desde el simple **paro laboral** hasta la **toma de edificios públicos, quemas de autobuses** y formación de **barricadas** en las calles.

En general, en los tres países se utilizaron métodos de lucha similares:

El paro laboral ha sido el principal en las reivindicaciones económicas, acompañado por la ocupación violenta de fábricas, vías de comunicación y edificios públicos en las ciudades, y las **tomas de tierra** en la zona rural.

Debe destacarse que, en el caso de Nicaragua, esta lucha ha sido un poco más impetuosa, debido a la existencia de una fuerza armada en esencia sandinista, que ha permitido al movimiento social mantener ciertos espacios democráticos y de protesta, y expresarse sin ser brutalmente reprimidos. Por el contrario, tanto en Guatemala como en El Salvador el movimiento social ha enfrentado obstáculos culturales e institucionales, entre éste último, la prohibición o restricción de huelgas y marchas públicas.

b. Consideraciones Finales

Son muchas las consideraciones finales que se desprenden de la presente investigación. A manera de síntesis citaremos las siguientes:

a) El estudio refleja la necesidad del movimiento social de continuar acumulando fuerzas, ampliar sus alianzas con diversos sectores de la sociedad y buscar nuevos espacios, sin que ello implique poner en peligro su autonomía.

A partir de este planteamiento, es posible a nuestro juicio observar a largo plazo al movimiento social como alternativa al Estado Transnacional. Por el momento, su desarrollo presenta las características adecuadas para ello, a pesar de los obstáculos institucionales y culturales que le impiden ver más allá de sus objetivos inmediatos.

b) La beligerancia mostrada en este período por los sectores estatales y estudiantiles en los tres países, no debe llevar a confusión en cuanto a la identidad de los actores del cambio histórico.

En este aspecto, nuestra investigación exhibe un decaimiento en el accionar del movimiento campesino (ya no se diga del obrero) en relación a años anteriores, por lo que es de observarse mayor atención a este sector. Si bien ello encuentra explicación en las reformas agrarias impulsadas (especialmente en los casos de Nicaragua y El Salvador), no justifica su abandono, en momentos en que las tendencias del modelo neoliberal apuntan a una mayor restricción del crédito y, con ello, a un mayor auge del latifundismo.

Otro sector en aumento y curiosamente poco destacado en los análisis conocidos, es el del creciente sector "informal" (actualmente uno de los más descuidados), cuya organización y dirección se torna trascendental para nutrir al movimiento popular.

c) En general, las causas que originaron el accionar del movimiento social fueron las mismas en los tres países. Sin embargo, debe señalarse que sus métodos de lucha tienden ahora a adquirir mayor violencia en el caso guatemalteco, producto entre otras cosas de la renuencia de las élites del poder a ceder mayores espacios democráticos.

Con respecto a El Salvador, la reciente derrota en las urnas (que provocó en la sociedad aturdimiento e incertidumbre momentánea), sumada a una fuerte inyección de capitales que permitirá la aplicación menos traumática del proceso privatizador, no permiten avizorar un reflujó en las movilizaciones a corto plazo.

En Nicaragua, los movimientos sociales tienden a mantener el ritmo actual de movilización, con riesgo de agudizarse si se toman en cuenta factores económicos, como la aguda dependencia del capital internacional y la persistencia de la mayor deuda per cápita de América Latina.

Como parte de un círculo vicioso, estas movilizaciones seguirán en ascenso en la medida en que los créditos vayan disminuyendo, por cuanto el gobierno profundizará el recorte social y continuará aumentando el "ahorro", con la previsible respuesta social.

Tomando en cuenta la experiencia acumulada en los últimos años por la sociedad nicaragüense, no puede descartarse que se

produzca una complementación a los actuales métodos de lucha, mediante una movilización masiva que evite la práctica cotidiana de destrucción de infraestructura social. Estos métodos podrían perfeccionarse en base, por ejemplo, a fases o escalas de presión social, a fin de no ofrecer una respuesta desmedida a determinada posición gubernamental.

El recurso de la pólvora por ejemplo, sin haberse intentado otras formas de resistencia, es un elemento que debería corregirse para evitar al movimiento caer en un desgaste político y captar al mismo tiempo nuevas simpatías de la población hacia sus luchas. El recurso de nuevos métodos, como los experimentados por pacifistas en diversas partes del mundo, podría enriquecer, en lugar de debilitar, al movimiento social.

d) El desenvolvimiento del movimiento social se produce hoy en base a los retos y desafíos impuestos por el actual modelo neoliberal. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que, a mediano plazo, el sistema intente impulsar cambios en sus formas de explotación.

"No hay mal que dure cien años...", dice el refrán. En este sentido, esos probables cambios (que no se avizoran por lo menos en dos años) deberán ser previstos y tomados en cuenta para que la respuesta del movimiento social sea oportuna y no rezagada, como generalmente sucede.

e) El desarrollo de la investigación ha dejado al descubierto que los **obstáculos** que enfrenta el movimiento social para abrirse mayores espacios democráticos, son mucho mayores en Guatemala y en El Salvador. Sus desventajas no pasan solamente por leyes conservadoras sino por todo un aparato de poder en manos de las élites tradicionales oligárquicas.

Por el contrario en Nicaragua, pese a la adversa situación económica, el hecho de que las fuerzas armadas no hayan pasado todavía a manos de los sectores extremistas de derecha, permite al movimiento social realizar sus acciones con menores riesgos de represión.

f) El complejo proceso de flujo y reflujo de fuerzas examinado en este estudio, ha dejado sentado que el movimiento social ha optado por la vía pacífica como forma de lucha. Este es un indicador de su importancia y vigencia en las actuales condiciones.

g) Partiendo de lo anterior y de las conclusiones mismas de la investigación, puede afirmarse que, ante la persistencia del actual modelo de desarrollo neoliberal en estos países, el movimiento social requiere ajustes en sus formas de lucha socio-políticas, en aras de alcanzar la democracia popular.

c. Hipótesis conclusivas

Como hemos visto, de la investigación surgen varias conclusiones, pero también han salido a luz otras interrogantes, que a continuación expondremos a manera de hipótesis conclusivas.

En este sentido, el sistema podría no solamente proseguir con su modelo actual sino además adoptar otras formas, a saber:

1. El desplazamiento-retorno hacia un nuevo militarismo, cuya esencia de gobierno sería sin embargo el siempre clásico método represivo y coactivo de dirección. Ello con mayores probabilidades de suceder en Guatemala.

2. El retorno a un Estado de tipo **keinesiano** que tenga como función principal introducir mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, una vez que se compruebe el fracaso del modelo neoliberal a mediano plazo; un Estado que, aunque más limitado que el antiguo Estado populista, logre realmente mantener el consenso mínimo entre la población.

3. El acceso al poder de una democracia popular es otra posibilidad, aunque más remota en los casos salvadoreño y guatemalteco.

4. La tendencia hacia una progresiva diversificación de la lucha social, producto del actual proceso de transnacionalización y privatización, que provoca el crecimiento del sector llamado "informal", nos lleva a la pregunta: ¿Qué niveles de importancia podría adquirir este sector dentro del conjunto de acciones realizadas por los movimientos sociales?

II. Perspectivas y Tendencias

En base a los temas abordados a lo largo de este trabajo, enfatizaremos en las posibles tendencias que puede tener el desarrollo del movimiento social a corto y mediano plazo, partiendo de su íntima relación con los particulares entornos económicos, políticos y sociales.

1. Nicaragua:

* En el aspecto económico, es de prever para los dos próximos años nuevas restricciones al crédito externo por parte de los organismos financieros internacionales, a consecuencia del "limitado progreso" en las políticas económicas de privatización

y de fomento del "ahorro", ejes que el gobierno continuará profundizando.

* En cuanto a lo político, obedeciendo a las tendencias que se han presentado a lo largo de estos años, la coalición UNO no podrá seguir imponiendo criterios frente al gobierno y el Legislativo, como tampoco permanecer aislada del debate parlamentario. Su incorporación a este último tendrá lugar en forma paulatina durante la discusión de las reformas constitucionales y, sobre todo, cuando las reglas del juego para las elecciones presidenciales de 1996 comiencen a definirse; de lo contrario quedarían aislados y, en el peor de los casos, fuera de la contienda electoral.

El FSLN, en tanto, atraviesa una seria crisis como partido político. Las actuales pugnas internas ("renovadores" frente a "radicales") permitirían prever, como primera posibilidad, una ruptura a corto plazo. De ocurrir lo anterior, el ex vicepresidente Sergio Ramírez (que lidera al primer grupo) no tendría tiempo para organizar una eventual campaña presidencial de un nuevo partido político.

La segunda opción sería un acuerdo de última hora entre ambas fracciones, en el cual tanto Ramírez como el ex presidente Daniel Ortega (cabeza del grupo "ortodoxo") abandonen sus aspiraciones políticas. En ese caso, podría pensarse en la posible elección de un personaje de la vida política nacional no identificado directamente con ninguno de los dos sectores del sandinismo.

* En este marco general, el movimiento popular nicaragüense podría continuar su proceso de movilización social sin caer en una confrontación abierta con las fuerzas armadas. Por otra parte, el apoyo a las decisiones del FSLN en el parlamento será esencial para mantener una coherencia entre el discurso político y el accionar social, sin que ello signifique lesionar su autonomía.

* Es previsible que los sujetos sociales del cambio con mayor actividad continúen siendo en los próximos meses los empleados y ex empleados estatales, sobre quienes ha recaído --en el período en estudio-- el peso fundamental de las acciones. Ello no significa que a mediano y largo plazo el trabajador rural y el campesinado no puedan ponerse al frente de sus reivindicaciones.

* No se descarta tampoco una inclinación del movimiento social de izquierda hacia la creación de alianzas tácticas con el movimiento que representa a los sectores del empresariado y los partidos de derecha, mismas que permitan la unidad por nuevas reivindicaciones sociales y económicas.

* Para acudir a las elecciones de 1996 en mejores condiciones políticas, es de esperar que el FSLN acentúe su actual distanciamiento con el gobierno (iniciado tras el primer congreso sandinista de 1991), a fin de evitar un mayor desgaste político y dejar claro, ante sus bases, su rol de partido opositor.

* En cuanto al ejército, se espera que obtenga mayores grados de legitimación a mediano plazo y que las presiones de Estados Unidos por descabezarle queden aisladas, tras la aprobación de una serie de reformas constitucionales, entre ellas la del reciente "código militar".

El accionar militar será, en perspectiva, contra nuevos grupos irregulares que se alzarán contra el hambre y la miseria, muchos de los cuales tendrán un carácter más delincencial que político.

La salida del jefe del ejército en febrero de 1995, no supone mayor controversia, tomando en cuenta el reciente fortalecimiento del Consejo Militar, que neutralizaría todo eventual viraje en el seno de las fuerzas armadas.

Frente a las futuras acciones del movimiento social, es de esperar que el ejército nicaragüense mantenga una posición firme pero no represiva, sin involucrarse en decisiones arbitrarias del Ejecutivo.

* La proximidad de las elecciones será un factor clave en una eventual ruptura definitiva de la coalición UNO; es de esperar, a corto plazo, la unidad de las fuerzas del liberalismo (al margen de la agrupación) para lanzarse a la contienda por la presidencia.

Independientemente, es previsible un acercamiento de la derecha a los sectores populares, con fines electorales que tendrán, entre sus principales ejes, el presunto co-gobierno FSLN-Chamorro y la identificación del sandinismo con la muerte, la destrucción y la guerra, a partir de sus históricas desavenencias con Estados Unidos.

* En la medida en que se acerque la fecha de los comicios, el rol del movimiento social de izquierda tomará un carácter más político que económico, en respaldo de los programas de sus partidos.

2. El Salvador:

* La constante de crecimiento económico mantenida en los dos últimos años, permite prever que se mantendrá un repunte del PIB, lo que brindaría al país seguridad durante el próximo bienio. Otro elemento que aparece reforzando esta apreciación son los niveles de ingreso por remesas familiares (envíos del exterior), que tienden a consolidarse y a constituirse en el mayor rubro de ingresos para el país.

Esta estimación global de los índices de crecimiento no es sin embargo una garantía de estabilidad política, tomando en consideración los pésimos niveles de distribución de la riqueza en El Salvador.

* En el marco político institucional, las fuerzas del movimiento popular verán muy limitadas sus acciones, debido a que el parlamento se encuentra bajo el control de ARENA y existe una débil resistencia de los sectores progresistas. Asimismo, debido a la insuficiente depuración en el Poder Judicial, persiste el

control absoluto del aparato de justicia por parte de los grupos de poder dominantes.

El gobierno, además, continúa absolutamente controlado por un gabinete que representa a los sectores empresariales, patronales, lo cual tornará muy difícil la lucha por nuevos espacios democráticos.

Si bien las perspectivas a la luz de los Acuerdos de Paz apuntaron inicialmente a consolidar espacios de lucha para el movimiento social (lo cual se estaba logrando hasta las elecciones generales de marzo pasado), los efectos del casi rotundo fracaso del FMLN en la contienda electoral (calificada de fraudulenta por organismos nacionales e internacionales) seguirán reflejándose en una baja del accionar social.

No se puede, por lo tanto, pronosticar una optimista apertura de los espacios democráticos, cuando los protagonistas de esta lucha se encuentran actualmente a la defensiva y todavía no acaban de asimilar lo sucedido.

* Pese a que nuestra investigación reflejó un accionar constante del movimiento social por mayores reivindicaciones sociales y políticas, éste se vio opacado por la legitimación obtenida por el gobierno al aceptar unas elecciones "supervigiladas".

Sumado esto al actual fraccionamiento del FMLN, es de esperar que el movimiento social pase por una etapa de incertidumbre que sólo acabará cuando afloren nuevamente las causas del conflicto armado iniciado décadas atrás. Dicho de otra forma, cuando el gobierno de Calderón Sol aparezca finalmente ante la población como un régimen garante de los intereses de los grupos más retrógrados y reaccionarios de la oligarquía, en alianza directa con grupos económicos transnacionales.

* En razón de que las movilizaciones y huelgas se ven progresivamente restringidas por decretos oficiales, la Constitución se perfila como un gran obstáculo al intento de lograr mayores espacios de gestión democrática. No puede descartarse que, en respuesta, el movimiento social profundice su proceso de reorganización a fin de enfrentar los embates de la política neoliberal.

* El FMLN, por su lado, se encontrará ante dos opciones: impulsar la organización y verdadera consolidación del movimiento social, o continuar desatendiendo a este sector como lo hizo durante la década pasada, cuando la lucha popular se expresó casi exclusivamente en el terreno militar.

Una vez superado el cisma al interior del Frente, con la separación del ERP y la RN (dirigidos por los ex comandantes Joaquín Villalobos y Eduardo Sancho), la organización y proyectos de la "ortodoxia" tenderán a fortalecerse en tanto no habrá en el FMLN posiciones reformistas que amenacen con un mayor divorcio entre el partido y sus bases.

* En cuanto a la iglesia, es de prever que mantenga su beligerancia histórica en la lucha por mayores espacios

democráticos y contra la impunidad y la corrupción institucional, con una vitalidad que --al menos en la actividad de denuncia y protesta-- es probable incluso llegue a superar a los mismos movimientos sociales.

* La fuerza armada, en tanto institución históricamente aliada a los grupos oligárquicos de poder, tenderá a fortalecerse en los próximos años apoyada en un presupuesto que no presentará variación frente al mantenido durante la guerra, pese a haber sido reducida en un 50% de su personal.

Frente a las movilizaciones sociales, gobierno y ejército continuarán apoyándose en los últimos resultados de la elección favorable a ARENA para tolerar y promover las acciones de los escuadrones de la muerte, con el agravante de que, una vez que el país deje de ser "vigilado" por las "misiones de paz" de la ONU, aflorará una represión más abierta.

3. Guatemala:

* El caso guatemalteco es un tanto diferente a los demás, aunque se mantienen similitudes globales. En lo económico, hay fuertes probabilidades de que a mediano plazo se mantengan los niveles de crecimiento que, sin embargo, no superarán los índices de incremento demográfico. Tampoco existen muchas pautas que señalen una recomposición del nivel de distribución de la riqueza.

* La economía guatemalteca, por permanecer fuertemente ligada a capitales transnacionales, no presenta mayores posibilidades de un retorno a esquemas más nacionalistas. En sus contradicciones no antagónicas con el Estado Transnacional, es de prever que el gobierno continúe aplicando paquetes financieros, si bien los vínculos con Estados Unidos mantendrán el relativo "enfriamiento" actual debido a la incapacidad del gobierno guatemalteco de poner freno a las violaciones a los derechos humanos.

* La situación política general, con un presidente maniatado en casi todas las decisiones de tipo democrático que pudiera asumir, permite descartar --al menos hasta que termine su gestión-- la posibilidad de mayores espacios democráticos por esa vía, en vista que el rompimiento de las alianzas internas dio paso a un peligroso vacío político y llevó al aislado mandatario a subordinarse a los sectores económicos de poder, como le sucedió a su antecesor Jorge Serrano.

El parlamento se encuentra hoy bajo control casi absoluto del ala política más derechista, encabezada por Efraín Ríos Montt (cuyas posiciones políticas se expresarán con más fuerza a corto plazo): La situación es similar en los poderes Judicial y Electoral.

Por otro lado, el hecho de que el presidente De León continúe avalando la existencia de las paramilitares PAC, impide pensar en la posibilidad de un acercamiento con los sectores sociales, decepcionados de su gestión en materia política y económica.

* Las pugnas entre los sectores tradicionales oligárquicos y los grupos "modernizadores" surgidos de éstos, seguirán manifestándose a corto y mediano plazo. No se prevé la imposición de un grupo sobre otro sino, por el contrario, una repartición de cuotas de poder.

* Así, las elecciones generales de 1995 estarán mediatizadas por la acción de un Congreso --y en general de todo un sistema de poder-- que estuvo lejos de ser depurado. Esto limitará las perspectivas del sector político progresista y del movimiento social que lo respalda, de participar en condiciones justas en la contienda electoral.

* Las fuerzas armadas, a su vez, mantendrán mecanismos de terror para neutralizar la movilización social, independientemente de que su cúpula sea hoy una de las más moderadas en las últimas décadas. La tradición golpista en el ejército continuará vigente en tanto no se observen cambios en las condiciones democráticas en el país.

No existe elemento alguno que indique que los asesinatos y desapariciones de dirigentes gremiales disminuirán. Por el contrario, el accionar de los escuadrones de la muerte aumentará hasta tanto no exista una correlación de fuerzas a favor de la creación inmediata de una Comisión de la Verdad.

* No se vislumbran a corto plazo posibilidades de que el gobierno y la guerrillera firmen los anunciados acuerdos de paz, tomando en cuenta los escasos avances en materia de derechos humanos y desmilitarización así como el largo período de ausencia de reuniones bilaterales, en los últimos meses.

* Las repercusiones del futuro acuerdo de libre comercio entre Guatemala y México, que como apéndice del TLC norteamericano llevará a la quiebra a más amplios sectores de la pequeña y mediana empresa, se sentirán en una mayor movilización social, encabezada por empleados estatales, indígenas y estudiantes.

* El abstencionismo electoral en los procesos municipales y presidenciales, seguirá manifestándose como una forma de protesta de la sociedad civil.

* Los métodos y técnicas de lucha aplicados por el movimiento social a lo largo de los últimos dos años, han tendido a ser cada vez más violentos. Por otra parte, el arribo al parlamento de los sectores políticos más derechistas se traducirá, entre otras cosas, en un incremento de la "mano dura" del gobierno frente a las movilizaciones populares, que actualmente pasa por la prohibición oficial de las huelgas.

En base a lo analizado, puede afirmarse que la lucha por rescatar el valor de la democracia se libra en casi todos los

campos de la vida social por los movimientos populares, mientras los sectores derechistas apoyados por el capitalismo internacional insisten en ceder sólo en aquellos aspectos relacionados con la democracia formal.

De esta forma, la democracia trata de ser limitada a la celebración de elecciones, libertades individuales, lucha política, etcétera. Pero en cuanto a su contenido (derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda, bienestar social) se encuentra progresivamente restringida y sin posibilidades ni perspectivas de entrar en "una competencia justa dentro del mercado capitalista".

Parece ilusorio, en este sentido, pensar que la receta de las grandes potencias en torno al abandono mecánico del estatismo y la incorporación al mercado mundial, permitirá a estos países salir de su progresivo estado de marginación.

De hecho, no habrá democracia política mientras persista la exclusión social. Y las políticas neoliberales no representan garantía alguna de equidad.

El movimiento social, en todo caso, es el llamado a exigir la democracia popular, como elemento último para acceder a una vida digna.

En la lucha de los movimientos sociales debe tenerse siempre presente que la influencia de la transnacionalización del Estado en su conjunto, constituye una seria limitante para alcanzar la solución de la grave crisis interna que viven estas naciones.

Así, la lucha por mayores espacios y por la conquista de la democracia popular en Centroamérica, atraviesa por un período de auge en el sentido de que no es el movimiento social armado --sino la unidad de las agrupaciones gremiales, políticas y sociales-- la que presenta mayores perspectivas de desarrollo a mediano plazo.

Las organizaciones populares estudiadas a lo largo de este trabajo pueden catalogarse todavía como un movimiento bastante fraccionado, sin vínculos orgánicos globales nacionales --mucho menos regionales--, aunque con objetivos mediatos e inmediatos que poco a poco parecen concretarse.

Se trata de un movimiento que aún sigue siendo víctima de los embates del fraccionamiento por la vía de la cooptación y la coerción; plagado de vicios debido, entre otras razones, a que está directa o indirectamente subordinado a determinado partido político, lo que le impide cumplir su objeto básico: alcanzar mayores espacios de lucha.

En Nicaragua, por ejemplo, el movimiento social se ha visto mayormente representado por el FSLN. Ello refleja una dependencia que amenaza el nivel de autonomía necesario para alcanzar sus objetivos, sin verse constantemente sujeto a los "estira-y-encoje" de una eventual negociación política entre el sandinismo y el gobierno u otras fuerzas políticas.

Así, el grado de autonomía que requieren los movimientos sociales para sostener una relación saludable con fuerzas como el FSLN, el FMLN o la URNG, estará determinado por la efectividad del proceso de democratización en ambas cúpulas dirigentes, tanto

de las mencionadas organizaciones políticas, como de las agrupaciones populares.

De lo anterior se desprende que el movimiento popular deberá en adelante conjugar su lucha por lograr la hegemonía y por mantener espacios autónomos, entendidos éstos como el eje central mediante el cual podrá acceder a fases superiores de lucha y mayores conquistas democráticas.

La no dependencia de un partido político o de alguna institución del Estado, le permitirá así crear las condiciones fundamentales de un nuevo proyecto de sociedad en el que la lucha por la democracia popular no sea solamente una utopía.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIALibros y documentos consultados:

Andrade Sánchez, Eduardo. "Criterios para la comprensión del Estado capitalista contemporáneo". (Tesis de Doctorado, 1987.)

Arriarán Cuéllar, Samuel. "El marxismo y la cuestión nacional en América Latina". (Tesis de Maestría, 1990.)

Bagú, Sergio. Tiempo, realidad social y conocimiento. Siglo XXI Editores, 13 edición, México, 1989.

Bartra, Roger. "Dialéctica de la democracia y el socialismo", en Revista de la Facultad de Economía, N° 154, México, 1980.

Borón, Atilio. "Democracia y reforma social en América Latina". (Ponencia en el 30 aniversario del CELA, México 1990)

Cáceres Ruiz, Carlos. "Perspectivas para la lucha popular en Guatemala 1977-1985". (Licenciatura en Sociología, 1990)

Cardozo, Fernando Enrique/ Faletto, Enzo. Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI Editores, México, S/F.

Camacho, Daniel/ Menjívar, Rafael. Los movimientos populares en América Latina. Siglo XXI Editores, México, 1990.

Castañeda Jorge y Gett, Enrique. El economismo dependentista. Siglo XXI Editores, México 1978.

Castañeda Mancilla, Elsa. "Crisis social y sus manifestaciones en el agro guatemalteco". (Licenciatura en Sociología, 1985)

Comisión Trilateral. "América Latina en la encrucijada. El desafío a los países de la Trilateral". Editorial Tecnos, Madrid, 1990.

Constitución Política de la República de Nicaragua, Managua, 1987.

Cuéllar Vásquez, María. "La tendencia democrática: un proyecto de transformación de las relaciones Estado- Sociedad". (Doctorado, 1983)

Cueva, Agustín. Teoría social y procesos políticos en América Latina. Editorial Edicol, México, 1979.

Cueva, Agustín. El desarrollo del capitalismo en América Latina. Siglo XXI Editores, 13 edición, México 1990.

Díaz-Polanco, Héctor/ López y Rivas, Gilberto. Nicaragua: Autonomía y revolución. Editorial Juan Pablos, México, 1988.

Frajnzylber, Fernando. La industrialización trunca de América Latina. Editorial Nueva Imagen, México, 1983.

Fernández Santillán, José. "Filosofía de la Democracia". (Doctorado, 1990)

González Casanova, Pablo. "Estado y Política en América Latina", en América Latina Hoy, Siglo XXI Editores, México, 1990.

Guerra, Ramiro. La expansión territorial de los Estados Unidos. Editorial de Ciencias Sociales de la Habana, Cuba, 1975.

Germani, Gino. Sociología de la modernización. Editorial Paidós, Buenos Aires, S/F.

González Casanova, Pablo. Los militares y la política en América Latina, Editorial Océano, México, 1973.

Gunder Frank, André. América Latina: Subdesarrollo o revolución. Ediciones Era, México. 1973.

Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, 13 edición, Madrid, 1990.

Haya de la Torre, Víctor. El antimperialismo y el APRA. Ediciones Centauro, Caracas, 1976.

Iglesias, Enrique. "América Latina: Crisis y opciones de desarrollo" (reporte del BID, 1992)

Informe: La evolución del pensamiento de la CEPAL en el "Pensamiento de la CEPAL", Santiago de Chile, 1970.

Informe: "Transformación productiva con equidad", Elaborado por la CEPAL, 1990.

Informe: "Nicaragua, diez años en cifras". Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Managua, 1989.

Informe: "Evolución Económica /Nicaragua, Guatemala, El Salvador/1993". CEPAL, julio 1994.

Kaplan, Marcos. Estado y Sociedad. Publicaciones de la UNAM. México, 1978.

Kaplan, Marcos. Aspectos del Estado en América Latina. UNAM, México, 1978.

Maira, Luis. "América Latina y el nuevo escenario internacional". Ponencia presentada en el encuentro "América Latina a fines del Siglo XX", México, s/f.

Mandel, Ernest, El capitalismo tardío. Editorial Era, México, 1987.

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Editorial Era, México s/f.

Marini, Rui Mauro. Dialéctica de la dependencia. Siglo XXI Editores, México s/f.

Marini, Rui Mauro. "América latina en la encrucijada". Ponencia en el XXX aniversario del CELA, México 1990.

Mols, Manfred. La democracia en América Latina. Editorial Alfa, Barcelona, 1987.

Navas Turcios, María. "La organización de mujeres en El Salvador". (Maestría, 1989)

Odonell, Guillermo. "Las fuerzas armadas y el Estado autoritario en el Cono Sur, en: Lechner, Norbert, Estado y política en América Latina, Siglo XXI Editores, México, s/f.

Oliver, Lucio. "Mundialización productiva y Estado capitalista", en Revista Dialéctica N° 22, Puebla, México, 1992.

Ortega Cordero, Carmen. "Reflexiones sobre el método marxista: de Hegel al Estado en América Latina". (Maestría en Sociología.)

Peón Solís, Augusto. "El Estado y las clases sociales frente a las empresas transnacionales". (Tesis de Licenciatura)

Petras, James. Clase, Estado y Poder en el Tercer Mundo. Fondo de Cultura Económica. Primera edición, 1981.

Portantiero, Juan Carlos. "La múltiple transformación del Estado latinoamericano", en revista Nueva Sociedad N° 104, México, 1989.

Rodríguez Araujo, Octavio. "La reforma política y los partidos de izquierda". (Doctorado, 1989)

Ruelas Granados, Alejandro. "Teoría de la democracia de Joseh Sihopipeter". (Licenciatura, 1978)

Ruiz Contardo, Eduardo, "Los temores y limitaciones de una democracia neoliberal en América Latina". (Mimeografiado, 1992)

Sánchez Vázquez, Adolfo. Ensayos marxistas sobre historia y política. Editorial Océano, primera edición, 1985.

Schmidt Nedvedovich, Samuel. "La autonomía relativa del Estado. Un intento de sistematización teórico metodológica". (Doctorado, 1979)

Selser, Gregorio. Sandino, General de Hombres Libres. II Tomos, Editorial de Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, 1981.

Selser, Gregorio. Centroamérica en crisis, Editorial Colegio de México, México, 1980.

Selser Gregorio. Cinco años de agresiones estadounidenses a Centroamérica y el Caribe (1979-1984), EDUG/Universidad de Guadalajara, Guadal., México, 1984.

Stavenhagen, Rodolfo/Laclau/Marini. Tres ensayos sobre América Latina. Editorial Anagrama, Barcelona, 1980.

Valle Cobar, Dora. "El movimiento estudiantil en Guatemala 1973-1981." (Licenciatura en Sociología, 1991)

Varios autores. "La cuestión de la democracia", en América Latina: estudios y perspectivas. vol. I, N° 1.

Villatoro Pérez, Armando. "Las clases sociales y la revolución en Guatemala". (Maestría en Sociología, 1990)

Wheelock Román, Jaime. Raíces indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua. Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1981.

Documentación hemerográfica:

Periódicos

De México:

- La Jornada.
- El Financiero.
- El Día.
- El Día Latinoamericano (suplemento).
- El Nacional.
- Excelsior.

(En todos los casos anteriores, fueron recopiladas y procesadas todas las noticias relativas al tema, aparecidas diariamente en los referidos periódicos entre julio de 1992 y noviembre de 1994).

De Nicaragua:

- Barricada.
- El Nuevo Diario.
- La Prensa.

Agencias internacionales:

Agencia France-Presse (AFP)
United Press Internacional (UPI)
Prensa Latina (PL)
Agencia Alemana de Prensa (DPA)
Inter Press Service (IPS)
Agencia española de noticias (EFE)
Agencia china de noticias (Xinhua)
Agencia REUTERS
Associated Press (AP)

(En todos estos casos, se recopilaron y analizaron cables informativos relativos al tema, difundidos entre julio de 1992 y noviembre de 1994), algunos de ellos publicados en medios noticiosos de México.

Revistas:

- Revista Inforpress Centroamericana (Guatemala). Números 966 a 1042 (enero 1992 - agosto 1993).
- Revista Barricada Internacional. (Managua) Números 345 a 374 (enero 1992 - mayo 1994).
- Revista Pensamiento Propio (Managua). Números 80 a 93 (mayo 1991 - agosto 1992)

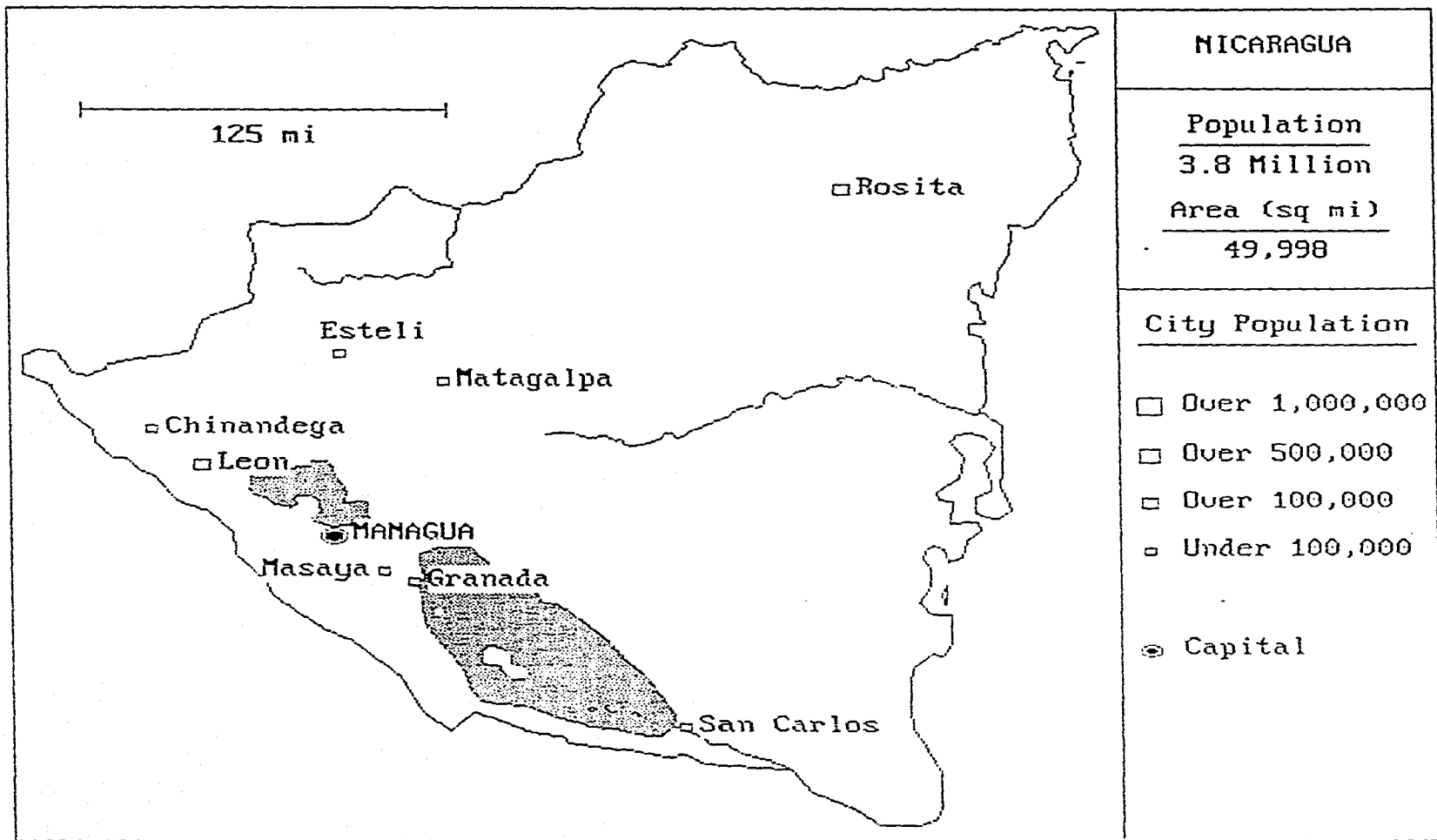
Otros:

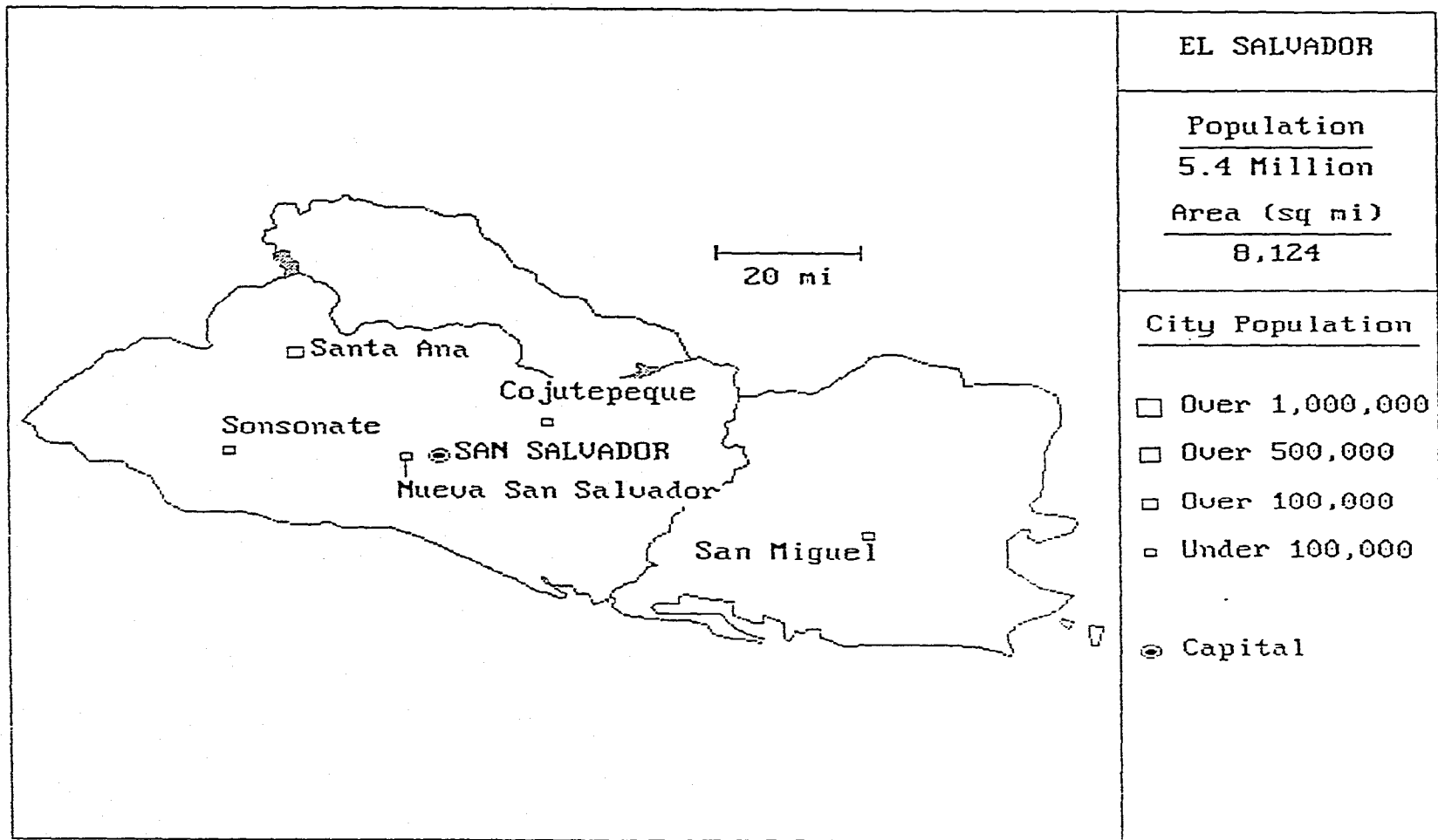
- Anuario Computarizado PC Globe 4.0, Tempe, AZ, USA, 1991.
- Anuario Computarizado PC Globe 5.0, Tempe, AZ, USA, 1992.

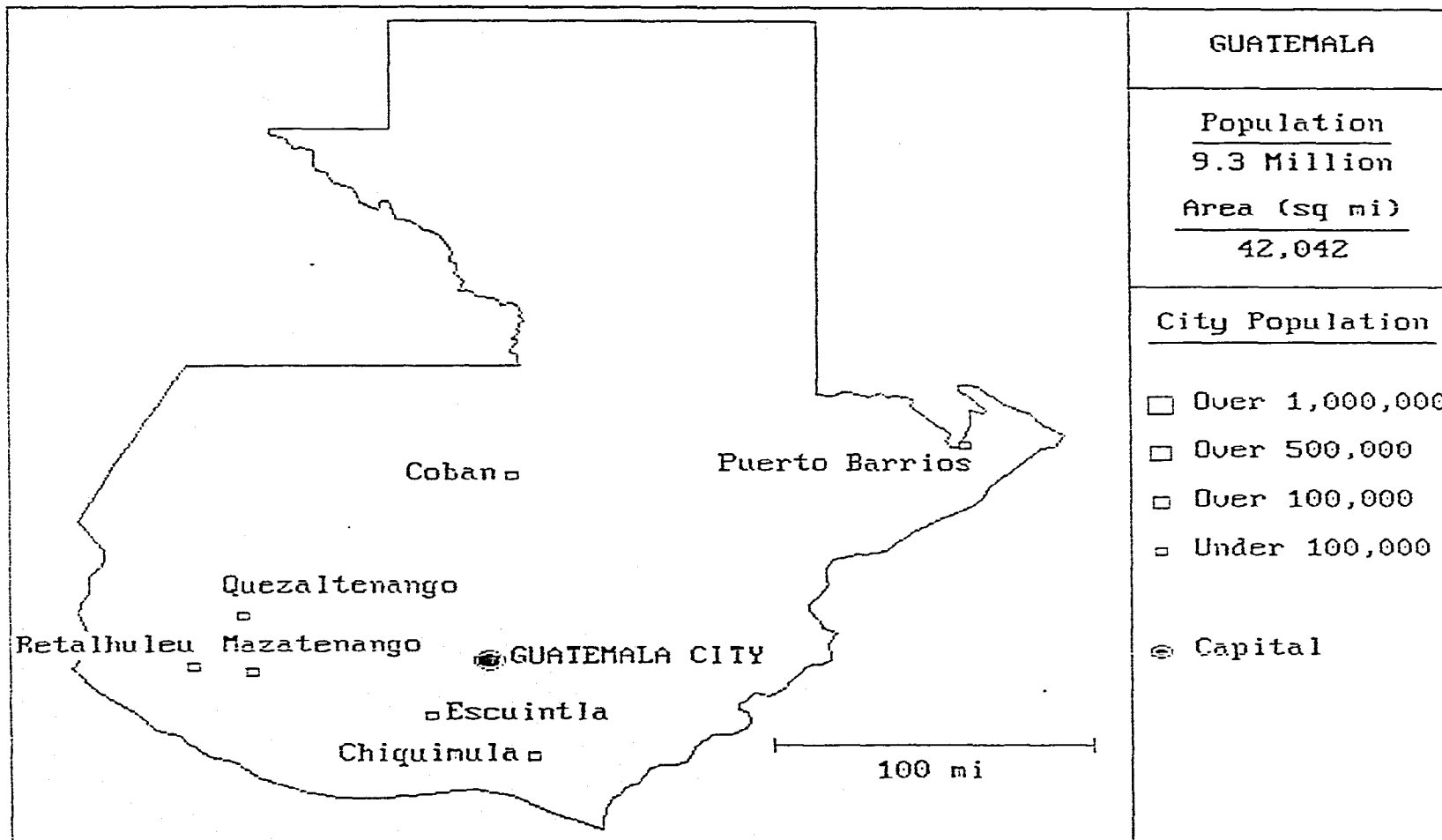
ANEXOS

Central America

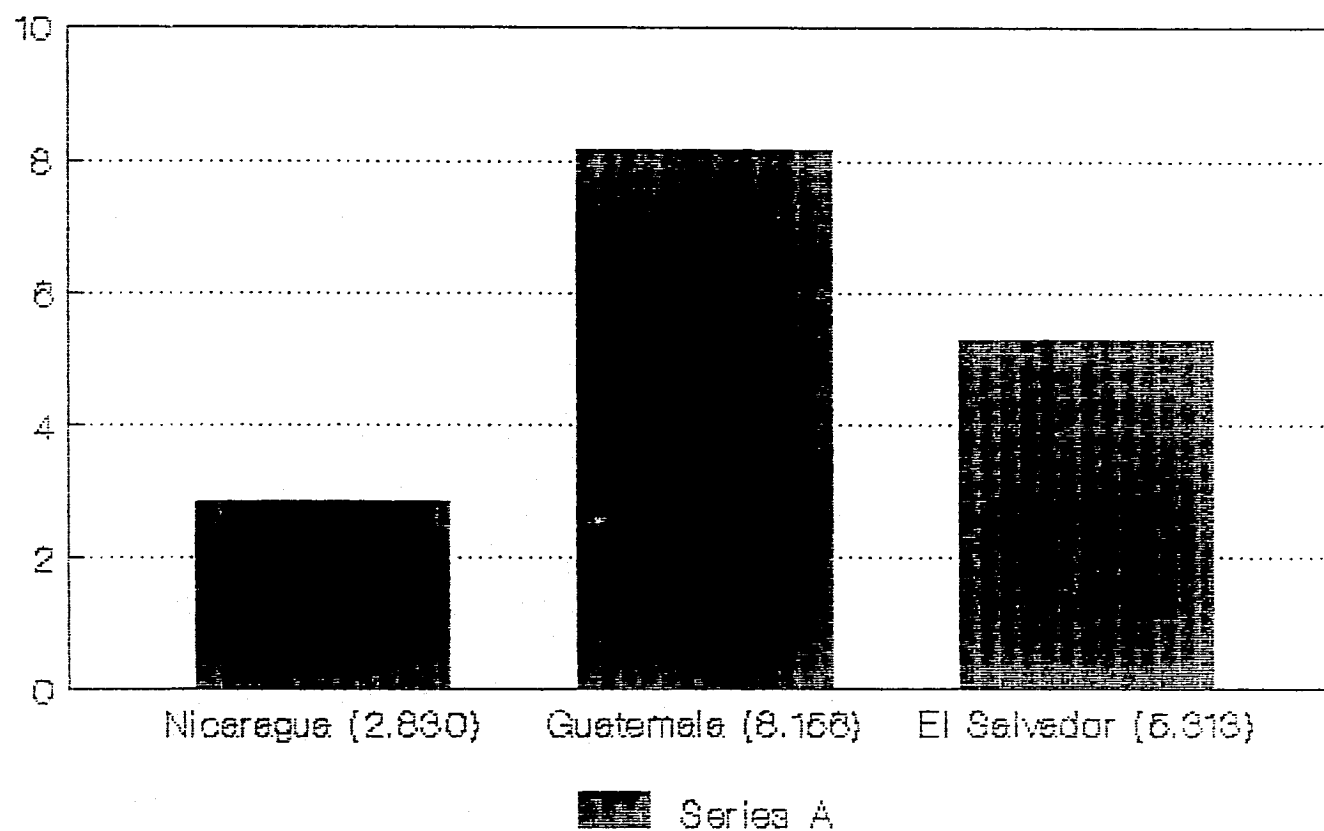






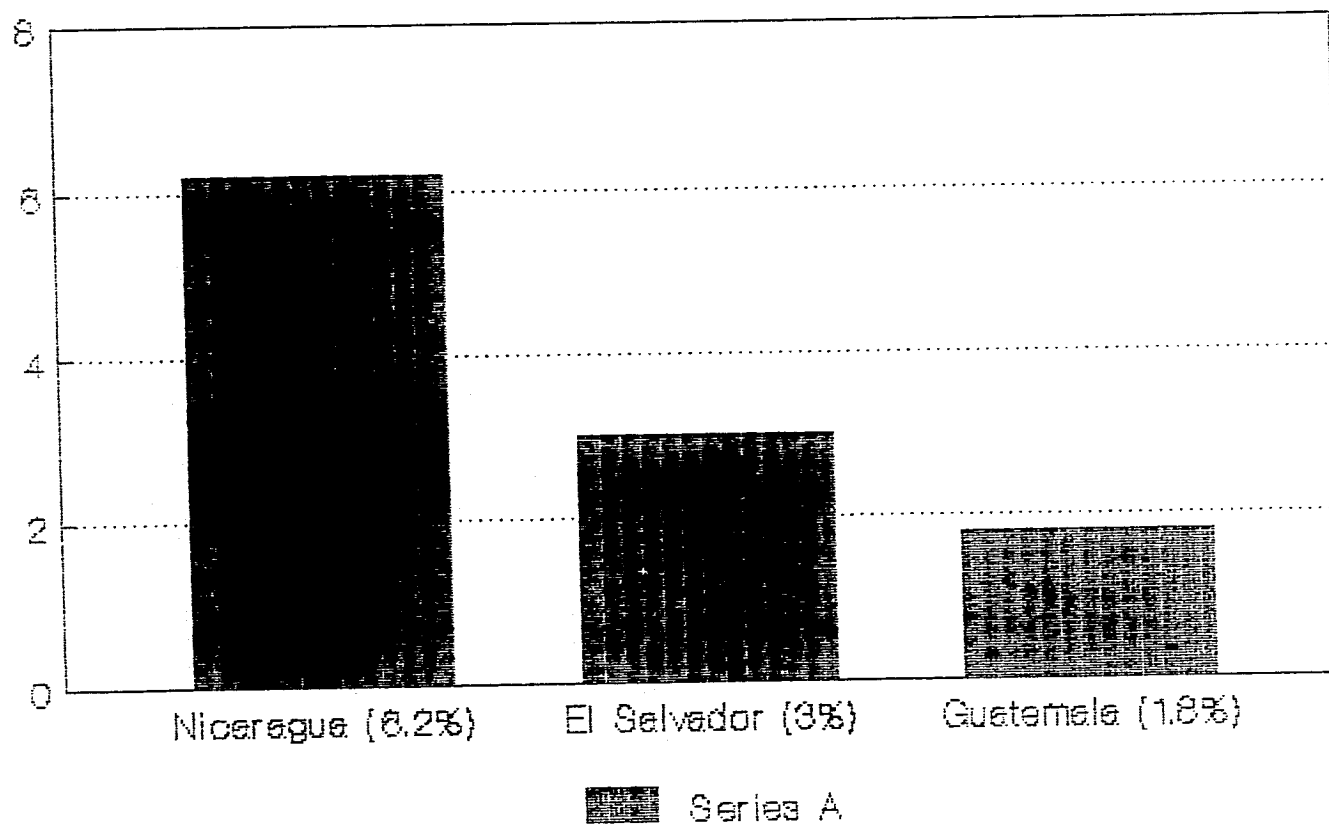


Nicaragua, El Salvador, Guatemala Producto Nacional Bruto (PNB)



(Datos de 1991- en millones de dólares)

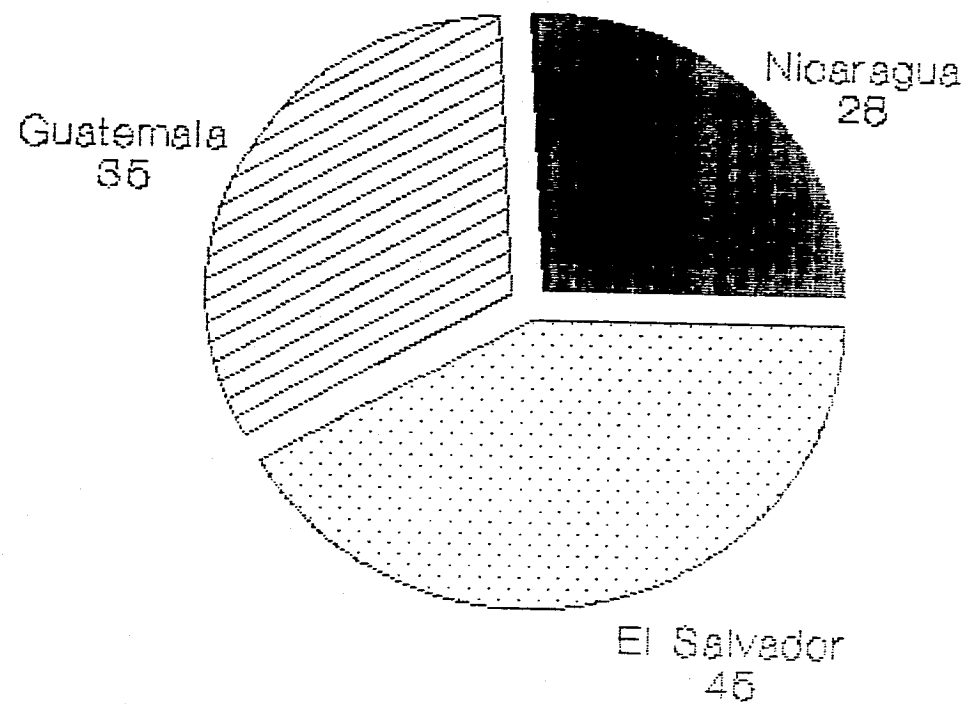
Nicaragua, El Salvador y Guatemala Presupuesto para la Educacion



(Porcentaje)

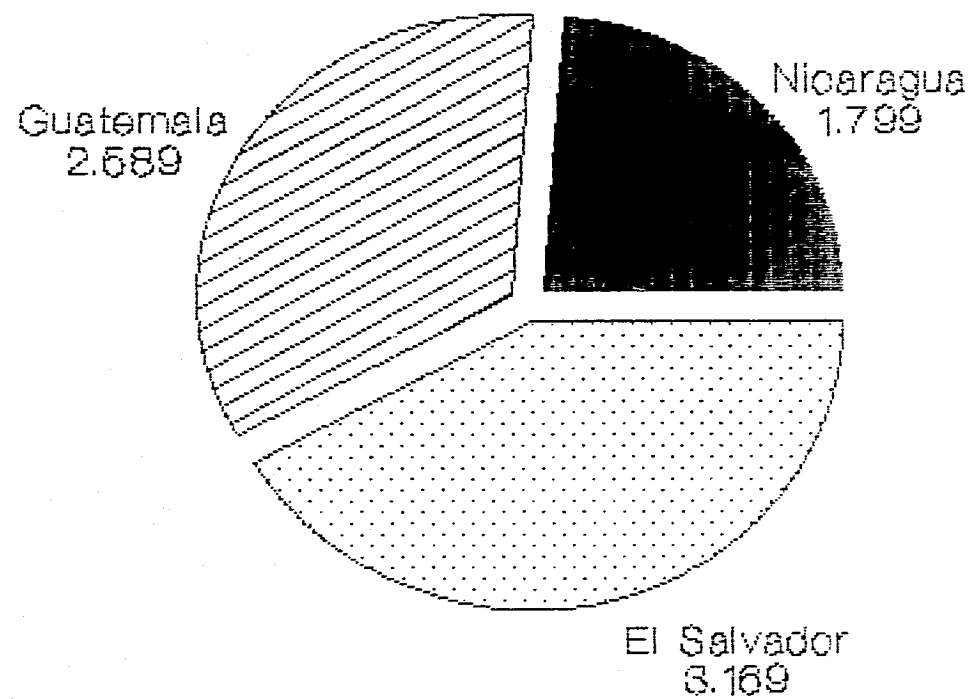
Nicaragua, El Salvador, Guatemala

Estudiantes por profesor



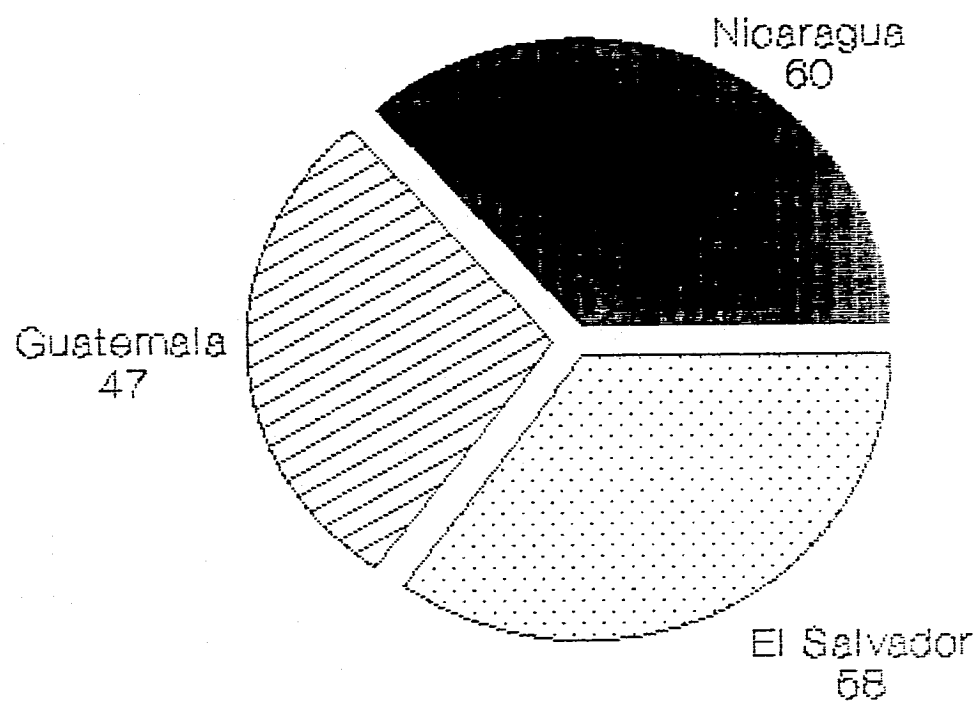
(Educación primaria exclusivamente)

Nicaragua, El Salvador, Guatemala Habitantes por medico



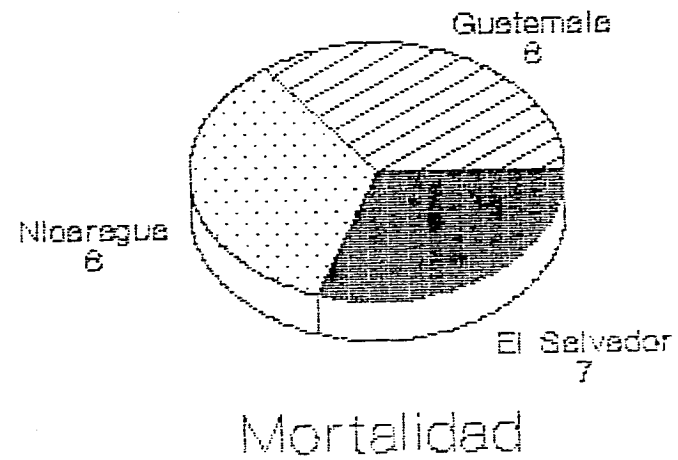
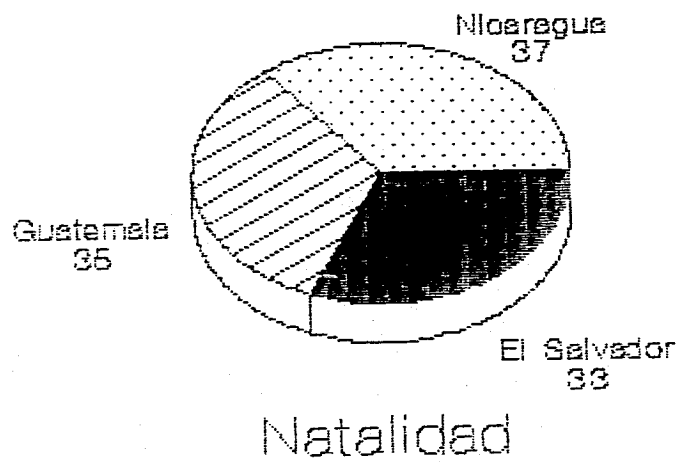
(Total en habitantes)

Nicaragua, El Salvador, Guatemala Mortalidad infantil



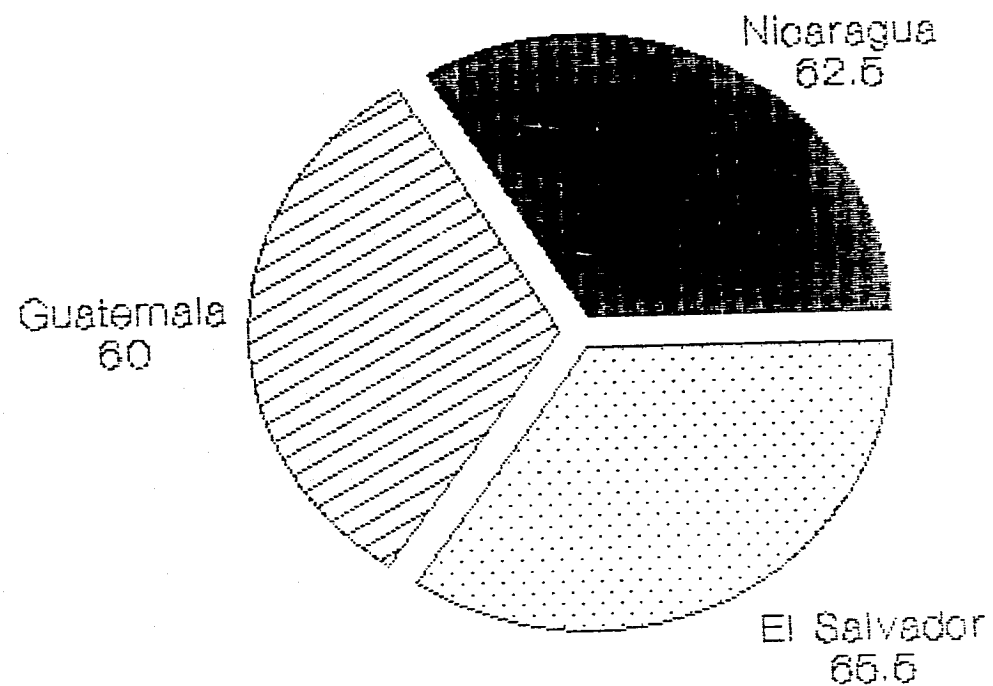
(Escala 1/1000 nacidos vivos)

Nicaragua, El Salvador, Guatemala Tasas de Natalidad/Mortalidad



Escala: 1/1000

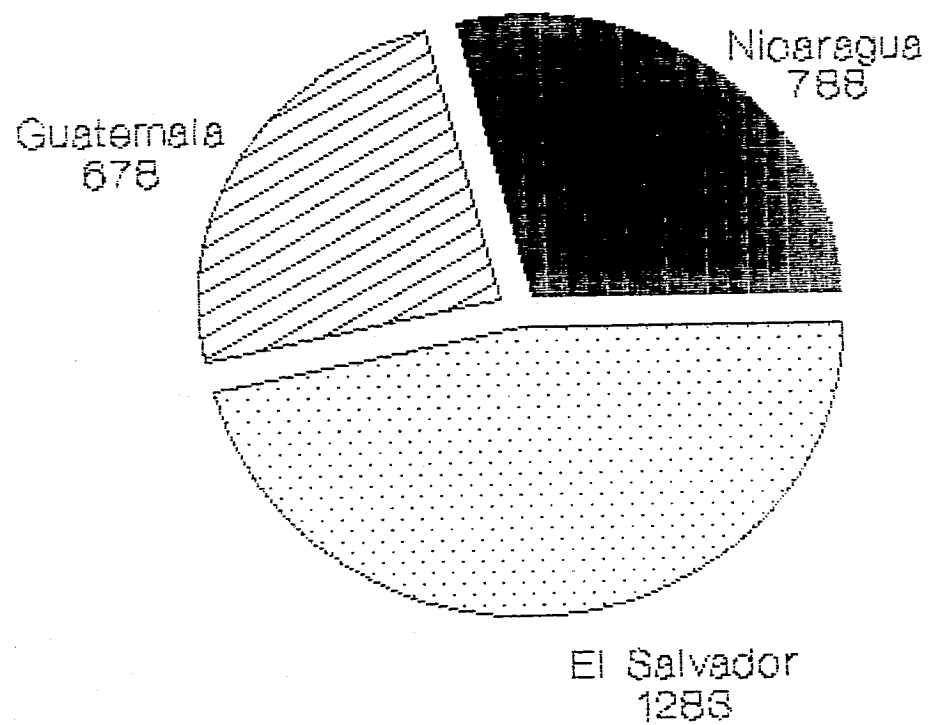
Nicaragua, El Salvador, Guatemala Expectativa de vida (promedio)



(En años de vida)

Nicaragua, El Salvador, Guatemala

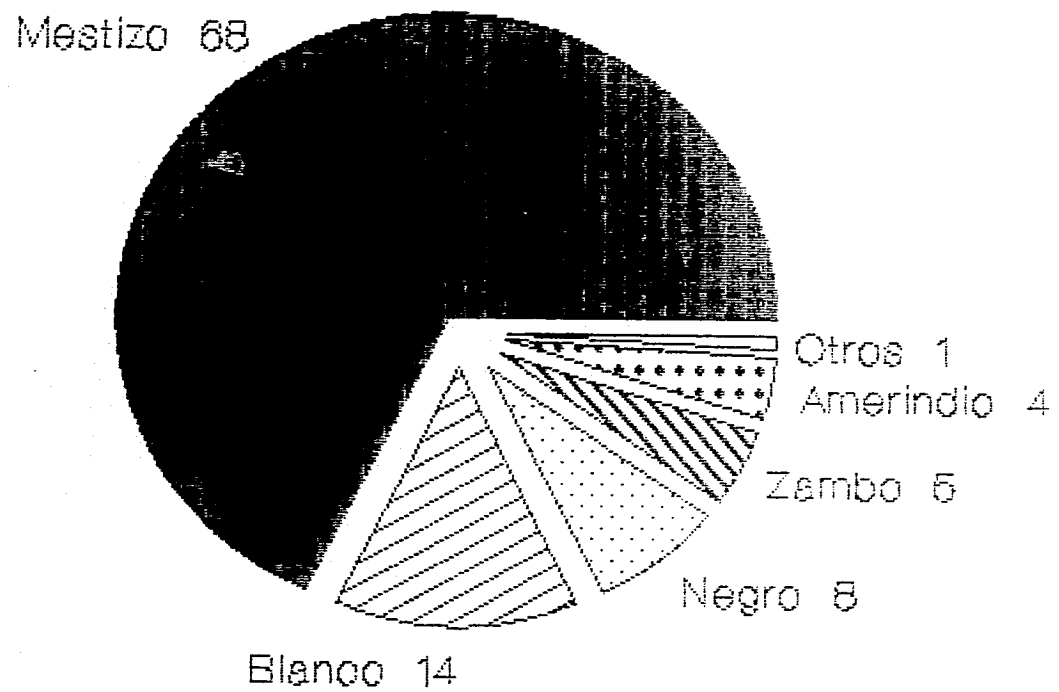
Habitantes por camas de hospital



(Total en habitantes)

Nicaragua

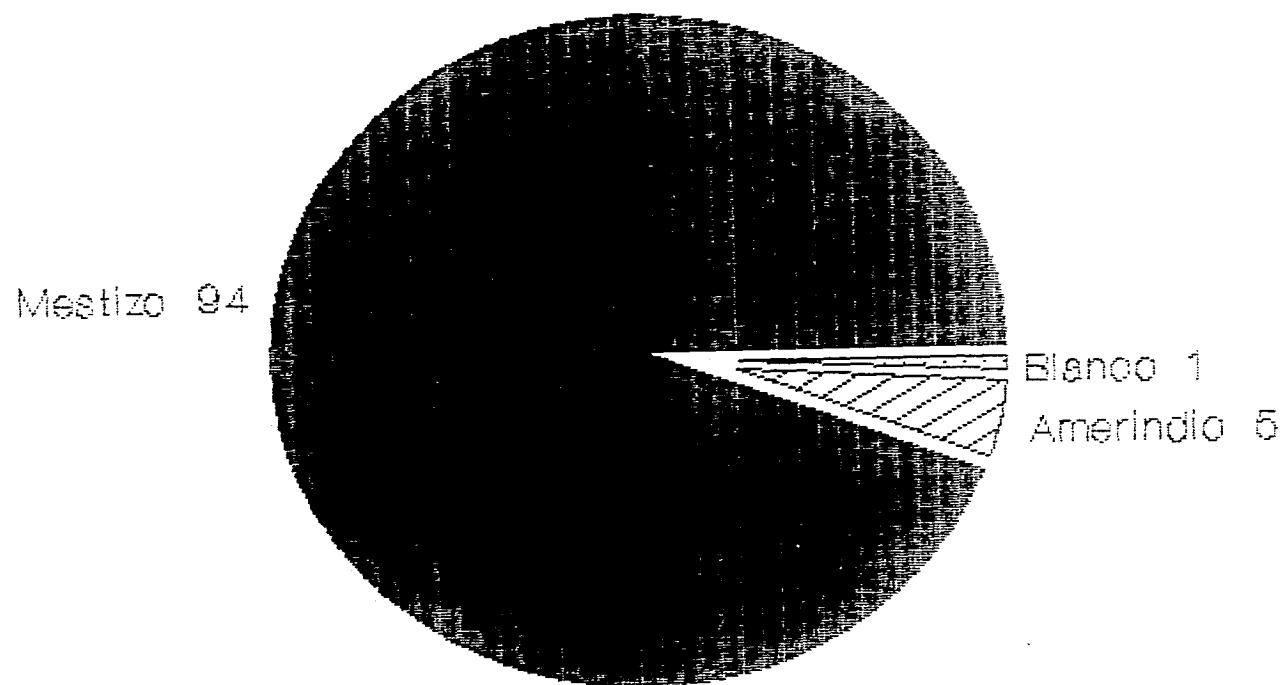
Grupos etnicos



(Porcentaje)

El Salvador

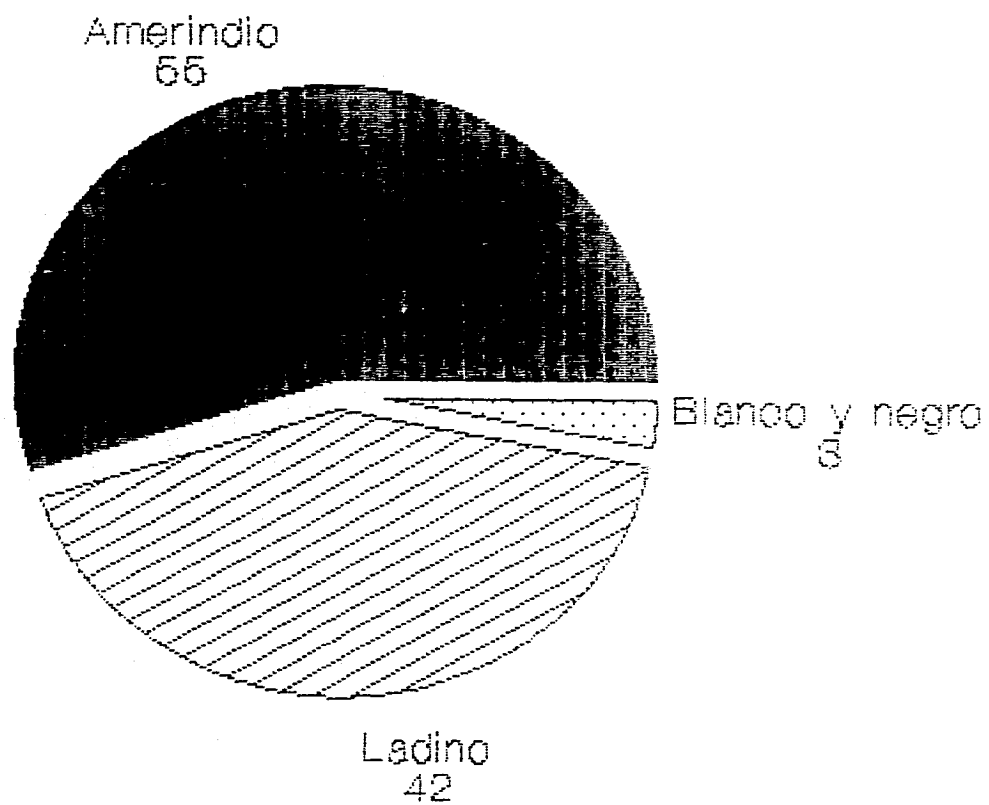
Grupos étnicos



(Porcentaje)

Guatemala

Grupos étnicos



(Porcentaje)

NICARAGUA

EDUCACION			
	Primaria	Secundaria	Superior
Escuelas	4.624	328	13
Maestros	24.127	7.167	1.404
Estudiantes	678.937	172.108	25.478
Estudiantes por Maestro	28	24	17
	PNB para Educación:		6.2 %
	Escolaridad :		57 %

SALUD		
Expectativa de vida (hombres):	60 años	
Expectativa de vida (mujeres):	65 años	
Tasa bruta de Nacimientos:	37/1000	
Tasa bruta de Mortalidad:	7/1000	
Mortalidad Infantil :	60/1000	
	Cantidad	Población
Hospitales	52	72.154
Camas de hospital	4.762	788
Médicos	2.086	1.799
Dentistas	277	13.545
Farmacéuticos	n/a	n/a
Enfermeras	1.142	3.285

IDIOMAS	%	GRUPOS ETNICOS	%	RELIGION	%
Español	95	Mestizo	68	Católica	88
Miskito	4	Blanco	14	Otras	12
Inglés		Negro	8		
criollo	1	Zambo	5		
		Amerindio	4		
		Otros	1		

Fuente: PC Globe 5.0 -1992 - (En base a datos oficiales)

EL SALVADOR

EDUCACION			
	Primaria	Secundaria	Superior
Escuelas	3.994	302	34
Maestros	22.358	4.547	4.789
Estudiantes	995.890	99.311	74.024
Estudiantes por Maestro	45	22	15
PNB para Educación:		3 %	
Escolaridad :		73 %	

SALUD		
Expectativa de vida (hombres):	63 años	
Expectativa de vida (mujeres):	68 años	
Tasa bruta de Nacimientos:	34/1000	
Tasa bruta de Mortalidad:	7/1000	
Mortalidad Infantil :	47/1000	
	Cantidad	Población
Hospitales	82	66.085
Camas de hospital	4.224	1.283
Médicos	1.710	3.179
Dentistas	599	9.047
Farmacéuticos	597	9.077
Enfermeras	5.038	1.076

IDIOMAS	%	GRUPOS ETNICOS	%	RELIGION	%
Español	100	Mestizo	94	Católica	93
		Amerindio	5	Otras	7
		Blanco	1		

Fuente: PC Globe 5.0 -1992 - (En base a datos oficiales)

GUATEMALA

EDUCACION			
	Primaria	Secundaria	Superior
Escuelas	8.656	1.494	5
Maestros	31.441	16.332	4.341
Estudiantes	1.097.851	241.053	66.790
Estudiantes por Maestro	35	15	15
PNB para Educación:		1.8 %	
Escolaridad :		55 %	

SALUD		
Expectativa de vida (hombres):	58 años	
Expectativa de vida (mujeres):	62 años	
Tasa bruta de Nacimientos:	35/1000	
Tasa bruta de Mortalidad:	8/1000	
Mortalidad Infantil :	58/1000	
	Cantidad	Población
Hospitales	159	58.277
Camas de hospital	13.657	678
Médicos	3.579	2.589
Dentistas	810	11.440
Farmacéuticos	411	22.545
Enfermeras	9.093	1.019

IDIOMAS	%	GRUPOS ETNICOS	%	RELIGION	%
Español	66	Amerindio	55	Católica	75
Quiché	13	Ladino	42	Protestante	25
Cakchiquel	6	Blanco y			
Mam	4	Negro	3		
Kekchi	4				
Maya/Otros	7				

Fuente: PC Globe 5.0 -1992 - (En base a datos oficiales)